



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

ESCUELA DE POSGRADO



PONTIFICIA  
UNIVERSIDAD  
CATÓLICA  
DEL PERÚ

## **“LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LIMA DURANTE LA OCUPACIÓN CHILENA (1881-1883)”**

Tesis para optar el grado de Magíster en Derecho con Mención  
en Política Jurisdiccional

AUTOR

Gonzalo Aguilar Rojas

ASESOR

Dr. Eduardo Hernando Nieto

JURADO

Dr. José Francisco Gálvez

Dr. Carlos Ramos Núñez

LIMA – PERÚ

2012

## INDICE

<b>CAPITULO I: LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SEGÚN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES EN EL PERIODO MATERIA DE ESTUDIO</b>	<b>Página 7</b>
Subcapítulo 1: La Constitución Política de la República Peruana de 1839.	Página 9
Subcapítulo 2: La Constitución de la República Peruana de 1856	Página 18.
Subcapítulo 3: La Constitución Política del Perú de 1860	Página 22.
Subcapítulo 4: El Estatuto Provisorio de 1879.	Página 29.
Subcapítulo 5: El Código de Enjuiciamiento Civil de 1852.	Página 31.
Subcapítulo 6: El Reglamento de Juzgados y Tribunales de la República de 1855.	Página 39.
Subcapítulo 7: El Reglamento de Jueces de Paz de 1855.	Página 45.
Subcapítulo 8: El Código de Enjuiciamiento en Materia Criminal de 1863.	Página 48.
Subcapítulo 9: Normas modificatorias expedidas hasta 1879.	Página 52.
<i>a. Primer periodo histórico. Del Código de Enjuiciamientos Civiles al Reglamento de Juzgados y Tribunales.</i>	Página 54.
<i>b . Segundo periodo histórico. Del Reglamento de Juzgados y Tribunales al Código de Enjuiciamiento en materia Criminal.</i>	Página 56.
<i>c. Tercer periodo histórico. Del Código de Enjuiciamiento en materia Criminal al inicio del gobierno de Nicolás de Piérola.</i>	Página 58.
Subcapítulo 10: Los decretos expedidos durante la vigencia del Estatuto Provisorio de 1879.	Página 64.
Subcapítulo 11: La reinstauración de la Constitución de 1860 durante el Gobierno Provisorio de Francisco García Calderón.	Página 71.
Subcapítulo 12.- Conclusiones Preliminares.	Página 75.

## CAPÍTULO II: ACTUACIÓN DEL PODER JUDICIAL DURANTE LA OCUPACIÓN DE LIMA

Subcapítulo 1: Antecedentes Históricos	Página 83.
Subcapítulo 2: Primeras relaciones entre la autoridad invasora y el Poder Judicial.	Página 86.
Subcapítulo 3.- Relaciones entre el Poder Judicial y el gobierno de Francisco García Calderón.	Página 88.
a. <i>Primera comunicación y desencuentro entre el Gobierno Provisorio y el Poder Judicial.</i>	Página 103.
b. <i>Decretos del 29 de marzo de 1881 y las comunicaciones subsiguientes.</i>	Página 107.
c. <i>La presentación ante el Congreso reunido en Chorrillos.</i>	Página 115.
Subcapítulo 4: Apreciación crítica de la posición de la Corte Suprema.	Página 131.
a. <i>Primer momento: el argumento de las vacaciones.</i>	Página 136.
b. <i>Segundo momento: el argumento de la imposibilidad de ejercer la función jurisdiccional.</i>	Página 137.
c. <i>Debates jurídicos existentes a raíz de la actitud de la Corte Suprema.</i>	Página 139.
Subcapítulo 5: Hechos posteriores relacionados con el funcionamiento del Poder Judicial.	Página 141.
a. <i>Primer acto normativo: el decreto del 6 de noviembre de 1881.</i>	Página 143.
b. <i>Segundo acto normativo: el decreto del 29 de noviembre de 1881.</i>	Página 145.
c. <i>Tercer acto normativo: el decreto del 24 de abril de 1882.</i>	Página 154.
c.1. <i>La restricción de la aplicación del derecho peruano.</i>	Página 156.
c.2 <i>La instauración de un Tribunal de Alzada en Lima.</i>	Página 158.
d. <i>Cuarto acto normativo: el decreto del 13 de noviembre de 1882.</i>	Página 162.
Subcapítulo 6: Finalización de la Ocupación.	Página 167.
Subcapítulo 7: Conclusiones preliminares.	Página 169.
	Página 174.

### **CAPITULO III: LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LIMA DURANTE LA OCUPACIÓN CHILENA SEGÚN LOS EXPEDIENTES JUDICIALES TRAMITADOS EN ESA ÉPOCA.**

Subcapítulo 1: Las fuentes primarias.

**Página 179.**

*a. Expedientes judiciales.*

Página 180.

*b. Documentos de sustento de los juicios orales.*

Página 181.

*c. Expedientes arbitrales.*

Página 184.

*d. Documentos sueltos.*

Página 186.

Página 187.

Subcapítulo 2: Determinación del punto inicial del período histórico a estudiar.

Página 187.

*a. Las actividades de hostilización durante 1880.*

Página 187.

*b. El cierre del despacho judicial.*

Página 188.

*c. La programada reanudación de las actividades judiciales.*

Página 190.

*d. ¿Desde cuándo iniciar la revisión de expedientes?*

Página 191.

Subcapítulo 3: Determinación del punto final del período histórico a estudiar.

Página 192.

Subcapítulo 4: Determinación del ámbito geográfico.

Página 193.

Subcapítulo 5: La administración de justicia según las fuentes primarias en la etapa anterior a la ocupación: años 1879 y 1880.

Página 194.

*a. La suspensión de actividades.*

Página 199.

*b. El reinicio de actividades.*

Página 201.

*c. La actuación intermedia.*

Página 202.

Subcapítulo 6: La administración de justicia según las fuentes primarias al inicio de la ocupación: año 1881.

Página 204.

Subcapítulo 7: La administración de justicia según las fuentes primarias durante la ocupación: años 1882 y 1883.

Página 207.

Subcapítulo 8: El funcionamiento del Tribunal Militar Chileno en Lima.

Página 210.

*a. Juicio por el asesinato de dos soldados chilenos.*

Página 210.

*b. Juicio por el asesinato de cinco soldados chilenos.*

Página 213.

*c. Juicio por la publicación de un manifiesto.*

Página 214.

d. Juicio por perjurio.	Página 216.
e. Conclusiones.	Página 217.
e.1. El razonamiento jurídico.	Página 217.
e.2. La ausencia de formalidades.	Página 218.
e.3. La participación esencial del General en Jefe.	Página 219.
Subcapítulo 9: Conclusiones preliminares.	Página 219.

#### **CAPITULO IV: CONCLUSIONES FINALES.**

**Página 224.**

#### **BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA.**

**Página 228.**

#### **APÉNDICE**

**Página 232.**

Anexo I: Normas modificatorias expedidas entre 1852 y 1879

Página 232.

1. *Primer periodo histórico: Del Código de Enjuiciamientos Civiles al Reglamento de Juzgados y Tribunales.*

Página 232.

2. *Segundo periodo histórico. Del Reglamento de Juzgados y Tribunales al Código de Enjuiciamiento en materia Criminal.*

Página 233.

3. *Tercer periodo histórico. Del Código de Enjuiciamiento en materia Criminal al inicio del gobierno de Nicolás de Piérola.*

Página 234.

Anexo II: Expedientes judiciales consultados en el Archivo General de la Nación.

Página 238.

1. *Año 1879: Expedientes Civiles.*

Página 238.

2. *Año 1879: Expedientes Criminales.*

Página 276.

3. *Año 1880: Expedientes Civiles.*

Página 276.

4. *Año 1880: Expedientes Criminales.*

Página 306.

5. *Año 1881: Expedientes Civiles.*

Página 316.

6. *Año 1881: Expedientes Criminales.*

Página 318.

7. *Año 1882: Expedientes Civiles.*

Página 318.

8. *Año 1882: Expedientes Criminales.*

Página 326.

9. *Año 1883: Expedientes Civiles.*

Página 333.

10. *Año 1883: Expedientes Criminales.*

Página 342.



## **CAPITULO I: LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SEGÚN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES EN EL PERIODO MATERIA DE ESTUDIO.**

La primera aproximación para entender a cabalidad la forma en que el Poder Judicial ejercía su función durante el periodo histórico materia del presente trabajo nos exige necesariamente un conocimiento de las normas que regulaban el funcionamiento de este poder del Estado, así como el de las cortes y juzgados que se encontraban dentro de su organización.

Ello nos obliga a entender no sólo las normas legales vigentes al momento de la invasión chilena sino también los antecedentes de dichas normas tanto a nivel legal como constitucional. Este entendimiento resulta necesario para poder comprender la noción que se tenía en aquellos años respecto de lo que constituía el papel del Poder Judicial y su función.

En ese sentido, debemos hacer un pequeño repaso a los textos constitucionales bajo cuyas vigencias se dictaron las principales normas que regulaban la actuación judicial durante la Guerra del Pacífico en general y la ocupación de Lima en particular. Ello nos remite a revisar los textos constitucionales que tuvieron vigencia en nuestro país desde la Constitución de 1839, bajo cuya vigencia se promulgaron las principales normas de jerarquía legal que regulaban la actuación judicial, hasta la Constitución Política de 1860, carta política vigente al inicio de la guerra, y el Estatuto Provisorio dictado por Nicolás de Piérola que fue el documento principal del ordenamiento peruano al momento de la ocupación.

Entre los textos constitucionales destaca sobre todo el de 1860. No sólo por haber sido el que estuvo vigente en los momentos inmediatamente anteriores al periodo que nos ocupa sino también porque el marco político que creó fue el que tuvo una mayor duración a través de nuestra historia republicana. En efecto, este texto rigió hasta 1920 y durante esos sesenta años sólo conoció dos periodos en los cuales su vigencia fue “suspendida”.

El primero fue en 1867 durante el primer gobierno del general Mariano Ignacio Prado. A inicios de ese año, Prado – que había sido nombrado dos años antes como Jefe Supremo Provisorio de la República – fue proclamado como Presidente Provisorio por parte del Congreso Constituyente que él mismo había convocado. La Constitución de

ese año entró en vigencia el 29 de agosto abrogando la Constitución de 1860. Dos días después se proclamó al General Prado como Presidente Constitucional y poco tiempo luego estallaron las revoluciones en su contra. Fueron cinco meses tormentosos los que tuvo vigencia dicha carta. En enero de 1868, Prado había dejado de ser Presidente y Pedro Diez Canseco, que tomó el poder días después, reinstauró la Constitución de 1860.

La segunda ocasión va a ser motivo de un mayor desarrollo en este mismo capítulo pero por el momento podemos adelantar que se dio en los últimos días de 1879 cuando Nicolás de Piérola tomó el poder ante la salida del país de Mariano Ignacio Prado, que se convierte en uno de los personajes recurrentes en esta historia. El Dictador dispuso la suspensión de la vigencia de la Constitución de 1860 y, en diciembre de 1879, expidió un Estatuto Provisorio que reguló su gobierno. En 1881, el gobierno provisorio de García Calderón reinstauró nuevamente la vigencia de la Constitución que rigió hasta que fue reemplazada en 1920 durante el “oncenio” de Augusto B. Leguía.

Terminado el repaso de los antecedentes constitucionales, nos ocuparemos en realizar un análisis con mayor detalle de las normas de jerarquía legal que regulaban directamente tanto la organización del Poder Judicial y sus funciones como la práctica forense.

Así, son dos los objetivos de este capítulo. El primero es entender la forma cómo estaba concebida la Administración de Justicia en esa época para poder diferenciarla de la concepción actual que tenemos y evitar cometer el error de pensar que estamos hablando exactamente del mismo fenómeno y juzgar los hechos históricos en base a criterios actuales. El segundo objetivo es lograr que podamos tener una visión global sobre cómo estaba diagramado en teoría y legislación el funcionamiento de la Administración de Justicia en los mismos instantes, o los inmediatamente anteriores, a la ocupación chilena de Lima.

La importancia del desarrollo de este capítulo resulta esencial ya que sólo entendiendo cómo debía funcionar el Poder Judicial, según las normas que lo regulaban, es que podremos afirmar con propiedad si dicha regulación se aplicó en aquellos años y, principalmente si durante el periodo bajo análisis existió una real anomalía en este funcionamiento que es la pregunta principal que este trabajo pretende responder.



Evidentemente, dicho análisis sólo podremos realizarlo juzgando esa situación en base a lo que las normas legales nos señalan que era la realidad de la “Administración de Justicia en Lima” en esos años y no en base a lo que es hoy día la “Administración de Justicia en Lima”.

Consideramos importante rescatar en este momento, antes de iniciar el repaso de las referidas normas, lo que señaló el doctor Carlos Ramos Núñez en la introducción del Tomo III de su obra “Historia del Derecho Civil Peruano”<sup>1</sup> respecto a la idea postulada por Jorge Basadre Grohmann en el sentido de que podría parecer una acción banal el pretender entender la historia de nuestro país en función del simple estudio de las normas que estuvieron vigentes en aquellos años debido a la total separación entre el “país-legal” y el “país-real”. Ramos defiende este esfuerzo, en el que incluye el suyo propio, afirmando que, si bien es cierta la existencia de esa separación entre un “país-legal” y el “país-real”, ello no significa que sea un ejercicio ocioso el estudiar las normas legales que marcaron el desarrollo legislativo de nuestro país. Por el contrario, a pesar de las diferencias entre ambas concepciones de país, el análisis de estas normas nos permite entender las manifestaciones de la época así como también comprender de mejor manera ciertas manifestaciones actuales tanto jurídicas como sociales.

### **Subcapítulo 1: La Constitución Política de la República Peruana de 1839**

La Constitución Política de la República Peruana de 1839<sup>2</sup>, mejor conocida como la “Constitución de Huancayo”, fue el texto constitucional que nació como respuesta a la Confederación Perú-boliviana impulsada por el Mariscal Andrés de Santa Cruz. Otorgada por el Congreso Nacional convocado en la ciudad de Huancayo, fue promovida por el Mariscal Agustín Gamarra y tuvo un corte claramente conservador y con un total privilegio hacia la figura del presidente.

Tuvo una vigencia de 16 años y contó con una sola interrupción de unos cuantos meses en 1844 cuando el General Manuel Ignacio de Vivanco convocó a una Asamblea Nacional. El intento vivanquista se frustró a los pocos meses a raíz de las

---

<sup>1</sup> RAMOS NÚÑEZ, Carlos. *Historia del Derecho Civil Peruano. Siglos XIX y XX. Tomo III: Los jurisprudencias: El Murciélagos y Francisco García Calderón*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2002. Páginas 19-23

<sup>2</sup> Constitución Política de la República Peruana (1839)  
(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1839.pdf>).

revoluciones de los generales Nieto, Mendiburú y Castilla que terminaron cuando éste último llegó a la Presidencia en 1845.

Es verdaderamente imposible entender este texto constitucional sin tomar en consideración las especiales circunstancias que vivió el país previas a su redacción. La Constitución de Huancayo tiene que ser comprendida como la respuesta de una parte de la sociedad peruana que se vio triunfante tras la caída de la Confederación y que buscaba generar un escenario político sustancialmente distinto a las guerras civiles que precedieron a dicha aventura<sup>3</sup> con especial privilegio a las personas y corrientes que resultaron vencedoras: los militares y los conservadores. Sólo comprendiendo los antecedentes políticos de esta Constitución se la puede apreciar en su complejidad.

José Pareja Paz Soldán denomina a este texto como *“la Constitución centralista-autoritaria de 1839, que adoptó el lema del ‘orden ante todo’”*<sup>4</sup>. Ello intenta reflejar dos características que marcaron claramente el marco establecido por este texto constitucional: la importancia que le otorgó a la imagen presidencial como fuente de autoridad de origen militar; y la clara apuesta – como respuesta a la pasada Confederación – por un estado unitario y centralista llegando al extremo, inclusive, de suprimir las municipalidades como unidades de gobierno local y entregar sus funciones a las prefecturas<sup>5</sup>, representantes directos del Poder Ejecutivo en los departamentos.

---

<sup>3</sup> En efecto, no podría entenderse por qué este texto constitucional elevó la edad para que se puedan ejercer plenamente todos los derechos civiles y políticos que reconocía casi hasta los 40 años sin reparar en la figura del General Felipe Santiago Salaverry que, con sólo 31 años tomó el mando del gobierno durante las guerras civiles y políticas que azotaron el país en la década de los años 1830. La Constitución se utilizaba, entonces, como una suerte de “broche jurídico” que garantice, al menos en parte, que los acontecimientos pasados, aunque puedan volver a generarse, sean cuando menos tachados de ilegales.

<sup>4</sup> PAREJA PAZ SOLDAN, José. *Las constituciones del Perú*. Madrid: Cultura Hispánica, 1954. Página 74

<sup>5</sup> Constitución Política de la República Peruana (1839).

#### Título XV

#### Régimen Interior de la República

Artículo 134°.- El gobierno superior político de cada departamento residirá en un Prefecto, bajo la inmediata dependencia del Gobierno Supremo. El de cada provincia en un Subprefecto, bajo la inmediata dependencia del Prefecto. El de cada distrito en un Gobernador, bajo la dependencia inmediata del Subprefecto.

García Calderón en 1860, destaca las siguientes como las principales regulaciones introducidas por este texto:

*“... centralizó absolutamente el poder, suprimió las municipalidades, no estableció juntas departamentales y creó los intendentes de Policía, que eran unos funcionarios mistos (sic) con facultades judiciales, ejecutivas y de seguridad pública”<sup>6</sup>.*

La Constitución estuvo conformada por 192 artículos divididos en 19 Títulos. El Título XIV es el que se encuentra referido al Poder Judicial y comprende veintitrés artículos, del 111° al 133°, y cumple con diseñar con mucho detalle un Poder Judicial sometido a la figura del Presidente de la República y estableciendo las garantías mínimas propias de toda Constitución de la época.

Inicia su regulación estableciendo que “el Poder Judicial se ejerce por los Tribunales y jueces” y retirando la mención de su condición de “independiente” que sí incluía la Constitución de 1834<sup>78</sup>. Dicha modificación podría tomarse como un cambio simbólico de la concepción que esta nueva Constitución trajo respecto del papel del Poder Judicial que, al igual que el resto del aparato estatal, quedaba sometido a la voluntad del Presidente quien gozaba de grandísimas atribuciones.

Un símbolo de mayor evidencia lo constituye el efecto conjunto que generan el artículo 112° y las breves referencias que, sobre el Poder Judicial, se hiciera en el articulado correspondiente a las atribuciones del Presidente de la República. En efecto, en palabras de Pareja Paz Soldán, esta Constitución “*suprimió la inamovilidad del Poder*

---

<sup>6</sup> GARCÍA CALDERÓN, Francisco. *Diccionario de la Legislación Peruana. Tomo I*. Lima: Imprenta del Estado, 1860. Página 594.

<sup>7</sup> Constitución Política de la República Peruana (1834)

#### Título VI Poder Judicial

Artículo 107°.- El Poder Judicial es independiente, y se ejerce por los Tribunales y Jueces.

<sup>8</sup> Algunos tratadistas, al ocuparse sobre la historia constitucional de nuestro país, mencionan como parte de los textos constitucionales que lo rigieron, ubicada entre las constituciones de 1834 y 1830, a la carta de 1837 de efímera vigencia. Nosotros no compartimos dicha idea y por ello no consideramos dicho texto como referencia toda vez que no establecía la regulación del Perú como Estado Soberano sino que regulaba la Confederación Perú-Boliviana que era una entelequia distinta a lo que fue y es el Perú. En ese sentido, consideramos una interpretación adecuada dentro de este subcapítulo el referirnos, al comparar el antecedente del artículo que comentamos, no a la Carta fundamental de la Confederación sino al último texto constitucional que concibió al Perú como un único Estado Soberano, tal como lo concebía la constitución de 1839.

*Judicial. Sus magistrados podían ser trasladados, suspendidos<sup>9</sup> y aún removidos por el Ejecutivo*<sup>10</sup>. Es decir, si bien no se negó la independencia del Poder Judicial en tanto institución, sí se abrieron las puertas para presionar a sus funcionarios mediante la posibilidad de decretar su traslado a otros puntos de la República (que en 1839 debía estar sumamente incomunicada fuera de las principales ciudades costeñas) y la posibilidad de que sean suspendidos a juicio del Presidente siempre que así lo exija un criterio tan abstracto como es “la conveniencia pública”. Esta innovación constitucional resultaba ser la consagración de facultades que el Congreso de Huancayo ya había otorgado al Presidente Gamarra mediante sendas leyes del 10<sup>11</sup> y el 13 de septiembre de 1839<sup>12</sup>

En lo que respecta a la estructura del Poder Judicial, la Constitución dispuso la sede de la Corte Suprema en la Capital, de las Cortes Superiores en las capitales de departamento que resulten apropiadas a juicio del Congreso y de los juzgados de primera instancia en los “*distritos judiciales que serán establecidos mediante ley*”. Consagra, por otro lado, la existencia de seis fueros privativos que iban a contar con una ley especial que regule sus peculiaridades.

La figura de los “intendentes de policía” que mencionara García Calderón y de quienes señalara que contaban con “facultades judiciales” no forma parte de la estructura del Poder judicial. En efecto, el texto constitucional los incluye en el artículo 143<sup>o13</sup> pero no

---

<sup>9</sup> Constitución Política de la República del Perú (1839).

### Título III Poder Ejecutivo

Artículo 87.- Son atribuciones del Presidente de la República:

(...)

10. Suspende por cuatro meses a lo más, y trasladar a cualquier funcionario del Poder Judicial, cuando a su juicio lo exija la conveniencia pública.

<sup>10</sup> PAREJA PAZ SOLDAN, José. *Historia de las constituciones nacionales (1812-1979)*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2005. Página 95.

<sup>11</sup> Ley del 10 de septiembre de 1839

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1839061.pdf>).

<sup>12</sup> Ley del 13 de septiembre de 1839

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1839062.pdf>)

<sup>13</sup> Constitución Política de la República del Perú (1839).

### Título XVI Policía

Artículo 143°.- Habrá en cada capital de departamento un Intendente de Policía con sus respectivos subalternos; en las capitales de provincias y distritos ejercerán las funciones de Intendente los Subprefectos y Gobernadores.

establece el detalle de sus funciones. El mismo García Calderón, al ocuparse en su “Diccionario de la legislación peruana” de la voz “Intendente de Policía” nos da más luces sobre esta figura y nos confirma el hecho de que no forma parte del Poder Judicial y que sus “facultades judiciales” son más bien diminutas aunque no deja de ser una figura que convendría estudiar a mayor profundidad pero cuyo tratamiento excede el propósito de esta investigación. En efecto, el prestigioso jurista señala:

**“Intendente de Policía.** (...) Desde que se suprimieron estas corporaciones (las municipalidades) todos los ramos de policía y de seguridad pública se encargaron a un funcionario llamado Intendente de policía; y sus atribuciones se detallaron en los varios reglamentos promulgados en 1839 y 1840, (...).

... Ellos tenían el cuidado de la seguridad pública y de la policía en general: ejercían facultades judiciales, entendiendo en asuntos de injurias, en reclamaciones contra los artesanos y sirvientes; podían promulgar bandos, y al mismo tiempo hacerlos cumplir y observar. Esta reunión de los tres poderes en una sola persona, no podía menos que ser un ataque a la libertad de los ciudadanos. Podían también los intendentes castigar con arresto o con multa las faltas contra los reglamentos de policía (...).

La tendencia de esta institución, como la de algunas otras que introdujo la Constitución de 1839, era centralizar la acción gubernativa, y hacer por lo mismo lenta, difícil y pesada la marcha de la administración pública (...).

Felizmente ha desaparecido esta institución que era una amenaza constante a la las libertades públicas. Las municipalidades, los jueces de paz, los sub-prefectos y gobernadores ejercen hoy las facultades que antes ejercía el intendente; (...)”<sup>14</sup>.

Retomando al análisis del texto constitucional, se advierte que este invierte gran parte de su articulado, prácticamente todo el correspondiente a los capítulos de la Corte Suprema y de las Cortes Superiores, realizando una labor más propia de una norma con rango de ley al establecer los requisitos para acceder a esas altas magistraturas y las atribuciones que cada colegiado tendría. Tan detallada fue aquella numeración que, refiriéndose al que correspondía a la Corte Suprema, Pareja Paz Soldán encontró “una tendencia embrionaria de reglamentar lo que hoy llamaríamos la jurisdicción contencioso-administrativa”<sup>15</sup>.

Toda esta regulación relativa a la organización del Poder Judicial, así como a los requisitos y atribuciones de sus órganos, es una iniciativa que no se repetiría en los demás textos constitucionales que analizamos en el presente trabajo y que en este

<sup>14</sup> GARCÍA CALDERÓN, Francisco. *Diccionario de Legislación Peruana*. Tomo 2. Lima: Fco. García Calderón; París: Lib. de Laroque, 1860. Página 1152.

<sup>15</sup> PAREJA, op. cit., página 95.



caso en particular respondería al hecho de que hasta entonces no existía un Reglamento de Tribunales que regule esos temas.

Resalta el hecho de que esta Constitución incluye una larga enumeración de garantías de la administración de justicia que resulta ser aún más numerosa que el rol contenido en la Constitución liberal de 1856. Para estar refiriéndonos a una constitución sumamente conservadora y que, en términos generales y tal como afirma Basadre Grohmann<sup>16</sup>, presenta una reducción en el número de derechos individuales reconocidos como reflejo de su carácter autoritario, ese es un detalle que no pasa desapercibido.

Entre estas garantías, reguladas curiosamente sólo en el capítulo correspondiente a los Juzgados de Primera Instancia, se incluye la publicidad de los procesos, la prohibición de todo juicio por comisión, la prohibición de suspender o abreviar los procedimientos establecidos por la ley<sup>17</sup>, el derecho de no auto incriminación, el respeto de la cosa juzgada, la prohibición a otras autoridades de avocarse a causas en curso ante el Poder Judicial, el juicio por jurados para las causas criminales y los supuestos de procedencia de la acción popular<sup>18</sup>.

<sup>16</sup> BASADRE GROHMANN, Jorge. *Historia de la República del Perú. Tomo II*. Lima: El Comercio, 2005. Página 197-198.

<sup>17</sup> En este punto resulta interesante tener presente que, debido a que en 1838 se habían abrogado los códigos “Santa Cruz” que incluían uno de procedimientos, a la fecha de expedición de la Constitución de 1839 no existían dichas “formas establecidas por ley” sino únicamente los distintos procedimientos establecidos en las recopilaciones que, al ser confusos y dispersos, no podían ser considerados como un procedimiento pre-establecido. Esto podría dar a entender que esta Constitución, desde su génesis, tuvo la intención de convertirse en un marco para el desarrollo de una futura codificación.

<sup>18</sup> Constitución Política de la República del Perú (1839)

#### Título XIV Poder Judicial

Art. 111°.- El Poder Judicial se ejerce por los Tribunales y Jueces.

Art. 112°.- Podrán ser destituidos por juicio y sentencia legal.

Art. 113°.- Habrá en la capital de la República una Corte Suprema de Justicia, en las de departamento, a juicio del Congreso, Cortes Superiores; y en los distritos judiciales Juzgados de Primera Instancia, cuya división territorial se hará por una ley.

Art. 114°.- Habrá Tribunales y Juzgados Privativos para las causas de comercio, minería, diezmos, aguas, presas y comisos. El número de sus Vocales, sus atribuciones y lugares en que deben establecerse los Juzgados, se determinará por una ley.

(...)

Juzgados de Primera Instancia.

(...)



En este punto resulta interesante hacer un paréntesis y aclarar que esta “acción popular” regulada en la Constitución de 1839 no guarda ninguna similitud con el proceso constitucional regulado en el numeral 5° del artículo 200° de la vigente Constitución Política de 1993<sup>19</sup>. Por el contrario, este recurso tenía en aquellos tiempos un carácter civil-administrativo reservado para solicitar la remoción de los jueces sobre los que incurre un impedimento legal para ejercer esa labor<sup>20</sup>.

---

Art. 125°.- La publicidad es esencial en los juicios: los Tribunales pueden discutir en secreto los negocios, pero las votaciones se hacen en alta voz y a puerta abierta y las sentencias deben ser motivadas, expresando la ley, y en su defecto los fundamentos en que se apoyan.

Art. 126°.- Se prohíbe todo juicio por comisión.

Art. 127°.- Ningún Tribunal ni Juez puede abreviar ni suspender, en caso alguno, las formas judiciales, que designa la ley.

Art. 128°.- Ningún ciudadano está obligado a dar testimonio contra sí mismo en causa criminal, bajo de juramento u otro apremio. Tampoco debe admitirse el del marido contra su mujer, ni el de ésta contra su marido, ni el de los parientes en línea recta, ni el de los hermanos ni cuñados.

Art. 129°.- Ningún poder ni autoridad puede avocarse causas pendientes en otro Juzgado, sustanciarlas ni hacer revivir procesos concluidos.

Art. 130°.- Los Magistrados, Jueces y demás empleados del Poder Judicial son responsables de su conducta conforme a la ley.

Art. 131°.- Producen acción popular contra los magistrados y Jueces, el soborno, la prevaricación, el cohecho, la abreviación o suspensión de las formas judiciales, el procedimiento ilegal contra la seguridad personal, y la del domicilio.

Art. 132°.- Se establece el juicio por Jurados para las causas criminales del fuero común. La ley arreglará sus procedimientos, y designará los lugares donde han de formarse.

Art. 133°.- Queda abolida la pena de confiscación de bienes, y ninguna pena afectará a otro que al culpado.

<sup>19</sup> Constitución Política del Perú (1993)

## Título V

### De las garantías constitucionales

Artículo 200°.- Acciones de Garantía Constitucional.

Son garantías constitucionales:

(...)

5. La Acción Popular, que procede, por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen.

<sup>20</sup> Código de Enjuiciamiento Civil de 1851.

Libro Primero: De la jurisdicción: de las personas que la ejercen; y de las que intervienen en su ejercicio.

Sección II: De los jueces.

Título I: De la administración de justicia y de las calidades que deben tener los jueces

Artículo 31° Puede pedirse por acción popular, ante el tribunal competente, la remoción de los jueces y magistrados, elegidos o nombrados sin las calidades o con los impedimentos que designa este código.

Por la misma acción podrá pedirse la remoción de los magistrados y jueces a quienes sobrevenga alguna causa de las expresadas en el artículo anterior.

La acción popular, así concebida, estuvo presente en nuestros textos constitucionales desde que fue inicialmente mencionada por la Constitución de 1828<sup>21</sup> hasta la Constitución de 1933. La Constitución de 1979 fue la primera que no la mencionó y la de 1993 es la que introdujo la nueva categoría hoy vigente.

Retomando nuestro hilo, esta Constitución dispuso, con relación al derecho vigente, la nulidad de todos los tratados y leyes que se habían otorgado durante los breves años de la Confederación (1836-1839), “*volviendo al Derecho Castellano, incluso ya derogado en parte en la península*”<sup>22</sup>. Esta decisión trajo una consecuencia interesantísima a la que no pudo sustraerse la Constitución y es que, por más que fue breve, la vigencia de los Códigos bolivianos en el territorio nacional – que se derivaban casi directamente de los códigos franceses – dejó en la sociedad una consciencia sobre los beneficios del derecho codificado frente al uso del *dédalos* en que se había convertido el derecho recopilado que se utilizó hasta entonces. Este proceso es narrado con claridad por Carlos Ramos Núñez<sup>23</sup> y baste decir en este momento que si bien el nuevo régimen dispuso la abrogación de los códigos “Santa Cruz” no pudo pasar por alto la convicción general respecto que resultaba menester que el país pueda sancionar sus propios códigos.

Es por ello que la Constitución de 1839, sin mencionarlo expresamente, se asumió a sí misma como el marco necesario para la redacción y establecimiento definitivo de esos códigos peruanos que tanto los gobernantes como los juristas reclamaban.

En efecto, luego de que mediante decreto del 31 de julio de 1838<sup>24</sup> se declararon insubsistentes e inobservables tanto los códigos civiles, de procedimientos civiles, y

---

<sup>21</sup> Constitución Política de la República Peruana (1828).

Título VI.  
Poder Judicial  
De la administración de Justicia.

Artículo 130°.- Producen acción popular contra los Jueces el prevaricato, el cohecho, la abreviación o suspensión de las formas judiciales, el procedimiento ilegal contra la libertad personal y seguridad del domicilio.

<sup>22</sup> UGARTE DEL PINO, Vicente. *Historia de las Constituciones del Perú*. Lima: Andina, 1978. Página 338.

<sup>23</sup> RAMOS NÚÑEZ, Carlos. *Historia del Derecho Civil Peruano. Siglos XIX y XX. Tomo II. La codificación del siglo XIX: Los códigos de la Confederación y el Código Civil de 1852*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2001. Páginas 172 y siguientes.

<sup>24</sup> Decreto del 31 de julio de 1838  
(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1838027.pdf>)

penal denominados “Santa Cruz” así como el Reglamento Orgánico de Tribunales y Juzgados promulgado durante la vigencia de la Confederación; se inició un proceso de codificación con miras a establecer un nuevo ordenamiento jurídico. En ese orden de ideas se debe reconocer que, a pesar de las críticas que se realizaron en contra de este texto constitucional, el marco jurídico que estableció terminó siendo amplio y sirvió como base para el inicio del largo proceso codificador en el que la regulación relativa a la organización judicial y la práctica forense tuvo una gran importancia.

Así, bajo la vigencia de esta Constitución se promulgaron, en un primer momento, la Ley Reglamentaria de los Juzgados de Paz del 28 de diciembre de 1839<sup>25</sup> y el Reglamento de Juzgados y Tribunales de la República del 9 de diciembre de 1845<sup>26</sup>. Ambos reglamentos constituyeron antecedentes importantes para algunas de las normas que vamos a analizar más adelante en este capítulo.

Pero, principalmente, durante la vigencia de esta Constitución se convocaron las comisiones que elaboraron y discutieron el Código Penal, el de procedimientos en materia criminal<sup>27</sup> y, sobre todo, el largo génesis que redactó y revisó el Código Civil de 1852 y paralelamente el Código de Enjuiciamiento Civil de ese mismo año.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Ley Reglamentaria de Jueces de Paz del 28 de diciembre de 1839

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1839128.pdf>)

<sup>26</sup> Ley que aprueba el Reglamento de Juzgados y Tribunales de la República del 09 de diciembre de 1845

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1845162.pdf>)

<sup>27</sup> Ley del 26 de septiembre de 1853

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1853087.pdf>).

<sup>28</sup> Ese largo proceso codificador puede ser entendido a través de la lectura de las leyes que se dictaron al respecto y demuestran los distintos momentos que se dieron durante el mismo. Estas normas son las siguientes:

- Ley del 8 de octubre de 1845 que dispuso la creación de una comisión de siete personas que, durante el plazo de dos años, se dedicarían a tiempo completo a preparar “*los códigos de procedimientos y civil, y después continuará precisamente con el penal*”, los mismos que deberían ser presentados a la legislatura el año 1847. (<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1845119.pdf>).
- Ley del 22 de diciembre de 1847 que, entendiendo por recibidos los proyectos trabajados por la Comisión, dispuso su presentación a las cámaras y su examinación por comisiones nombradas al efecto por cada una de ellas. Se establece así mismo, la obligatoriedad para que los juzgados de primera instancia presenten informes semestrales dando cuentas de los beneficios e inconvenientes que advirtieran en esta nueva legislación. (<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1847124.pdf>).
- Ley del 29 de diciembre de 1849 que establece que los proyectos del código civil y el de enjuiciamiento sean sometidos a una nueva comisión de examen por un plazo de tres meses luego de los cuales deberían ser promulgados. (<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1849086.pdf>).
- Ley del 22 de noviembre de 1850 que promulga los códigos civil y de enjuiciamiento y dispone su entrada en vigencia dentro de los siete meses de publicada esta norma. (<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1850074.pdf>)

Posteriormente en 1853, la misma comisión que revisó el Código Civil y el de Enjuiciamientos sería encargada de la revisión, adecuación y actualización de un nuevo Reglamento de Tribunales y una nueva Ley Reglamentaria de Jueces de Paz.<sup>29</sup>

Como comentario adicional, debemos señalar que durante este proceso codificador, se dio la segunda oportunidad – dentro del periodo histórico que nos ocupa – en la que se solicitó la participación activa del Poder Judicial y la primera dentro del proceso codificador que se inició en 1845. La oportunidad anterior fue cuando mediante Ley del 21 de noviembre de 1839<sup>30</sup> se le encargó a la Corte Suprema, dentro del marco establecido en la Constitución de 1839, que proyecte el Reglamento de Tribunales. Esta segunda se dio cuando mediante ley del 22 de diciembre de 1847 se exigió que los jueces informen semestralmente sobre las ventajas y falencias que advirtieran en los proyectos presentados por la comisión Codificadora. En ambas ocasiones la respuesta del Poder Judicial nunca llegó.

### **Subcapítulo 2: La Constitución de la República Peruana de 1856**

Si bien la Constitución de Huancayo sirvió para dar un marco jurídico al destacado primer gobierno del Mariscal Ramón Castilla, lo cierto es que sus principales críticas – aquellas referidas al profundo carácter autoritario que la investía y a la proscripción de la juventud de la vida política nacional mediante la elevación de las edades mínimas

- Ley del 7 de junio de 1851 que, suspende hasta nuevo decreto los efectos de todas las leyes anteriores que se han promulgado en materia de códigos. Según la parte considerativa de esta ley, el motivo de esta suspensión obedece a los inconvenientes que tuvo la aplicación de lo regulado en la ley del 29 de diciembre de 1849. (<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1851025.pdf>).
- Ley del 7 de junio de 1851 que crea una nueva comisión revisora que contará con representantes de ambas cámaras para que procedan a examinar, reformar y corregir los proyectos de los códigos civil y de enjuiciamiento. (<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1851026.pdf>).
- Ley del 22 de diciembre de 1851 que encarga a la última comisión revisora la supervisión de la impresión de los códigos (<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1851096.pdf>).
- Ley del 29 de diciembre de 1851 que informa que la comisión revisora cumplió con su encargo y ordena la promulgación de los mismos para el 28 de julio de 1852 y su entrada en vigencia para el día siguiente. (<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1851097.pdf>).
- Ley del 5 de julio de 1852 que reitera lo pertinente a la promulgación y entrada en vigencia de los códigos civil y de enjuiciamiento para los días 28 y 29 de julio de 1852 respectivamente. (<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1852092.pdf>).

<sup>29</sup> Ley del 16 de septiembre de 1853

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1854027.pdf>).

<sup>30</sup> Ley del 21 de noviembre de 1839

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1839117.pdf>).

para poder ejercer los derechos civiles y políticos – hicieron que este texto no pudiera sobrevivir a la revolución política del año 1855.

En efecto, luego del nuevo triunfo de Ramón Castilla – fuertemente apoyado por los sectores liberales de la República – la Convención Nacional, convocada el 5 de febrero de 1855<sup>31</sup>, declaró la derogatoria del texto constitucional mediante ley del 24 de octubre de 1855<sup>32</sup>.

Esa Convención Nacional, que emitió un Estatuto Provisorio<sup>33</sup> de marcado tinte liberal, es recordada por nuestra historia constitucional como el escenario de interesantísimas discusiones doctrinarias. Ello hace que esta Constitución sea, dentro del siglo XIX, una de las que mayor debate tuvo y que terminó generando mayores desencuentros. Su abierto y radical carácter liberal llevó a enfrentamientos entre eminentes representantes de los sectores conservadores del país - como el padre Bartolomé Herrera, defensor a ultranza del conservadurismo católico y de los fueros eclesiásticos – y los sectores liberales que, con el apoyo de Castilla, tenían toda la fuerza política necesaria para plasmar sus opiniones en la Carta Política.

Precisamente la discusión respecto de los fueros personales constituye, para nuestro punto de vista, uno de los temas más importantes ya que se convierte en un antecedente respecto del papel que debía jugar la función jurisdiccional dentro de la organización del Estado y el inicio de una discusión respecto del real contrapeso que debía existir entre el contenido y la aplicación del principio de la igualdad frente a la ley y lo que señalaba la tradición política sobre ese punto en particular. El triunfo político terminó siendo para los liberales que marcaron la eliminación del texto constitucional de toda referencia a los fueros personales aunque accedió a incluir un reconocimiento a la ley y los tribunales canónicos<sup>34</sup>.

---

<sup>31</sup> Decreto del 5 de febrero de 1855

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1855010.pdf>).

<sup>32</sup> Ley del 24 de octubre de 1855

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1855092.pdf>).

<sup>33</sup> Ley del 27 de julio de 1855

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1855001.pdf>).

<sup>34</sup> Constitución de la República Peruana (1856).

### Titulo III

#### Garantías constitucionales



Otros temas interesantes que tuvieron discusión en dicha Convención fueron el cuestionamiento que se hizo sobre la conveniencia de la existencia del ejército en un país que salía de haber sido regulado durante 16 años por una Constitución hecha a medida de una apabullante autoridad militar, la prohibición de la pena de muerte, la sustracción del derecho de suspender las garantías constitucionales de entre las facultades del Poder Ejecutivo y un incipiente proceso de descentralización que incluían a las Juntas Departamentales como entidades con poder e influencia dentro de la organización territorial del país y que incluso, respecto al Poder Judicial, podían tomar la decisión de nombrar a jueces y magistrados.

La propia radicalidad de este texto constitucional hizo que llevase en sí mismo la semiente de su frustración. Esta realidad se hacía tangible inclusive desde el acto mismo de su suscripción presidencial cuando el Presidente Castilla manifestó sus reticencias y reparos pero lo suscribió como un gesto que buscó demostrar su comportamiento democrático. Basta señalar que el promotor de la abrogación de este texto fue el mismo Mariscal Castilla que, cuatro años después, dejó de apoyar a las fuerzas liberales y, reconciliado con las conservadoras, logró que se discuta, elabore y apruebe el texto de 1860 que tenía más cosas en común con la Constitución de Huancayo que con su antecesora inmediata.

El texto constitucional de 1856 contaba 140 artículos agrupados en diecinueve títulos<sup>35</sup> siendo el Título XVII el referido al Poder Judicial. A diferencia de la Constitución de 1839, el articulado de este texto resulta ser menos extenso y dejó una mayor cantidad de temas para su regulación a través de las leyes. García Calderón señalaba al respecto que con el nuevo texto constitucional “(e)l poder judicial sólo ha experimentado (sic) alteraciones en lo que puede tener conexión con la política, es decir en cuanto al nombramiento de sus miembros, y a su responsabilidad”<sup>36</sup>.

---

Artículo 6°.- En la República no se reconocen privilegios hereditarios, ni fueros personales, ni empleos en propiedad. Tampoco se reconoce vinculaciones, y toda propiedad es enajenable en la forma que determina las leyes.

Por este artículo no se menoscaba la jurisdicción sobre materia eclesiástica, que corresponde a los Tribunales designados por las leyes canónicas; ni se autoriza para proceder a la detención ni a la ejecución de pena corporal contra personas eclesiásticas, sino conforme a los cánones.

<sup>35</sup> Constitución de la República Peruana (1856)

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1856.pdf>).

<sup>36</sup> GARCÍA CALDERÓN, Francisco. *Diccionario de la Legislación Peruana. Tomo 1*. Lima: Imprenta del Estado, 1860. Página 594.



Inclusive en lo relativo a las garantías judiciales, se redujo el número de las garantías reconocidas limitándose a consagrar únicamente el principio de publicidad de los juicios, la prohibición de todo juicio por comisión, el respeto a la cosa juzgada, la prohibición a toda autoridad de avocarse a causas pendientes ante el Poder Judicial y los supuestos de procedencia de la acción popular. De esa manera se dejó fuera del articulado constitucional la prohibición de modificar las formas judiciales, el derecho a la no auto incriminación y la utilización de jurados para los juicios criminales.

Por otro lado, tal como ya señalamos, esta Constitución es la primera que establece la prohibición absoluta de la pena de muerte mediante un artículo que constituye una declaración en favor de la vida humana<sup>37</sup>. De la misma manera termina con la posibilidad de traslado de los jueces estableciendo claramente su amovilidad y, dentro del intento de descentralización que comentamos anteriormente, establece que los vocales de la Corte Suprema serán nombrados por el Congreso y los jueces inferiores lo serán por las Juntas Departamentales<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> Constitución de la República Peruana (1856)

#### Título IV Garantías individuales.

Artículo 16°.- La vida humana es inviolable; la ley no podrá imponer la pena de muerte.

<sup>38</sup> Constitución de la República Peruana (1856)

#### Título XVII Poder Judicial

Art. 124°.- La justicia será administrada por los Tribunales y Juzgados.

Art. 125°.- Son amovibles los miembros del Poder Judicial, y la ley fijará la duración de sus empleos.

Art. 126°.- Habrá en la capital de la República una Corte Suprema de Justicia; en las de departamento, a juicio del Congreso, Cortes Superiores, en las provincias Juzgados de 1a. Instancia; y en todas las poblaciones, Juzgados de Paz.

El número de Juzgados de 1a. Instancia en las provincias y el de Juzgados de Paz en las poblaciones, se designará por una ley.

Art. 127°.- Los Vocales de la Corte Suprema serán nombrados por el Congreso, a propuesta en terna doble del Poder Ejecutivo; los de las Cortes Superiores y a los Jueces de 1ª Instancia, lo serán por el Ejecutivo a propuesta en terna doble de las Juntas Departamentales.

Art. 128°.- La publicidad es esencial en los juicios: los Tribunales pueden discutir en secreto; pero las votaciones se harán en alta voz y a puerta abierta.

Las sentencias serán motivadas, expresándose la ley o fundamentos en que se apoyan.

Art. 129°.- Se prohíbe todo juicio por comisión.

Art. 130°.- Ningún poder ni autoridad puede avocarse causas pendientes en otros juzgado, ni sustanciarlas ni hacer revivir procesos fenecidos.

Art. 131°.- Producen acción popular contra los Magistrados y Jueces:

1°.- La prevaricación.

2°.- El cohecho.

3°.- La abreviación o suspensión de las formas judiciales.

4°.- El procedimiento ilegal contra las garantías individuales.

La regulación constitucional establecida en este texto nos permite apreciar un Poder Judicial que ya no depende del Poder Ejecutivo y delineado en términos generales, mencionando pocos principios y dejando mucho margen al desarrollo legislativo. A pesar de esto último se debe señalar que durante la vigencia de esta Constitución no se emitieron leyes que regularon ni la organización del Poder Judicial ni la práctica forense sino que, por el contrario, se respetaron los códigos promulgados durante la vigencia de la Constitución anterior. En efecto, de todas las normas con rango de ley emitidas durante esos años relacionadas al funcionamiento del Poder Judicial y la Administración de Justicia en la ciudad capital, no hubo ninguna que modificara los términos de los códigos que habían sido promulgados y que regulaban dichos temas.

Por el contrario, las normas expedidas durante ese lapso se referían mayormente a temas de índole administrativa que tuvieron como finalidad adecuar el Poder Judicial a los cuerpos normativos ya existentes. Sin embargo, este esfuerzo tampoco resultó muy exitoso debido al poco tiempo de vigencia que tuvo esta Constitución y a un elemento adicional que ya mencionamos: la reticencia que el gobierno del Presidente Castilla mostró frente a este texto.

No obstante ello, creemos que fue en el campo de la regulación constitucional del Poder Judicial donde se dio el mayor triunfo de esta Constitución y que se reflejó, como veremos a continuación, no durante su vigencia sino luego de su abrogación. Nos referimos al hecho de que el siguiente texto constitucional rescató en su contenido la integridad conceptual y terminológica del marco establecido por ésta.

### **Subcapítulo 3: La Constitución Política del Perú de 1860**

El texto constitucional de 1860<sup>39</sup> fue elaborado y promulgado durante el cuarto gobierno del Mariscal Ramón Castilla (25 de octubre de 1858 – 24 de octubre de 1862). Tal como señalamos anteriormente es el texto constitucional que ha estado vigente por un mayor periodo ya que, sin contar los casi dos años en que fue

---

Art. 132º.- Para vigilar sobre el cumplimiento de las leyes, habrá un Fiscal de la Nación en la capital de la República, Fiscales y Agentes Fiscales en los lugares y con las atribuciones que la ley designe.

Art. 133º.- El Fiscal de la Nación será nombrado en la misma forma que los Vocales de la Suprema, los departamentales como los Vocales de las Superiores; y los Agentes Fiscales como los jueces de la 1ª Instancia

<sup>39</sup> Constitución Política del Perú (1860)

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1860002.pdf>).

temporalmente dejado de lado, suma casi 60 años de vigencia. Es pues, sin lugar a dudas, uno de los textos políticos más importantes de nuestra historia.

Sin perjuicio de ello, con miras a nuestra investigación, uno de los rasgos más importante que presenta este texto constitucional de 1860 lo constituye el hecho de que ser la carta que reguló nuestro país tanto en el mismo momento del inicio de la Guerra con Chile, mes de mayo de 1879, como en las primeras acciones bélicas. Inclusive, a pesar de que fue temporalmente dejado de lado por el Estatuto Provisorio de 1879, gracias a su reinstauración que declarara el Presidente Provisorio Francisco García Calderón en 1881, fue el texto constitucional que estableció el marco legal que rigió en el país durante gran parte de la ocupación y todo el proceso de reconstrucción.

Calificada como “conservadora” por la historia constitucional peruana, encuentra sus raíces en la “Constitución de Huancayo” de la que ofrece una versión mucho más moderada y conciliadora. Su elaboración y entrada en vigencia respondió a un cambio en el enfoque político que tuvo el Mariscal Castilla entre la posición con la que asumió la presidencia de 1855 y la que asumió posteriormente.

En efecto, tal como ya lo mencionamos, Ramón Castilla reasumió el poder en 1855 encabezando un gran movimiento liberal que terminó por derrocar al General Echenique. De entre los historiadores que analizaron el comportamiento del Mariscal en esos años, podemos rescatar la afirmación de Alzamora quien señaló que en aquel momento Castilla se presentaba como “*enemigo acérrimo de todo sistema de conservadurismo, defensor de dogmas no sólo democráticos, sino demagógicos*”<sup>40</sup>.

Precisamente debido a las restricciones que la constitución liberal de 1856 establecía para la figura del Presidente, en 1860 el mismo Mariscal promueve una reforma constitucional<sup>41</sup>. La razón de ello fueron varios desencuentros con las facciones liberales a quienes lideró cinco años atrás y quienes defendían una posición política en la que el Presidente de la República no debía agrupar mucho poder. A raíz de estos enfrentamientos, Castilla fue acercándose a la facción conservadora del Congreso de la República con quienes terminó logrando un entendimiento y generando las bases

---

<sup>40</sup> ALZAMORA SILVA, Lizardo. *La evolución política y constitucional del Perú Independiente*. Lima: Librería e Imprenta Gil, 1942. Página 13.

<sup>41</sup> Ley del 04 de agosto de 1860  
(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1860001.pdf>)

para iniciar un nuevo momento constituyente. Así se discutió una nueva constitución más moderada, de un “conservadurismo relativo” y cuyo tenor ideológico no estaba muy lejos de un “liberalismo moderado”. Alzamora Silva señala que en esta Constitución “*la teoría cedía más el campo a la realidad*”<sup>42</sup> y atribuye a esta cualidad el hecho de que haya sido, de entre todos los textos constitucionales, la que tuvo una mayor vigencia.

La Constitución Política de 1860 comprende 138 artículos divididos en 19 títulos<sup>43</sup>. De todo este articulado, el Poder Judicial encuentra su regulación en los artículos 124° al 130° correspondientes al Título XVII<sup>44</sup>. Si bien es cierto que, desde un punto de vista general, la Constitución de 1860 recoge mayores elementos de la Constitución de 1839 y no tanto del texto de 1856, en lo relativo al Poder Judicial podemos decir que sucede exactamente lo contrario ya que, tal como lo señalamos anteriormente, la regulación establecida en ésta constituye una clara y casi total equivalencia a lo regulado en 1856.

<sup>42</sup> ALZAMORA, op. cit., página 36.

<sup>43</sup> Constitución Política del Perú (1869)

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1860.pdf>).

<sup>44</sup> Constitución Política del Perú (1860)

#### Título XVII

##### Poder Judicial

Artículo 124.- La Justicia será administrada por los Tribunales y los Juzgados, en el modo y la forma que las leyes determinen.

Artículo 125.- Habrá en la capital de la República una Corte Suprema de Justicia; en las de Departamento, a juicio del Congreso, Cortes Superiores; en las de Provincia, Juzgados de Primera Instancia; y en todas las poblaciones Juzgados de Paz.

El número de Juzgados de Primera Instancia en las provincias, y el de Juzgados de Paz en las poblaciones, se designará por una ley.

Artículo 126.- Los Vocales y Fiscales de la Corte Suprema serán nombrados por el Congreso, a propuesta en terna doble del Poder Ejecutivo; los Vocales y Fiscales de las Cortes Superiores serán nombrados por el Ejecutivo a propuesta en terna doble de la Corte Suprema; y los Jueces de Primera Instancia y Agentes Fiscales, a propuesta en terna doble de las respectivas Cortes Superiores.

Si ocurriese alguna vacante en la Corte Suprema, durante el receso del Congreso, la Comisión Permanente del Cuerpo Legislativo proveerá interinamente la plaza, a propuesta en terna doble del Poder Ejecutivo.

Artículo 127.- La publicidad es esencial en los juicios, los tribunales pueden discutir en secreto, pero las votaciones se harán en alta voz y públicamente. Las sentencias serán motivadas, expresándose en ellas la ley o los fundamentos en que se apoyen.

Artículo 128.- Se prohíbe todo juicio por comisión.

Artículo 129.- Ningún Poder ni autoridad, ni puede avocarse causas pendientes ante otro poder u otra autoridad ni sustanciarlas, ni hacer revivir procesos fenecidos.

Artículo 130.- Producen acción popular contra los magistrados y jueces:

1. La prevaricación.
2. El cohecho.
3. La abreviación o suspensión de las formas judiciales.
4. El procedimiento ilegal contra las garantías individuales.

Así, con relación a lo que es la organización del Poder Judicial, sólo se advierte una única diferencia sustantiva y que es la eliminación de la mención que disponía la amovilidad de los miembros del Poder Judicial. Las demás diferencias constituyen detalles y no temas de fondo. Por ejemplo, los artículos que se referían a los fiscales fueron eliminados y su regulación se hizo en el mismo artículo que establecía el nombramiento de los vocales y jueces. Por su parte, la supresión de las Juntas Departamentales como organismos con facultades de proponer a los jueces de inferior jerarquía responde más a la desaparición de dichas Juntas como organismos dentro del estado peruano que a una verdadera reformulación del papel del Poder Judicial. En efecto, el lugar de estas Juntas fue ocupado por las Cortes Superiores lo que no negaba la voluntad de que esos nombramientos tengan una mayor cercanía a la localidad y no estuvieran supeditados a la decisión del Poder Ejecutivo.

Es decir, estamos prácticamente ante la misma regulación que se estableció en el año 1856 y ello se puede apreciar con mayor claridad cuando notamos que las garantías judiciales que recoge este texto son exactamente las mismas que su antecesora. Así tenemos nuevamente al principio de publicidad, la prohibición de todo juicio por comisión, la prohibición a toda autoridad de avocarse a causas pendientes ante el Poder Judicial, el respeto a la cosa juzgada y la acción popular para la cual se mantienen también los mismos supuestos establecidos en el texto de 1856.

Por otro lado, dentro de lo que son las garantías judiciales que este texto reconoce, también se encuentra una sola diferencia respecto de la aplicación de la pena de muerte que el texto de 1856 eliminaba claramente y que ahora, en 1860, se restringe al delito de homicidio calificado<sup>45</sup>. Esto afecta al Poder Judicial en el sentido de que es éste quien, en última instancia, terminará imponiendo dicha pena más allá de las facultades de conmutación que las leyes reconocerán al gobierno.

Finalmente, debemos señalar que durante los 60 años de vigencia que tuvo este texto constitucional, fue reformado 18 veces, entre modificaciones y derogaciones. De esas

---

<sup>45</sup> Constitución Política del Perú (1860)

#### Título IV Garantías individuales

**Artículo 16°.** – La ley protege el honor y la vida contra toda injusta agresión; y no puede imponer la pena de muerte sino por el crimen de homicidio calificado.



18 reformas sólo cuatro tuvieron lugar antes de la ocupación de la ciudad capital. De esas cuatro, tres fueron realizadas mediante ley promulgada el 3 de enero de 1879<sup>46</sup>, referidas a la oportunidad de reunión del Congreso Ordinario y los supuestos de vacancia de hecho de los cargos de senador y diputado, y la restante fue realizada mediante Ley del 31 de agosto de 1874<sup>47</sup>.

Esta última modificación sí es relativa a la normativa que regula el Poder Judicial ya que dispuso la derogatoria de todo el Título XIII de la Constitución. Este título establecía la existencia, composición y funcionamiento de la “Comisión Permanente del Cuerpo Legislativo”. Esta Comisión Permanente era un organismo especial establecido como un agente fiscalizador de todo el aparato estatal. Su derogación afectó la normativa del Poder Judicial en dos sentidos: el primero por cuanto en el artículo 126° se le asignaba un papel en el nombramiento de Vocales Supremos interinos cuando la vacante en la Corte Suprema se daba durante el receso del Congreso. El segundo sentido se daba por cuanto en el numeral 4 del artículo 107°<sup>48</sup> de la Constitución de 1860, que establecía las atribuciones de esta Comisión Permanente, se incluía una atribución de dirimente en conflictos competenciales que pudieran surgir entre la Corte Suprema y las Cortes Superiores.

---

<sup>46</sup> Ley del 3 de enero de 1879

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1879003.pdf>).

<sup>47</sup> Ley del 31 de agosto de 1874

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1874010.pdf>).

<sup>48</sup> Constitución Política del Perú (1860)

## Título XII

### Comisión permanente del cuerpo legislativo

**Artículo 107.º.-** Son atribuciones de la Comisión Permanente a más de las que le señalan otros Artículos constitucionales:

1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes dirigiendo al Poder Ejecutivo dos representaciones sucesivas para que enmiende cualquiera infracción que hubiese cometido o para que proceda contra las autoridades subalternas si ellas hubiesen sido las infractoras.
2. Dar cuenta al Congreso y pedir que la Cámara de Diputados entable la correspondiente acusación contra el Ministro o Ministros responsables en el caso de que hubiesen sido desatendidas las representaciones de que se encarga la atribución anterior.
3. Declarar si ha o no lugar a formación de causa y poner a disposición del Juez competente a los Senadores o Diputados en el caso de que habla el Artículo 55 de esta Constitución.
4. Resolver las competencias que se susciten entre las Cortes Superiores y la Suprema y entre ésta y el Poder Ejecutivo.
5. Autorizar al Ejecutivo para que negocie empréstitos designando la cantidad y para que aumente la fuerza pública hasta un número igualmente determinado en el caso de que se trastorne el orden o sea invadido el territorio nacional.  
Para esta autorización no bastará la mayoría absoluta de votos sino que será indispensable la de dos tercios.
6. Dar al Presidente de la República el permiso mencionado en los artículos 95 y 96 en los mismos casos de la atribución anterior.



La ley de modificación constitucional del 31 de agosto de 1874 señala en sus considerandos que el motivo para dicha derogatoria es que la Comisión Permanente no ha estado cumpliendo el objeto para que fuera creada. Sin embargo, esta ley destaca por su parquedad y no regula ninguna consecuencia jurídica respecto a quien ejerce las atribuciones que antes le correspondían a la Comisión Permanente ni tampoco remite al legislador el encargo de subsanar esa situación.

Por lo pronto, respecto al tema judicial, debemos señalar que la competencia de dirimir conflictos competenciales era una competencia que la Comisión Permanente compartía con la Cámara de Senadores<sup>49</sup>. En ese sentido, ante la derogatoria del título constitucional que la contemplaba, debemos entender que la función de dirimente en temas competenciales recayó exclusivamente en el Senado de la República.

Tal como mencionamos anteriormente, en 1879 Nicolás de Piérola tomó el poder tras desalojar al vicepresidente Luis La Puerta y disponer el derrocamiento del General Prado que se encontraba fuera del país. Con la finalidad de otorgar sustento jurídico a su acción, Piérola promulgó el Estatuto Provisorio de ese año<sup>50</sup> que le sirvió para dejar de lado la Constitución de 1860. La expedición de este Estatuto respondía a la idea de contar con una “Ley de Guerra” que permitiese al país contar con el marco legal necesario para afrontar la dolorosa coyuntura pero, en realidad, terminó dando lugar a diversas reformas que incluían desde la emisión del papel moneda hasta la supresión de las Municipalidades.

---

<sup>49</sup> Constitución Política del Perú (1860)

Titulo IX  
Cámaras Legislativas

(...)

**Artículo 66°.-** Corresponde a la Cámara de Senadores:

1. Declarar si ha o no lugar a formación de causa a consecuencia de las acusaciones hechas por la Cámara de Diputados quedando el acusado en el primer caso suspenso del ejercicio de su empleo y sujeto a juicio según ley.
2. Resolver las competencias que se susciten entre las Superiores y la Suprema y entre ésta y el Poder Ejecutivo.

<sup>50</sup> Estatuto Provisorio (1879)

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1879114.pdf>).

A diferencia de la también efímera Constitución de 1867<sup>51</sup>, que dio lugar a la primera interrupción de la vigencia de la Constitución de 1860, el Estatuto pierolista de 1879, sí tuvo algunos minúsculos efectos sobre la organización judicial del país. Estas modificaciones introducidas serán materia de análisis en un siguiente subcapítulo.

En efecto, si bien la Constitución de 1867 introdujo en su texto cambios en el nombramiento de los jueces y vocales, volvió a pronunciarse sobre la existencia de los fiscales y el número de votos para hacer sentencia en la Corte Suprema, y dispuso la creación de tribunales contenciosos-administrativos<sup>52</sup>, su corta duración y el aciago clima político que reinó en los cinco meses de su vigencia, no permitió que se terminen haciendo efectivas dichas modificaciones.

Por el contrario, la carta política de 1860 si tuvo varios años de vigencia antes del inicio de la guerra y en ese tiempo no sólo se expidieron algunas normas modificatorias de los principales cuerpos normativos judiciales y procedimentales expedidos durante la vigencia de la Constitución de 1839 sino que, además, se dio

<sup>51</sup> Constitución Política del Perú (1867)

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1867.pdf>).

<sup>52</sup> Constitución Política del Perú (1867)

## Titulo XVII Del Poder Judicial

(...)

Artículo 122°.- Los Vocales de la Corte Suprema serán nombrados por el Congreso.

Para este nombramiento la Corte Suprema remitirá al Congreso, en caso de vacante, una lista de todos los magistrados que tengan quince años de servicios y de todos los abogados que tengan veinte años de estudio abierto.

Los Vocales de la Corte Superior serán nombrados por el Congreso a propuesta en terna doble de la Corte Suprema: la una de magistrados con diez años de servicios y la otra de abogados con diez años de estudio abierto.

Los Jueces de Derecho serán nombrados por la Corte Suprema a propuesta de la respectiva Corte Superior. Los de Paz serán nombrados por la Corte Superior respectiva a propuesta en terna del Juez de 1ª Instancia.

Los Representantes no pueden ser propuestos ni elegidos para ninguna Vocalía.

(...)

Artículo 124°.- Habrá en la Corte Suprema un Fiscal; en las Superiores el número de Fiscales que designe la ley; y Agentes Fiscales en las capitales de Departamento y en los lugares que determine la ley.

Los Fiscales serán nombrados del mismo modo que los Vocales, y los Agentes Fiscales del mismo modo que los Jueces.

(...)

Artículo 129°.- Para hacer sentencia en recursos de nulidad en la Corte Suprema, debe haber cinco votos conformes.

Para que haya sentencia en los juicios privativos de la Corte Suprema, requieren tres votos conformes en primera instancia y cinco en la segunda.

Artículo 130°.- La Ley determinará la organización de los Tribunales contenciosos-administrativos, y lo relativo al nombramiento de sus miembros.

una etapa en la que los organismos estatales acomodaron su funcionamiento a lo señalado en este texto. En ese sentido, si bien las leyes que regulan la actuación del Poder Judicial y la práctica forense fueron expedidas bajo la vigencia de otro texto constitucional, son los principios incluidos en el texto de 1860 (y que en realidad son los establecidos en 1856 debido a que, tal como señalamos, esta Constitución no hizo sino reiterar la regulación que introdujo el texto anterior) los que marcaron su aplicación en el periodo histórico que nos ocupa y, por ello, asume una posición de privilegio sobre las demás dentro de nuestro esfuerzo de entender la diagramación legal que tenía la administración de justicia en Lima durante los años de la ocupación chilena.

#### **Subcapítulo 4: El Estatuto Provisorio de 1879**

Si bien los móviles y circunstancias quedan aún a merced de la discusión histórica, lo cierto es que el 19 de diciembre de 1879, el Presidente Mariano Ignacio Prado salió del territorio nacional rumbo a Europa. Quedó en Lima, encargado de la presidencia, el General Luis La Puerta que, a la sazón, era su Vicepresidente y contaba ya con 68 años<sup>53</sup>. Esta coyuntura fue aprovechada por Nicolás de Piérola que, con el apoyo del Batallón “Artesanos de Ica”, se levantó en armas el 21 de ese mes aprovechando el descontento generado luego del Combate de Angamos que marcó la derrota peruana en la campaña naval de la guerra.

Este levantamiento fue rapidísimo y el día 23 de diciembre de 1879, atendiendo una invitación que le realizó la misma Municipalidad de Lima y varios vecinos notables, Nicolás de Piérola asumía el mando del Estado Peruano en calidad de Dictador y con el título de “Jefe Supremo”.

El 27 de diciembre, cuatro días después, se publica el decreto conteniendo el Estatuto Provisorio<sup>54</sup> que serviría de marco legal para el gobierno de Piérola y que marcaba la segunda oportunidad en que la Constitución de 1860 dejaba de estar vigente.

---

<sup>53</sup> Decretos del 18 de diciembre de 1879

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1879111.pdf> , y <http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1879113.pdf>).

<sup>54</sup> Estatuto Provisorio (1879)

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1879114.pdf>).

El Estatuto es una norma escueta de sólo 12 artículos siendo su regulación más importante la creación de un Consejo de Estado que serviría como una suerte de “consejero” del Jefe Supremo y, asimismo, como un “Tribunal de apelaciones y última instancia” en los asuntos contenciosos-administrativos<sup>55</sup>.

El artículo 5° del Estatuto es el único que hace mención al Poder Judicial señalando el respeto a su independencia pero matizando esa afirmación con una amenaza velada que permitía hilvanar presagios sobre las intenciones que Piérola pudiera haber tenido sobre dicho Poder. Adicionalmente destacan los artículos 6° que dispone la vigencia de los códigos civil y penal y el artículo 8° que, aumentando el número de los supuestos de incidencia de la pena de muerte, realiza una enumeración de delitos que serían derivados a la justicia militar y para los cuales se establece como única sanción la pena capital<sup>56</sup>. Entre esos delitos destacamos la inclusión de la prevaricación. Esta disposición, leída conjuntamente con el comentado artículo 5°, da una imagen clara del difícil panorama que, en plena guerra y en medio de un gobierno dictatorial, se presentaba para los magistrados y jueces.

Tal como señalamos en el sub capítulo anterior, este Estatuto Provisorio que en teoría iba a cumplir una labor de “ley de guerra” que permitiese al Jefe Supremo tomar las

<sup>55</sup> Estatuto Provisorio (1879)

Artículo 10°.- Créase un Consejo de Estado compuesto :

Del Reverendísimo Metropolitano;

Del Presidente actual del Consejo de Juristas;

Del Presidente de la Suprema Corte de Justicia;

Del Presidente del Tribunal Mayor de Cuentas;

Del Prior del Consulado;

Del Rector de la Universidad de Lima, y de seis consejeros más, nombrados por el Jefe Supremo de la República, entre los cuales figurará un general del ejército.

Artículo 11°.- A este Consejo pedirá el Gobierno su voto consultivo respecto de los asuntos que en su concepto lo requieran.

Ejercerá igualmente las funciones de Tribunal de apelación y última instancia en los asuntos contencioso administrativos.

<sup>56</sup> Estatuto Provisorio (1879)

Artículo 5°.- Queda sancionada la independencia del Poder Judicial; pero el Gobierno se reserva el derecho de velar eficazmente por la pronta y exacta administración de justicia.

Artículo 6°.- Los Códigos Civiles y Penales quedan en todo su vigor y fuerza, mientras se vayan haciendo en ellos las reformas necesarias.

(...)

Artículo 8°.- La traición a la Patria, la cobardía e insubordinación militares, la desertión en campaña, el peculado, la prevaricación, el cohecho, la defraudación de bienes públicos, el homicidio premeditado y alevoso y el bandolerismo, cualquiera que sea la condición del culpable ó el carácter que invista, serán, durante la presente guerra, juzgados militarmente y penados con la pena capital.

Los bienes de sociedades anónimas de banco, industriales o mercantiles, serán considerados como bienes públicos para el juzgamiento y aplicación de la pena.

decisiones más acertadas para afrontar el conflicto armado, terminó siendo en la realidad la primera piedra de una pretendida revolución normativa iniciada por Nicolás de Piérola. Tal como señalamos anteriormente, a diferencia de la ya mencionada Constitución de 1867, este Estatuto sí llegó a aplicarse y, como muestra de ello, se proclamaron durante su vigencia distintas normas entre las cuales varias se destinaron a regular al Poder Judicial.

Sin embargo, tal como explicaremos más adelante en este mismo capítulo, la motivación principal de dichas modificaciones respondería más a un móvil político que a una real intención de mejorar la administración de justicia. Ello explica que, en aquel preciso momento histórico, Piérola decidiera no modificar ni la estructura ni el funcionamiento ni las atribuciones del Poder Judicial. En efecto, la utilidad política de este Poder del Estado se encontraba no tanto en la necesidad de reformularlo para mejorar el cumplimiento de sus funciones sino, más bien, en la posibilidad de utilizarlo con la finalidad de posicionar personajes adictos al Dictador y perseguir a los enemigos políticos que Piérola aún tenía.

La derrota peruana en la guerra marcó el fin de los proyectos políticos de Piérola y ello se graficó históricamente cuando el Presidente Provisorio Francisco García Calderón dispuso la reinstauración de la Constitución de 1860 y emitió disposiciones declarando la nulidad absoluta de todos los actos de gobierno establecidos por la dictadura.

Desde un punto de vista integral, el impacto que este Estatuto Provisorio tuvo sobre el Poder Judicial fue definitivamente leve y de muy poca trascendencia. No obstante ello, el hecho de que ésta haya sido la norma cúspide del ordenamiento peruano desde más de un año antes de que se verifique la ocupación y de que las modificaciones legales introducidas durante su vigencia hayan sido las vigentes al momento mismo de la ocupación, le otorga una mayor importancia para la recapitulación histórica que nos ocupa.

### **Subcapítulo 5: El Código de Enjuiciamiento Civil de 1852**

Terminado el repaso de las normas constitucionales que tuvieron alguna eficacia en la Administración de Justicia en nuestro país durante la etapa histórica que nos ocupa, corresponde revisar las normas de jerarquía legal que regulaban no sólo la organización judicial sino también, y con mayor detalle, la práctica forense.



La primera y principal norma de esta categoría la constituye el Código de Enjuiciamiento Civil de 1852 que fue expedido el 29 de diciembre de 1851, durante el primer año del gobierno del General José Rufino Echenique, y empezó a regir el 28 de julio de 1852. En aquel momento se encontraba en vigencia la Constitución de 1839 cuyos principales rasgos ya comentamos anteriormente en este mismo capítulo.

Los antecedentes históricos de esta norma se remontan a más de una década. En efecto, antes de la promulgación de la Constitución de Huancayo, y luego de la caída de la Confederación, el gobierno de Orbegoso ya había declarado nulos e insubsistentes los códigos bolivianos que el Supremo Protector de la Confederación había dispuesto como aplicables en el Perú<sup>57</sup>. Entre los códigos “Santa Cruz” que rigieron fugazmente y fueron declarados insubsistentes por Orbegoso se encontraba uno de procedimientos civiles y, tras su abrogación, el país retornó a las leyes procesales que rigieron durante la colonia a pesar de que ya habían sido derogadas inclusive en la misma España. Este retorno al derecho virreinal se dispuso mientras el gobierno expidiera normas adecuadas para esos temas. Si bien desde entonces se promulgaron hasta dos Reglamentos de Tribunales (el primero en 1839<sup>58</sup> durante el gobierno de Agustín Gamarra y el segundo en 1846<sup>59</sup> durante el primer gobierno de Ramón Castilla), sólo durante el gobierno del General Echenique, más de diez años después, se llegó a concretizar la expedición de una norma adecuada que regulara los procedimientos judiciales.

El Código de Enjuiciamiento Civil, que compartió el mismo génesis con el Código Civil de 1852, tuvo entonces la intención de otorgar al país un cuerpo normativo moderno y coherente que uniformice la legislación procesal que existía hasta ese momento. El propósito se logró ya que esta norma se encontró vigente hasta el siglo XX cuando entró en vigencia el Código de Procedimientos Civiles de 1912 que traía una concepción totalmente distinta de lo que era el Derecho en general y sobre la

---

<sup>57</sup> Decreto del 31 de julio de 1838

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1838027.pdf>)

<sup>58</sup> Esta norma constituye, dentro del periodo histórico que abarcamos, la primera de poquísimas oportunidades en el que el Ejecutivo encargó – o permitió la participación – de la Corte Suprema en la redacción de una norma que le atañe directamente. En efecto, mediante Ley del 21 de noviembre de 1839 (<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1839117.pdf>) se encargó a la Corte Suprema la redacción de un Reglamento de Tribunales pero siempre respetando el detallado marco incluido en la Constitución de 1839.

<sup>59</sup> Ley del 9 de diciembre de 1845

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1845162.pdf>)



regulación de un juicio en particular. Así, el Código de Enjuiciamiento Civil mantuvo su vigencia por más de sesenta años, sobreviviendo a cinco textos constitucionales y dos estatutos provisorios, convirtiéndose en la norma forense que tuvo la segunda mayor vigencia a lo largo de nuestra historia republicana.

Esta larga vigencia no es un fenómeno aislado ya que todos los códigos republicanos que fueron expedidos por esos años gozaron de igual suerte. En su favor podremos decir que el Código de Enjuiciamiento tuvo como virtud el uniformizar de forma general los diversos procedimientos y contener una gran gama de juicios especiales, lo que le permitió no perder actualidad y resultar adecuado para las diversas necesidades forenses de la sociedad de esos años y los siguientes.

Sin embargo, a pesar de estos méritos, el Código fue materia de críticas severas. Basadre Ayulo cita las críticas que sobre este cuerpo normativo realizaron Basadre Grohmann y Percy Mac Lean que tildaron la regulación procesal contenida en el mismo como presta a las maniobras dilatorias, con especial falencia en las notificaciones y los cuidados de los expedientes. No obstante es preciso señalar que ambos autores realizaron la crítica de este cuerpo normativo muchos años después de que el mismo fuera derogado e incluso, en el caso de Mac Lean, junto a las críticas va un reconocimiento expreso de su valía dentro de lo que fue la legislación procesal<sup>60</sup>.

Entre sus contemporáneos, más que críticas, el Código de Enjuiciamiento sirvió como herramienta de análisis. En efecto, este código fue objeto de varios trabajos constituidos principalmente por comentarios y manuales. Debemos tener presente que en aquellos años – mediados del siglo XIX – el derecho científico como tal todavía no existía en nuestro país toda vez que su aparición se daría recién en las primeras décadas del siglo XX a pesar que, según Basadre Grohmann, a través de la aparición del periódico “*La Gaceta Judicial*” en 1874 aumentó sensiblemente la circulación y el número de artículos jurídicos<sup>61</sup>. Sin embargo, trabajos como los de Juan Oviedo<sup>62</sup> y posteriormente Hilario Liendo<sup>63</sup> son un claro ejemplo de las obras que glosaban y analizaban exegéticamente dicho cuerpo normativo e incluso introducían en sus

<sup>60</sup> BASADRE AYULO, Jorge. *Las codificaciones en la historia del derecho peruano*. Lima: Cultural Cuzco, septiembre del 2003. Página 120.

<sup>61</sup> BASADRE GROHMAN, Jorge. *Historia del Derecho Peruano*. Segunda Edición. Lima: 1984. página 45.

<sup>62</sup> OVIEDO, Juan. *Práctica forense peruana arreglada a nuestra legislación*. Lima: Benito Gil, 1871.

<sup>63</sup> LIENDO, Hilario. *Notas al Código de Enjuiciamiento Civil, con un Índice Analítico por Orden Alfabético*. Lima: Imprenta y Librería de Benito Gil, 1886.

comentarios, razonamientos y análisis, diversas referencias a la jurisprudencia de la Corte Suprema ejercida en notables sentencias de aquellos años. Ese auxilio a la jurisprudencia fue utilizado desde entonces por parte de estos juristas como una forma de fortalecer y apoyar sus comentarios y análisis sobre lo regulado en el Código. A los ya nombrados debemos sumar además las obras de Manuel Atanasio Fuentes, José Silva Santisteban, Román Alzamora y Francisco García Calderón que, en sus diversos escritos, hicieron constantes referencias al Código de Enjuiciamientos. Estaríamos, pues, ante los primeros pasos que el derecho procesal, en tanto disciplina, daba en nuestro país.

Precisamente, la opinión de García Calderón respecto al Código es positiva cuando afirma que *“ha cambiado en mucho el orden que antiguamente se observaba en los procedimientos judiciales. Sobre todo ha establecido reglas para los casos en que antes no había más que opiniones”*<sup>64</sup>.

Actualmente, al comentarlo, José Francisco Gálvez identifica que esta norma tenía una influencia de la legislación francesa a la que *“se sumó la indiana, mayormente la Instrucción Política y Práctica Judicial (1766) de Alonso de Villadiego y Vascuñaña, la Curia Philipica (1778) de Juan de Hevia y Bolaños y las partidas (1210)”*<sup>65</sup>.

El Código de Enjuiciamiento Civil consta de 1824 artículos<sup>66</sup> de los cuales 1820 se encuentran divididos en tres libros. Cada libro se encontraba dividido en secciones y estos, a su vez, en títulos. Inclusive algunos pocos títulos que intentan regular varias categorías jurídicas comprenden distintos “capítulos” sin numeración con la finalidad de imprimirle un mayor orden a la compilación. Finalmente, los últimos cuatro artículos del Código corresponden a las “Disposiciones Generales” que no están incluidas en ningún libro en particular.

El libro primero hacía las veces de una “parte general” en la que, ordenando la dispersa legislación precedente, intentaba regular el contenido de la “jurisdicción” y su “distribución” (entendiendo por tal a la competencia) con la respectiva mención a los diversos fueros privativos que estaban reconocidos en esos momentos. También se

<sup>64</sup> GARCÍA CALDERÓN, op. cit., página 458.

<sup>65</sup> GALVEZ, José Francisco. *La historia del derecho en el Perú*. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Inca Gracilazo de la Vega, Agosto del 2008. Página 217

<sup>66</sup> Ley del 29 de diciembre de 1851 – Código de Enjuiciamiento en materia civil (<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1851099.pdf>).

ocupaba del régimen de los jueces, las partes, sus apoderados, los fiscales, los escribanos y los abogados.

Detalles llamativos de la normativa incorporada en este primer libro constituyen la regulación de la recusación de los jueces en la que el juez recusado no abandonaba la causa sino que se veía en la obligación de tener que resolver acompañado de un “cojuez” con quien debía resolver en unanimidad o, de haber discordia, llamando un tercer juez dirimente. Otro detalle llamativo es la suficiente regulación que se realiza respecto de los “jueces árbitros” estableciendo no sólo los requisitos para su nombramiento sino también las normas relativas al “compromiso” (convenio arbitral). Respecto a los escribanos se aprecia la diferenciación en hasta cuatro tipos de escribanos (de cámara, públicos o de instrucción, de estado o de actuación y de diligencias) incluyendo a los que asumirán las funciones de notarios y que son llamados escribanos públicos.

El libro segundo regula los primeros procedimientos de los juicios e incluye las diversas solicitudes y providencias que las partes pueden solicitar antes del inicio de un juicio. Destacan principalmente los procedimientos dirigidos a obtener reconocimientos de documentos, absolución de posiciones, facción de inventarios y exhibición de documentos. Llama poderosamente la atención la regulación de la conciliación extrajudicial como un mecanismo de obligatoria realización previa a la interposición de una demanda. La única diferencia con la institución actualmente vigente es que en el Código de Enjuiciamiento la falta de esta diligencia podía ser subsanada en cualquier momento y no acarreaba la improcedencia de la demanda.

Las secciones II y III de este libro segundo podrían ser reconocidas como un primer intento del legislador peruano de incluir una suerte de desarrollo “procesal”<sup>67</sup> dentro de las normas que regulaban los juicios. En un código como éste que cuenta con diversidad de procedimientos que se diferencian de acuerdo al tipo de acción que se quiere ejercer, son pocos los temas que aparecen regulados con un carácter general aplicable a todos los juicios. La sección II denominada “de las diligencias comunes o que pueden tener lugar en todo juicio” es uno de ellos y en su regulación incluye los procedimientos para cuestionar la competencia, el procedimiento de recusación, la

---

<sup>67</sup> “Procesal” en el sentido de que busca establecer una regulación con sentido general que resulte transversal a todos los juicios, entendiendo a este como una entidad autónoma – proceso – y no como un trámite en particular con una finalidad distinta a los demás.

declaración de insolvencia (que se refiere a la declaración de pobreza para exonerar del pago de tasas y no reviste un sentido comercial), los términos (plazos), la rebeldía, el desistimiento, el abandono y las providencias personales que podían tomarse contra un deudor.

La Sección III constituiría el corazón mismo de la regulación contenida en el Código de Enjuiciamiento ya que regula el proceso ordinario. A lo largo de 400 artículos proyecta un juicio civil (aunque se hacen varias referencias a lo largo de ese articulado que pueden permitir entender que sus disposiciones también podían aplicarse en sede criminal) concebido en abstracto y con un carácter general.

El juicio consta de tres momentos: el primero referido a la interposición de la demanda, la citación del demandado (o reo según la nomenclatura utilizada por el Código) y su contestación incluyendo las diversas excepciones que puede utilizar. Al respecto cabe destacar que el Código reconoce un total de veintisiete excepciones divididas en tres categorías: tres declinatorias (que cuestionan la jurisdicción del juez – competencia-), once dilatorias y trece perentorias.

El segundo momento está referido al término de prueba y presenta nuevamente una regulación moderna estableciendo en un primer título las regulaciones generales para todas las pruebas y, en el siguiente, las peculiaridades de cada uno de los once medios de prueba reconocidos por este cuerpo normativo. Destaca a este respecto el establecimiento de un sistema de prueba tasada que diferencia en efectos una prueba plena (que produce total convencimiento) de una semiplena (una presunción considerable) o una ligera (simple conjetura) así como la fuerza probatoria que podría obtenerse de la combinación entre estas dos últimas.

Finalmente llama la atención la larga regulación que, dentro del título referido a las pruebas en particular, se hace respecto de los “instrumentos” y al procedimiento de prueba. Sobre el primero debemos señalar que el Código presenta una completa regulación de la actividad notarial de los escribanos públicos. Sobre el segundo destaca la posibilidad que tienen las partes de llevarse los autos del despacho para poder preparar las pruebas. El procedimiento incluye un término común para que ambas partes puedan preparar sus probanzas. Terminado ese plazo, se realizan las audiencias de actuación en las que ambas partes presentan las pruebas con que cuentan.

El tercer y último momento del juicio civil está constituido por los alegatos y la conclusión.

La Sección IV del libro segundo marca el final de esta regulación “procesalista” del código e inicia nuevamente una larga identificación de procedimientos diferentes para cada tipo de acción. Así, con el título de “juicios dobles” regula, con sorprendente parecido a la regulación concursal vigente, las figuras del concurso de acreedores ya sea voluntario o necesario y las esperas o quitas (verdaderos mecanismos de reestructuración empresarial), los juicios de cuentas, de residencia y de pesquisa.

En el mismo sentido, la Sección V (“juicios extraordinarios”) incluye la regulación de los juicios ejecutivos, los de ejecución y las tercerías. Se completa la enumeración en la Sección VI dedicada a los “juicios sumarios” que comprende veintiún títulos destinados cada uno a diversas acciones distintas incluyendo temas no contenciosos como la jura de un cargo por parte de un apoderado. Llama la atención la regulación de los juicios verbales reservados para aquellos casos que se tramitan ante juzgados de paz. En este tema puntual se retoma el carácter procesalista y se establece un procedimiento estándar que se tramita de forma verbal con sus tres momentos claramente determinados. La única diferencia que se realiza es respecto a la posibilidad de apelar la sentencia. Los de cuantía minúscula resultan inapelables mientras que los que superen el límite establecido (veinte pesos de la época según el Código) se tramitarán ante los juzgados de primera instancia pero sin abandonar su carácter verbal. Del resto de títulos y procedimientos predeterminados llama la atención especialmente el Título XVII dedicado a regular los procedimientos seguidos ante los jueces árbitros así como los recursos que existen en sede judicial contra lo que ellos resuelven (apelación ante juez y nulidad ante la corte superior).

El último libro regula lo pertinente a las últimas instancias incluyendo en su regulación el recurso de apelación (con sus dos efectos: suspensivo, cuando suspende la jurisdicción del juez inferior, y devolutivo, cuando no la suspende) y el recurso de súplica o, llamado también por el mismo código, “tercera instancia”. Este recurso fue derogado mediante ley del 31 de marzo de 1855<sup>68</sup> precisamente porque se cayó en cuenta que, lejos de ser un recurso extraordinario, se había constituido en una tercera

---

<sup>68</sup> Decreto del 31 de marzo de 1855  
(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1855030.pdf>).



instancia de utilización constante y que, en todo caso, el recurso de nulidad – también regulad en este libro – podría cumplir dicho papel con análoga garantía y sin perder la calidad de extraordinario.

De los últimos cuatro artículos pertenecientes a las “Disposiciones Generales” sólo merece rescatarse el segundo (artículo 1822°) que señala que los tribunales de presas, comisos, comercio y minería continúan regulándose según sus propias leyes.

Para un operador del derecho del siglo XXI, llama poderosamente la atención el hecho de que este Código de Enjuiciamiento Civil, del que nos separa más de ciento cincuenta años, incluye regulados con tanta similitud instituciones procesales que han vuelto a tomar vigencia recientemente. Son especiales los casos referidos a la conciliación extrajudicial, el arbitraje y el derecho concursal cuyo parecido en la regulación de ahora y de entonces intentaría demostrar que el derecho peruano no ha hecho sino retornar a figuras que ya conoció previamente y a encontrarles virtudes que aconsejan su reinclusión en el ordenamiento jurídico. Es cierto que el Código de Procedimientos Civiles de 1912, nacido como producto del despertar del Derecho Procesal a nivel mundial, introdujo una idea de juicio sustancialmente distinta en la que se privilegiaba mucho la forma y el procedimiento pero, tal parece, el cambio de concepción que motivó la derogación de aquel código no ha ocasionado un avance y una creación de nuevas categorías sino, por el contrario, un retorno a clásicas instituciones. Esto demostraría lo que en un inicio dijeron los historiadores del derecho en el sentido que este Código constituye un importante episodio dentro de la historia del derecho procesal peruano, tan importante que incluso nuestra modernidad terminó recogiendo sus institutos.

Más allá de esa reflexión, lo cierto es que al momento de la invasión chilena de la ciudad capital, la práctica forense nacional contaba ya con una norma que tenía más de veinte años de vigencia. Para aquellos años se habían realizado algunas pocas modificaciones al texto originalmente promulgado en 1852. Respecto a estas modificaciones, breves en número, García Calderón las califica como “*más considerables modificaciones que el Civil*” comparando el mismo fenómeno con relación al Código Civil. El mismo jurista enumerara dichas modificaciones como “*la defensa libre, la supresión de la tercera instancia y de los fueros personales, las nuevas disposiciones sobre el recurso de nulidad, el Reglamento de Tribunales y la*

*supresión del Tribunal de los Siete jueces*<sup>69</sup>. En el caso de la supresión de los fueros personales, debemos señalar que esta no se realizó por medio de una ley sino por efecto de la entrada en vigencia de la Constitución de 1856 que los suprimió. Asimismo, a la enumeración hecha por García Calderón añadiríamos que con los decretos de Ramón Castilla de 1854, también se produjo la derogación de los procedimientos especiales referidos a la liberación y al cambio de domino de los esclavos.

No obstante ello, advertimos que en lo que respecta a la regulación central – los juicios ordinarios, los juicios sumarísimos más comunes y los distintos principios que recoge el Código –se mantuvo el mismo sentido. Era pues, el Poder Judicial de la época del inicio de la guerra y antes de las modificaciones que intentó introducir Piérola a partir de diciembre de 1879, un Poder formado por magistrados con experiencia en el manejo de su normativa y con letrados y litigantes competentes en la aplicación dichas leyes y que sabían servirse de las mismas tanto para defender su derecho de la mejor manera como para utilizar maniobras dilatorias que beneficiaran a la estrategia que planteaban para cada caso.

Ello nos lleva a intuir que la situación normal de desarrollo de la Administración de Justicia en esa época debía darse con mucha fluidez más allá de las críticas que recogimos y que darían cuenta, antes como hoy, de una excesiva lentitud en el impulso de los procesos, en la utilización indebida de maniobras dilatorias y de un caso omiso, por parte de jueces y escribanos, de los términos y plazos que este Código establecía.

Inclusive en sus vicios, la regulación procesal de 1852 no parece estar muy alejada de nuestra actualidad.

### **Subcapítulo 6: El Reglamento de Juzgados y Tribunales de la República de 1855**

El Reglamento de Juzgados y Tribunales de la República, expedido en 1855 durante el gobierno del General José Rufino Echenique es, después del Código de Enjuiciamientos Civiles, la segunda norma principal que regulaba la actuación de los órganos judiciales en la época que nos ocupa.

---

<sup>69</sup> GARCÍA CALDERÓN, op. cit., página 458.

No es un equívoco afirmar que este Reglamento de Tribunales es, pues, básicamente un producto del Código de Enjuiciamiento Civil de 1851. En efecto, el inicio de su preparación tuvo que ver directamente con la promulgación del mencionado cuerpo legislativo tal como lo reconoce el decreto emitido el 16 de septiembre de 1853 por el Presidente Echenique<sup>70</sup>. En él se reconoce que la entrada en vigencia del Código de Enjuiciamientos ha hecho que muchas disposiciones tanto del anterior Reglamento de Tribunales de 1845 como de la Ley de Juzgados de Paz de 1839 hayan sido derogadas. Es en ese sentido que se encomendó a la misma comisión que elaboró los proyectos del Código Civil y del Código de Enjuiciamientos la labor de estudiar y proponer un nuevo Reglamento de Tribunales que se encuentre uniformizado con las nuevas leyes dictadas y que modifique un texto como el mencionado Reglamento de 1845 que, según señala García Calderón, era un texto *“sumamente inconexo, y tiene tanta confusión, oscuridad y desorden en sus disposiciones, que los estudiantes de derecho consideraban su aprendizaje como la tarea más penosa a que podían entregarse”*<sup>71</sup>.

La comisión, conformada de acuerdo a la citada ley del 7 de junio de 1851, estaba integrada por dos senadores: José Luis G. Sánchez y Gervasio Álvarez; y cinco diputados: Toribio Ureta, Pedro Gálvez, Teodoro La Rosa, Juan Celestino Caveró y Pedro José Flores. Ellos fueron quienes recibieron el nuevo encargo de presentar, en treinta días, un nuevo Reglamento de Tribunales.

Previsiblemente, el encargo tomó más tiempo que el estipulado. Recién el 16 de noviembre de 1853<sup>72</sup>, el Congreso de la República dispuso que el proyecto sea

<sup>70</sup> Ley del 16 de septiembre de 1853 publicado el 30 de septiembre de 1853 (<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1854027.pdf>).

El Congreso de la República Peruana  
Considerando:

I. Que con la promulgación del Código de Enjuiciamientos Civiles, han quedado derogadas muchas disposiciones del Reglamento de Tribunales.

(...)

Decreta:

Art. 1º.- La Comisión nombrada por la ley de 7 de junio de 1851, procederá al examen y reforma del Reglamento de Tribunales; y así mismo se ocupará de uniformizar la Ley reglamentaria de Jueces de Paz con los códigos vigentes.

<sup>71</sup> GARCÍA CALDERÓN, Francisco. *Diccionario de la Legislación Peruana. Tomo 2*. Lima: Fco. García Calderón, París; Lib. de Laroque: 1879. página 1649.

<sup>72</sup> Decreto del 22 de febrero de 1853

enviado al Gobierno y el 20 de mayo de 1854 el Presidente Echenique dispuso la publicación de esta norma y su entrada en vigencia a partir del 1 de agosto de ese año. Sin embargo esto no sucedió de esa forma.

El estallido de la revolución de 1854 a través de la cual el Mariscal Castilla volvió a llegar a la Presidencia de la República hizo que la entrada en vigencia del Reglamento de Tribunales no siguiera el curso trazado. Ya nuevamente en la presidencia, Castilla emitió un decreto el 14 de febrero de 1855 en el cual señala que el decreto emitido por Echenique carece de valor *“por no haberse verificado en todos los Departamentos de la República y por haberse arbitrariamente reservado el título 5° bajo el pretesto (sic) de someterlo al Congreso, (...)”*<sup>73</sup>. En efecto, la ley del 16 de septiembre de 1853 promulgada por Echenique dispuso la reserva de los artículos correspondientes al Título V del Reglamento que se referían a la figura del “vocal semanero”. Castilla dispuso que todo el texto del Reglamento, incluyendo este Título V, empezaría a regir desde el 19 de abril de 1855.

Según García Calderón, si bien las regulaciones de este Reglamento bien podían haber sido incluidas en el Código de Enjuiciamiento, al tener una finalidad principalmente administrativa y respecto de la cual eran posibles, y hasta previsibles, las modificaciones, era mejor que aquellas se realicen sin impacto alguno en las leyes de procedimientos<sup>74</sup>. Llama la atención la indicación del prestigioso jurista sobre todo en el sentido de que se señala sin sorpresa ni reserva que la organización del Poder Judicial es un tema que puede ser modificado frente a los procedimientos que, por el contrario, revestirían una total idea de continuidad. Resalta el hecho de que, en la actualidad, dicha concepción ha variado diametralmente.

El Reglamento de Tribunales vendría a ser el primer cuerpo normativo promulgado en el Perú que incluiría dentro de su articulado un Título Preliminar compuesto por nueve artículos que reflejaban los principios rectores de la organización judicial, principalmente los principios de la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, la independencia, el recurso de acción popular y la inimpugnabilidad de las resoluciones que declaran fundada una recusación.

---

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1853128.pdf>).

<sup>73</sup> Decreto del 14 de febrero de 1855

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1855012.pdf>)

<sup>74</sup> GARCÍA CALDERÓN, op. cit., página 1649.

Fuera de ese Título Preliminar, el Reglamento consta de 461 artículos divididos en 28 títulos y, una sección adicional que consta a su vez de 110 artículos que comprenden siete títulos y una sección de disposiciones generales.

Los primeros títulos del Reglamento estaban dirigidos a regular el régimen de los principales órganos que conformaban el Poder Judicial. Así, se establecían los requisitos para acceder a la magistratura en determinado nivel (Corte Suprema, Cortes Superiores, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de Paz e incluso Fiscales), las atribuciones de cada uno de ellos y los supuestos en los que se reúnen en Sala Plena. Destaca, de conformidad con el carácter del Código de Enjuiciamientos Civiles en los que durante largos momentos se dejó de lado la vocación uniformizadora y se optó por una legislación descriptiva por cada particular tipo de acción, una larga enumeración de atribuciones descriptivas dependientes de cada tipo de procedimiento que reconoce el derecho.

En el caso de las Cortes Superiores adicionalmente se reguló la extensión territorial sobre la que cada una de ellas ejerce jurisdicción y la diferenciación entre las diversas cortes que se manifestaba en el número de vocales que la componen. Asimismo se incluye la larga enumeración de facultades del Presidente de cada corte y las del vocal semanero, cargo que se turna semanalmente entre todos los vocales de la corte y que se encarga, durante su turno, de realizar las atribuciones personales de la corte (emitir los proveídos de trámite, regular los gastos de la corte, presidir las visitas semanales a las cárceles).

Otros temas regulados por el reglamento incluyen el régimen del personal no jurisdiccional del Poder Judicial conformado por los relatores, escribanos, agentes fiscales, vocales interinos, conjuces, procuradores, y abogados; el régimen de vacaciones y licencias; el régimen de los locales de las cortes y juzgados así como el ceremonial a cumplirse en cada uno de ellos. En este último tema en particular llama la atención la rigurosidad en la regulación sobre las inscripciones en la puerta del local que sirve de sede a los despachos, en el escudo que se debe colocar en el frontis de cada uno de ellos, en la distribución de las salas donde despachan las cortes incluyendo la mención de la tarima sobre la cual – con un fondo de terciopelo carmesí – se debe ubicar el estrado para los vocales. La regulación prosigue estableciendo las fórmulas de juramento, el régimen de los porteros de corte y alguaciles de juzgado y



las elecciones para elegir a los presidentes de cada corte. El título 27 regulaba también el tratamiento debido a cada magistrado y el vestuario y distintivos que cada uno de ellos debía llevar consistente en un uniforme compuesto por un frac bordado de ramos alternados de encina y oliva. Las diferencias en jerarquía se reflejaban, cual vestuario militar, en el ancho de los bordados y el color de la cinta. Este último distintivo se mantiene hasta la actualidad en los mismos términos (rojiblanca para los vocales supremos, roja para los vocales superiores y blanca para los jueces).

Ya referidos al tema jurisdiccional y al propio quehacer de los órganos, el Título 15 regula lo concerniente a la apertura del despacho judicial el día 7 de enero y el orden y prioridad en que se deben recibir y resolver las causas así como el procedimiento que las salas deben respetar al actuar como segunda instancia. El título 18 establece la visita semanal a las cárceles, lo que constituyó una innovación dentro del derecho peruano y que respondió al interés por la modernización penitenciaria que estaba en vigencia durante aquellos años<sup>75</sup>. Finalmente, el Título 28 regulaba lo concerniente a los juzgados y tribunales privativos.

La Sección Adicional estuvo dirigida a establecer disposiciones para ser aplicadas en los juicios criminales sirviendo como un “código abreviado de juicios criminales” y el antecedente directo e inmediato del Código de Enjuiciamiento Penal de 1863. Como no podía ser de otra manera, constituía un primer intento de uniformización de los distintos procedimientos penales que se venía aplicando en el país. Así, en su primera sección denominada “Disposiciones Generales” incluyó diversos principios de corte garantista aunque propios de un sistema inquisitivo y que proscribían, entre otras cosas, todo tipo de abuso sobre los reos así como torturas o detenciones indebidas.

Los siete títulos siguientes regulaban el juicio criminal, estableciendo la diferenciación existente en aquella época entre todos los demás delitos y los delitos de hurto, robo u homicidio que contaban con una sustanciación distinta. Tal como señala García Calderón, estos delitos eran los llamados “delitos exceptuados” y dicho nombre se les dio porque, precisamente,

*“... no estaban sujetos al procedimiento general de los juicios criminales, sino al juzgamiento de oficio. En la actualidad el juicio criminal de oficio se sigue por todos los delitos, con intervención del ministerio público; y de esta generalidad*

---

<sup>75</sup> BASADRE AYULO, op cit., página 141.

*se exceptúan los delitos contra la honestidad y el honor, los hurtos domésticos y los maltratamientos o lesiones leves, para los cuales hay un procedimiento especial que principió la querrela de la parte agraviada. Así es que ahora las palabras delitos exceptuados significan una cosa muy distinta de la que antes designaban, y el juicio de oficio se ha extendido a mayor número de casos.<sup>76</sup>*

Asimismo, tal como aclara García Calderón, antes de la entrada en vigencia del Código de Enjuiciamiento en materia Criminal, la mayoría de procesos penales no se seguían de oficio y esa era la razón por la que este “código abreviado de juicios criminales” establecía el procedimiento especial para los delitos exceptuados. Con la entrada en vigencia del Código de Enjuiciamiento en materia Criminal se produciría el cambio que menciona García Calderón.

Adicionalmente a dichos “delitos exceptuados” se establecían procedimientos especiales para los delitos cometidos por eclesiásticos y militares. Recordemos que, a la fecha de expedición de este reglamento, el texto constitucional vigente era la Constitución de 1839 que aún reconocía la existencia de fueros personales.

Referido a lo que es en sí el juicio criminal, el Reglamento señalaba que el procedimiento ordinario contaba con dos etapas: un sumario y un juicio dirigidos ambos por un juez de primera instancia y sobre lo resuelto por éste procedía un recurso de apelación.

El Título 2 regulaba el régimen de la participación de los testigos en el juicio criminal. El Título 3 regulaba el procedimiento especial para los delitos exceptuados (hurto, robo u homicidio) en los que participaban directamente los fiscales y eran perseguidos de oficio. Finalmente los títulos 4 y 5 establecían los trámites previos al juicio para los delitos cometidos por miembros del clero y militares respectivamente. En estos casos no se regulaba el juzgamiento en sus propios fueros sino más bien el procedimiento por el cual se solicitaba la sustracción del reo de dicho fuero privativo y el pase a ser juzgado en el fuero ordinario. El Título 6 establecía el régimen de los juicios criminales que se seguirían ante la Corte Suprema o el Tribunal de los Siete Jueces y el último Título, el séptimo, regulaba la posibilidad gubernativa de conmutar la pena capital por la de presidio o destierro.

---

<sup>76</sup> GARCÍA CALDERÓN, op. cit., página 1198.

Como puede apreciarse, con excepción de esta Sección Adicional, el Reglamento por su contenido es equiparable a la moderna Ley Orgánica del Poder Judicial de la que, en realidad, constituye uno de sus antecedentes. En efecto, este Reglamento de Tribunales de 1855 fue derogado por la Ley N° 1510 – Ley Orgánica del Poder Judicial – promulgada en 1911 durante el primer gobierno de Augusto B. Leguía.

Con relación a su antecesor, el Reglamento de 1845, destaca claramente la influencia del Código de Enjuiciamiento Civil en el sentido que este nuevo Reglamento intenta dar una visión más orgánica del Poder Judicial a la par que regula temas que el anterior no mencionaba como los relativos a los funcionarios no jurisdiccionales. Sin embargo, algunos temas de su regulación no tuvieron mucha suerte como es el caso del Tribunal de los Siete Jueces que, tras no ser reconocido por la Constitución de 1856, fue desaparecido por la Convención Nacional de ese año. Misma suerte siguió su regulación respecto a las vacaciones judiciales que fue modificada en 1874. A pesar de ello, tal como señala García Calderón, este reglamento “*es bajo todos aspectos preferible al anterior; ya por el orden con que se han redactado sus disposiciones, ya también porque ha reemplazado en parte a las leyes de Indias sobre la materia*”<sup>77</sup>.

Ello implica que, a la fecha de la Ocupación Chilena de Lima, el Poder Judicial contaba con un Reglamento de Tribunales que regulaba de forma exhaustiva e integral el funcionamiento del Poder Judicial en todos sus niveles y que contaba con casi quince años de aplicación. Asimismo es menester mencionar que, a diferencia del Código de Enjuiciamientos Civiles, los Reglamentos de Tribunales recibieron un reconocimiento expreso sobre la continuidad de su vigencia cuando Nicolás de Piérola tomó el poder y emitió su Estatuto Provisional que suspendió la vigencia de la Constitución de 1860.

### **Subcapítulo 7: El Reglamento de Jueces de Paz de 1855**

El 20 de mayo de 1854, junto con la ley que sancionó el Reglamento de Juzgados y Tribunales de la República se publicó el Reglamento de Jueces de Paz<sup>78</sup>, obra también de la misma comisión. Esta comisión resulta ser, de esa manera, la que intervino directamente en los principales cuerpos normativos que regularon la

<sup>77</sup> GARCÍA CALDERON, op. cit., página 1650

<sup>78</sup> Ley que aprueba el Reglamento de los jueces de paz del 20 de mayo de 1854 (<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1854028.pdf>).

Administración de Justicia en la segunda mitad del siglo XIX y su activa participación contrasta tremendamente con la casi total ausencia de la Corte Suprema en este procedimiento legislativo.

Esta norma de 120 artículos divididos en cinco títulos, cumplió una función complementaria tanto del Código de Enjuiciamientos como del Reglamento de Tribunales en tanto regula la organización judicial en lo respectivo a los jueces de paz así como los procedimientos que se siguen ante estos órganos jurisdiccionales de primera línea.

Encontramos una regulación relativa a la distribución de juzgados de paz en todas las localidades del país incluyendo el número de los mismos que deben existir en cada ciudad diferenciándolas por el número de sus habitantes y su condición de capital de departamento o provincia, si es que ese fuera el supuesto. También referidos a la organización judicial están los artículos del primer título que regulan la elección de los jueces de paz por parte de las municipalidades (del texto de la ley se entiende que las provinciales) y debiendo éstas señalar los distritos en que cada juez deba desempeñar sus funciones.

A partir del Título Segundo, el Reglamento se constituye en una norma que prácticamente reproduce lo ya establecido en el Código de Enjuiciamiento Civil destacándose su regulación en un sentido “general” y no recopilando diversos trámites que dependan de la acción que se ejerza. Se regulan nuevamente las recusaciones, la conciliación, los juicios verbales contemplando con especial cuidado la rebeldía y la comparecencia de las partes. Se destaca por momentos la sensación de que esta norma constituiría, más que una copia o un desarrollo novedoso, una adecuación de lo ya regulado a las peculiaridades que posee la justicia de paz.

En efecto, no se encuentra en esta ley referencia a una institución nueva que no hubiese sido regulada en el Código. Así, por ejemplo, lo correspondiente al procedimiento de recusación es prácticamente fiel a lo regulado por el Código de Enjuiciamiento Civil con la única salvedad que la regulación establecida en éste está pensada para ser llevada adelante a través de juicios escritos y, toda vez que la justicia de paz está dispuesta para ser llevada mediante juicios verbales, resultaba necesaria una adecuación. Es más, en el preciso ejemplo de la regulación de los

juicios verbales destaca que el articulado contenido en este Reglamento adecua e incluye un pequeño desarrollo a la regulación primigenia incluida en el Código.

Es decir, la conclusión clara es que este Reglamento, a diferencia de los demás cuerpos normativos, no introduce un nuevo enfoque o nuevos institutos ni regula un tema sobre el que anteriormente existiera un vacío. Se convierte así en la norma más peculiar de todas las que incluimos en esta recapitulación.

La respuesta a la pregunta de por qué se decidió tratar en una ley separada la regulación especial de la justicia de paz y no se incluyó ésta en el Reglamento de Tribunales, que pasó a no mencionar a la justicia de paz en ningún momento, o en el mismo Código de Enjuiciamientos Civiles del que copia tantas regulaciones nos la ofrece García Calderón. Al desarrollar la voz “Reglamento de Jueces de Paz” en su “Diccionario de la Legislación Peruana”, nos ofrece una explicación contundente y es que,

*“A pesar de que las disposiciones del Código son bastantes para el enjuiciamiento de los pleitos que se siguen en los juzgados de paz, la experiencia ha hecho sentir la necesidad de que esas mismas disposiciones se consignen en un Código especial, al que impropriamente se ha dado el nombre de Reglamento. Solamente los abogados y las personas versadas en el estudio de las leyes, pueden encontrar los artículos que necesitan, especialmente cuando están diseminados en varios títulos; y como los que litigan en los juzgados de paz, y los jueces mismos no son en la mayor parte letrados, es menester hacer en beneficio de ellos una ley especial, en que se halle todo lo relativo a la materia, a fin de que pueda ser conocida y aplicada sin dificultad”<sup>79</sup>*

En efecto, esta dificultad de los jueces de paz, que usualmente no eran letrados, para poder entender y trabajar con el derecho codificado no resultaba una apreciación parcial o única de García Calderón sino un problema de base real. En ese mismo tenor se pronuncia Manuel Atanasio Fuentes en el texto introductorio de su “Formulario para jueces de paz del Perú”<sup>80</sup> de 1877 que presentó como un intento de facilitar la labor de dichos magistrados. Igual iniciativa tuvo Hipólito Sánchez en 1863 a través de su “Práctica y formulario de procedimientos en materia civil y criminal para los Jueces de

<sup>79</sup> GARCÍA CALDERÓN, op. cit., página 1649

<sup>80</sup> FUENTES, Manuel Atanasio. *Formulario para los jueces de paz del Perú*. Lima, 1877. Páginas iii-v.



Paz, con arreglo a los códigos civiles y penales, reglamento de tribunales y demás leyes del caso”<sup>81</sup>.

### **Subcapítulo 8: El Código de Enjuiciamiento en Materia Criminal de 1863**

Tras la abrogación de los códigos “Santa Cruz”, la regulación de la materia criminal también sufrió un gran vacío durante el cual se tuvo, nuevamente, que recurrir a la regulación virreinal en un primer momento y a la legislación española después mediante la aplicación del Código Penal español de 1848. En 1853<sup>82</sup>, dentro de esta gran corriente codificadora que vivió la República, el Congreso dispuso la instauración de una comisión redactora del proyecto del código penal. Esta comisión estuvo formada por los senadores Gervasio Álvarez, Pablo Cárdenas y Santiago Távara así como por los diputados Carlos Pacheco, Mariano Gómez Farfán, Manuel Toribio Ureta, Ignacio Noboa y Gregorio Galdós. En medio de este esfuerzo, en 1856, la Convención Nacional convocada por Ramón Castilla decidió crear una nueva comisión destinada a redactar un Código de Enjuiciamiento Penal. Esta comisión, debido en gran parte a los azarosos hechos políticos que vivimos entre 1856 y 1860, recién terminó su encargo en 1861. En ella sólo se mantuvieron los señores Ignacio Noboa y Santiago Távara de entre los ocho miembros de la primera comisión. Los nuevos miembros fueron los señores José Simeón Tejada, José Gálvez y Tomás Lama.

El Congreso de 1861, aún bajo el gobierno del Mariscal Castilla, nombró una tercera comisión revisora que se encargó de verificar que tanto el Código Penal – presentado por su comisión redactora en 1857 – como este Código de Ejecución en materia Criminal se encontrasen de acuerdo con la Constitución de 1860. Esta comisión estuvo constituida por los senadores Manuel Macedo, José Silva Santisteban y Juan Lizárraga así como los diputados José María Pérez, Epifanio Serpa, Isaac Suero y Evaristo Gómez Sánchez.

Para entender esta sucesión de comisiones no podemos ignorar el hecho de que, jurídicamente hablando, en esos últimos cinco años (de 1855 a 1860) se vivió una época de profundas transformaciones jurídico-políticas reflejadas en el paso desde la

---

<sup>81</sup> SANCHEZ, Hipólito. *Práctica y formulario de procedimientos en materia civil y criminal para los Jueces de Paz, con arreglo a los códigos civiles y penales, reglamento de tribunales y demás leyes del caso*. Arequipa: Pascual Miranda, 1863.

<sup>82</sup> Ley del 26 de septiembre de 1853  
(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1853087.pdf>)

conservadora Constitución de 1839 hacia la moderada Constitución de 1860 y la centelleante participación del texto de 1856. Esos cambios de concepciones políticas dentro del manejo del país motivaron no sólo la demora en la aprobación de estos textos sino, también, el hecho de que cada nuevo Congreso quiera vigilar que los textos que apruebe no llevasen en ellos rezagos de la anterior posición política que no resultaban en concordancia con los principios que en ese momento enarbolaban.

Lo cierto es que en 1861 la comisión revisora culminó su trabajo y dio el visto bueno tanto para el Código Penal como para el de Enjuiciamiento en materia Criminal. El proyecto definitivo fue sancionado mediante Ley del Congreso del 1 de octubre de 1862 que dispuso su entrada en vigencia el 01 de enero del año siguiente<sup>83</sup>. Esta fecha fue modificada mediante Resolución Legislativa del 17 de enero de 1863<sup>84</sup> debido a problemas con la edición de dichos códigos. La fecha definitiva de entrada en vigencia se fijó para el día 1 de marzo.

A pesar de estos vaivenes y demoras, según rescata Basadre Ayulo, el Código Penal Peruano terminó constituyéndose el primer código penal hecho y escrito en el subcontinente<sup>85</sup> producto de la labor de tres comisiones del Legislativo desplegada durante doce años.

El Código de Enjuiciamiento en Materia Criminal, que contaba con una influencia claramente española pues se reconocían varios elementos ya establecidos en el Reglamento Provisional para la Administración de Justicia de 1835 de España, se dividió en tres libros. El primero, similar al libro análogo de su par de naturaleza civil, reguló la jurisdicción, el régimen de los jueces y de las otras personas que intervienen en los juicios. El segundo libro regula la diligencia del juicio criminal y el último, la sustanciación de los juicios estableciendo el devenir de todos los actos e instancias así como los recursos a que había lugar.

El juicio penal regulado por este código se dividía en dos partes. En primer lugar un “sumario” (que podríamos identificar con la instrucción dentro del actual proceso ordinario) en la que se realizaban las pesquisas conducentes a la determinación

---

<sup>83</sup> Ley del 01 de octubre de 1862

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1862012.pdf>).

<sup>84</sup> Resolución Legislativa del 17 de enero de 1863

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1863002.pdf>)

<sup>85</sup> BASADRE AYULO, op. cit., página 124.

exacta del hecho delictivo así como la identidad del autor del mismo. En segundo lugar se realizaba un “plenario” (que podríamos identificar con la etapa del juicio dentro del actual proceso ordinario) en el que, con base a las conclusiones obtenidas en el sumario, se procede a juzgar la inocencia o culpabilidad del acusado y, dependiendo del resultado, condenarlo o absolverlo.

Asimismo, contra lo resuelto se establecían los recursos de apelación, revisión, consulta, queja y nulidad<sup>86</sup>.

Este proceso marcó la vigencia del sistema inquisitivo en el que se otorgaba una preponderancia a la figura del juez que tenía a su cargo tanto el sumario como el plenario. En efecto, la participación del reo correspondía más a la de un “objeto” del juicio que a un real partícipe del mismo. La disposición de que se mantenga la detención del sujeto durante la etapa del sumario establece un claro ejemplo de la concepción que marcó este sistema penal. La investigación que realizaba el juez era reservada y secreta y en ella se recopilaban y practicaban las pruebas conducentes a determinar tanto la comisión del hecho delictivo como la identidad del autor del mismo. El plenario sí tenía carácter público y era el único momento en el que el reo podía contar con el asesoramiento de un abogado. Finalmente se introdujo la variación respecto al ejercicio de la acción penal haciendo que la mayoría de los delitos puedan ser perseguibles de oficio en vez de sólo los antiguos “delitos exceptuados” (robo, hurto y homicidio).

Inclusive la actuación de los fiscales era reducida, siendo que el verdadero peso de la actuación procesal recaía en el juez. Finalmente, a diferencia de su par civil que sí aceptaba la oralidad en algunos casos, el Código de Enjuiciamientos en materia Criminal estableció la obligatoriedad de lo escrito a través de un sistema de actas y constancias que reflejarían, en última instancia, todo lo actuado durante el juicio y servirían como base para la condena o absolución del reo durante el plenario.

Adicionalmente, se encuentran algunas concordancias con lo que era el juicio civil según el Código de Enjuiciamientos Civiles que llevaba ya 10 años de vigencia. Un ejemplo de ello es el establecimiento de la prueba tasada.

---

<sup>86</sup> Respecto a estos recursos, la Ley del Congreso de la República del 21 de diciembre de 1878 (<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1878015.pdf>) estableció algunas disposiciones adicionales.

Basadre Ayulo rescata varias críticas a este Código señalando que:

*“... tuvo muchos defectos en la forma y la ambigüedad en la redacción de algunos artículos. No hizo referencia a los delitos de imprenta ni a la forma de juzgarlos. El jurado no fue suprimido para estos casos dándose la curiosidad de con el proceso penal vigente a partir del año 1863, quedaba vigente una parte del antiguo sistema primitivo.*

*Dentro de este sistema jurídico procesal con pruebas que podían ser materiales, testimoniales, instrumentales, orales y conjeturales, (...), resultó muy difícil comprobar la inocencia o la culpabilidad del acusado”<sup>87</sup>.*

Altmann Smythe, por su parte, es mucho más severo con este texto al señalar que:

*“El Código de Enjuiciamientos en materia penal de 1863 tuvo numerosos vacíos y errores, entre los cuales merecen destacarse los siguientes: a).- La defensa del acusado era, en la mayoría de los casos, tardía; b).- Dio una importancia considerable a la prueba testimonial; c).-la motivación de la sentencia por parte del juez “implicaba – como indica ZAVALA LOAYZA – una operación aritmética, sumas y restas de quebrados y de enteros”; ch).- Las instancias superiores no venían a salvar errores sustanciales, sino simplemente algunos de carácter secundario; etc.; etc.”<sup>88</sup>*

A pesar que la intención de este Código era incluir en sí mismo la totalidad de la regulación del juicio criminal, se debe tener presente que el Reglamento de Tribunales contenía mucha regulación aplicable a estos juicios. En efecto, García Calderón señala

*“El reglamento de tribunales no se ocupa de la tramitación de los juicios criminales, sino el orden de los tribunales, del despacho de las causas, de las cárceles, de las obligaciones que los jueces y magistrados tienen para toda clase de pleitos; y como estos asunto son enteramente independientes de la tramitación de los juicios (...), se deduce que el reglamento de tribunales no ha sido derogado por el Código. (...).*

*Todo lo que la sección adicional (del Reglamento de Juzgados y Tribunales de 1855) contiene en cuanto a la tramitación de los juicios, ha quedado insubsistente porque de esto se ocupa el Código penal de enjuiciamientos; (...) pero otras se ocupan de asuntos independientes de la sustanciación, y que se refieren a la prontitud del despacho (...). Como el Código Penal no trata de esta materia, por que como hemos dicho, se contrae exclusivamente a la sustanciación de los juicios; esas disposiciones reglamentarias no están*

<sup>87</sup> BASADRE AYULO, op. cit., página 147.

<sup>88</sup> ALTMANN SMYTHE, Julio. *Reseña histórica de la evolución del derecho penal*. Lima: Sanmartí, 1944. Página 239.

*derogadas. Por esto decimos que la sección adicional no está derogada en su totalidad”<sup>89</sup>.*

Este sistema inquisitivo, concebido desde 1855 con la expedición de la Sección Adicional del Reglamento de Juzgados y Tribunales de la República y consagrado definitivamente en el Código de Enjuiciamiento en Materia Criminal fue el que reguló los juicios de esa materia que se llevaban adelante a la fecha de la ocupación chilena de Lima.

### **Subcapítulo 9: Normas modificatorias expedidas hasta 1879.**

La entrada en vigencia del Código de Enjuiciamiento en materia Criminal marcó, en lo que respecta a las materias que estaban directamente vinculadas a la jurisdicción ordinaria, el punto final del proceso de codificación que se inició en 1845. Estamos, entonces, ante un proceso de dieciocho años durante los cuales se logró pasar del derecho recopilado que nos regulaba en el momento en que se promulgó la Constitución de 1839, hasta la existencia de varios códigos que lograron cumplir con la necesidad que la sociedad había advertido luego de la derogación de los códigos “Santa Cruz”, a saber: contar con una normatividad que, con carácter general, pueda presentar de manera sistemática y ordenada todo el derecho aplicable.

Sin embargo, sería erróneo pensar que con la promulgación de los códigos se puso punto final a la labor legislativa que, sobre estos mismos temas, realizó el Estado Peruano. Por el contrario, si bien no en el número y el ritmo actual, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo del siglo XIX fueron prolíficos en la expedición de normas siendo que éstas no siempre respondieron a una visión a largo plazo ni respetaban las ideas de sistema que se habían defendido en el proceso codificador.

Nos interesan, entonces, las normas que regularon dos temas en particular: la organización del Poder Judicial y las formas y procedimientos judiciales desde que se emitieron los primeros códigos, que en este caso son el Civil y el de Enjuiciamientos publicados en 1851 y vigentes desde 1852, hasta la toma del poder por parte de Nicolás de Piérola.

---

<sup>89</sup> GARCÍA CALDERON, op. cit., página 1650.



Marcamos como fecha inicial de este corte la entrada en vigencia de los primeros códigos debido a que nuestro interés es respecto de normas que pudieron modificar el panorama creado por ellos y la lógica jurídica señala que una norma sólo puede ser modificada luego de haber entrado en vigencia. Por otro lado, el momento establecido como punto final de este intervalo histórico responde a que, tal como lo veremos en el siguiente subcapítulo, es un hito que marca el inicio de una etapa distinta dentro del devenir histórico del Poder Judicial y la Administración de Justicia.

Evidentemente, atendiendo al carácter de nuestra investigación, tendremos que discriminar también las normas que, si bien relacionadas al Poder Judicial y a la Administración de Justicia, estén dirigidas a otras localidades distintas de la ciudad capital.

De entre todas las normas que, según el Archivo Digital de la Legislación en el Perú del Congreso de la República<sup>90</sup>, se han promulgado desde la fecha de entrada en vigencia del Código Civil y del Código de Enjuiciamiento Civil (28 de julio de 1852) hasta la toma del poder por parte de Piérola hemos identificado un total de 115 normas con rango de ley (entre leyes del congreso, decretos y resoluciones legislativas) referidas al Poder Judicial y a la Administración de Justicia en la ciudad de Lima<sup>91</sup>. No obstante ello, debemos señalar que en los meses anteriores comprendidos desde la publicación del texto del Código de Enjuiciamientos Civil (29 de diciembre de 1851) hasta su entrada en vigencia no existieron normas de rango legal que se hayan pronunciado respecto a ese tema.

Hemos decidido dividir las en tres periodos históricos marcados por la entrada en vigencia de cada una de los principales códigos promulgados en este tiempo. De esa manera podremos observar con mejor detalle los efectos que estas normas tuvieron en el ordenamiento ya promulgado y evitamos que nuestro análisis se vea desbordado ante la copiosidad de los datos que se deben manejar.

---

<sup>90</sup> <http://www.congreso.gob.pe/ntley/default.asp>

<sup>91</sup> Evidentemente, entre estas normas no contamos a los códigos a pesar de que, según la teoría del derecho, también tuvieron un rango de ley.

a. Primer periodo histórico. Del Código de Enjuiciamientos Civiles al Reglamento de Juzgados y Tribunales.

De las 116 normas mencionadas, las primeras 17 fueron publicadas antes de que entren en vigencia los Reglamentos de Tribunales y de Juzgados de Paz. Es decir, en el periodo histórico que va desde el 28 de julio de 1852 hasta el 18 de abril de 1855. De aquellas 18 sólo una norma estuvo referida a modificar un tema que había sido regulado en el Código de Enjuiciamientos Civiles y es el decreto expedido el 31 de marzo de 1855 que dispuso la supresión del recurso de súplica o tercera instancia<sup>92</sup> al que ya nos referimos anteriormente en el capítulo referido al Código de Enjuiciamiento Civil.

Adicionalmente podemos rescatar tres normas: la ley del 23 de noviembre de 1853<sup>93</sup> y los decretos del 14<sup>94</sup> y del 22 de febrero de 1855<sup>95</sup> que fueron normas preparatorias para la publicación de los Reglamentos de Juzgados y Tribunales y el Reglamento de Jueces de Paz pero que, sin embargo, no contuvieron ninguna regulación que modifique sustantivamente el esquema de Administración de Justicia ya establecido hasta ese momento.

De las 13 normas restantes, sólo una es una norma referida a un tema individual que, en este caso en particular, está referido a una orden que se le hace al “gobierno eclesiástico” para que dé cumplimiento a una orden emitida por la Corte Suprema en un caso promovido por los religiosos del Convento de San Francisco para que se realice una nueva elección capitular de prelado de dicho convento<sup>96</sup>.

Las restantes 13 normas están referidas a temas de carácter “administrativos” entre los que destacan principalmente las normas referidas al establecimiento de los juzgados de paz y los decretos emitidos el 31 de marzo de 1855 a través de los cuales

---

<sup>92</sup> Decreto del 31 de marzo de 1855

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1855030.pdf>).

<sup>93</sup> Ley del 23 de noviembre de 1853

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1853128.pdf>).

<sup>94</sup> Decreto del 14 de febrero de 1855

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1855012.pdf>).

<sup>95</sup> Decreto del 22 de febrero de 1855

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1855016.pdf>).

<sup>96</sup> Decreto del 14 de octubre de 1854

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1854070.pdf>).

se organiza los tribunales y juzgados de la República<sup>97</sup> y en la otra se nombra al personal de todos los tribunales y juzgados mencionados<sup>98</sup>.

Estas dos normas resultan especialmente interesantes por cuanto establecen, en el primer caso, el número, extensión territorial y conformación de la Corte Suprema y cada una de las seis cortes superiores así como el número de jueces que deberá haber en cada uno de ellos. En el caso de Lima, que es el que nos ocupa, este decreto dispuso la existencia de la Corte Suprema conformada por cinco vocales y un fiscal; la Corte Superior conformada por siete vocales y un fiscal; así como cuatro jueces y dos agentes fiscales con competencia para las provincias de Lima, Canta y Yauyos. De esta norma, también, podemos entender que el Distrito Judicial de Lima incluía los territorios de los actuales departamentos de Ancash, Huánuco, Junín y Pasco así como la provincia constitucional del Callao.

En el segundo caso, se puede apreciar los nombres de las personas que fueron nombradas para ocupar los puestos jurisdiccionales en el recién organizado Poder Judicial. Debemos señalar, asimismo, que este Decreto fue expedido por Ramón Castilla en marzo de 1855. Es decir, estamos ante un acto del Mariscal por medio del cual nombra directamente a las personas que van a ocupar las magistraturas. Excede los propósitos del presente trabajo el determinar si este acto gubernativo tuvo o no algún interés en particular pero deberemos asumir que, estando aún vigente la Constitución de 1839, este acto se hizo en observación de los requisitos establecidos para cada uno de los cargos por la misma Carta Constitucional.

Lo que nos deja menos dudas y nos permite especular un poco es el hecho de que las personas nombradas debieron ser personas en cierto modo adictas al Mariscal. Ello sobretodo tomando en cuenta que, según lo dispuesto por la Constitución de 1839, la decisión del Presidente era preponderante al momento de nombrar a los jueces y vocales.

---

<sup>97</sup> Decreto del 31 de marzo de 1855

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1855028.pdf>)

<sup>98</sup> Decreto del 31 de marzo de 1855

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1855029.pdf>)

b. Segundo periodo histórico. Del Reglamento de Juzgados y Tribunales al Código de Enjuiciamiento en materia Criminal.

Un segundo periodo histórico dentro de esta recapitulación es el que se dio entre el 19 de abril de 1855 (fecha de entrada en vigencia del Reglamento de Juzgados y Tribunales y del Reglamento de Juzgados de Paz) y el 01 de marzo de 1963 (fecha de entrada en vigencia del Código de Enjuiciamiento en materia Criminal).

Durante ese lapso se promulgaron 34 normas de las 115 inicialmente identificadas. Nuevamente sólo una norma estuvo referida a realizar una modificación sustantiva en uno de los cuerpos normativos promulgados dentro del proceso codificador. Nos referimos a la Ley del 04 de febrero de 1863<sup>99</sup> que establece disposiciones especiales para la aplicación del artículo 222° del Reglamento de Juzgados y Tribunales. El referido artículo 222° se encontraba dentro de la regulación establecida para los trámites de las apelaciones y contemplaba la necesidad de contar con jueces dirimientes para la expedición de las resoluciones de vista estableciendo un plazo obligatorio que estos jueces debían guardar antes de conocer el caso para que las partes puedan ejercer su derecho a recusarlo<sup>100</sup>. Esta medida, según entiende la norma modificatoria, resultaba *“inútil, gravosa y perjudicial para la pronta administración de justicia”* por lo que restringió su aplicación sólo a casos en los que se vaya a pronunciar *“algún auto resolutivo de gravamen irreparable o una sentencia definitiva”*, dejándolo inaplicable para los autos de mero trámite o aquellos *“que no causen gravamen irreparable”*.

Esta norma resulta especialmente interesante más por su motivación que por su contenido. En efecto, que el legislador se haya detenido a hacer una aclaración de este tenor nos remite a dos realidades que debieron verificarse en aquellas

---

<sup>99</sup> Ley del 04 de febrero de 1863

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1863046.pdf>).

<sup>100</sup> Reglamento de Juzgados y Tribunales (1855)

Título XV

Orden que deben observar en su despacho las cortes y los juzgados

Artículo 222°.- Por regla general, en ningún caso ni en tribunal o juzgado alguno, sea cual fuere su nombre y por privilegiado que se considere, podrán los jueces nuevamente llamados, nombrados o sorteados, ejercer sus funciones en negocio determinado, antes de que hayan pasado tres días, contados desde la fecha en que se notificó a las partes el llamamiento, nombramiento o designación por suerte, o contados desde que se verificaron esos actos, si por alguna causa no hubiese lugar a la notificación previa de los interesados. La contravención a lo dispuesto en este artículo produce nulidad.

circunstancias: (i) el uso indiscriminado de las recusaciones a los jueces dirimientes con la finalidad de dilatar el juicio y, (ii) el abuso de las nulidades que se deducían basándose en el hecho de que el juez dirimente no había cumplido con esperar el plazo establecido en el reglamento.

Esta norma constituye una prueba de que las críticas que se hacían al nuevo ordenamiento en el sentido que daba lugar a demasiadas articulaciones dilatorias por parte de los abogados tenían un asidero en la realidad. Asimismo, estamos ante el remedio que el gobierno ideó, en este caso en específico, para corregir esa situación.

Entre las restantes 33 normas de las citadas en este segundo periodo histórico, se encuentran 11 dedicadas a temas “particulares” o “individuales” como el Decreto del 24 de noviembre de 1855<sup>101</sup> que dispuso que el ex Presidente José Rufino Echenique, sus ministros, sus generales y sus funcionarios quedaban sometidos a juicio por haber *“contribuido a la desorganización de la República y a la ruina de su Hacienda”*.

Las 22 restantes son las normas “administrativas” que se refieren, mayormente, a nombramientos de magistrados y personal del Poder Judicial o que establecen algunas condiciones especiales para dichas personas. Destacan como ejemplos de los mismos el Decreto del 05 de mayo de 1856<sup>102</sup> que dispone que los jueces titulares no pueden ser nombrados árbitros, la escuetísima Ley del 30 de marzo de 1857<sup>103</sup> que, sin mayor fundamentación, crea dos vocalías adicionales en la Corte Suprema, la ley del 17 de abril de 1861<sup>104</sup> que establece disposiciones para el nombramiento de los Jueces de Paz en la que se reincorpora la directa participación de los prefectos y la ley del 07 de enero de 1863<sup>105</sup> que dispone la creación en Lima de una nueva Sala del Crimen compuesta por cinco nuevos vocales y un fiscal.

---

<sup>101</sup> Decreto del 24 de noviembre de 1855  
(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1855102.pdf>).

<sup>102</sup> Decreto del 05 de mayo de 1856  
(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1856031.pdf>).

<sup>103</sup> Ley del 30 de marzo de 1857  
(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1857096.pdf>).

<sup>104</sup> Ley del 17 de abril de 1861  
(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1861077.pdf>).

<sup>105</sup> Ley del 7 de enero de 1863  
(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1863001.pdf>).



c. Tercer periodo histórico. Del Código de Enjuiciamiento en materia Criminal al inicio del gobierno de Nicolás de Piérola.

El último periodo histórico que analizamos es el que comprende desde el 02 de marzo de 1863 (luego de la promulgación del Código de Enjuiciamiento en materia Criminal y punto final del proceso codificador) hasta el 23 de diciembre de 1879 (fecha de inicio de la dictadura de Nicolás de Piérola).

Ese intervalo fue, de los tres que hemos separado en este subcapítulo, el que abarca un mayor número de años (16 en total) y, por esa misma razón, el que presenta mayor número de dispositivos legales publicados. En efecto, entre esas fechas se llegaron a publicar 64 normas con rango de ley referidas al Poder Judicial y a la Administración de Justicia en la ciudad de Lima, de las cuales un total de 16 modifican alguno de los códigos en lo sustancial. Esas normas son las siguientes:

- Decreto del 2 de julio de 1866<sup>106</sup>, que establece disposiciones especiales para los juicios de desahucio. Esta ley fue expedida para cubrir un supuesto vacío legal y es que, tal como señala en su parte considerativa, el juicio de desahucio no estaba regulado de forma especial en el Código de Enjuiciamiento por lo que, en teoría, se le aplicaban las reglas propias del juicio ordinario o, cuando resultase aplicable, las de los juicios extraordinarios de ejecución. Este decreto rompe con la aplicación de las normas generales y establece en 22 artículos un procedimiento especial.
- Decreto del 20 de octubre de 1866<sup>107</sup>, que incorpora modificaciones en la regulación del juicio ejecutivo. La motivación de esta norma radica en el hecho de que los juicios ejecutivos tenían, con la regulación vigente, una sustanciación dispendiosa y que deberían iniciarse con un embargo porque ello constituía una característica principal de estos juicios. Esta ley establece una nueva regulación del juicio ejecutivo en 65 artículos derogando, además, el título primero de la sección quinta del libro segundo del Código de Enjuiciamiento Civil que regulaba dicho procedimiento.

---

<sup>106</sup> Decreto del 2 de julio de 1866

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1866073.pdf>).

<sup>107</sup> Decreto del 20 de octubre de 1866

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1866126.pdf>).

- Decreto del 15 de diciembre 1866<sup>108</sup> que modifica el Reglamento de Juzgados y Tribunales en lo que respecta a las fechas de inicio y final de las vacaciones judiciales estableciéndolas desde el 25 de diciembre hasta el 31 de enero del año siguiente. Adiciona como fechas vacacionales, y en las cuales no corren los términos de los juicios, los días entre el Jueves Santo hasta el Lunes de Pascua.
- Ley del 10 de diciembre de 1870<sup>109</sup> que, estableció el número de votos necesarios para la expedición de sentencias de nulidad por parte de la Corte Suprema disponiendo la expresa derogatoria de las normas que se opongan a estas nuevas reglas.
- Ley del 13 de febrero de 1873<sup>110</sup>, que establece en 60 días el plazo para la interposición de la demanda que señala el artículo 1007° del Código de Enjuiciamiento. Este plazo se refiere al juicio ordinario que debe iniciar todo reclamante que presente contradicción a la sentencia que, dentro del juicio doble de concurso de acreedores, establezca las prioridades para el pago. Como señalamos anteriormente en el subcapítulo referido al Código de Enjuiciamientos Civiles, este cuerpo normativo incluye en su articulado la regulación de un juicio para el sometimiento de un deudor a un concurso voluntario de acreedores y es precisamente en esa sección en la que se realiza esta modificación.
- Ley del 18 de marzo de 1873<sup>111</sup> que establece nuevas disposiciones aplicables para la acción de desahucio y que tácitamente deroga el Decreto del 2 de julio de 1866.
- Ley del 5 de abril de 1873<sup>112</sup> que según su sumilla adiciona al artículo 465° del Código de Enjuiciamientos. Sin embargo existe un error en esta norma toda vez que estas modificaciones debieron referirse al artículo 405°. Ello porque las adiciones hacen referencia a disposiciones aplicables a la recusación con relación a la nueva regulación de la acción de desahucio. El artículo 405<sup>113</sup>

---

<sup>108</sup> Decreto del 15 de diciembre de 1866

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1866142.pqdf>)

<sup>109</sup> Ley del 10 de diciembre de 1870

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1870044.pdf>)

<sup>110</sup> Ley del 13 de febrero de 1873

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1873004.pdf>)

<sup>111</sup> Ley del 18 de marzo de 1873

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1873008.pdf>)

<sup>112</sup> Ley del 5 de abril de 1873

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1873014.pdf>).

<sup>113</sup> Código de Enjuiciamiento Civil (1852).

regula precisamente la recusación mientras que el 465<sup>114</sup> regula los apremios personales que puede expedir un juez.

- Ley del 1 de diciembre de 1874<sup>115</sup> que regula nuevamente las vacaciones de los tribunales y juzgados derogando el decreto del 15 de diciembre de 1866. La nueva regulación, como desarrollaremos con mayor detalle más adelante, establece siete semanas de vacaciones entre febrero y abril. Asimismo dispone la derogación expresa del inciso 1 del artículo 447<sup>116</sup> del Código de

Libro Segundo.

De las primeras instancias de los juicios civiles.

Sección II

De las diligencias comunes o que pueden tener lugar en todo juicio

Título II

Del modo de proceder en las recusaciones

Recusación de los jueces de primera instancia.

Artículo 405°.- El juez a quien se remita el escrito de recusación, mandará recibir el artículo a prueba por el término de ocho días perentorios y con todos cargos, citándose al efecto a las partes, y dándose aviso al juez recusado.

<sup>114</sup> Código de Enjuiciamiento Civil (1852).

Libro Segundo.

De las primeras instancias de los juicios civiles.

Sección II

De las diligencias comunes o que pueden tener lugar en todo juicio

Título IV

De los términos, apremios y rebeldías.

De los apremios

Artículo 465°.- Los apremios son:

1. El apercibimiento;
2. La extracción de autos;
3. La multa;
4. La suspensión;
5. La detención corporal;
6. La guardia;
7. El allanamiento del domicilio.

<sup>115</sup> Ley del 1 de diciembre de 1874

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1874029.pdf>).

<sup>116</sup> Código de Enjuiciamiento Civil (1852).

Libro Segundo.

De las primeras instancias de los juicios civiles.

Sección II

De las diligencias comunes o que pueden tener lugar en todo juicio

Título IV

De los términos, apremios y rebeldías.

Artículo 447°.- Los términos no corren:

1. En los días 28 de julio, 9 de diciembre y en los de clausura de tribunales por pascuas de Navidad y Resurrección;

Enjuiciamientos Civiles que establecía los días en que los términos legales no corrían.

- Leyes del 16 de junio de 1875 que, señalando que no es justo que la minoría de acreedores tengan que someterse contra su voluntad a la decisión que tome la mayoría, establece modificaciones a los “juicios de esperas”<sup>117</sup> que eran, tal como mencionamos anteriormente, juicios por los cuales los deudores podían solicitar la suspensión en el vencimiento de sus obligaciones. Proceso comparable al actual procedimiento concursal en el que se observa la posibilidad de establecer una reestructuración empresarial. La segunda ley de la misma fecha establece que las regulaciones señaladas para el “juicio de esperas” sea también aplicable al “juicio de quitas”<sup>118</sup> que eran juicios por medio del cual los deudores podían solicitar la disminución en los conceptos a pagar por intereses o gastos con la finalidad de poder estar en capacidad de pago. Estas leyes, si bien no derogaron la parte pertinente del Código de Enjuiciamientos, sí introdujeron modificaciones a su aplicación.
- Ley del 16 de octubre de 1878<sup>119</sup> que modificaba el artículo 110° del Reglamento de Juzgados y Tribunales<sup>120</sup> en la parte relativa a los escribanos públicos, el número que debía haber en la ciudad de Lima y la fianza que debían prestar para ejercer sus funciones.
- Ley del 21 de diciembre de 1878<sup>121</sup> que reformaba algunas disposiciones del Código de Enjuiciamientos en Materia Criminal respecto a la regulación de los recursos de apelación y de nulidad.
- Ley del 23 de enero de 1879<sup>122</sup> que deroga la segunda parte del artículo 197° del Código de Enjuiciamiento Civil<sup>123</sup> y libera la obligación de constituir

---

<sup>117</sup> Ley del 16 de junio de 1875

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1875090.pdf>).

<sup>118</sup> Ley del 16 de junio de 1875

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1875091.pdf>).

<sup>119</sup> Ley del 16 de octubre de 1878

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1878048.pdf>).

<sup>120</sup> Reglamento de Juzgados y Tribunales (1855)

## Título XI

### De los escribanos

Artículo 110.- Habrá cuando menos un escribano público y otro de Estado, en cada una de las provincias de la República.

En las capitales de departamento no excederá el número de seis escribanos públicos y seis de Estado.

En Lima, habrá a los más, diez escribanos de cada clase.

<sup>121</sup> Ley del 21 de diciembre de 1878

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1878015.pdf>).

procurador en los casos en que una parte se componga de varios litigantes y, en consecuencia, todos ellos podrán presentar directamente sus escritos.

- Decretos del 20 de febrero de 1879. Ese día se emitieron dos decretos de tenores distintos. El primero de ellos<sup>124</sup> establecía regulaciones adicionales al Reglamento de Juzgados y Tribunales referidos a las visitas semanales a las cárceles ya que, según señala la motivación de dicho decreto, existían vacíos en la regulación contenida en el Reglamento. El segundo decreto<sup>125</sup> contenía disposiciones varias destinadas a “mejorar la administración de justicia” y que incluían indicaciones dirigidas a Correos para el manejo de la correspondencia judicial y la obligación de la Corte Suprema y los tribunales de justicia de remitir al ministerio del ramo copia de las vistas que emitieron los fiscales.
- Ley del 27 de octubre de 1879<sup>126</sup> que, ante algunas dudas respecto del alcance de lo establecido en el Decreto del 23 de enero de 1879 comentado anteriormente, lo aclara estableciendo que los tribunales deben recibir los escritos que los litigantes presenten tanto por ellos mismos como mediante apoderados.

Sin contar estas 16 normas mencionadas, en este tercer periodo histórico existieron 48 normas entre aquellas que se referían a temas “individuales” y a temas “administrativos”. De los primeros identificamos un total de 24 destacándose por su frecuencia aquellas Resoluciones Legislativas que elegían vocales de la Corte

---

<sup>122</sup> Ley del 23 de enero de 1879

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1879037.pdf>).

<sup>123</sup> Código de Enjuiciamiento Civil (1852).

Libro Segundo.

De la jurisdicción: de las personas que la ejercen; y de las que intervienen en su ejercicio.

Sección III

De las personas que intervienen en el ejercicio de la jurisdicción

Título IV

De los apoderados y procuradores.

Artículo 197°.- Las personas que no quieran demandar o defenderse por si mismas ante los juzgados de paz o de primera instancia, pueden nombrar un apoderado, con poder bastante, para que las represente en el juicio.

Los litigantes están obligados a constituir un procurador del número, para los pleitos que tenga n en las cortes.

<sup>124</sup> Decreto del 20 de febrero de 1879

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1879040.pdf>).

<sup>125</sup> Decreto del 20 de febrero de 1879

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1879041.pdf>)

<sup>126</sup> Ley del 27 de octubre de 1879

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1879080.pdf>).



Suprema. Entre las 24 restantes, que son las que tienen carácter administrativo, destacan las siguientes normas:

- Decretos del 21 de septiembre de 1864. Son dos decretos que establecen, el primero<sup>127</sup>, un turno para los jueces de primera instancia cuando existen más de dos juzgados en una misma provincia y, el segundo<sup>128</sup>, estableciendo disposiciones administrativas para las vistas de las causas y los informes orales.
- Decreto del 27 de septiembre de 1865<sup>129</sup> que, luego de la defenestración de Juan Antonio Pezet, señala la vacancia de todos aquellos que todos aquellos puestos del Poder Judicial cuyos encargados suspendieron la administración de justicia y realizaron manifestaciones a favor de Pezet. Esta norma es peculiar debido a su motivación que transmite lo que sería, tal vez, una de las primeras veces que el Poder Judicial o sus funcionarios realizan una manifestación con relación a la vida política del país.
- Decretos del 20 de febrero de 1866. El primero de ellos<sup>130</sup> establece una nueva organización del Poder Judicial señalando que la Corte Suprema se compone de siete vocales y un fiscal que será, además, Jefe del Ministerio Fiscal. Respecto a la Corte Superior de Lima se dispone que cada sala conste sólo de cinco vocales y no de siete para lo cual se extinguirán las dos vocalías menos antiguas. El segundo de ellos<sup>131</sup> establece el Ministerio Fiscal como un antecedente del Ministerio Público y lo ubica como una institución separada e independiente de los juzgados y tribunales.
- Ley del 16 de septiembre de 1867<sup>132</sup> que dispone crear una vocalía adicional en Lima.
- Ley del 3 de febrero de 1877<sup>133</sup> que establece disposiciones administrativas para la Corte Suprema.

---

<sup>127</sup> Decreto del 21 de septiembre de 1864

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1864049.pdf>).

<sup>128</sup> Decreto del 21 de septiembre de 1864

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1864050.pdf>).

<sup>129</sup> Decreto del 27 de septiembre de 1865

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1865071.pdf>).

<sup>130</sup> Decreto del 20 de febrero de 1866

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1866026.pdf>).

<sup>131</sup> Decreto del 20 de febrero de 1866

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1866027.pdf>).

<sup>132</sup> Decreto del 16 de septiembre de 1867

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1867084.pdf>)

- Ley del 22 de septiembre de 1879 que establece una nueva organización de la Corte Suprema por la que ahora se dividirá en dos salas y se compondrá de once vocales, dos fiscales, dos relatores, un secretario de cámara y tres amanuenses.

Tenemos, entonces, que desde 1852 hasta 1879, de todas las normas expedidas referidas al Poder Judicial y la Administración de Justicia, sólo una pequeña fracción equivalente al 15% modificaron los cuerpos normativos emitidos durante el proceso codificador. El grueso de estas modificaciones se dio en el periodo histórico posterior al año 1863. Fuera de éstas normas, una gran mayoría eran de carácter administrativo destacando por su importancia aquellos decretos que modificaron la estructura del Poder Judicial respecto al número de jueces y vocales y aquellos que nombraron a los magistrados y jueces.

#### **Subcapítulo 10: Los decretos expedidos durante la vigencia del Estatuto Provisorio de 1879**

Según el Archivo Digital de la Legislación en el Perú del Congreso de la República desde que Nicolás de Piérola tomó el poder hasta la entrada del ejército invasor a la ciudad de Lima el 17 de enero de 1881, se emitieron 126 normas con rango de ley entre decretos, reglamentos, y resoluciones legislativas. De esa observación se entiende que Piérola gobernó en esos meses a través de decretos ya que estos constituyen la mayoría de las normas que expidió en un total de 118 de las 126 incluidas en el inventario del Archivo Digital. Las resoluciones legislativas sólo fueron cinco y fueron utilizadas exclusivamente para relaciones con la Iglesia Católica. Finalmente, los reglamentos sólo fueron tres y estuvieron referidos a dos temas económicos (la regulación de los agentes de cambio<sup>134</sup> y la contribución sobre la renta<sup>135</sup>) y uno de organización política (Reglamento Orgánico de Municipalidades)<sup>136</sup>.

---

<sup>133</sup> Ley del 3 de febrero de 1877

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1877008.pdf>).

<sup>134</sup> Reglamento del 01 de junio de 1880

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1880102.pdf>).

<sup>135</sup> Reglamento del 08 de mayo de 1880

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1880097.pdf>).

<sup>136</sup> Reglamento del 23 de marzo de 1880

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1880090.pdf>).

El primer decreto expedido por este gobierno tuvo como fecha el 24 de diciembre de 1879 y es el decreto que crea siete Secretarías de Estado para que cumplan las veces de gabinete del Dictador<sup>137</sup>. El último decreto, por su parte, fue expedido exactamente once meses después, el 24 de noviembre de 1880, y regulaba el nombramiento y las obligaciones de los “Apoderados Fiscales”<sup>138139</sup>. Posterior a esta norma sólo se publicó la Resolución Legislativa del 29 de noviembre de 1880 que dispuso la expedición del pase a las bulas por las que se acreditaba al Obispo de Puno<sup>140</sup>. Esta constituiría la última norma de jerarquía legal que fuera emitida antes del ingreso del ejército invasor a la capital de la República.

Referidos al Poder Judicial se emitieron los siguientes decretos:

- Decreto del 03 de enero de 1880<sup>141</sup>, que declara la vigencia del Reglamento de Juzgados y Tribunales y del Reglamento de los Jueces de Paz de 1855 en todo lo que no sea contrario al Estatuto Provisorio así como a las normas que los modifican expresamente. Esta vigencia debía mantenerse mientras el Gobierno emitía nuevas normas que regulasen esos temas, lo que nunca llegó a ocurrir.
- Decreto del 16 de enero de 1880<sup>142</sup>, que modifica la forma en que se nombrarán los empleados del Poder Judicial. Se señala que el nombramiento de magistrados y otros funcionarios del Poder Judicial será realizado por el gobierno sin participación alguna de las cortes superiores ni de la Corte Suprema. Los jueces de paz, por su parte, serán nombrados por los prefectos de cada departamento, derogándose cualquier disposición en contrario.
- Decreto del 22 de enero de 1880<sup>143</sup> que deroga los artículos 1136 y 1137<sup>144</sup> del Código de Enjuiciamiento Civil. Estos artículos, correspondientes al Título I “del

<sup>137</sup> Decreto del 24 de diciembre de 1879

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1879115.pdf>).

<sup>138</sup> Decreto del 24 de noviembre de 1880

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1880068.pdf>).

<sup>139</sup> Según el texto de esta norma, los Apoderados Fiscales eran funcionarios que trabajaban ad-honorem en determinada provincia del país encargados de recopilar todos los datos relativos a la riqueza territorial e industrial de la provincia encomendada, confeccionando una memoria que sería entregada al Ministerio de Hacienda para que este utilice la información con finalidades tributarias.

<sup>140</sup> Resolución Legislativa del 29 de noviembre de 1880

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1880116.pdf>).

<sup>141</sup> Decreto del 03 de enero de 1880

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1880069.pdf>).

<sup>142</sup> Decreto del 16 de enero de 1880

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1880078.pdf>).

<sup>143</sup> Decreto del 22 de enero de 1880

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1880008.pdf>).

juicio ejecutivo” de la Sección V “de los juicios extraordinarios” del Libro Segundo “de las primeras instancias de los juicios”, regulaban las defensas previas que el deudor podía esgrimir dentro de un juicio ejecutivo.

En sus fundamentos, esta norma presenta argumentos en defensa del derecho del acreedor considerando que las defensas previas reguladas en el Código de Enjuiciamiento Civil desvirtúan la naturaleza del juicio de ejecución. En su desarrollo, por otro lado, si bien establece la derogación de los artículos señalados, no motiva la desaparición de esos instrumentos procesales. Por el contrario, este decreto establece una regulación más amplia y procedimentalizada para la aplicación y tramitación de estas defensas previas. Un efecto adicional de esta norma es el hecho de que su expedición da a entender que el Código de Enjuiciamiento Civil, a pesar de que no haber recibido un reconocimiento directo de su vigencia tal como se dio en el caso del Reglamento de Tribunales, se encontraba vigente y era considerado como tal por el gobierno de Piérola.

- Decreto del 29 de enero de 1880<sup>145</sup> que desarrolla la aplicación de los artículos del Estatuto Provisorio que crean y regulan el Consejo de Estado. Este decreto desarrolla, en su artículo 3°, la función que el Consejo tendrá como Tribunal de Apelación y circunscribe esa función a los recursos de apelación y de nulidad presentados en los pleitos generados por contratos suscritos por el gobierno, despojos (expropiaciones) para discutir únicamente el justiprecio, temas contenciosos entre las distintas demarcaciones territoriales, cuestiones de competencia entre las cortes superiores o entre estas y las municipalidades, y los juicios de responsabilidad de los Vocales de la Corte Suprema de la República.

---

<sup>144</sup> Código de Enjuiciamiento Civil (1851)

Sección V  
De los juicios extraordinarios  
Título I  
Del juicio ejecutivo

(...)

Artículo 1136°.- Dentro de los tres días de que habla el artículo anterior, sólo pueden admitirse al deudor, por excepciones dilatorias, que se sustanciarán conforme a este código:

1. La de falta de jurisdicción;
2. La de personería;
3. La de ineptitud de la demanda.

Artículo 1137°.- Si el deudor contradijere el requerimiento de pago, haciendo ver que los instrumentos no son ejecutivos, y el juez conociese que en efecto no lo son, seguirá la causa por vía ordinaria.

<sup>145</sup> Decreto del 29 de enero de 1880

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1880011.pdf>).

Respecto de este último punto, el decreto dispone la supresión del Tribunal de Responsabilidad que era el que hasta ese momento se dedicaba a conocer dichos recursos<sup>146</sup>.

- Decreto del 21 de febrero de 1880<sup>147</sup> que, a pesar de disponer que los agraviados por la prensa tienen derecho a vindicarse gratis en el periódico que les ofendió, mantiene vigente la posibilidad de recurrir a los tribunales con la acción criminal correspondiente.
- Decreto del 23 de marzo de 1880<sup>148</sup> que, en pos de procurar un mejor descanso en los jueces que garantice a su vez un mejor servicio, otorga un mayor periodo de vacaciones. Así, se establece que el inicio de las vacaciones será el último día de trabajo de diciembre y la apertura solemne del año judicial se hará el primer día de trabajo posterior al 13 de marzo. La norma incluye, además, el establecimiento de un juzgado y una sala de vacaciones. Mantiene la vigencia de las normas referidas a este tema en todo lo que no haya sido modificado por este decreto.

---

<sup>146</sup> El Supremo Tribunal de Responsabilidad Judicial fue creado mediante Ley del 25 de noviembre de 1856 por la Convención Nacional que sancionó la Constitución de ese mismo año y fue promulgada por Ramón Castilla en reemplazo del Tribunal de los Siete Jueces que no había recibido reconocimiento por esa Constitución y cuya “partida de defunción” se dio mediante ley de la misma Convención Nacional del 21 de noviembre (cuatro días antes).

Su estructura y finalidad eran prácticamente las mismas que el desaparecido Tribunal de los Siete Jueces estando este Tribunal de Responsabilidad formado también por siete vocales (elegidos a suerte de un universo de treinta individuos nombrados por el Poder Legislativo) y destinado a conocer únicamente las causas de responsabilidad que se promovieran contra los miembros de la Corte Suprema. Esta norma no llegó a ejecutarse tal como lo señala en su parte considerativa el decreto expedido el 18 de diciembre de 1865 por el Presidente Mariano Ignacio Prado. El motivo de esa situación fue, según dicha norma, que se omitió la elección del jurado de responsabilidad, es decir, los treinta individuos de entre los cuales se debían sortear los siete que conocerían cada juicio. En consecuencia, este decreto ratifica la vigencia de la anterior de 1856 y dispone que, con base del jurado elegido el 4 de marzo de 1857 (sic), se proceda a completar el número de vocales.

El 09 de enero de 1865, el Congreso de la República emite una ley recreando el Tribunal Supremo de Responsabilidad y variando su composición a sólo 7 vocales y 3 adjuntos así como un fiscal y un adjunto y haciendo expresa remisión al Reglamento que se había dictado para el funcionamiento del Tribunal de los Siete Jueces. El 28 de septiembre de 1868 se emitió una nueva ley del Congreso referida a hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios públicos en general. El Capítulo III de esa norma regula el procedimiento a seguir en estos juicios.

Posteriormente, el 21 de marzo de 1873, el Presidente Manuel Pardo promulgó una ley modificando la estructura del Tribunal, elevando el número de vocales a nueve y disponiendo la derogación de la ley de 1865. El Tribunal que funcionaba bajo esta regulación fue el que Nicolás de Piérola suprimió.

Cinco años después de su supresión, en 1884, el General Miguel Iglesias restituyó la figura del Tribunal de Responsabilidad pero tomando como base tanto la regulación contenida en la ley de 1865 como en la de 1873 y disponiendo la aplicación del procedimiento establecido en la ley del 28 de septiembre de 1868.

<sup>147</sup> Decreto del 21 de febrero de 1880

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1880025.pdf>).

<sup>148</sup> Decreto del 23 de marzo de 1880

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1880039.pdf>).



- Decreto del 23 de marzo de 1880<sup>149</sup> que varía las horas de atención de los despachos judiciales estableciendo que abrirán a las 11:30 am y cerrarán a las 16:30 pm. Se establece también la existencia de un acta diaria elaborada por cada secretario en la que se dé cuenta detallada de la rutina del día así como de los vocales impuntuales o inasistentes y los mecanismos para que dichas actas sean alcanzadas al Gobierno. Finalmente se establece sanción de destitución o pase a jubilación para el juez que faltase injustificadamente al despacho 45 días en un año.
- Decreto del 01 de abril de 1880<sup>150</sup>, creando una Fiscalía Administrativa, adicional a las fiscalías civil y penal que existen dentro de la Corte Suprema que conocerá principalmente de los temas que sean competencia del Consejo de Estado creado en el Estatuto Provisional.
- Decreto del 01 de abril de 1880<sup>151</sup>, que establece precisiones sobre la forma cómo el Consejo de Estado dará cumplimiento a lo señalado en el artículo 3° del Decreto del 29 de enero de 1880. Este artículo establece la organización, dentro del Consejo de Estado y contando con los miembros del mismo, de tres salas denominadas de “vocales consejeros”. Entre estas tres salas se distribuye la competencia del Consejo de Estado regulándose con mayor celo lo relativo a los juicios de responsabilidad de los vocales de la Corte Suprema, la posibilidad de un recurso extraordinario de nulidad en dichos juicios que puede ser presentado sin firma de abogado, las condiciones para que haya sentencia en esos casos y las sanciones para el recurrente por si es que dicho recurso extraordinario resultase infundado.
- Decreto del 31 de mayo de 1880<sup>152</sup>, disponiendo que en todos los demás juicios por responsabilidad seguidos contra miembros del Poder Judicial, se hará extensiva la disposición del decreto del 01 de abril que dispone que los escritos no requerirán firma de abogado.

---

<sup>149</sup> Decreto del 23 de marzo de 1880

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1880040.pdf>).

<sup>150</sup> Decreto del 01 de abril de 1880

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1880091.pdf>).

<sup>151</sup> Decreto del 01 de abril de 1880

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1880092.pdf>).

<sup>152</sup> Decreto del 31 de mayo de 1880

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1880098.pdf>).

Tras esta recapitulación, podemos reconocer los siguientes frentes abordados mediante la legislación expedida durante la dictadura pierolista con relación al Poder Judicial:

1. Funcionamiento de los tribunales. Mediante el establecimiento de los horarios de atención, la duración de las vacaciones judiciales y la ratificación de la vigencia del Reglamento de Tribunales. A estos temas se debe añadir la modificación que se hizo del procedimiento de nombramientos de jueces, vocales y fiscales.
2. Los juicios de responsabilidad de vocales supremos y jueces. Estableciéndolos como competencia del Consejo de Estado así como los mecanismos de tramitación de dichos pleitos y sus recursos de apelación y nulidad. Dentro de este tema añadiríamos la creación de una Fiscalía Administrativa adscrita al Consejo de Estado y destinada para conocer únicamente los temas que serían competencia de este órgano.
3. La regulación de los procesos. Estableciendo una nueva regulación de las excepciones y defensas previas dentro de los procesos ejecutivos y, además, regulando la posibilidad de las acciones criminales por agravio en la prensa escrita.

Ya antes, cuando comentamos el Estatuto Provisorio de 1879, habíamos señalado que estaba pensado no tanto como una norma de emergencia que permita manejar el país en la coyuntura de guerra que se encontraba sino como la piedra angular de un sistema jurídico que el Dictador pensaba establecer. Así, se destaca que la regulación que expidió relacionada con el Poder Judicial presta mucha atención al componente político. Desde sus primeros decretos se podía advertir la intención de revolucionar el sistema jurídico vigente dando a entender que oportunamente se emitirían normas que reemplazarían los códigos vigentes y estableciendo modificaciones de fondo que no guardaban relación con la coyuntura bélica y que podrían explicarse en función de otros intereses que no llegamos a identificar.

Como ejemplo de ello podemos tomar el decreto del 16 de enero de 1880 mediante el cual buscó que su gobierno mantenga la decisión a la hora de nombrar a los jueces y vocales para, presumiblemente, adquirir el control del Poder Judicial. Ello podría deberse no tanto a una real necesidad de controlar un poder que viniera siendo incómodo a su gobierno sino, por el contrario, la necesidad de contar con un

mecanismo de presión respecto de sus rivales políticos que, en aquellos años y a pesar del clima de guerra, eran varios.

Esta hipótesis, cuya confirmación excede los propósitos de la presente investigación, adquiere una mayor fuerza cuando se verifica que, en realidad, a pesar de estas normas la composición de la Corte Suprema no sufrió mayor variación. En efecto, según los Anales Judiciales editados por la misma Corte Suprema, se puede apreciar que desde antes de la entrada de Piérola al gobierno hasta la última sentencia recopilada en dichos anales anterior a la ocupación, los nombres de los vocales que la conformaban se mantuvieron con algunas esporádicas apariciones de algunos otros apellidos y la supresión momentánea de otro. Estas variaciones son más dadas a responder a una situación regular de rotación de vocales o de conformación de salas que a una real política de persecución desde la jefatura del gobierno con respecto a estos jueces.

La ocupación de Lima motivó que esta “revolución” pierolista no terminara de cuajar y por ello quedó en el aire cuando, en uno de los primeros actos de su gobierno, el Presidente Provisorio Francisco García Calderón declaró la nulidad tanto del Estatuto Provisorio como de los decretos dictados a su amparo y los actos administrativos que, en ejecución de lo normado, fueron expedidos por el Gobierno Dictatorial de don Nicolás.

En efecto, luego de la ocupación, el ejército invasor inició presiones a la Municipalidad de Lima para que los habitantes de la capital procedan a formar un gobierno provisorio con el cual los chilenos pudieran discutir los términos de la rendición peruana. El gobierno del doctor Francisco García Calderón se constituyó el 12 de marzo de 1881, casi dos meses después de la ocupación, y entre sus primeros decretos destaca el expedido el día 29 de marzo de 1881 en el que declara vigente en toda la República la Constitución Política de 1860<sup>153</sup> y, como consecuencia lógica de ello, se dejó de lado todo lo legislado en los meses anteriores.

---

<sup>153</sup> Decreto del 29 de marzo de 1881.

Se manda encausar a las autoridades enemigas del gobierno de Lima Francisco García Calderón.

Presidente Provisorio de la República.

Considerando:

Que por las actas y comunicaciones que ha recibido el Gobierno, se viene en conocimiento de que todos los pueblos de la República aceptan el Gobierno provisorio y quieren el restablecimiento de la Constitución;

### **Subcapítulo 11: La reinstauración de la Constitución de 1860 durante el Gobierno Provisorio de Francisco García Calderón.**

Luego de la elección de García Calderón el día 12 de marzo de 1881, el día 29 se expidieron tres importantes decretos, dos de los cuales tuvieron marcada importancia para la organización judicial del país.

El primer decreto es el mencionado en el subcapítulo anterior en cuyo artículo 1° se declara la vigencia de la Constitución Política de 1860. Sin embargo, el resto de su articulado reviste igual importancia por cuando está dirigido a disponer el regreso al estado de cosas anterior a la asunción al poder de Piérola. Así, su artículo 2° establece que todas las autoridades políticas, administrativas y militares que aún funcionaban en el país debían, en el plazo de 20 días contados desde el mismo 29 de marzo de 1881, ceder sus puestos a las autoridades que este gobierno provisional hubiera nombrado o nombre en los días siguientes. El artículo 3° establece la orden de encausar penalmente a aquellos funcionarios que no cumplan con lo establecido en el artículo anterior.

El artículo 4° atañe directamente al Poder Judicial al ordenar a tribunales, jueces y fiscales iniciar de oficio y bajo responsabilidad los juicios a que se refiere el artículo 3° una vez terminado el plazo de 20 días fijado en el artículo 2°.

---

Que estas manifestaciones populares han sido y continúan siendo combatidas por las autoridades políticas y la fuerza pública de que disponen, con cuyo procedimiento han incurrido en las penas designada por el Código Penal,

Decreto:

Art. 1° Se declara vigente en toda la República, por la voluntad nacional, la Constitución Política de 1860, i reconocida por todos los pueblos la autoridad del Gobierno provisorio.

Art. 2° Las autoridades políticas, administrativas y militares que actualmente funcionan, cederán sus puestos en el perentorio término de 20 días, contados desde esta fecha, a las que ha nombrado y continuará nombrando el Gobierno para los diversos departamentos de la República.

Art. 3° Los que no cumplan lo dispuesto en el artículo anterior, o impidan el restablecimiento de la Constitución en cualquiera parte de la República, o de algún modo coarten la voluntad de los ciudadanos para la manifestación de sus opiniones en favor de la Constitución, serán sometidos a juicio y castigados con las penas designadas en el Código Penal.

Art. 4° Los tribunales y juzgados, los fiscales y agentes fiscales, en cumplimiento de sus deberes respectivos, iniciarán de oficio, bajo de responsabilidad, los juicios a que se refiere el artículo anterior, al terminar el plazo de 20 días fijado en el artículo 2°

El Ministro de Estado en el despacho de Gobierno queda encargado del cumplimiento de este decreto, haciéndolo publicar por bando y dictando al efecto las órdenes convenientes.

Dado en la casa de Gobierno, en Magdalena, a 29 de Marzo de 1881.- Francisco García Calderón.- Aurelio Denegri.- Manuel Velarde.- José Miguel Vélez.- Camilo N. Carrillo.- M. M. Gálvez.

El segundo decreto importante expedido ese día 29 de marzo estableció la nueva organización del Poder Judicial como consecuencia de haber dispuesto la reinstauración de la vigencia de la Constitución de 1860<sup>154</sup>. También destaca en este decreto la clara y abierta intención del gobierno provisional de restaurar las cosas al estado anterior al ingreso de Piérola al gobierno. Es más, en esta oportunidad se establece clara y expresamente la nulidad de los nombramientos realizados durante el gobierno del Dictador.

Un detalle que llama la atención en este decreto se encuentra en los considerandos del mismo donde, en el segundo párrafo, se señala que según las leyes vigentes las vacaciones judiciales debían terminar el día 18 de abril. Esta aseveración es curiosa toda vez que resulta contraria a la última norma que regulaba las vacaciones judiciales, el Decreto del 23 de marzo de 1880 expedido por Nicolás de Piérola, que establecía la reanudación de las vacaciones judiciales en el primer día laborable posterior al 13 de marzo.

Sin embargo, es claro que, por coherencia con lo hasta ahora mencionado, el Gobierno de García Calderón no tomó en cuenta dicho decreto habida cuenta que consideraba nulos todos los actos realizados durante el gobierno de Piérola. Ello

---

<sup>154</sup> Decreto del 29 de marzo del 1881

Organización del Poder Judicial.

Francisco García Calderón.

Presidente Provisorio de la República

Considerando:

Que por decreto de esta fecha se ha declarado vigente, por la voluntad popular, la Constitución política de 1860 y que, en consecuencia, debe organizarse con arreglo a ella el Poder Judicial.

Que por las leyes vigentes las vacaciones judiciales deben terminar el 18 del próximo mes de Abril:

Con el voto unánime del Consejo de ministros,

Decreto:

Art. 1° El Poder Judicial de la República principiará sus funciones el día 18 de Abril próximo y se sujetará en sus procedimientos a la Constitución política de 1860 y a las leyes vigentes en Diciembre de 1879.

Art. 2° Los tribunales y juzgados se instalarán al principiar sus funciones con el personal que tenían en 21 de diciembre de 1879.

Art. 3° Se declaran nulos y sin valor alguno los nombramientos de vocales, jueces y demás empleados del Poder Judicial hechos con posterioridad a la fecha citada.

Art. 4° Los tribunales que no cumplan y hagan cumplir en sus distritos las prescripciones de este decreto en el momento de su instalación, incurrirán en las penas designadas en los artículos 125 y 126 del Código Penal.

El Ministro de Estado en el despacho de Justicia, Culto e Instrucción Pública i Beneficencia queda encargado del cumplimiento de este decreto.

Dado en la casa de Gobierno, en Magdalena, a los 29 días del mes de Marzo de 1881.- Francisco García Calderón.- Aurelio Denegri.- Manuel Velarde.- José Miguel Vélez.- Camilo N. Carrillo.- M. M. Gálvez.



implicaría que, para el gobierno provisorio, las fechas de inicio y fin de las vacaciones judiciales debían calcularse de conformidad con lo establecido en la Ley del 1 de diciembre de 1874<sup>155</sup> que mencionamos anteriormente en este mismo capítulo. Esta norma, expedida durante el gobierno de Manuel Pardo, señalaba en su artículo 1° que las vacaciones judiciales terminaban el lunes de Pascua de Resurrección<sup>156</sup>.

Aplicando las reglas del *Computus*<sup>157</sup>, se confirma que el año 1881 el Domingo de Resurrección, o “Pascua de Resurrección” fue el 17 de abril por lo que el día 18 es, precisamente, el “lunes de Pascua de Resurrección” a que se refería la ley de 1874.

Resulta interesante extendernos un poco en lo que señalamos en el subcapítulo anterior al comentar el decreto del 23 de marzo de 1880 que varió las fechas de inicio y término de las vacaciones judiciales. Según la fundamentación de esa norma, Piérola realizó la variación en procura de otorgar a los jueces un mayor tiempo de descanso para que puedan retomar sus labores con la mayor capacidad. Para ello, si bien estableció una fecha de término de vacaciones más temprana que la regulada por la ley de 1874, adelantó sensiblemente la fecha de inicio de las mismas, estableciendo en dos meses y medio un periodo vacacional que según la ley de 1874 sólo duraba siete semanas.

En efecto, la ley de 1874 señalaba que las vacaciones judiciales se iniciaban “*el domingo de Carnaval (quincuagésima)*” que es una festividad católica que se celebra siete semanas (o cincuenta días, de ahí el nombre) antes de la Pascua de Resurrección. Es decir, según esa norma, las vacaciones judiciales tenían una duración de siete semanas cuyas fechas de término y de inicio dependían directamente del calendario católico conforme era usual en nuestro país en aquellos años.

---

<sup>155</sup> Ley del 10 de diciembre de 1874

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1874029.pdf>).

<sup>156</sup> Ley del 1 de diciembre de 1874.

Artículo 1°.- Las vacaciones de los Tribunales y juzgados comenzarán el domingo de Carnaval (quincuagésima) y terminarán el lunes de Pascua de Resurrección.

(...)

<sup>157</sup> Se denomina *Computus* al procedimiento aritmético establecido en el año 525 por el monje Dionisio el Exiguo para realizar los cálculos de la fecha en que se debe celebrar la Pascua de Resurrección. Este erudito confeccionó una “tabla de pascuas” que permitía el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Concilio de Nicea (año 314) para la determinación de la fecha en que se celebra esta importante festividad católica.

La variación introducida por Piérola resultaría sumamente generosa en este tema ya que adelantaba en casi mes y medio el inicio de las vacaciones. Por ejemplo, en 1881, el domingo de Carnaval fue el 6 de marzo. De haberse aplicado la ley de 1874, ese día se habrían iniciado las vacaciones judiciales y sólo hasta el 18 de abril. Por el contrario, aplicándose la regulación introducida por Piérola, el inicio de las vacaciones judiciales fue el último día de trabajo de diciembre de 1880 que, según las fuentes históricas que mencionaremos en el siguiente capítulo, fue el día viernes 24<sup>158</sup>. En esa fecha se iniciaron las vacaciones que debían durar un lapso de dos meses y medio hasta el lunes 14 de marzo, primer día laborable posterior al 13 de marzo, tal como lo dispuso el decreto pierolista del 23 de marzo de 1880.

Tal como veremos en el siguiente capítulo, estos detalles respecto del inicio y el final de las vacaciones judiciales dejan de tener carácter anecdótico y revisten especial importancia cuando se tiene presente las primeras relaciones que se dieron entre los oficiales del ejército invasor y los vocales de la Corte Suprema, así como entre estos últimos y el recién establecido gobierno de Francisco García Calderón.

Por el momento podemos adelantar que, al momento de expedirse el decreto del 29 de marzo de 1881, los vocales de la Corte Suprema, en representación de todo el Poder Judicial, ya habían rehusado la invitación de García Calderón de restablecerse en la localidad de la Magdalena. Este decreto aparece, entonces, como un intento de utilizar la legalidad para obligar al Poder Judicial a reasumir sus labores luego de la ocupación. Intento que al igual que la invitación anterior resultara fallido.

Retomando el tema que desarrollamos en el presente subcapítulo, veremos que en los demás artículos del segundo decreto expedido ese 29 de marzo de 1881, se continuó con la intención de deshacer todo lo hecho durante el gobierno pierolista. Así, los artículos 2° y 3° resultan ejemplificadores al establecer que las personas que reiniciarían las labores judiciales el 18 de abril de 1881 serían las mismas que trabajaban en los juzgados al 21 de diciembre de 1879 y que todo nombramiento realizado luego de esa fecha (léase hecho por el gobierno de Piérola) resulta nulo y sin valor. Esta indicación nos permite concluir que el ingreso al gobierno de Nicolás de Piérola motivó varios cambios en los funcionarios del Poder Judicial y es por ello que anteriormente señalamos que este episodio histórico es un hito que marca el inicio de

---

<sup>158</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. *Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia. 1880-1887. Tomo 4*. Lima: Imprenta La Industria, 1911. Páginas 524 y 525

una etapa distinta dentro de la historia de nuestro Poder Judicial. Finalmente se establece la expresa responsabilidad penal para aquellos que no cumplieran esta norma.

El tercer y último decreto importante de los tres emitidos por el gobierno de García Calderón ese día 29 de marzo de 1881 es un decreto que convoca a una reunión, en Chorrillos, del Congreso de la República con miras a reorganizar el país.

Debido a la poca libertad de acción y a la poca duración del gobierno provisorio de Francisco García Calderón, no hubo más normas destacables referidas al Poder Judicial. Por el contrario, tal como ya lo señalamos, su relación con el Poder Judicial terminó siendo una relación fallida toda vez que, a pesar de sus esfuerzos para que éste reinicie sus funciones, la posición de la Corte Suprema fue de una rotunda negativa.

#### **Subcapítulo 12.- Conclusiones preliminares**

Luego de esta recapitulación en la cual se buscó abordar de la forma más sistémica posible los cuerpos normativos que regularon el régimen y funcionamiento del fuero ordinario al momento de realizarse la ocupación chilena de la ciudad capital, consideramos apropiado destacar las siguientes conclusiones preliminares.

**Primera.-** Durante las dos etapas principales de gobierno del Mariscal Ramón Castilla (1845-1851 y 1855-1862) y el gobierno del General Echenique (1851-1855) se produjo en el Perú una corriente codificadora que dio al país los principales cuerpos normativos del siglo XIX. Si bien el procedimiento de formación de cada uno de esos códigos resultó siendo un proceso lento y no exento de desacuerdos y caminos desandados, lo cierto que dichas normas terminaron teniendo una larga vigencia y fueron reemplazados recién en el siglo XX cuando la concepción misma de derecho había cambiado. En efecto, el Código Civil de 1852 rigió hasta ser reemplazado por el Código Civil de 1936, el Código de Enjuiciamiento Civil de 1851 rigió hasta 1912, el Reglamento de Tribunales se mantuvo vigente hasta 1911, el Código Penal de 1863 se mantuvo vigente hasta 1924, el Código de Enjuiciamiento en Materia Criminal se mantuvo vigente hasta 1920 e incluso el texto constitucional de 1860 resultó ser el de más dilatada vigencia al mantenerse hasta 1920. Es decir, más allá de las críticas que

se pueden hacer de sus falencias, dichos cuerpos normativos forman una cabal representación del derecho decimonónico de nuestro país.

Segunda.- El proceso codificador de nuestra historia republicana es producto de la convergencia de varios factores. Sin embargo, de los hechos citados y analizados en este capítulo así como de los acontecimientos históricos de conocimiento general, podemos encontrar algunos elementos que colaboraron directamente.

En primer lugar debemos mencionar que la efímera vigencia de los Códigos “Santa Cruz” dejaron encendida en la sociedad peruana la necesidad de poder darse sus propios códigos y avanzar en su derecho nacional pasando del desordenado derecho recopilado a la modernidad jurídica que, en aquella época, se traducían en la existencia de los códigos.

En segundo lugar, la concepción jurídica contenida en la Constitución de 1839 que, con todo y sus críticas, resulta ser a la luz de la historia un texto que respondió a la concepción que la sociedad peruana de aquellos años tenía sobre su propia organización política o que, cuando menos, no era incompatible con la misma. Asimismo, se constituyó en un texto preparado para dar sustento al proceso codificador.

En tercer lugar, y aunque no haya sido mencionado anteriormente, también se debe considerar como un elemento importante el momento histórico de bonanza producto de la industria guanera que generó el periodo de la “prosperidad falaz”, tal como la bautizó Basadre Grohmann<sup>159</sup>, y que generó en la alta sociedad peruana un mayor interés por los temas legislativos.

En cuarto lugar debemos citar la pacificación que logró Ramón Castilla durante su primer mandato. En efecto, luego de que el Mariscal llegó al poder en 1845, el país no conoció de revoluciones y guerras civiles –moneda común en los 24 años anteriores de nuestra historia –sino hasta 1855 en la que se vivió una nueva revuelta comandada por el mismo Castilla pero que encontró a este proceso codificador casi culminado.

---

<sup>159</sup> BASADRE GROHMANN, Jorge. *Historia de la República del Perú (1822 – 1933). Tomo 3*. Lima: El Comercio, 2005. Página 136.

Respecto a estos dos últimos elementos consideramos que está claro que un país que ya deja atrás las luchas emancipadoras y las guerras civiles de sus primeros años, al encontrar un momento de bonanza económica y estabilidad política, empieza a preocuparse ya no de temas urgentes relacionados con su propia sobrevivencia como país sino de sentar las estructuras de sus instituciones jurídicas y políticas.

En quinto lugar, debemos rescatar que durante aquellos años la sucesión en el gobierno nacional, si bien no estuvo exenta de desencuentros y contradicciones, encontró dos mandatarios que impulsaron – cada uno desde su propia concepción de las cosas – el proceso codificador. En efecto, así como le debe mucho a la voluntad política de Ramón Castilla, este proceso codificador también se vio beneficiado por el gobierno de José Rufino Echenique quien, a pesar de mantener sus diferencias con el gobernante anterior, siguió en general impulsando lo avanzado.

Finalmente, en sexto lugar, debemos citar el establecimiento en aquellos años de concepciones políticas dentro de la sociedad y que reflejaron el debate entre conservadores y liberales durante los años siguientes. Si bien es cierto que esta dicotomía no es reconocida por los historiadores como un proceso integral y sincero<sup>160</sup>, es innegable que la dialéctica generada a raíz de ellos terminó nutriendo el procedimiento codificador.

Tercera.- Si bien es incuestionable la importancia que tiene este proceso codificador para la historia misma del derecho peruano, debemos señalar que mayor importancia reviste para la historia del Poder Judicial y la Administración de Justicia en nuestro país. Ello porque el proceso codificador marca un inicio en el manejo sistemático de normas dirigidas a regular la organización y el funcionamiento del Poder Judicial así como los distintos juicios. En efecto, si bien antes del proceso codificador existieron normas relativas a este poder del Estado, lo cierto es que dichas normas no guardaban ningún rasgo de sistema conformando más bien un conglomerado normativo que un real ordenamiento. Ejemplo de ello es el hecho de que fue la misma Constitución de 1839 la que tuvo que establecer la estructura del Poder Judicial para salvar la misma del universo de normas recopiladas. El proceso codificador marcaría,

---

<sup>160</sup> RAMOS NÚÑEZ, Carlos. *Historia del Derecho Civil Peruano. Siglos XIX y XX. Tomo III. Los jurisprudencistas: El Murciélago y Francisco García Calderón*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2002. Página 24.



entonces, una suerte de punto inicial en la concepción integral del Poder Judicial, su funcionamiento y sus competencias.

Cuarta.- Si bien la principal norma que inspiró la génesis de todos aquellos cuerpos normativos fue la Constitución de 1839, lo cierto es que la Constitución de 1856 motivó varios cambios en todos esos cuerpos normativos gracias a las modificaciones liberales que introdujo. Si bien varias de aquellas modificaciones fueron retraídas luego al entrar en vigencia la Constitución de 1860, mucho más parecida a la de 1839, su impacto dejó huellas importantes como la supresión de los fueros personales y del Tribunal de los Siete Jueces.

Sin embargo, su principal efecto con miras a la Administración de Justicia, fue que instauró un marco constitucional que trascendió su propia vigencia. Ello implica que, en realidad, el marco constitucional relativo al Poder Judicial no empezó en 1860 sino cuatro años antes con la sanción del texto de 1856. En ese sentido, es este marco constitucional el que acompañó durante varios años e inspiró el desarrollo jurisprudencial y la aplicación de esas normas.

Sexta.- A lo largo de los más de cuarenta años de legislación que hemos abarcado, podemos advertir claramente que el Poder Judicial tuvo un papel de objeto y no tanto de sujeto activo en la misma. No hubieron ocasiones en las que el Poder Judicial – por intermedio de la Corte Suprema o de algún otro funcionario – haya participado activamente en la diagramación legal de su estructura o su función siendo que las veces que se requirió su opinión, ésta no fue emitida. Asimismo, su participación fue igual de restringida en lo que respecta a la formación de los cuerpos normativos que regularon los procedimientos judiciales. Por el contrario, siguió siempre el destino que los poderes de turno decidieron para él sin que la historia registre una real molestia u oposición de su parte con excepción del pronunciamiento que parte de sus funcionarios realizaron en apoyo al Presidente Pezet cuando este afrontó la revolución de Prado en 1865.

Esta ausencia de participación no se debe tanto a que los gobiernos no le permitieran participar sino más bien al hecho de que, las veces que se convocó su participación, éste no la prestó. Ramos Núñez cita en extenso cómo a pesar de las invitaciones que se le cursaron y de las disposiciones que prácticamente lo obligaron a participar, siempre destacó la ausencia del Poder Judicial, sus vocales y jueces, durante el

proceso legislativo. Esta ausencia contrastaba, por otro lado, con las encendidas críticas que, una vez promulgadas las leyes, el Poder Judicial realizó a las mismas<sup>161</sup>.

En ese sentido, es de destacar que a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1856, los distintos Presidentes no sucumbieran en la necesidad de reformular el papel del Poder Judicial. Ello no implica, evidentemente, que éste haya conocido un periodo de independencia total respecto al desempeño de su función. Lo más probable, antes como ahora, es que durante esos años el Poder Judicial haya actuado como una entidad alineada con el Presidente. Queda la triste idea, a partir de lo que fue su actitud durante estos 40 años, de que lo más probable hubiese sido que, si alguno de nuestros líderes hubiera tenido la intención de modificar sustancialmente la estructura o la función del Poder Judicial, no habría encontrado de parte de éste alguna oposición eficaz.

Séptima.- Es de destacar que la diagramación que a mediados del siglo XIX se hizo tanto respecto de la organización judicial como de los distintos procedimientos judiciales es prácticamente la misma que la que se encuentra vigente actualmente. Incluso si tomamos en cuenta el viraje producido en el derecho procesal civil que, tras un largo periodo de formalismo marcado por la vigencia del Código de Procedimientos Civiles de 1912, en los últimos veinte años ha ido retomando antiguas categorías jurídicas ya reguladas en 1852. Eso nos llevaría a pensar que el Poder Judicial moderno, tal como lo comprendemos hoy en día, encontró su configuración como tal luego del proceso codificador de mediados del siglo XIX.

Octava.- Se debe tener presente que, como resultado del proceso de codificación, no se generaron compartimentos estancos en el sentido que la integridad de la regulación de un tema se encontrase agotado en un solo cuerpo normativo. Por el contrario, todas las normas fueron complementarias ya que el íntegro de las regulaciones respecto a un tema en general se encontraban tanto en el cuerpo normativo especializado como también en algunos otros. Así no sorprende que, incluso en el Código de Enjuiciamiento Civil se encuentren referencias aplicables a los juicios criminales sin que la promulgación del Código de Enjuiciamiento en materia Criminal haya implicado su necesaria derogatoria. En ese esquema el Reglamento de

---

<sup>161</sup> RAMOS NÚÑEZ, Carlos. *Historia del Derecho Civil Peruano. Siglos XIX y XX Tomo II. La codificación del siglo XIX: Los códigos de la Confederación y el Código Civil de 1852*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2001. Páginas 188 y siguientes.

Juzgados y Tribunales tenía un papel integrador al ser su regulación una que transversalmente afectaba todo el sistema de administración de justicia.

Novena. - A la fecha de inicio de la guerra, la Administración de Justicia contaba, desde el punto de vista de las normas legales vigentes en ese momento, con un sistema de resolución de conflictos y de supresión de conductas antijurídicas ya definido. En efecto, si bien es cierto que los códigos y los reglamentos resultaban perfectibles y de hecho fueron continuamente modificados y adecuados a las nuevas realidades, lo cierto es que a 1879 el proceso codificador ya había concluido y tanto los jueces como los litigantes se enfrentaban a un ordenamiento establecido y con un promedio de 20 años de aplicación desde su entrada en vigencia.

Es posible que en diversas localidades del país la aplicación de esas leyes no haya sido todo lo regular que podía desearse pero, atendiendo al imperante centralismo que ya existía en nuestro país, es de entender que dicho fenómeno no se verificó en la ciudad capital. Por el contrario, si en algún lugar del país dichas normas habrían tenido su primera implementación y aplicación debió ser necesariamente en Lima.

Ello quiere decir que la Administración de Justicia en la ciudad capital debió ser la que más acusó el impacto y la implementación de la vigencia de los códigos y reglamentos mencionados en el presente capítulo y por ello debió ser la expresión más fiel a lo que se encontraba regulada en las mismas.

Décima. - Una expresión clara de que el proceso codificador terminó siendo respetado por la sociedad peruana en general y los juristas y legisladores en particular lo constituye el hecho de que, desde la promulgación de los distintos códigos, hasta el estallido de la guerra no se verificaron modificaciones sustanciales que impliquen un cambio diametral de la concepción jurídica contenida en ellos.

Por el contrario, la observación de las modificaciones legislativas demuestra que la principal variación respecto a la Administración de Justicia se verificó en el campo de las personas que la ejercieron. Es decir, se cumplió en parte la observación que había hecho Francisco García Calderón en el sentido de que – en esos años – se podían esperar cambios respecto a la organización del Poder Judicial pero no respecto de los procedimientos establecidos. Señalamos que ese cumplimiento fue parcial debido a que la organización del Poder Judicial tampoco se vio modificada de una manera

integral sino que simplemente se limitó a ver aumentado o disminuido el número de magistrados dentro de su organización.

*Décimo Primera.-* A la fecha de inicio de la guerra, según las normas vigentes en la época, Lima era sede de la Corte Suprema de la República y de la Corte Superior de Lima y albergaba no sólo las salas de tribunales sino también era el domicilio de los vocales tanto superiores como supremos. Además contaba con tres juzgados de primera instancia para los juicios civiles y tres juzgados de primera instancia para los juicios criminales. Según las normas que regulan los juzgados de paz, en Lima también debieron existir juzgados de paz pero no se desprende de las normas con rango de ley el número de estos juzgados en la capital.

*Décimo Segunda.-* Definitivamente una de las primeras causas que motivaron cambios en la Administración de Justicia en la ciudad capital lo constituyó el ingreso de Nicolás de Piérola a la jefatura del Estado. Si bien su Estatuto Provisorio dispuso expresamente el mantenimiento de la vigencia de los códigos y luego, mediante decreto, de los Reglamentos de Tribunales, ello no significó que la labor jurisdiccional se haya desarrollado pacíficamente.

Por el contrario, durante su gobierno la vida en Lima estuvo sumamente afectada tanto por cuanto su ingreso al poder se dio dentro del marco de una revuelta armada, así como el hecho de que su gobierno estuvo marcado por las derrotas bélicas en Arica y Tacna, la campaña chilena de devastación de los puertos del norte y el desembarco del ejército invasor en Pisco.

En efecto, ese año de 1880 toda la ciudad vivió en estado de zozobra y a esa situación hay que sumarle la intención de Piérola – reflejada en los decretos que expedía – de tomar y utilizar el Poder Judicial como un arma para la satisfacción de sus intereses políticos. Definitivamente, juzgando en base a los decretos analizados, en 1880, la Administración de Justicia ya no presentaba el mismo funcionamiento que se diagramó al final del proceso codificador y que se consolidó durante los veinte años que siguieron desde entonces hasta el estallido de la guerra.

*Décimo Tercera.-* Se desprende de las normas jurídicas analizadas que a la fecha efectiva de inicio de la ocupación de la ciudad de Lima, los servicios judiciales no estaban disponibles. Es más, dicha situación se inició en los últimos días de diciembre

de 1880 tanto por los desórdenes propios de una ciudad que se preparaba para repeler la invasión enemiga como por el cumplimiento del Decreto de fecha 23 de marzo de 1880 emitido por Nicolás de Piérola y que establecía el inicio de las vacaciones judiciales en el último día hábil de diciembre. En efecto, al 17 de enero de 1881, el Poder Judicial no ejercía su función por encontrarse dentro de su periodo vacacional.





## **CAPÍTULO II: ACTUACIÓN DEL PODER JUDICIAL DURANTE LA OCUPACIÓN DE LIMA.**

El período histórico conocido como “Ocupación Chilena de Lima” corresponde a la etapa de la Guerra del Pacífico comprendida entre el 17 de enero de 1881, fecha de la entrada del ejército vencedor a la ciudad de Lima, capital del Perú, y 1884 cuando, luego de la firma del Tratado de Ancón, las últimas tropas chilenas abandonaron la ciudad rumbo a su país. Se hace referencia a un periodo de tres años en los que todos los aspectos de la vida en la ciudad de Lima se vieron seriamente afectados. Esa situación se extendió y afectó a las principales instituciones nacionales gracias a la condición de capitalía de la ciudad y al contundente centralismo estatal que ya se vivía en el país durante las últimas décadas del siglo XIX.

Precisamente, nuestro interés en la presente investigación se dirige a poder conocer la actuación durante ese episodio histórico tanto del Poder Judicial como institución como la situación en que se resolvió la administración de justicia, mecanismos de composición de conflictos y represión de conductas antijurídicas, y que lamentablemente no han sido investigados hasta ahora.

En efecto, si bien la Guerra del Pacífico constituye uno de los principales episodios de nuestra historia republicana y, como tal, ha sido objeto de muchos estudios, estos no han sido uniformemente exhaustivos. Tomando en consideración el volumen de estudios realizados sobre la guerra, una observación empírica nos permite apreciar que la historiografía peruana ha prestado una menor atención al periodo de la ocupación chilena de la capital. Las campañas marítima y terrestre en los departamentos sureños de Tacna y Tarapacá son los periodos del conflicto que recibieron una mayor atención por parte de los historiadores. De esos episodios la historia ha rescatado a nuestros principales héroes y el recuerdo de los hechos que se sucedieron en aquellas zonas son los que en su mayoría pueblan nuestro calendario cívico patriótico.

Tal vez la idea de que la guerra la perdimos en Angamos y en Arica hace que el análisis de los hechos posteriores, como la ocupación de Lima y la resistencia en La Breña, no hayan recibido la misma atención. Así, en proporción, son pocos los estudios historiográficos realizados sobre la ocupación de Lima y éstos se dedican

casi exclusivamente a las dos batallas previas al ingreso de las tropas chilenas a la ciudad.

Dentro de esta escasa referencia, son minúsculas las que se hacen sobre la actuación del Poder Judicial y la situación de la administración de justicia en Lima durante esa época. Del análisis de gran parte de la historiografía peruana destacan dos autores quienes, sin llegar a profundizar, trataron algunos tópicos relacionados con los temas que nos ocupan. Estos dos autores son Jorge Basadre en su monumental obra sobre la Historia del Perú Republicano<sup>162</sup>, y Margarita Guerra en el estudio que realizó sobre el gobierno provisorio de Francisco García Calderón<sup>163</sup>. Existen autores como Raúl Rivera Serna<sup>164</sup> y Carlos Núñez Ramos<sup>165</sup> que, cada uno en su campo, hacen menciones aisladas respecto a los temas que nos ocupan pero, siendo otros los objetivos que buscaban, sus escritos no nos permiten entender en su integridad ni la actuación de la institución ni los mecanismos de la administración de justicia.

Es en la obra de Basadre donde encontramos referencias importantes que desarrollaremos más adelante y que se refieren, más que a la actuación del Poder Judicial, a la situación de la administración de Justicia durante los años de la ocupación. Margarita Guerra, por su parte, menciona lo que fue la actitud frente a la ocupación del Poder Judicial representado por los miembros de la Corte Suprema.

Enfocándonos más directamente en los trabajos de Historia del Derecho Peruano, el panorama es similar. Sólo Ramos Núñez cita con cierto detalle las relaciones que existieron entre los miembros de la Corte Suprema, las autoridades del ejército invasor, el alcalde de Lima y el Gobierno Provisorio de García Calderón.

Esta situación debe ser tomada con cierta precisión. El hecho de que ni la historiografía clásica ni la historiografía jurídica se hayan ocupado de este aspecto no responde, desde nuestro criterio, a un descuido de parte de estos investigadores sino

---

<sup>162</sup> BASADRE GROHMANN, Jorge. *Historia de la República del Perú (1822 – 1933). Tomo 9*. Lima: El Comercio, 2005

<sup>163</sup> GUERRA MARTINIERE, Margarita. *La Ocupación de Lima (1881 – 1883)*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1991.

<sup>164</sup> RIVERA SERNA, Raúl. *La ocupación chilena de Lima. Aspectos político-administrativos*. En: RIVERA SERNA y otros. *La Guerra del Pacífico. Volumen II*. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 1984. pp. 1-43.

<sup>165</sup> RAMOS NUÑEZ, Carlos Augusto. *Historia de la Corte Suprema de Justicia del Perú*. Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2008.

más bien a una característica intrínseca del fenómeno materia de estudio. A diferencia de otros episodios, la Guerra con Chile en general y la ocupación de la capital específicamente no son momentos históricos que a primera vista resulten importantes por prolíficos y revolucionarios para el derecho. En aquellos años no se logró ningún aporte positivo ni desarrollo jurisprudencial así como tampoco vieron la luz sesudos análisis o grandes codificaciones. Eso hace que este periodo pase, a los ojos del historiador, como un periodo yermo en lo que al derecho peruano se refiere.

Su interés como periodo dentro de la historia jurídica del país radicaría en lo contrario ya que constituye un periodo de profunda crisis del Estado Peruano, crisis de la organización política al que arrastró a su ordenamiento jurídico. En esa coyuntura, las leyes no tuvieron un momento trascendente en su creación, existencia o aplicación sino que, por el contrario, sufrieron un episodio de inestabilidad y de ruptura. Esto hace que, desde el punto de vista de la historia del derecho, el periodo que nos ocupa no revista un claro interés a no ser que se busque enfocarlo como una coyuntura que, aunque austera en producción, muestra la forma cómo la sociedad y el derecho afrontaron una crisis y lograron encontrar las maneras de salir de ella.

Se puede conjeturar mucho sobre las razones por las que la historiografía nacional no ha profundizado en la ocupación de la ciudad capital, a comparación de otros episodios de la Guerra incluso menos dolorosos, o por las que ni siquiera menciona lo que ocurrió con uno de los tres poderes constituidos del Estado Peruano. Lo cierto, si es que podemos encontrar algún argumento en razón de paliativo, es que respecto a la actuación del Poder Judicial durante esos años no se encontrarían hechos sino, por el contrario, omisiones. Como veremos en este capítulo, la actuación del Poder Judicial durante la ocupación está marcada por su decisión de no haber reanudado sus labores y sus principales actuaciones fueron sus negativas y el hecho de no haber vuelto a la vida pública sino hasta terminada la ocupación.

Esa ausencia de participación puede resultar una explicación más directa de los motivos por los que las referencias historiográficas son más bien escasas sin perjuicio de que los estudios relativos a la historia del Poder Judicial peruano son, de por sí, reducidos.

Ante este panorama inicial, consideramos necesario ubicarnos históricamente y luego narrar con el mayor detalle posible los mencionados actos del Poder Judicial para

poder apreciar que, a pesar de ser éstos escasos y principalmente omisivos, se pueden rescatar importantes ideas respecto de la concepción que ese poder estatal tenía sobre la naturaleza de su labor y el sustento de su autoridad.

### **Subcapítulo 1: Antecedentes Históricos**

El punto inicial al que debemos remontarnos en este breve repaso de los hechos históricos acaecidos durante la Guerra con Chile es el 7 de junio de 1880. En aquel infausto día se libró la Batalla de Arica que, con derrota peruana, marcó el final de la posesión efectiva del Perú sobre el departamento sureño de Tarapacá. Luego de esta derrota el ejército efectivo peruano se replegó hasta la ciudad capital mientras que la maquinaria bélica chilena se dedicó a una actividad destinada a arruinar aún más al Perú. La destrucción de los puertos norteños del país y sus incipientes riquezas industriales llevada a cabo por la expedición del chileno Patricio Lynch, llevó la realidad de la guerra a zonas del país en las que antes no pasaba de ser una mala noticia. Esta expedición, que tenía como objetivo consolidar la debilitación de la economía peruana, se llevó a cabo durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 1880.

Durante esta etapa, el gobierno chileno preparó el último movimiento que pondría fin a este conflicto y que marcaría su incontestable victoria: la ocupación de la ciudad capital. En el desarrollo de esos planes, el 20 de noviembre de 1880 se produjo el desembarco de la primera división del ejército chileno en la localidad de Chilca, setenta kilómetros al sur de Lima. Esta acción de desembarco fue realizada con total tranquilidad y absoluta libertad de acción por parte del ejército chileno debido al nulo poder de defensa marítima peruana y a la escasa presencia de fuerzas nacionales en los territorios que actualmente corresponderían a la provincia limeña de Cañete y a las provincias iqueñas de Pisco y Chincha.

Tanto este primer desembarco como el que se realizó el día 22 de ese mismo mes en la localidad de Curayacu (actual distrito limeño de San Bartolo), marcaron el ingreso a territorio peruano del grueso del ejército invasor. A este contingente se fueron sumando en las siguientes semanas aquellas tropas chilenas que con anterioridad ya se encontraban en la costa sur medio del país (localidades de Pisco y Chincha) y las huestes que, bajo el mando de Lynch, habían destrozado los principales puertos de la costa norte.

El desembarco realizado en Curayacu tuvo la protección del grueso de la escuadra chilena la misma que, luego de esta maniobra, se dirigió al puerto del Callao a reanudar un bloqueo que ya se había llevado a cabo en fechas anteriores. Con estos actos se iniciaron las acciones que, según la estrategia chilena, conducirían a “asfixiar” a la ciudad capital y apurar un definitivo desenlace de la guerra.

Estando los chilenos ya en las cercanías de la capital, desde el mes de diciembre de 1880 se dieron algunas escaramuzas entre pequeños contingentes peruanos y las patrullas de avanzada del invasor. Los combates de Yerba Buena (Cañete), Bujama (Mala), Manzano (Cañete) y La Rinconada (Ate) fueron enfrentamientos de poca relevancia siendo que las acciones militares determinantes fueron las batallas de San Juan y de Miraflores.

Con la presencia de las huestes invasoras en los territorios señalados, la ciudad capital vivía ya un clima de guerra y preocupación ante la inminente marcha hacia Lima que realizarían las tropas chilenas. Ello motivó la variación de las actividades usuales y que la población en general empezara a prepararse para el combate. Así, se formaron las compañías de reservas compuestas por obreros y estudiantes con la consiguiente suspensión de sus actividades respectivas y, días antes de las batallas de San Juan y Miraflores, gran parte de los habitantes limeños, principalmente hombres de edades entre 15 y 40 años, se encontraban acantonados en los prados de Lobatón, actual distrito limeño de Lince.

Las batallas de San Juan, el 13 de enero de 1881, y de Miraflores, el 15 de enero de 1881, marcaron la derrota definitiva del ejército profesional peruano y el aniquilamiento de las fuerzas de defensa de la ciudad capital. Ante esa situación, el Dictador Nicolás de Piérola tomó rumbo a Canta para intentar una resistencia en la sierra que nunca llegó a cuajar y quedó en Lima, como única autoridad visible, el alcalde de la ciudad don Rufino Torrico.

En las horas previas al ingreso del ejército chileno, Lima vivió horas de permanente agitación. La destrucción que se había hecho la víspera a los poblados de Miraflores y Chorrillos – saqueos, incendios, pillaje y latrocinio por parte de los invasores – causó la desesperación de la población que abandonaba sus casas para buscar refugio en colegios, conventos y poblados del norte de la ciudad como el puerto de Ancón. A este



movimiento de la población se sumaría, una vez consumadas las derrotas, el regreso en desbande de los soldados y reservistas sobrevivientes. La exaltación de los ánimos y la humillación de la derrota hicieron que la ciudad sea escenario de represalias contra algunas minorías, como los chinos, y el caos reinante facilitó las cosas para que algunos bandidos pudieran cometer pillaje. El desgobierno se apoderó de la ciudad y los disturbios se iniciaron en la tarde del mismo 15 de enero luego de que la derrota en la Batalla de Miraflores se mostrara inminente.

Recién a la madrugada del día 17 de enero, el alcalde junto con brigadas de seguridad conformadas principalmente por extranjeros residentes, logró pacificar la ciudad y disponer las cautelas básicas para que el ingreso del invasor no registre incidentes, como no los registró.

Ese día 17 de enero de 1881, aproximadamente a las cinco de la tarde, la Ciudad de los Reyes, Lima, la que fuera primera capital del subcontinente y la hasta entonces más lujosa y principal urbe de la Sudamérica española, recibió a las tropas chilenas que la ocuparían durante los próximos tres años.

### **Subcapítulo 2: Primeras relaciones entre la autoridad invasora y el Poder Judicial.**

El primer jefe invasor que tuvo la facultad de gobernar la ciudad fue el oficial chileno Cornelio Saavedra, nieto del prócer argentino homónimo, quien buscó principalmente la seguridad de las tropas invasoras y la reanudación, en la medida de lo posible, de las actividades habituales en la ciudad de Lima.

Entre las primeras comunicaciones dirigidas por este militar, los Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia del Perú recogen un oficio que, a tan sólo tres días del inicio de la ocupación, fue dirigido al señor Antonio Arenas, Presidente de la Corte Superior de Lima<sup>166</sup>. Saavedra envió esta comunicación a Arenas pensando que él era el Presidente del Tribunal Supremo. Ello le obligó, una vez consciente de su error, a enviar copia del oficio al doctor Juan Antonio Ribeyro, Presidente de la Corte Suprema. En esa comunicación Saavedra invita al Presidente de este poder del Estado a reasumir sus funciones ya que constituía un importante interés de la

---

<sup>166</sup> AHUMADA MORENO, Pascual. *Guerra del Pacífico. Tomo V*. Santiago de Chile: Andrés Bello, reimpresión 1982. Página 118.

autoridad chilena el que se restablezca el régimen normal de todos los servicios públicos.

*“Jefatura civil.*

*Habiéndome manifestado que el señor doctor don Antonio Arenas era presidente del Supremo Tribunal de justicia, dirigí con esta fecha, al expresado señor Arenas, el oficio que copio a continuación:*

*Lima, enero 20 de 1881*

*Encontrándose animado mi Gobierno del firme propósito de que en el territorio ocupado por las armas chilenas no sufran, en cuanto sea posible, perturbación alguna los diversos servicios públicos, y de que cuanto antes se restablezca el régimen normal en la ciudad, debo, en mi carácter de representante de la autoridad chilena, contraer mis esfuerzos a la realización de ese propósito.*

*Entre estos servicios, uno de los más importantes es el de la administración de justicia y, por consiguiente, su pronta reorganización interesa a los ciudadanos muy vivamente; y confiado en que US. participará de estos mismos deseos, he resuelto invitar a US., como el representante del más alto de los poderes judiciales, a que, reasumiendo sus poderes de juez, procure que las demás personas a quienes estaba confiado este servicio vuelvan a sus puestos y abran al público las puertas de sus juzgados.*

*Sin la cooperación de un elevado funcionario, no sería posible al que suscribe dar a la administración de justicia la reorganización que requieren los altos intereses que están bajo su custodia, y que exigen que su despacho no se retarde más tiempo sin que sea debidamente atendido.*

*Dios guarde a US.*

*Cornelio Saavedra*

*Al señor don Antonio Arenas, Presidente de la Corte Superior de Justicia.*

*Lo que tengo el honor de comunicar a US., esperando que se servirá por su parte hacer todo lo posible para alcanzar los fines que se persiguen en la nota que dejo transcrita.*

*Dios guarde a US.*

*Cornelio Saavedra.*

*Al señor Dr. D. Juan A. Ribeyro, Presidente de la Corte Suprema de Justicia<sup>167</sup>.*

Ante esta comunicación, los vocales de la Corte Suprema se reunieron al día siguiente y debatieron sobre la respuesta que iban a brindar a la misma levantando un acta de esa reunión.

---

<sup>167</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. *Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia. 1880-1887. Tomo 4.* Lima: Imprenta La Industria, 1911. página 523 - 524.

*“En Lima a los veintiún días del mes de enero de mil ochocientos ochenta y uno, reunida la Excelentísima Corte Suprema con los señores que al margen se expresan y bajo la presidencia del señor doctor don Juan Antonio Ribeyro, se dio cuenta de un oficio dirigido al señor Presidente por el General del ejército chileno don Cornelio Saavedra con el objeto de que se procediera a la reinstalación de los Tribunales de Justicia, a fin de que no sufran perturbación de ninguna especie los intereses encomendados a su custodia; y se acordó se contestase haciéndole presente que estando en vacaciones toda la magistratura judicial de la República en virtud de las leyes del país, no era posible, después de la clausura solemne realizada el 24 de diciembre último, alterar el orden establecido, con lo cual concluyó el acuerdo y para su constancia se extiende la presente acta, de que certifico.*

*Ribeyro-Muñoz-Sánchez-Morales-La Rosa*

*Juan E. Lama*<sup>168</sup>.

Tal como era previsible, la respuesta del Presidente de la Corte Suprema fue redactada en los términos incorporados a esta acta y suscrita además por los vocales supremos que, además del Presidente de la Corte Suprema Juan Antonio Ribeyro, estuvieron presentes en dicha reunión: los doctores Bernardo Muñoz, José Eusebio Sánchez, y Manuel Morales, así como el Fiscal Teodoro La Rosa, y autorizada también por el secretario Juan E. Lama. Faltaron a dicha cita los vocales Melchor Vidaurre y Juan Oviedo.

El texto de dicha comunicación es recogida por el chileno Pascual Ahumada en su obra recopilatoria de la Guerra del Pacífico:

*“Corte Suprema de Justicia*

*Lima, Enero 21 de 1881.*

*Señor General:*

*La Corte Suprema que presido, instruida del oficio de US. fecha de ayer, ha acordado se conteste a la invitación que se me hace para la reinstalación de los tribunales de justicia: que estando en vacación toda la magistratura judicial de la República, en virtud de las leyes del país, no será posible, después de su clausura solemne realizada el 24 de Diciembre último, alterar el orden establecido.*

*Dios guarde a US.*

*Juan Antonio Ribeyro*

*Al señor General del ejército chileno don Cornelio Saavedra*<sup>169</sup>.

<sup>168</sup> *Ibíd.*, página 524.

Respecto a esta contestación debemos señalar que, tal como mencionamos en el capítulo anterior, el 23 de marzo de 1880 el gobierno dictatorial de Nicolás de Piérola emitió un decreto<sup>170</sup> que, en pos de procurar un mejor descanso en los jueces que garantice a su vez un mejor servicio, aumentó el periodo vacacional del Poder Judicial. Antes de que dicho decreto fuera expedido, las vacaciones judiciales estaban reguladas por la Ley del 1 de diciembre de 1874<sup>171</sup> que establecía siete semanas de vacaciones entre los meses de febrero y abril. En su decreto, Piérola modifica lo regulado y establece que el inicio de las vacaciones sería el último día de trabajo de diciembre y la apertura solemne del año judicial se haría el primer día de trabajo posterior al 13 de marzo.

Comparando lo estipulado por esta norma y lo expuesto por los vocales de la Corte Suprema podemos concluir que, a la fecha de la comunicación del oficial chileno, efectivamente el Poder Judicial se encontraba durante su periodo vacacional que, de conformidad con la respuesta de Ribeyro, se había iniciado el día viernes 24 de diciembre de 1880 y que, en condiciones normales regidas con las normas vigentes al momento de la ocupación, debería durar hasta el día lunes 14 de marzo de 1881, primer día laborable posterior al 13 de marzo.

La respuesta presentada por la Corte Suprema a la autoridad invasora resultaba, entonces, formalmente ajustada a las leyes que estuvieron vigentes en el país al momento de la ocupación de la ciudad. Eso hizo que constituyera una razón con suficiente sustento jurídico que les permitiese rehuir esa primera invitación. Esta actitud, así vista, resulta coherente con el espíritu que la población limeña tenía en aquellos primeros días de ocupación, espíritu de una rebelión pasiva frente al invasor consistente en una negativa a colaborar en forma alguna con sus disposiciones. Sin embargo, tal como veremos a continuación, la debilidad argumentativa de esta razón jurídica obligó que el Supremo Tribunal Judicial del país tenga que robustecerla posteriormente.

---

<sup>169</sup> AHUMADA, op. cit., página 118

<sup>170</sup> Decreto del 23 de marzo de 1880

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1880039.pdf>).

<sup>171</sup> Ley del 1 de diciembre de 1874

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1874029.pdf>).

Tres días después de esta primera respuesta, la Corte Suprema recibió una comunicación de Nicolás de Piérola por intermedio de su Secretario General Aurelio García y García. Esta comunicación motivó una nueva reunión de este colegiado y un nuevo pronunciamiento.

*“En Lima a los veinticuatro días del mes de enero de mil ochocientos ochenta y uno, reunida en sala plena la Excelentísima Corte Suprema con los señores que al margen se expresan y bajo la presidencia del señor doctor don Juan Antonio Ribeyro, se dio lectura por el secretario que suscribe a un oficio fechado en Canta el 19 del corriente, dirigido al señor Presidente por el Secretario general de S.E. el Jefe Supremo de la República, Capitán de Navío don Aurelio García y García, acompañándole copia auténtica de los siguientes decretos: de uno nombrando a dicho señor García, Secretario General encargado del despacho de los distintos ramos de la administración, autorizado por el señor Secretario de Hacienda; de otro creando dos jefaturas políticas y militares, una para los departamentos del norte y otra para los del centro de la República, con las mismas funciones señaladas a la Jefatura política y militar del Sur en el decreto de su creación; y finalmente otro en el que se nombra jefe político y militar de los departamentos del norte al contralmirante don Lizardo Montero y de los del Centro al coronel don Juan Martín Echenique, y diciéndole dé conocimiento oficial de ellos a todas las cortes de justicia y por intermedio de éstas a los juzgados de la República. Le dice al mismo tiempo que en cuanto a las nuevas labores de los tribunales concluido que sea el punto, deben continuar en receso en todos los lugares ocupados por fuerzas enemigas y mientras tal ocupación subsista. Instruida la Excelentísima Corte Suprema de dicho oficio y de los decretos a que se refiere: dispuso se transcribiese el oficio y remitiese copia autorizada de los decretos a las Cortes Superiores de la República. Con lo cual concluyó el acuerdo y para su constancia se extiende la presente acta, de que certifico.*

*Ribeyro-Muñoz-Vidaurre-Oviedo-Sánchez-Morales-La Rosa-Cárdenas.*

*Juan E. Lama*<sup>172</sup>.

Como puede apreciarse, la comunicación contenía una orden directa de Piérola en el sentido de que no se reinstauren los servicios judiciales en todos los territorios ocupados. No hay forma de saber si días antes, cuando se envió la primera contestación al oficial invasor, los vocales de la Corte Suprema conocían dicha instrucción pero lo cierto es que se encuentra una sorprendente homogeneidad entre la respuesta dada y la instrucción posteriormente recibida. Debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que la instrucción de Piérola no menciona el periodo vacacional como motivo de la suspensión sino que, más bien, instruye a una abstención total como medida de resistencia ante el invasor. Instrucción, por lo demás, coherente con la idea que Piérola tenía del estado de la guerra sobre la que opinaba por su continuación

<sup>172</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, op. cit., páginas 526-527



hasta que el país se vea libre. Más allá de ello, se aprecia que las disposiciones de la Corte Suprema son de acatar dicha instrucción y disponer su inmediata comunicación a las cortes superiores y juzgados cumpliendo así con los encargos recibidos por parte del Dictador. De ello podemos concluir válidamente que a dicha fecha, 24 de enero de 1881, la conciencia de la Corte Suprema era reconocer como mandatario y Jefe del Gobierno a Nicolás de Piérola por más que la capital se encontraba ocupada y que el caudillo estuviese adentrado en la serranía.

En los días siguientes, la autoridad chilena busco reiterar su invitación para lo cual utilizó como intermediario al Alcalde de Lima, Rufino Torrico, quien cursó nuevos oficios a la Corte Suprema convocándola a asumir sus funciones. Tanto la comunicación como el acta de la reunión que la Corte Suprema celebró para atenderla fueron rescatadas por los Anales Judiciales de ese Tribunal.

*“En Lima a los tres días del mes de febrero de mil ochocientos ochenta y uno, reunida la Excelentísima Corte Suprema con los señores que al margen se expresan, expuso su presidente el señor don Juan Antonio Ribeyro, que el objeto de la reunión era dar cuenta del oficio cuyo tenor literal es el siguiente:*

*Municipalidad de Lima  
Alcaldía*

*Lima, febrero 2 de 1881.*

*Señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia.*

*Las apremiantes circunstancias en que se encuentra esta Capital y Callao y los suburbios, y los hechos que progresivamente las complican de un modo alarmante, exigen imperiosamente la reunión de una gran asamblea de todas las corporaciones y principales personas de las profesiones, comercio e industria a fin de que estén representadas en ella todas las clases sociales.*

*A la penetración de US. no puede ocultarse el imperio de esa exigencia y que el retraimiento de acudir a ella acusaría en las personas ilustradas muy punible debilidad o indolente egoísmo que se transluciría en trascendental falta de patriotismo.*

*Por tales consideraciones la Honorable Municipalidad ha acordado tomar la iniciativa en asunto de tan vital importancia y convocar a las personas indicadas para el domingo seis de los corrientes a las doce del día, en el local de la Cámara de Diputados; y en consecuencia tengo la honra de invitar a US. y a todas las personas que componen el Honorable Poder Judicial, a quienes se servirá US. hacer citar, esperando de su ilustración y patriotismo que concurrirán indefectiblemente.*

*Dios guarde a US.*

*R. Torrico.*

*Concluida la lectura del anterior documento, el señor Presidente manifestó: que había convocado a los señores vocales y fiscales del Tribunal Supremo para acordar lo que fuese conveniente sobre una materia delicada y grave por su naturaleza misma y por su forma e indicó, que si bien las circunstancias eran difíciles, la resolución que se adoptase por la Corte tenía que ser de conformidad con las leyes que determinan su independencia en el ejercicio de sus funciones judiciales, en armonía con sus antecedentes, siempre extraños a los negocios políticos, y consultando los respetos que se debe a la altísima institución que presenta la magistratura. Todos los señores tomaron sucesivamente y por su orden la palabra e ilustraron un punto que por lo mismo de su trascendencia tanto en el orden social, como en el político y administrativo, debía ser tranquilamente madurado, para acertar en el acuerdo que se trataba de celebrar, y no comprometer el crédito de un cuerpo, que había, por su circunspección, conquistado ya una reputación histórica. Concluida la discusión y expresado su opinión cada uno de los señores se acordó por unanimidad: 1° No reconocer en el alcalde municipal facultad para dirigirse al Tribunal Supremo invitándolo para una reunión de carácter político, cuyo principal objeto es intervenir directamente en los destinos ulteriores de la República. La misión de los ayuntamientos, si bien en casos determinados y excepcionales, puede asumir un papel importante en lo que atañe al orden de la localidad, no debe extenderse hasta el punto de llamar a la Corte Suprema para deliberar sobre materias enteramente políticas, encargadas a otros poderes conforme a los principios mas incontestables del Derecho Constitucional; 2° No asistir a la asamblea que debe reunirse el 6 de los corrientes, porque tal acto implicaría en la Corte, una injerencia manifiesta en cuestiones en las que jamás debe tomar participación, por cuanto se rozan con intereses distintos de los que corresponden al Poder Judicial encargado exclusivamente de la administración de justicia. La prestación espontánea de un día para actos de este género fijaría para el porvenir un ejemplo que no disculparía nunca ni la gravedad ni lo crítico de las circunstancias. Los países se salvan con el cumplimiento de las leyes limitándose los poderes públicos a sólo el ejercicio de sus peculiares atribuciones y deberes; y 3° que se excuse contestar el oficio del Señor Alcalde, concebido en términos no solamente imperativos y hasta cierto punto conminatorios, sino ofensivos a la dignidad y respeto del Tribunal Supremo, con alusiones y frases que, vertidas contra una corporación respetable en las regiones oficiales, bien merecían ser respondidas de la manera que cumpliría hacerlo en otros momentos menos angustiados para contener desafueros y desacatos, quizás inferidos sin voluntad y solo por un exceso de patriotismo e interés público. Así concluido el acuerdo, se extendió la presente acta que firmaron para su constancia debida todos los señores Vocales y el señor Presidente que lo celebraron.*

*Ribeyro-Muñoz-Vidaurre-Oviedo-Sánchez-Morales-Cárdenas.*

*Juan E. Lama*<sup>173</sup>.

En efecto, la comunicación del Alcalde lleva una redacción que podría tomarse como carente de la ceremonia en las formas que usualmente llevaban las comunicaciones dirigidas al Tribunal Supremo. Sin embargo, a la luz de los antecedentes, esta

---

<sup>173</sup> *Ibíd.*, páginas 527-530.

respuesta de la Corte Suprema aparece más como una hábil evasión para evitar participar en un movimiento que, llevado a cabo por presión directa de las autoridades invasoras, podría comprometer al Poder Judicial. Máxime aun cuando a estas alturas ellos ya habían manifestado su compromiso a respetar las instrucciones dadas por Piérola.

En ese sentido, si bien en el acta se hacen referencia a motivos mucho más teóricos como los referidos al papel del Poder Judicial en una coyuntura como la que se vivía, diera la impresión que la instrucción dada por el Dictador tiene mucho que ver en la decisión de la Corte y, sobre todo, en la decisión de ni siquiera responder la carta del Alcalde de Lima. No obstante ello, tal como se irá viendo a lo largo de este capítulo, en esta temprana acta ya se pueden advertir las bases de lo que serán los motivos finales que la Corte Suprema expondrá como sustento de su comportamiento. Ello nos podría dar lugar a entender que dichos motivos ulteriores no fueron elaborados ante la cercanía del momento en que se tuvieron que exponer sino que respondían a un razonamiento que, desde estos primeros momentos, ya iba tomando forma en la opinión de los vocales de la Corte Suprema.

El Alcalde Rufino Torrico, que terminó siendo la única autoridad visible en la ciudad con quien los chilenos podían realizar cualquier tipo de coordinación, no recibió ninguna comunicación de la Corte Suprema pero la cadena de documentos permite inferir que sí conoció de la negativa de la Corte Suprema. En efecto, tres días después de enviado el oficio a la Corte Suprema, y dos desde que ésta se reunió para discutirlo, Torrico envió un nuevo oficio pero esta vez a la Corte Superior de Lima.

El tenor de esta comunicación fue, en líneas generales el mismo que el anterior, sólo que se cambió la apelación a las terribles situaciones y al patriotismo de los funcionarios por las órdenes y deseos del jefe político invasor.

*“Municipalidad de Lima  
Alcaldía*

*Lima, 5 de febrero de 1881.*

*Señor Presidente de la Ilustrísima Corte Superior de este Distrito.  
Con fecha de hoy me dice el señor General Jefe Político de esta capital, lo que sigue:*

*“La necesidad de que el Poder judicial continúe ejerciendo sus funciones en esta ciudad en la forma señalada y prescrita por las leyes del Perú, se hace sentir más y más a cada momento.*

*Hasta la fecha van corridos muchos días, sin que haya sido posible, según se me dice, que el juez en lo criminal, que, no dudo, debe en toda época ejercer sus funciones, aunque los Tribunales permanezcan en vacaciones, despache y conozca de nulidades, de asuntos y reclamaciones que son de su jurisdicción.*

*Como US. no dejará de comprender y como más de una vez lo he hecho presente a US., verbalmente, la autoridad militar no querría inmiscuirse en el conocimiento de asuntos que forzosamente tendría que sujetar bajo el imperio de la ley marcial. Toda libertad de acción se ha dejado a los tribunales del país, toda garantía se les ofrece, y sería de pesar, señor Alcalde, que los honorables señores que desempeñaran la magistratura, inspirados en sentimientos de elevado patriotismo, sobre todo en estas circunstancias, continuaran en sus tareas, hoy más que nunca necesarias, en bien de los intereses de sus mismos nacionales. En esta emergencia, me dirijo a US. esperando tenga a bien recabar de los señores jueces a quienes corresponda, una determinación precisa sobre este particular a fin de acordar en caso de negativa, lo que no espero, la medida que la situación requiera.*

*Agradecerá a US. se sirva darme una contestación tan pronto como le sea posible”.*

*Lo que transcribo a US., esperando su inmediata contestación.*

*Dejo al ilustrado criterio de US. La apreciación del asunto a que se refiere este oficio, cuya importancia y trascendencia para el país no dejará de reconocer US.*

*Dios guarde a US.*

*R. Torrico”<sup>174</sup>.*

En esta comunicación se puede advertir la impaciencia que empezaba a embargar al invasor quien veía que, de entre todas las gestiones que llevaba adelante, la relativa a la administración de justicia no mostraba ningún signo de resolverse conforme a sus intereses. Esta impaciencia se reflejaba en la amenaza del recurso a la ley marcial como consecuencia de la falta de reacción del Poder Judicial. También se la advierte en su decisión de dejar de entenderse con los vocales supremos y enfocar la presión a la Corte Superior con la esperanza de que ésta pueda ser más permeable.

Sin embargo, el tenor de la carta chilena marcó su propia debilidad y es que en ella no se exigía el reinicio de todas las acciones judiciales sino que solamente se llamó la atención ante el hecho de que no existía ningún despacho judicial abierto con capacidad de hacerse cargo de las diligencias más urgentes que se generen. Basado en su entendimiento del derecho chileno, Saavedra entendía que debía haber, cuando menos, un juzgado criminal que se encargue de esas eventualidades asumiendo que,

---

<sup>174</sup> *Ibíd.*, páginas 530-532.



tal como le comunicó la Corte Suprema en un inicio, el Poder Judicial se encontraba en periodo de vacaciones.

Esta inquietud dio la posibilidad para que la Corte Superior, seguramente ya instruida de las órdenes de Piérola, sin salirse de la normatividad vigente pudiera dar una respuesta a Saavedra que resultaría, a la postre, tan abstracta y gaseosa como una negativa. Esta salida fue la mención a los juzgados y salas de vacaciones.

*“Lima, Febrero 9 de 1881.*

*Señor General jefe político de la plaza:*

*En contestación al apreciable oficio de US., relativo a la necesidad de que no se paralice la administración de justicia, me es honroso decir a US. que en esta fecha he recibido el oficio del señor Presidente de la Ilustrísima Corte Superior en que me comunica que desde el día de mañana continuarán administrando justicia los señores vocales de la sala de vacaciones y el juez de primera instancia designado para el mismo objeto.*

*Dios guarde a US.*

*R. Torrico*<sup>175</sup>.

Esta sala y juzgado de vacaciones a que hace mención Torrico fueron dos órganos jurisdiccionales creados también por medio del decreto de fecha 23 de marzo de 1880 que mencionamos anteriormente y que, según el mismo, tenían como finalidad el de administrar justicia en la ciudad de Lima durante el periodo vacacional encargándose de *“las diligencias graves y urgentes (...) y las de la misma naturaleza que ocurran durante las vacaciones así como para despachar las causas criminales de oficio”*<sup>176</sup>.

Sin embargo, como se puede apreciar de la citada norma, si bien regulaba la existencia de esos órganos judiciales, no establecía quiénes eran ni cómo se elegirían dichos jueces y vocales. Si bien se podría afirmar que es un hecho posible, aunque poco probable, que en febrero de 1881 la Corte Superior habría tomado alguna disposición para determinar qué jueces y vocales desempeñarían ese cargo, lo cierto es que, tal como veremos en el capítulo siguiente, no existe ningún documento que acredite esa afirmación. Por lo pronto, hasta antes de la ocupación, no existió ninguna norma que aclare este tema y es previsible que desde la clausura del año judicial el 24

<sup>175</sup> AHUMADA, op. cit., página 118

<sup>176</sup> Artículos 3° y 4° del Decreto del 23 de marzo de 1880

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1880039.pdf>).



de diciembre de 1880, hasta ese momento, ni la Corte Suprema ni mucho menos el Dictador hayan determinado la forma de funcionamiento de esas cortes de vacaciones.

Estamos pues ante una respuesta que, al hacer mención a una figura aún no implementada, constituyó una adicional evasiva ante los esfuerzos de los invasores para lograr regularizar la administración de justicia en Lima.

Saavedra debió entender esta situación y ello motivó la intervención de Manuel Baquedano, General en Jefe del Ejército Chileno en Lima, que desde el inicio de la ocupación ejercía el máximo cargo de gobierno de los territorios invadidos. Ese mismo día 9 de febrero de 1881, imaginamos que tras recibir la carta de Torrico informándole la repuesta de la Corte Superior de Lima, se emitió el bando decretando el imperio de la ley marcial para la ciudad de Lima y El Callao y, en consecuencia, el avocamiento del ejército chileno al conocimiento de delitos y causas civiles que ocurran durante la ocupación.

Ahumada recoge el texto del bando:

*“Ley Marcial y Contribución de Guerra a Lima y El Callao*

*Manuel Baquedano, General de División y en Jefe del Ejército de Chile.*

*Por cuanto con esta fecha he decretado lo que sigue:  
Considerando:*

- 1. Que en los días transcurridos desde la ocupación de esta ciudad por las fuerzas del ejército chileno no se han iniciado negociaciones de paz;*
- 2. Que el gobierno de la dictadura pretende prolongar la resistencia armada del Perú, cuando es notorio que le faltan todos los elementos que pudieran darle apariencias de seriedad;*
- 3. Que no se ha constituido ni hay indicio de que se constituirá pronto otro gobierno con el cual pudiera entenderse el de Chile para poner término a la guerra;*
- 4. Que la ocupación del territorio enemigo por un ejército vencedor da a este derechos que no han querido usar hasta ahora las autoridades militares chilenas porque esperaban que una conducta moderada y benévola inclinaría los ánimos de los habitantes del país a no agravar con resistencias inútiles los males de la situación;*
- 5. Que no es posible prolongar sin fruto por más largo tiempo este periodo de expectativa:*

*Decreto:*

*Art. 1° Desde esta fecha quedan sujetas a la ley marcial las ciudades de Lima y del Callao, los territorios circunvecinos y todos los demás a que se extiende actualmente o se extienda más tarde la ocupación militar.*

*Art. 2° Los tribunales militares que se constituyan con arreglo a este decreto, sólo darán sentencias verbales.*

*Art. 3° Fuera de la contribución de guerra que se impondrá oportunamente a las ciudades de Lima y el Callao, se procederá desde luego, por las autoridades que para ello se nombren, a hacer efectivo el pago en dinero o especies de las sumas necesarias para alimentar al ejército de ocupación. Mensualmente se determinará la suma que cada contribuyente debe pagar con este objeto.*

*Anótese, comuníquese y publíquese.*

*Por tanto, para que llegue a conocimiento de todos, publíquese por bando y por carteles, que se fijarán en los lugares más públicos de esta ciudad y del Callao.*

*Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima, a 9 de Febrero de 1881.*

*Manuel Baquedano.*

*Máximo R. Lira,  
Secretario General<sup>177</sup>*

Obran en los Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia la comunicación dirigida por Cornelio Saavedra a Rufino Torrico informándole del establecimiento de la ley marcial y haciendo inusual mención a la hora en que se recibió el oficio que contenía la respuesta de la Corte Superior.

*“Jefatura Política  
Ejército Chileno*

*Lima, 10 de febrero de 1881.*

*Impuesto de su atenta comunicación, fecha de ayer, recibida a las 7 pm., debo decir a US. que el conocimiento de todos los delitos o faltas que se cometan, quedan sujetos a los tribunales militares, a contar desde el 9 del actual, en conformidad al bando expedido por el señor General en Jefe del Ejército, que adjunto a US. por separado, y que declara bajo el imperio de la ley marcial la ciudad de Lima y los territorios que en él se expresan.*

*Por lo que respecta al conocimiento de los delitos y demás causas iniciadas con anterioridad a dicho bando, la acción de los Tribunales queda expedita para proseguir en conocimiento de ellos.*

*Dios guarde a US.*

*Cornelio Saavedra.*

*Al señor alcalde de la Municipalidad de Lima<sup>178</sup>*

Esta comunicación refuerza la idea de que fue la respuesta de la Corte Superior de Lima, llegada en horas inusuales para las comunicaciones en aquellos años y

<sup>177</sup> AHUMADA, op. cit., página 122.

<sup>178</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, op. cit., página 532.

conteniendo la respuesta evasiva que comentamos anteriormente, la que terminó con la paciencia de los invasores y motivó la expedición de la ley marcial. Inclusive la mención de la hora en que se recibió la comunicación constituye una práctica poco usual que habría sido incluida en esta comunicación como una suerte de reproche de parte del invasor que quería hacer notar al Alcalde que la demora en la respuesta tuvo mucho que ver con la implantación de este régimen.

Al día siguiente, 10 de febrero, se expidieron todos los documentos necesarios para hacer efectiva la vigencia de la ley marcial. Ahumada recoge el decreto expedido por Baquedano con los nombres de los oficiales chilenos que fueron nombrados para integrar el tribunal militar que aplicaría la ley marcial:

*“Tribunales Militares.*

*Lima, Febrero 10 de 1881.*

*He acordado y decreto:*

*Nómbrese miembros del tribunal militar que debe constituirse con arreglo al decreto de ayer, al coronel don José Antonio Bustamante, al comandante del Regimiento Buin 1° de línea don Juan León García y al comandante del Batallón Bulnes don José Echeverría.*

*Anótese y comuníquese.*

*Manuel Baquedano*<sup>179</sup>.

Se destaca también un decreto firmado por Patricio Lynch, quien en un inicio había sido nombrado como Jefe Militar del Puerto del Callao, en el que se acata lo decretado por Baquedano:

*“Patricio Lynch, Capitán de navío, Comandante en Jefe de la 1° División del Ejército de Chile, Jefe político y militar del Callao, etc.*

*Por cuanto con esta fecha he decretado lo que sigue:*

*Núm. 75.- Teniendo presente lo dispuesto por el señor General en Jefe, en decreto de 9 del que rige, sobre la creación de tribunales militares en las ciudades de Lima y el Callao, para que conozcan verbalmente y sin sujeción a ley alguna, de los delitos y faltas que se cometan y de las contiendas que se susciten entre partes; y a virtud de la autorización que he recibido al efecto del señor General en Jefe,*

*Decreto:*

*Art. 1° Desde esta fecha en la ciudad del Callao y territorios circunvecinos, las personas que ejecutaren delitos o faltas estimadas tales por el derecho natural,*

<sup>179</sup> AHUMADA, op. cit., página 124.

*serán juzgadas, sin sujeción a ley alguna, por el tribunal militar que establece este decreto.*

*Art. 2° En igual forma conocerá dicho tribunal de las contiendas civiles o de comercio que se susciten entre partes i que sean sometidas a su fallo.*

*Art. 3° Formarán el expresado tribunal los tenientes coroneles don José Ramón Vidaurre y don Vicente Balmaceda y el capitán de fragata don Luis Pomar.*

*Art. 4° Los jefes nombrados, determinarán el modo y la forma de ejercer sus funciones, teniendo presente las instrucciones que con esta fecha les imparte esta Comandancia militar y política.*

*Por tanto, para que llegue a conocimiento de todos, publique por carteles, que se fijarán en los lugares más públicos de esta ciudad.*

*Dado en la Casa Prefectural, en el Callao, a 15 de Febrero de 1881”<sup>180</sup>.*

A pesar que todo daría a entender que el bando conteniendo la instauración de la ley marcial en Lima y El Callao fue producto de la contrariedad de los oficiales invasores, su texto muestra que no estamos ante un acto improvisado. Por el contrario, tanto los considerandos como los artículos de decisión muestran ser meditados y eso se condice con el hecho de que la amenaza de la instauración de este régimen ya había sido formulada hacía varios días. En efecto, ese bando hacía mención a una situación en particular que para los invasores tenía especial importancia y que era la ausencia de un poder establecido con el que pudieran negociar las condiciones de la rendición peruana. Ello porque, tal como manifiesta la historiografía peruana, luego de la invasión de la ciudad capital, Nicolás de Piérola enrumbo hacia la sierra con la intención, entendemos, de intentar establecer una resistencia. Sus periplos por las ciudades de Tarma, Jauja y Ayacucho se ven reflejados en las cartas que Ricardo Palma<sup>181</sup> le enviase durante esos días así como en varios otros documentos y comunicaciones que Pascual Ahumada recoge y recopila y que dan cuenta de los distintos actos de gobierno que Piérola intentó llevar adelante durante esas semanas.

Sin embargo, del texto de estas y otras comunicaciones cursadas por los invasores y recogidas por Ahumada, se desprende que estos deseaban una autoridad a la que no tuvieran que perseguir y por ello descartaron unilateralmente la calidad de Piérola como interlocutor válido. Ello constituía un acto contrario al mismo derecho internacional vigente aún en escenarios de guerra ya que, más allá de que el poder de Nicolás de Piérola se haya originado en un golpe de estado y no sea una personaje agradable para los chilenos, su reconocimiento como Jefe del Estado por parte de los

---

<sup>180</sup> *Ibíd.*, página 124 y 125.

<sup>181</sup> PALMA, Ricardo. *Cartas a Piérola: sobre la ocupación chilena de Lima*. Lima: Milla Bartres, 1979. Segunda Edición.

mismos peruanos era unánime y constituía una situación que los invasores no debían desconocer por más molestia que les causare. Ello no oculta el hecho de que, con el transcurso de los meses, el gobierno de Piérola terminó saliendo del foco y fue perdiendo poder hasta el punto de que ya no fue reconocido como líder, lo que motivó su renuncia en noviembre de 1881 y dio lugar a la asunción de otros caudillos. Un primer hito dentro de ese proceso lo constituye el Gobierno Provisorio de Francisco García Calderón.

Más de un año después, el 17 de mayo de 1882, Patricio Lynch – que desde el año anterior había sido nombrado como General en Jefe del ejército invasor en reemplazo de Manuel Baquedano - presentó al gobierno de Chile una memoria sobre sus actos de gobierno en los territorios ocupados<sup>182</sup>. En esta exposición se rescata un dato interesantísimo y que responde a la pregunta de por qué los chilenos no llevaron a cabo mayores medidas de compulsión para lograr la instalación de los juzgados. La explicación que brinda Lynch da a entender que ello no se debió a un respeto a los fueros soberanos del Perú por parte del gobierno invasor ni a una falta de interés respecto a este problema, sino a un tema meramente administrativo y económico. En efecto, Lynch reconoce que el gobierno invasor no obligó a los tribunales a reinstalarse “*pues al hacerlo habría tenido también que acordarles los sueldos e inmunidades de que gozan los magistrados judiciales*”<sup>183</sup>.

Lo que Chile quería en este primer momento era que se regularicen los servicios públicos sin que ello implique responsabilidad o costo alguno a su autoridad ni a su caja y que ni siquiera les genere la obligación de tener que brindar algún tipo de respaldo a los magistrados. Esta explicación no hace sino confirmar la pregunta que va formándose a medida que recopilamos estos hechos y que se cuestionan respecto del real carácter de una actividad jurisdiccional que los ocupantes querían que se reinstale. Una función jurisdiccional que debería realizar sus actividades sin contar con el respaldo de algún poder que garantice, en primer lugar, la seguridad de los magistrados ni tampoco, avanzando un poco más el razonamiento, el cumplimiento de las resoluciones que se expidan en su ejercicio.

---

<sup>182</sup> AHUMADA MORENO, Pascual. *Guerra del Pacífico. Tomo VII*. Santiago de Chile: Andrés Bello, reimpresión 1982. Páginas 111 – 145.

<sup>183</sup> *Ibíd.*, páginas 119.



Por lo pronto, en lo que respecta a las relaciones entre el Poder Judicial y los invasores, el decreto que dispuso el inicio de la ley marcial en Lima marcó el fin de un breve primer momento y es que, luego de ello, los chilenos renunciaron a tratar directamente con el Poder Judicial. Se dedicaron a impulsar la instauración de un gobierno provisorio que asumiría, entre otros temas, el relativo a la administración de justicia. Los chilenos debieron abrigar la esperanza que, en ese tema, el gobierno provisorio tuviera mejor suerte que ellos.

### **Subcapítulo 3.- Relaciones entre el Poder Judicial y el gobierno de Francisco García Calderón.**

La asunción al poder de Francisco García Calderón marca un evento de mucho interés en la historia peruana respecto del cual la doctora Margarita Guerra<sup>184</sup> realizó un completo estudio. Sin embargo, con miras a lo que es motivo del presente trabajo, consideramos necesario señalar que las circunstancias de su elección estuvieron marcadas, desde un inicio, por la presión de los invasores quienes buscaban tener un gobernante con quien realizar las negociaciones de la rendición peruana.

Esa triste paradoja generó muchas trabas en la labor que García Calderón quiso llevar adelante como Presidente Provisorio. Todas las obras que se ocupan de este personaje rescatan en él sus principales virtudes y su inmejorable intención de lograr una salida decorosa para el Perú. Sin embargo, la coyuntura política interna no permitió que sus contemporáneos lo tuvieran en tan alta estima.

Tal como señalamos en el subcapítulo anterior, durante las primeras semanas de la ocupación, tanto las autoridades locales – entre quienes contamos a los miembros de la Corte Suprema – como gran parte de la sociedad limeña reconocían aún la condición de Jefe Supremo de Nicolás de Piérola. Por eso, desde un primer momento, entendieron que la intención de García Calderón y las personas que lo postularon, convencieron y eligieron para ejercer el cargo de Presidente Provisorio configuraba más un caso de colaboracionismo que de patriotismo<sup>185</sup>. Margarita Guerra refleja esto señalando que *“sólo un sector de Lima confió en él y tanto los chilenos, como la mayor*

---

<sup>184</sup> GUERRA, op. cit.

<sup>185</sup> Ibíd., página 238.

*parte de los peruanos, creen que su actuación podrá ser totalmente controlada por los primeros (...)*<sup>186</sup>.

Ejemplo de esto son las menciones que Ricardo Palma hiciera sobre este proceso histórico. Palma fue un pierolista recalcitrante y su correspondencia no guarda objetividad en su apreciación de los hechos históricos. Sin embargo, ello no enerva su capacidad de constituirse en una guía válida para graficar, en base al suyo, el ánimo subjetivo que existía por entonces en la ciudad ocupada. Así, en su carta dirigida a Nicolás de Piérola del 4 de marzo de 1881 señala:

*“Antes de esta escaramuza y recelando que los chilenos se avinieran a entenderse con usted, enviaron cerca de ellos una comisión para inquirir si estarían dispuestos a negociar con el club salitrero. Los chilenos se regocijaron al saber que en Lima había hombres de fuste dispuestos a sembrar la anarquía y a aumentar con uno gordo la ya larga lista de escándalos. Prometieron mucho con la firme resolución de cumplir poco, y los revolucionarios se echaron a hacer propaganda en favor de don Francisco. (...) Proclamado ya García Calderón por los notables sin notabilidad, vino el primer conflicto grave: la organización de ministerio. Se empezó por brindar la cartera de gobierno a Rufino Torrico; pero éste contestó que siendo alcalde de una municipalidad nombrada por usted no podía mancharse con una traición”*<sup>187</sup>.

Un mes después, en su carta del 5 de abril de 1881 también dirigida a Nicolás de Piérola señalaría:

*“Hombres que por gratitud, ya que no por patriotismo, estaban obligados a ser leales para usted son hoy los más ruines cortesanos de García Calderón. (...) Todo estaba consumado para que la farsa calderoniana recibiera el golpe de gracia, cayendo en medio de rechifla popular y sin quemarse un grano de pólvora. Pero don Rufino y don Francisco se entendieron y la argolla salvó del conflicto.*

*(...)*

*Yo tengo íntima fe en que el pecador gobierno de la Magdalena desaparecerá muy pronto, sea porque los chilenos lo derrumben a puntapiés, sea porque la fuerza de los acontecimientos lo traiga a usted a Lima. (...)*

*Capítulo de otra cosa, García Calderón ha tenido en la última semana disentería de decretos, que han contribuido en mucho a acrecentar la impopularidad de su gobierno. Los chilenos mismos se burlan de este presidente provisorio que no puede ceñirse en Lima la banda bicolor, ni disponer de un alguacil y cuya jurisdicción no pasa del villorrio de la Magdalena, único punto en donde le toleran que pueda enarbolar pabellón. La*

<sup>186</sup> Ibíd., página 171.

<sup>187</sup> PALMA, op. cit., páginas 24-25.

*Actualidad, periódico chileno, no desperdicia oportunidad de mofarse de esos bellacos que creen o fingen creer que son gobierno, y gobierno serio”<sup>188</sup>.*

Lo cierto es que existió un interés de parte de los invasores para que se establezca un nuevo gobierno peruano. Al respecto, Margarita Guerra señala:

*“Las autoridades chilenas, en Lima, en aplicación de las directivas de Santiago inician, entonces, una intensa labor de “convencimiento” con la sociedad limeña, para conseguir la formación de un nuevo gobierno. En dicha persuasión emplean todos los medios a su alcance, entre los cuales las amenazas sobre el futuro de Lima si no se constituye una autoridad distinta de Piérola para tratar la paz, parecen haber sido las que ejercieron mayor presión sobre sus habitantes”<sup>189</sup>.*

Ese interés fue el que les llevó a realizar ciertas concesiones en el régimen de ocupación con la finalidad de que el nuevo gobierno pudiera constituirse. Así, todo se inició con un pedido expreso a la única autoridad visible en Lima, su alcalde Rufino Torrico, para que proceda a organizar una junta de vecinos notables en la que se pueda elegir un gobernante.

En efecto, a tan sólo tres días de iniciada la ocupación, Saavedra solicitó a Torrico que convoque a los vecinos de la capital para que procedan a elegir un nuevo gobernante. Ahumada recoge el oficio que Torrico envió a Saavedra, jefe militar de la plaza, dando cuenta de la primera reunión de esta naturaleza en la que se puede apreciar la legitimidad que en ese momento aún tenía el gobierno de Nicolás de Piérola:

*“Lima, Enero 20 de 1881.*

*Señor:*

*Habiéndome manifestado US. su deseo de que congregara a los ciudadanos notables de Lima a fin de que constituyeran un Gobierno con quien pudiera US. tratar, hice llamamiento de dichos notables, y reunidos hoy, aunque en número limitado, a causa de ser extraordinarias las circunstancias por que atraviesa la población, han manifestado, en vista de los documentos que hice leer en la junta y de los cuales acompañó a US. copia autorizada, que existiendo aun el gobierno dictatorial, no se creen autorizados para proceder en el sentido que US. lo desea, opinando, en consecuencia, que es el Jefe Supremo con quien US. debe tratar los delicados y graves negocios de la situación actual.*

*Dios guarde a US.*

*R. Torrico.*

---

<sup>188</sup> *Ibíd.*, páginas 33-36

<sup>189</sup> GUERRA, op. cit., página 153.

*Al señor General, Jefe político de la plaza*<sup>190</sup>.

La respuesta del invasor no se hizo esperar y demuestra su clara posición en el sentido de no reconocer bajo ningún punto de vista el gobierno de Nicolás de Piérola.

*“Jefatura Política*

*Lima, Enero 21 de 1881*

*Señor:*

*He recibido el oficio de US. fecha de ayer, en que me participa el acuerdo a que se arribó en la reunión celebrada por algunos respetables vecinos de la localidad.*

*No existiendo ni aun de hecho el gobierno dictatorial del señor don Nicolás de Piérola, ni ninguna otra autoridad nacional en el territorio del departamento de Lima, quedará él sujeto al imperio de la ley marcial en todo su vigor.*

*Dios guarde a US.*

*Cornelio Saavedra*

*Al señor Alcalde Municipal don R. Torrico*<sup>191</sup>.

La amenaza contenida en esta comunicación, tal como vimos en el subcapítulo anterior, fue cumplida días después y tanto Lima como El Callao fueron sometidas a la ley marcial del invasor. Ya durante la vigencia de la misma, el 22 de febrero de 1881, en una nueva reunión de vecinos capitalinos que seguramente sintió toda la presión por parte del invasor, los “ciudadanos notables” de Lima eligieron al jurista Francisco García Calderón para que se constituya como mandatario del país. García Calderón logró, como dijimos, algunas concesiones por parte del invasor como fue la “liberación” de la localidad de la Magdalena (actual distrito de Pueblo Libre) para que pueda utilizarse como sede de su gobierno. Esto implicaba un estatus jurídico especial para dicha localidad que, cercana a Lima, estaba también sometida al régimen de ocupación y a la ley marcial decretada por los chilenos. Se elaboró entonces una ficción legal que la estableció como un territorio no sujeto a la ley marcial ni a la autoridad invasora para que pueda instalarse ahí un “legítimo” gobierno peruano. Evidentemente, esta ficción jurídica no encontró mucho sustento en la realidad de las cosas ya que las autoridades invasoras siguieron manteniendo el control.

<sup>190</sup> AHUMADA MORENO, Pascual. *Guerra del Pacífico. Tomo V.* Santiago de Chile: Andrés Bello, reimpresión 1982. Página 134.

<sup>191</sup> *Ibíd.*, página 135.

a. Primera comunicación y desencuentro entre el Gobierno Provisorio y el Poder judicial

Una vez elegido y tomado posesión del cargo, García Calderón tomó las disposiciones propias de todo gobierno que se inicia, nombrando un gabinete en el que destaca la presencia de José Miguel Vélez como Ministro de Justicia, Culto, Instrucción Pública y Beneficencia y que sería quien, en las semanas siguientes, sostendría relaciones con el Poder Judicial.

Pascual Ahumada rescata el texto de la circular que Vélez envió a los Tribunales de Justicia anunciando el nombramiento del nuevo gabinete.

*“Circular a los tribunales de justicia de la República*

*Ministerio de Justicia, Culto, Instrucción y Beneficencia*

*Magdalena, Marzo 12 de 1881*

*El Excelentísimo señor doctor don Francisco García Calderón, elegido por los pueblos Presidente Provisorio de la República, con amplias facultades en materia de hacienda, ha tomado posesión del mando supremo y designado para la residencia de su Gobierno este pueblo de la Magdalena, cuyo distrito se halla libre de la ley marcial y exento de toda intervención armada de las autoridades impuestas por las fuerzas extranjeras.*

*S.E. el Presidente provisorio ha tenido a bien organizar el ministerio, nombrando Presidente del Consejo y Ministro de Hacienda y Comercio al señor don Aurelio Denegri, Ministro de Gobierno, Policía, Obras Públicas y Estadística al señor coronel don Manuel Velarde, de Guerra y Marina al señor capitán de navío don Camilo N. Carrillo, de Relaciones Exteriores al señor doctor don Manuel María Gálvez, y de Justicia, Culto, Instrucción Pública y Beneficencia al que suscribe.*

*Al comunicar a US. para conocimiento de ese tribunal, la organización e instalación del Gobierno provisorio, me es satisfactorio manifestarle que éste se halla firmemente resuelto a prestar al Poder Judicial toda la protección posible, para que sus fallos sean fielmente cumplidos, y a respetar su independencia en la esfera legal, esperando que los jueces y magistrados, con su probado celo, se consagren oportunamente a la pronta, exacta e imparcial administración de justicia.*

*Dios guarde a US.*

*JOSE MIGUEL VELEZ”<sup>192</sup>.*

---

<sup>192</sup> Ibíd., página 259.



Esta circular tuvo, con prácticamente las mismas palabras, una versión contenida en un oficio dirigido especialmente al presidente de la Corte Suprema y que se encuentra dentro de la recopilación hecha en los Anales Judiciales de ese Tribunal<sup>193</sup>.

No se debe perder de vista que tanto esa circular como el oficio enviado al presidente de la Corte fueron fechados el día sábado 12 de marzo de 1881. Esta fecha, que corresponde al día en que recién se estableció oficialmente el gobierno provisorio, llama la atención debido a que, como señalamos anteriormente, según el decreto del 23 de marzo de 1880 emitido por el gobierno dictatorial de Nicolás de Piérola, el reinicio de las actividades judiciales debía darse el día 14 de marzo de 1881. Eso implicaba, también, la evidente finalización del impedimento que, en un primer momento, sirvió como argumento para que el Poder Judicial declinara la invitación hecha por las autoridades invasoras. En teoría, y si esa razón habría sido la única por la que el Poder Judicial no aceptó la invitación de los chilenos para reinstaurarse, lo lógico habría sido que ese día, 14 de marzo, procedieran a inaugurar solemnemente el despacho judicial.

Llegado el día 14 de marzo, el Poder Judicial no reinició sus labores confirmando que el argumento que apelaba al periodo vacacional, si bien formalmente correcto, era en realidad una evasiva.

El establecimiento de García Calderón como Presidente Provisorio y la circular que envió a la Corte Suprema no cambió la negativa de ésta para iniciar sus funciones. Por el contrario, en escueta esquila, la Corte Suprema se reafirmó en su negativa.

*“Corte Suprema de Justicia*

*Lima, 15 de marzo de 1881.*

*Señor Ministro de Justicia, Culto, Instrucción y Beneficencia.*

*La Corte Suprema se ha informado del oficio muy apreciable de US. en que me comunica que S.E. el Presidente Provisorio de la República ha establecido su Gobierno en el distrito de la Magdalena y nombrado su gabinete del que forma parte US. como Ministro de Justicia, Culto, Instrucción y Beneficencia.*

*El Tribunal Supremo, fiel a sus tradiciones y celoso del cumplimiento de sus deberes, administrará justicia oportunamente, cuando puedan conciliarse las exigencias del servicio con la independencia y decoro de uno de los altos poderes del Estado.*

*Soy de US. atento y seguro servidor.*

<sup>193</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, op. cit., páginas 534 y 535.

Juan A. Ribeyro<sup>194</sup>.

Vélez recibió, entonces, una nueva razón que sustentó la tácita negativa de la Corte Suprema que, si bien no llegó a negarse expresamente a la invitación del nuevo Gobierno Provisorio, dejó bien en claro que no iba a reinstaurarse. Ya sin poder hacer recurso al periodo vacacional y sin poder hacer referencia a las normas vigentes que, de aplicarse en su literalidad, ordenaban que el Poder Judicial esté en ejercicio de sus funciones; Ribeyro apeló a categorías fundamentales que resaltan por su abstracción. Así, la referencia al momento *“cuando puedan conciliarse las exigencias del servicio con la independencia y decoro de uno de los altos poderes del Estado”* termina constituyendo una respuesta evasiva más.

Definitivamente la expresión utilizada da a entender que la Corte Suprema sólo aceptaría retomar su función una vez que se supere no sólo la ocupación sino también el momento de indefinición política que vivía el Perú. Si bien habían pasado casi dos meses desde la ocupación, lo cierto es que el Gobierno de García Calderón aún no gozaba del respaldo suficiente como para que su autoridad sea incontestable y se tenía la conciencia de que el verdadero Jefe del Gobierno era Piérولا a pesar que las noticias respecto de sus actividades en la sierra eran esporádicas y poco claras.

La Corte Suprema, entonces, no sólo se enfrentaba a una situación de ocupación sino que también se enrostraba a una encrucijada en la que, políticamente, su adhesión a alguna de las posiciones terminaría por tener un significado legítimamente. En ese sentido, ante la imposibilidad de optar abiertamente por Piérولا dado que ello implicaría la completa hostilidad de las autoridades invasoras, tampoco querían dar señas de apoyo a García Calderón y legitimar de alguna manera un gobierno que, a la luz de los acontecimientos históricos, aún no consideraban como legítimo. Esta apreciación se ve respaldada cuando se toma la impresión que reflejó Ricardo Palma comentando la presentación de los vocales supremos y superiores en la instalación del Congreso en Chorrillos<sup>195</sup>.

---

<sup>194</sup> *Ibíd.*, páginas 535-536.

<sup>195</sup> En efecto, tal como se verá más adelante en este mismo subcapítulo, el 15 de mayo de 1881 se iniciaron las reuniones preparatorias para las sesiones del Congreso de la República que se reuniría luego de ser convocado mediante decreto del 29 de marzo de 1881 por el Presidente Provisorio Francisco García Calderón. La instalación definitiva de este Congreso se realizó en el mes de julio de 1881 y sesionó en reuniones secretas por un lapso de 45 días.

En su carta del 11 de julio de 1881, Ricardo Palma escribiría:

*“Dos días antes de la instalación se dirigió García Calderón a las cortes suprema y superior invitándolas para concurrir a Chorrillos. En la suprema se discutió privadamente el punto y la mayoría resolvió asistir. Exceptuando don Melchor Vidaurre, concurren Ribeyro, Muñoz, Sánchez, Morales y (lo que juzgaba imposible) don Juan Oviedo, junto con los fiscales La Rosa y Cárdenas. Parece que la Asamblea de Ayacucho<sup>196</sup> haría bien dando un sablazo a los supremos.*

*En la corte superior la cuestión fue reñida. Cinco vocales: Corzo, Bueno, Chacaltana (pretendientes los tres de las dos vocalías de la suprema), Galindo y Dorado votaron en favor de la asistencia. Cuatro vocales: Santisteban, Figueredo, Sanz y Pérez votaron en contra. No concurren a la discusión Guzmán, Mariátegui ni Álvarez. En la discusión tuvo Figueredo una frase feliz y que se ha popularizado: “Ni lo de la Magdalena es gobierno ni lo de Chorrillos congreso”. Al acto de instalación asistieron sólo Corzo, Bueno, Álvarez y Dorado, los jueces Olivares y Quiroga y cuatro o cinco golillas más. Francamente, menos indigna que la de los supremos ha sido la conducta de los vocales del tribunal superior.*

*(...)*

*De la asistencia de los tribunales de justicia y del cuerpo diplomático creen los calderonianos sacar gran ventaja moral.”<sup>197</sup>*

Sin embargo el oficio de la Corte Suprema es un hito importante al constituirse en una de las pocas veces en las que el Poder Judicial – en tanto institución - presenta una posición contraria a una persona que ocupa el gobierno. En esa misma línea, esa comunicación sería la primera de varios actos de esta Corte Suprema que contienen una oposición clara a plegarse a la solicitud presidencial.

Pero la oposición de la Corte Suprema no fue única en ese momento. Por el contrario, el gobierno de Francisco García Calderón encontró oposición en diversos frentes. Un ejemplo de ello es el decreto que tuvieron que emitir con fecha 30 de marzo de 1881 en el que dejan entrever un entredicho con el mismo Alcalde de Lima, Rufino Torrico, quien consideraba que su posición dependía más de las instrucciones de Piérola e incluso de los mismos chilenos que de lo que señalase García Calderón.

*“Magdalena, Marzo 30 de 1881.*

<sup>196</sup> Luego de la ocupación de Lima, Nicolás de Piérola se retiró a la sierra y semanas después estableció como sede de su gobierno la ciudad de Ayacucho. Desde ahí convocó a una Asamblea Nacional que sesionó de forma paralela al Congreso de Chorrillos. La Asamblea se reunió por 17 días y tuvo poca representatividad e impacto histórico. En efecto, el poco éxito de esta Asamblea fue una de las causas iniciales de la renuncia de Nicolás de Piérola al cargo de Jefe Supremo de la República que realizó en el mes de noviembre de 1881.

<sup>197</sup> PALMA, op. cit., páginas 55-56.

*Visto el oficio que precede y teniendo en consideración:*

*1° Que el Gobierno ha restablecido los consejos provinciales en cumplimiento de los deberes que le impone la ley;*

*2° Que las municipalidades no pueden deliberar sobre su legitimidad, ni sobre la existencia o el derecho del Gobierno de la República.*

*3° Que la Municipalidad de Lima, desconociendo su misión, no solo se titula dependiente de la autoridad del ex – Dictador, sino que deriva su derecho de las autoridades chilenas, por las cuales se supone reconocida;*

*4° Que no puede el Gobierno aceptar estos fundamentos del acuerdo municipal; se declara sin valor ni efecto el mencionado acuerdo, y se dispone que el consejo provincial se instale inmediatamente como está mandado, y que se inicie el juicio correspondiente contra los miembros de dicha Municipalidad por el delito que han cometido resistiéndose al cumplimiento de la Constitución.*

*Transcríbase al Ministro de Justicia y a quienes corresponda.*

*Publíquese y régístrese.- Rúbrica de S.E.*

*Velarde*<sup>198</sup>

Una muestra de lo fraccionado de la escena política interna en aquellos días se tiene cuando comparamos las negativas de la Corte Suprema y el incidente con el Alcalde de Lima frente a la comunicación firme y clara que envía Miguel Antonio de La Lama, Director de la Penitenciaría de Lima, en respuesta de la circular que le fuera enviada por el ministro Vélez:

*“Dirección de la Penitenciaría de Lima.*

*Lima, Marzo 13 de 1881*

*Señor Ministro:*

*He tenido la honra de recibir el muy estimable oficio, fecha de ayer en la Magdalena, por el que US. se sirve comunicarme, de orden del señor Ministro del ramo, que el Excmo. Señor don Francisco García Calderón, elegido por los pueblos Presidente provisorio de la República, con amplias facultades en materia de hacienda, ha tomado posesión del mando supremo y designado para la residencia de su Gobierno este pueblo de la Magdalena, cuyo distrito se halla libre de la ley marcial y exento de toda intervención emanada de las autoridades impuestas por las fuerzas extranjeras, y que al mismo tiempo, ha tenido a bien organizar el Ministerio, nombrando Presidente del Consejo y Ministro de Hacienda y Comercio al señor don Aurelio Denegri, Ministro de Gobierno, Policía, Obras Públicas y Estadística al señor coronel don Manuel Velarde, de Guerra y Marina al señor capitán de navío don Camilo N. Carrillo, de Relaciones Exteriores al señor doctor don Manuel María Gálvez, y de Justicia, Culto, Instrucción Pública y Beneficencia al señor doctor don José Miguel Vélez.*

*En contestación, me es grato poder asegurar a US. que el Supremo Gobierno tendrá siempre en mí un colaborador infatigable para el restablecimiento del*

<sup>198</sup> AHUMADA, op. cit., página 264.



*orden, disciplina y moralidad de este panóptico; y que me felicito de que el nombramiento de ministros haya recaído en personas tan ilustradas como honorables.*

*Aprovecho la oportunidad de reiterar a US. los sentimientos de mi más alta consideración.*

*Dios guarde a US.*

*Miguel Antonio de la Lama*

*Al señor Ministro de Estado en el despacho de Justicia*<sup>199</sup>.

De la Lama no tiene el menor reparo en manifestar su conformidad con el gobierno provisorio y ello puede deberse, tal vez, a la relación de amistad que podría existir entre él y García Calderón ya que ambos eran juristas de largo desempeño profesional en la ciudad de Lima. Esta sería la posición que, tal vez, García Calderón esperaba recibir también de la Corte Suprema.

Ahora bien, la revisión de los documentos y la historiografía no permite determinar si esta actitud de la Corte Suprema respondió efectivamente a una opción principista o, más bien, a razones de cálculo político. En efecto, se debe tener presente que históricamente el Poder Judicial ha mostrado una actitud pasiva frente al poder de turno. En ese sentido, es entendible que la posición de los miembros de la Corte Suprema responda a una intención de no asumir acciones que impliquen un enfrentamiento directo a la autoridad de Nicolás de Piérola a quien, por otra parte, no hacía dos meses que manifestaron acatar sus instrucciones. No se puede perder de vista que, desde la asunción del poder por parte de Piérola y tal como vimos en el capítulo anterior, éste ya había expedido decretos que podrían considerarse amenazantes frente a los vocales de la Corte Suprema y es posible que, en esos días, dichos vocales acataron sus instrucciones y prefirieron mantener una posición “neutral” ya sea porque temían la posibilidad de que, cuando éste retome el poder efectivo, las amenazas tornen en actos de persecución. Sin perjuicio de ello, tampoco podemos descartar que esta posición neutral se debiera a que los vocales supremos mantenían cierto afecto a favor de Piérola y pretendían ser leales al mismo.

Este posible cálculo político, sin embargo, no constituyó un obstáculo para que la Corte Suprema haya presentado, también, una argumentación jurídicamente coherente de su actuar. Se debe reconocer que, si bien la primera respuesta de la

---

<sup>199</sup> Ibíd., página 260.



Corte dirigida al ministro Vélez pudo resultar, como en efecto resultó, abstracta y esquivada también es cierto que estableció una idea inicial que se va a ver desarrollada con impecable lógica jurídica en las comunicaciones siguientes que sostienen su negativa. En ningún momento la Corte Suprema se muestra como un colegiado dubitativo que se desdiga o contradiga sino que, por el contrario, aparecerá explicando claramente razones que ya pueden desprenderse desde esta comunicación inicial y presentándolas como si hubieran estado inspirando la actuación de la Corte Suprema desde el momento mismo de la ocupación.

Por lo pronto, frente a la posición esquivada de la Corte Suprema comunicada en su oficio del 15 de marzo, García Calderón utilizó el mecanismo que su posición de gobernante provisorio le otorgaba: la legalidad. Así, se emitió un primer decreto el 26 de marzo:

*“Administración de Justicia*

*Magdalena, Marzo 26 de 1881.*

*Conviendo evitar los perjuicios que irroga la falta de administración de justicia, especialmente en materia Criminal,  
Se resuelve:*

*Que mientras se efectúe la solemne apertura de los tribunales, conforme a lo dispuesto en la ley de 1° de Diciembre de 1874, se constituya en este pueblo, a hacer su despacho diario, el juez de primera instancia de turno de la capital, lo mismo que la sala de la Corte Superior de este distrito, en los días que tiene acordado despachar, para cuyo efecto se dictarán las órdenes convenientes por el Ministerio del ramo.*

*Comuníquese y regístrese.- Rúbrica de S.E.*

*Vélez*<sup>200</sup>.

Del texto de este decreto se pueden sacar en claro dos cosas: (i) El gobierno provisorio no toma en consideración el nuevo argumento presentado por la Corte Suprema y (ii) se desconoce todo valor normativo al decreto del 23 de marzo de 1880 expedido por Nicolás de Piérola y se señala de forma indirecta que las vacaciones judiciales se encontraban reguladas por la Ley del 1 de diciembre de 1874<sup>201</sup>.

A diferencia del primer punto, del que es poco lo que se puede añadir, del segundo podemos destacar varios elementos. El primero es que este decreto no tiene rango de

<sup>200</sup> Ibíd., página 262.

<sup>201</sup> Ley del 1 de diciembre de 1874

(<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1874029.pdf>).

ley. Si bien en aquellos momentos no se encontraba en funciones el Congreso de la República y la Constitución de 1860 no establecía la posibilidad de que el Poder Ejecutivo legisle, lo cierto es que en estos aciagos momentos se procuraba salvar el impedimento legal mediante el refrendo del decreto por parte de todo el gabinete, tal como veremos más adelante, como una intención de darle algo más de legitimidad a las normas que, en teoría, tenían la aspiración de asumir un rango de ley. Ello implica que este decreto tendría la aspiración, en los hechos, de abrogar tácitamente el decreto del 23 de marzo de 1880 que sí tenía rango de ley y ello, jurídicamente, afronta serios cuestionamientos que darían lugar a debates respecto de si las normas peruanas se encontraban aún vigentes en el territorio ocupado y si había que respetarles el rango que tenían antes de la ocupación o, por el contrario, se debía asumir que se encontraban ya abrogadas, inaplicables u otra categoría análoga y que, por eso, un simple decreto podía llenar ese vacío sin mayor problema. Pero, más allá de estos temas, la abrogación del decreto del 23 de marzo de 1880 y la reinstauración fáctica de la ley del 1 de diciembre de 1874 tiene un impacto de efectos prácticos y es que la fecha de término de las vacaciones se vería seriamente variada como se ha explicado anteriormente.

Pasaríamos de una situación en la que los tribunales debieron iniciar sus acciones el 14 de marzo a una nueva situación en la que no se espera dicho suceso sino hasta el día 18 de abril, primer lunes posterior a la Pascua de Resurrección. Este cambio de la legislación emitida durante la dictadura de Piérola a favor de una ley expedida por el Congreso de la República, más allá de que obedezca en realidad a motivos principistas y, hasta cierto punto, jurídicos, permitió al gobierno de García Calderón disponer de un tiempo adicional para subsanar el problema de la administración de justicia. En efecto, se pasó de tener unos tribunales rebeldes que se negaban a instalarse a pesar que las normas así lo señalaban, a tener unos tribunales que se encontraban, aún, dentro del período vacacional establecido por las normas vigentes.

En la memoria que Patricio Lynch envió en 1882 a su gobierno se incluye la afirmación clara y contundente de que este decreto no fue acatado y, según las palabras del mismo Lynch, *“todas estas disposiciones no tuvieron efecto alguno y quedaron en el papel como letra muerta, corriendo la misma suerte de otras de igual origen”*<sup>202</sup>.

---

<sup>202</sup> Ibíd., página 119.

b. Decretos del 29 de marzo de 1881 y las comunicaciones subsiguientes.

A pesar de esta situación el 29 de marzo de 1881, tres días después de emitido dicho decreto, el gobierno de García Calderón rizó el rizo emitiendo varios decretos relacionados al Poder Judicial. A través de dichos documentos, a los que se le puede reconocer el rango de ley por contar con el refrendo del gabinete en pleno, dispuso la reinstauración de la vigencia de la Constitución de 1860, la nulidad de todos los actos de poder efectuados durante el gobierno de Piérola y la vigencia de la ley del 1 de diciembre de 1874, entre otros temas.

El primero de esos decretos realizó la convocatoria a una reunión extraordinaria del Congreso de la República.

*“Francisco García Calderón  
Presidente Provisorio de la República.*

*Considerando:*

*Que por decreto de esta fecha se ha declarado vigente la Constitución política de 1860;*

*Que es necesaria la inmediata reunión de ese Congreso, tanto para completar la reorganización de la República cuanto para dictar las medidas que demanda el estado actual de la Nación;*

*Con el voto unánime del Consejo de ministros,*

*Decreto:*

*Art. 1° El Congreso se reunirá en sesiones extraordinarias el 15 de Mayo próximo y se instalará en la Escuela de clases de la villa de Chorrillos, si no estuviese desocupada entonces la capital de la República.*

*Art. 2° El Congreso extraordinario se ocupará de los objetos siguientes:*

*Designar el lugar de sus sesiones con arreglo al artículo 59, párrafo 2° de la Constitución;*

*Elegir Presidente y Vice-Presidentes, fijando el día en que principiará el período constitucional de los elegidos;*

*Dictar las disposiciones que crea convenientes al estado en que se halla la guerra con la República de Chile;*

*Examinar y juzgar los actos del Gobierno provisorio;*

*Designar los diputados y senadores que han cesado en sus cargos, para que sean reemplazados por elección popular;*

*Proveer las vacantes de la Excma. Corte Suprema;*

*Resolver los otros asuntos y discutir los proyectos que le someterá el Gobierno.*

*Art. 3° Los funcionarios políticos y demás autoridades de la República prestarán a los representantes los auxilios que necesiten para su incorporación en las cámaras.*

*Art. 4° Los que de cualquier modo impidan o retarden la traslación de los representantes al lugar de la reunión, serán castigados con las penas designadas en el Código Penal.*

*Art. 5° El Ministro de Estado en el despacho de Gobierno queda encargado del cumplimiento de este decreto, haciéndolo publicar por bando y dictando al efecto las ordenes convenientes.*

*Dado en la casa de Gobierno, en Magdalena, a 29 de Marzo de 1881.- FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN.- Aurelio Denegri.- Manuel Velarde.- José Miguel Vélez.- Camilo N. Carrillo.- M. M. Gálvez<sup>203</sup>.*

El segundo decreto contiene el cambio en la normatividad vigente que mencionamos anteriormente y dispone la vigencia de la Constitución de 1860, suspendida en 1879 cuando Piérola tomó el poder:

*“Francisco García Calderón.  
Presidente Provisorio de la República*

*Considerando:*

*Que por las actas y comunicaciones que ha recibido el Gobierno, se viene en conocimiento de que todos los pueblos de la República aceptan el Gobierno provisorio y quieren el restablecimiento de la Constitución;*

*Que estas manifestaciones populares han sido y continúan siendo combatidas por las autoridades políticas y la fuerza pública de que disponen, con cuyo procedimiento han incurrido en las penas designada por el Código Penal,*

*Decreto:*

*Art. 1° Se declara vigente en toda la República, por la voluntad nacional, la Constitución política de 1860, y reconocida por todos los pueblos la autoridad del Gobierno provisorio.*

*Art. 2° Las autoridades políticas, administrativas y militares que actualmente funcionan, cederán sus puestos en el perentorio término de 20 días, contados desde esta fecha, a las que ha nombrado y continuará nombrando el Gobierno para los diversos departamentos de la República.*

*Art. 3° Los que no cumplan lo dispuesto en el artículo anterior, o impidan el restablecimiento de la Constitución en cualquiera parte de la República, o de algún modo coarten la voluntad de los ciudadanos para la manifestación de sus opiniones en favor de la Constitución, serán sometidos a juicio i castigados con las penas designadas en el Código Penal.*

*Art. 4° Los tribunales y juzgados, los fiscales y agentes fiscales, en cumplimiento de sus deberes respectivos, iniciarán de oficio, bajo de responsabilidad, los juicios a que se refiere el artículo anterior, al terminar el plazo de 20 días fijado en el artículo 2°*

*El Ministro de Estado en el despacho de Gobierno queda encargado del cumplimiento de este decreto, haciéndolo publicar por bando i dictando al efecto las órdenes convenientes.*

*Dado en la casa de Gobierno, en Magdalena, a 29 de Marzo de 1881.- FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN.- Aurelio Denegri.- Manuel Velarde.- José Miguel Vélez.- Camilo N. Carrillo.- M. M. Gálvez<sup>204</sup>.*

<sup>203</sup> *Ibíd.*, página 263.

<sup>204</sup> *Ibíd.*, página 264.



Si bien la historiografía demuestra que no era verdad lo señalado en este decreto en el sentido de que el gobierno provisorio de García Calderón había recibido el apoyo y el reconocimiento popular, lo que sí resultaría cierto es que los apoyos que hubiera cosechado en el interior habrían sido reprimidos por las autoridades que, en su mayoría, aún reconocían a Piérola como gobernante del Perú. Es en respuesta de esa situación que García Calderón, jurista a fin de cuentas, utiliza el elemento más importante que puede tener a mano: la ley. Y mediante esta “ley” no sólo declara la aceptación de su gobierno sino que, sin decirlo expresamente, deja sin valor todo acto de poder realizado durante el gobierno dictatorial sea de la naturaleza que fuere (decreto, resolución o nombramiento). Ese es el motivo por el que ordena que todas las funciones estatales sean reasumidas por aquellos funcionarios que ocupaban dichos puestos antes del inicio del gobierno de Piérola y establece el inicio de oficio de proceso penal contra aquellos que desconociesen esta norma.

Esta última orden – y todo el decreto por consecuencia - implicaba en sí misma un presupuesto que aún no existía y que aún estaba lejos de darse: que el Poder Judicial reinicie sus funciones con los magistrados y funcionarios anteriores al inicio de la dictadura, reconozca al gobierno provisorio y ejerza sus funciones de conformidad con la Constitución de 1860 y las demás normas que, con anterioridad al ingreso de Piérola, regulaban tanto los juicios como el funcionamiento de la institución.

El tercer decreto de especial importancia emitido por García Calderón ese mismo 29 de marzo de 1881 se refiere directamente al Poder Judicial.

*“Francisco García Calderón  
Presidente Provisorio de la República.*

*Considerando:*

*Que por decreto de esta fecha se ha declarado vigente, por la voluntad popular, la Constitución política de 1860 y que, en consecuencia, debe organizarse con arreglo a ella el Poder Judicial.*

*Que por las leyes vigentes las vacaciones judiciales deben terminar el 18 del próximo mes de Abril:*

*Con el voto unánime del Consejo de ministros,*

*Decreto:*

*Art. 1° El Poder Judicial de la República principiará sus funciones el día 18 de Abril próximo y se sujetará en sus procedimientos a la Constitución política de 1860 y a las leyes vigentes en Diciembre de 1879.*

*Art. 2° Los tribunales y juzgados se instalarán al principiar sus funciones con el personal que tenían en 21 de diciembre de 1879.*



*Art. 3° Se declaran nulos y sin valor alguno los nombramientos de vocales, jueces y demás empleados del Poder Judicial hechos con posterioridad a la fecha citada.*

*Art. 4° Los tribunales que no cumplan y hagan cumplir en sus distritos las prescripciones de este decreto en el momento de su instalación, incurrirán en las penas designadas en los artículos 125 y 126 del Código Penal.*

*El Ministro de Estado en el despacho de Justicia, Culto e Instrucción Pública y Beneficencia queda encargado del cumplimiento de este decreto.*

*Dado en la casa de Gobierno, en Magdalena, a los 29 días del mes de Marzo de 1881.- FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN.- Aurelio Denegri.- Manuel Velarde.- José Miguel Vélez.- Camilo N. Carrillo.- M. M. Gálvez<sup>205</sup>.*

La norma constituye, entonces, la concretización literal del presupuesto de que hablábamos al comentar el segundo decreto y borra de un solo movimiento toda huella que el gobierno dictatorial de Piérola pudo haber dejado en el funcionamiento de este poder del estado. Aparece ya no sólo como una norma destinada a regular al Poder Judicial sino como una auténtica respuesta política que, en concordancia con lo señalado anteriormente por las autoridades invasoras, desconoce todo carácter de gobierno y gobernante que puede aún tener Nicolás de Piérola.

Margarita Guerra presenta una crítica a este acto del Gobierno Provisorio y, sobre todo, al espíritu que llevaba en el sentido de desconocer los nombramientos realizados por Piérola. Al respecto considera que dicha actitud *“no es propicia para el momento. Es tiempo de buscar la unidad y no de aumentar los resentimientos y a eso se llega con las alusiones a la subrogación del personal proveniente de la Dictadura”*<sup>206</sup>.

De esa manera, a nivel jurídico, se extrae a Piérola del foco y se le niega toda legitimidad como para poder tomar decisiones gubernamentales. García Calderón va demostrando que su intención es constituirse precisamente en el único gobierno válido dentro del territorio nacional.

Sin embargo, esta decisión plasmada en leyes no va a encontrar eco en el Poder Judicial. En efecto, según los Anales Judiciales, este decreto fue comunicado especialmente a la Corte Suprema mediante oficio del Ministro de Justicia enviado el mismo 29 de marzo de 1881<sup>207</sup>. Este oficio es el punto inicial de una interesantísima dialéctica entre el gobierno y la Corte Suprema en la que destaca la forma cómo esta

<sup>205</sup> *Ibíd.*, páginas 263-264.

<sup>206</sup> GUERRA, op. cit., página 237.

<sup>207</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, op. cit., páginas 536-537.

última no sólo comunica claramente su negativa de reinstalarse sino que también, mediante extensas misivas, expone los argumentos que sustentan su decisión.

Por lo pronto, debemos advertir que el hecho de que ya no se exigiera a los tribunales el instalarse inmediatamente sino sólo hasta el 18 de abril contribuyó a que las respuestas de la Corte Suprema no sean rápidas, directas y tajantes sino que se permitieran explayarse en las mismas y presentar una argumentación más rica en motivos y detalles. Así, a diferencia de los oficios anteriores que eran respondidos en el día, la respuesta a éste demoró dos y fue una comunicación en la que nuevamente Juan Antonio Ribeyro, en su calidad de Presidente de la Corte Suprema y en representación de todo el Poder Judicial, *“sin objetar la legalidad de este decreto, formuló reparos en cuanto a su aplicación”*<sup>208</sup>.

#### *“Corte Suprema de Justicia*

*Lima, 31 de marzo de 1881.*

*Señor Ministro de Justicia, Culto, Instrucción y Beneficencia.*

*Nada sería más satisfactorio para la Corte Suprema de Justicia que, cumpliendo el supremo decreto de 29 del presente, atender, desde luego, a una de las más premiosas exigencias sociales y de administración pública. La apertura de los tribunales señalada para el 18 de abril próximo, aparte de llenar los objetos de la ley, calmará los ánimos que con razón desean que la distribución de la justicia por los magistrados del país no se deje esperar, con perjuicio general, por más tiempo del que hasta el día ha transcurrido. Pero si el Tribunal abunda en estos sentimientos y coincide con el Gobierno Provisorio en la voluntad decidida de aliviar a los ciudadanos de la falta de sus jueces naturales, encuentra para que este pensamiento se realice, el muy grave inconveniente de que siendo las funciones judiciales actos verdaderos de soberanía y de jurisdicción nacional, no pueden ejercerse con la presencia de un ejército de ocupación, que ha erigido sus Tribunales especiales que juzgan e infligen penas que no son las de nuestra legislación criminal. La ley militar que crea en nuestra sociedad un estado verdadero de vasallaje y de domino sobre los pueblos del Perú, sometidos mal a su grado, a la dura ley de los vencidos, no puede ni debe coexistir con la magistratura nacional en pleno ejercicio de sus atributos. Nada debe prevalecer que entrase su independencia, siendo harto celosa, como es natural, de sus legítimos fueros y derechos; nada que amengüe su dignidad, ni nada que tienda a empañar sus limpios antecedentes y la alteza de su ministerio. Si la ley marcial desaparece y las tropas extranjeras, que a la sazón se encuentran en Lima, se retiran y dejan expedita la acción de los Tribunales, la Corte suprema cumplirá y hará cumplir el decreto que dispone la apertura de sus labores.*

<sup>208</sup> GARCÍA CALDERÓN, Manuel. *Algunos hechos y reflexiones sobre la historia de la Corte Suprema de Justicia de la República*. En: Revista de Derecho y Ciencias Políticas, Vol. 37, N° 3 (Set – Dic 1973). Páginas 382-383.

*Todos los sacrificios que redunden en provecho y honra de la patria, no se pueden excusar sin responsabilidad; pero si los sacrificios de las personas y de la propiedad son ineludibles, los que afectan las instituciones en lo más fundamentales de sus principios, no sólo traerían irreparables resultados en lo moral y en lo político, sino que se dispondrían sin derecho de las cosas de que no son árbitros los hombres.*

*S.E. el Presidente Provisorio escogitará (sic) con su Consejo el expediente que allane esta difícil situación, y bien se deja comprender que las luces, que no son escasas en el Gobierno, y su acrisolado patriotismo, salvarán serios conflictos que deben a toda costa precaverse. Se felicitará esta Corte Suprema, a cuyo nombre escribo el presente oficio, de cooperar a la tranquilidad de los espíritus y al justo prestigio de que debe estar rodeada la elevada autoridad nacional para el pleno ejercicio de sus funciones.*

*Dios guarde a US.*

*Juan A. Ribeyro*<sup>209</sup>

Como puede apreciarse, Ribeyro reconoce la preocupación del Presidente Provisorio para que se normalicen las funciones de administración de justicia pero rechaza de plano la posibilidad de reinstalación no sólo del Supremo Tribunal sino de todo órgano judicial en un escenario de ocupación. En ese sentido, considera correctamente que la labor de los tribunales es una reafirmación de la soberanía del país, y que dichos actos en un contexto de ocupación extranjera constituyen una contradicción que la hace imposible y que la declinación de la misma resultaría, desde el punto de vista de la Corte Suprema, un hecho que mancillaría la dignidad de este Poder del Estado y es por ello moralmente inaceptable.

Tal como señalamos anteriormente, la Corte Suprema se niega al cumplimiento de esta norma mediante el recurso a argumentos jurídicos relativos a la Teoría del Estado bastante más elaborados que los vertidos hasta este momento pero que, sin embargo, no los contradicen. Por el contrario, aparecen como un desarrollo claro y correcto de lo que previamente había mencionado en el oficio del 15 de marzo de 1881 cuando señaló que la administración de justicia podría reiniciarse sólo “*cuando puedan conciliarse las exigencias del servicio con la independencia y decoro de uno de los altos poderes del Estado*”<sup>210</sup>.

Lynch, en su memoria presentada en 1882 al gobierno de Chile, mencionó que este mismo decreto del 29 de marzo de 1881 también fue comunicado a los vocales superiores y rescata la respuesta que José Silva Santisteban envió señalando “*que el*

<sup>209</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, op. cit., páginas 538-539.

<sup>210</sup> *Ibíd.*, páginas 535-536.

*Tribunal Superior entraría a ejercer sus atribuciones tan luego como la Excelentísima Corte Suprema declarara abiertos los trabajos del año judicial*<sup>211</sup>. La Corte Suprema aparecía contando, como era debido, con la subordinación a sus disposiciones de los órganos jerárquicamente inferiores lo que confirmó que sus decisiones eran, en realidad, las decisiones institucionales del Poder Judicial.

Ahora, uno de los problemas que puede apreciarse de la respuesta de la Corte Suprema es que la forma cómo menciona el hecho de la ocupación y la ley marcial establecida en Lima podría llevar al equívoco de entender que la razón principal de la negativa la constituye este hecho y no la imposibilidad de ejercicio correcto de una función estatal en un contexto en el que el Perú había perdido su soberanía como Estado en marco de la invasión y ocupación de su capital. Precisamente este error fue en el que incurrió el Gobierno de García Calderón entendiendo que el único problema lo constituía la ocupación y la imposibilidad de coexistencia en un mismo territorio de la jurisdicción ordinaria peruana y la jurisdicción militar chilena. Por ello, en su respuesta, presentó como solución a este impasse que la Corte Suprema se reúna ya no en Lima sino en la Magdalena, que había sido declarado territorio neutral, y que, en teoría, se encontraba libre de la ley marcial.

Esta solución fue comunicada a la Corte Suprema ocho días después mediante un oficio transcribiendo un nuevo decreto.

*“Ministerio de Justicia.*

*Magdalena, a 8 de abril de 1881.*

*Señor Presidente de la Excma. Corte Suprema de Justicia.*

*S.E. el Presiente Provisorio de la República, en acuerdo de esta fecha, se ha servido expedir la resolución que sigue:*

*“Visto el oficio anterior y teniendo en consideración:*

*Que la observaciones que en él hace la Corte Suprema, sobre el cumplimiento del supremo decreto de 29 de marzo próximo pasado, se fundan exclusivamente en la necesidad de consultar la independencia del Poder Judicial en el ejercicio de sus funciones, y en que la administración de justicia es un acto de soberanía incompatible con la existencia de la ley marcial y los Tribunales creados con arreglo a ella;*

*Que en el caso de que en el día señalado por la ley, para la apertura de los Tribunales estuviera ocupada la capital por el ejército chileno, pueden la Corte*

---

<sup>211</sup> AHUMADA MORENO, Pascual. *Guerra del Pacífico. Tomo VII*. Santiago de Chile: Andrés Bello, reimpresión 1982. Páginas 119.



*suprema y los Tribunales y Juzgados de su dependencia funcionar en este distrito de la Magdalena, que a más de corresponder a dicha capital, está oficialmente declarado territorio neutral por las autoridades del ejército vencedor;*

*Que como lo reconoce la Corte Suprema, la clausura de los Tribunales causa graves perjuicios a los que es necesario poner término;*

*Que el hecho de estar ocupada la capital por el ejército chileno, todo lo que se deduce es que la Corte Suprema debe ejercer sus funciones en un lugar libre de esa ocupación;*

*Que la jurisdicción del Supremo Tribunal de justicia, comprende a toda la República, que en su mayor parte está libre de la ocupación por el ejército chileno;*

*Que por ser la administración de justicia un acto de soberanía, no puede suspenderse, cuando es posible asegurar la independencia de los encargados de ella, porque la suspensión importaría desprenderse de un derecho de la Nación, que puede y debe conservarse;*

*Se resuelve:*

*Que se cumpla lo mandado en el referido decreto supremo de 29 de marzo próximo pasado; entendiéndose que la Corte Suprema y los Tribunales y Juzgados de su dependencia funcionarán en este distrito, caso que el 18 del presente mes estuviera aún ocupada la capital por el ejército chileno”*

*Tengo la honra de transcribirla a US. para conocimiento de ese Supremo Tribunal y demás fines.*

*Dios guarde a US.*

*José Miguel Vélez”<sup>212</sup>.*

En efecto, este decreto entiende que la solución de todos los problemas que acusa la Corte Suprema se resolverían simplemente escogiendo un lugar libre de ocupación para el cumplimiento de sus funciones. Esto se convierte en el argumento de más peso y que se acompaña de menciones a hechos reales como son que gran parte del país se mantenía sin sufrir ocupación y que no debe renunciarse a ejercer uno de los derechos que otorga la soberanía como es la administración de justicia.

Pero, más allá de las expresiones contenidas en los documentos, la sensación que queda es que el Gobierno Provisorio tiene la intención de que el Poder Judicial se reinstale de todas maneras y por eso no advierte – o no quiso advertir – el mensaje principal manifestado por la Corte Suprema. Por el contrario, opta por mantener una actitud férrea en su primera orden y refuerza su mandato estableciendo la obligación de las cortes y juzgados de instalarse el día programado ya sea en Lima – si se supera la ocupación – o en la Magdalena.

---

<sup>212</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, op. cit., páginas 540-541.



Ante la encrucijada de aceptar la fórmula propuesta por el gobierno o explicar de forma más clara y contundente su negativa a instalarse, la Corte Suprema optó por la segunda y con esa idea envió una aún más extensa comunicación en la que desarrolla nuevamente su pensamiento y da a entender que el problema no radica en la localidad dónde se puede instalar el Tribunal Supremo.

*“Corte Suprema de Justicia*

*Lima, abril 9 de 1881.*

*Señor Ministro de Justicia, Culto, Instrucción y Beneficencia.*

*Hay situaciones difíciles que no pueden salvarse a pesar del patriotismo y de los más sanos intentos, situaciones que han venido preparando insólitos acontecimientos y la contradicción y lucha de intereses antagonistas y de distintos caracteres. Lima ofrece a la sazón un tristísimo espectáculo ocupada por un ejército que tuvo la fortuna de vencer; hambreada por los desastres de una guerra porfiada de dos años, huérfana de sus mejores hijos sacrificados en los campos de batalla, amenazada sin respiro de accidentes nuevos y cada momento más peligrosos y más graves, y sin esperanza de recobrar de pronto sus derechos usurpados; y este cúmulo de males, y muchos más que se le aguardan, a juzgar por el curso que van llevando los sucesos, no los ha causado por su culpa, porque ni sus más preclaros ciudadanos ni la generalidad de sus habitantes, han excusado esfuerzos de ningún género, ofreciendo sus personas y sus bienes, para salir con aire de una contienda que, dicho sea en verdad, nunca provocaron los peruanos.*

*La fortuna nos esquivó sus favores en días que se rifaba la suerte de la patria: nuestras armas quedaron, no deslustradas, porque sólo deslustra la deshonra, sino vencidas por hechos y fortuitos acaecimientos que tan comunes son en las lides y en las guerras de los ejércitos. Y tan cierta es esta apreciación de las últimas batallas, que episodios existen en ellas y acciones tan distinguidas, que darían timbre y gloria a cualquiera nación celosa de su independencia y de sus fueros.*

*Los desastres que fueron la necesaria consecuencia del triunfo de nuestros enemigos, han hincado en mala hora para el país entero una época luctuosa, rica de infortunios y abundante de acerbos sinsabores; y Lima, capital de la República, de proverbial generosidad, de tradicionales recuerdos, de un crédito tal vez fabuloso de riquezas, abrió sus puertas, no espontáneamente se entiende, a las huestes enemigas, sino, mal su grado, y haciendo las protestas que formula el patriotismo profundamente abatido y humillado sin justicia. Desde entonces, fecha de recordación ingrata, desdichas sin término han caído sobre nuestras cabezas inclinadas por el infortunio, y si bien el corazón late siempre con fuerza al compás de generosos sentimientos, no se pueden imaginar, desde luego, los padecimientos que agobian los espíritus. La capital más hermosa del Pacífico fue, no entregada al saco ni incendiada como sucedió con las preciosas villas y poblaciones que el ejército chileno encontró al paso, sino oprimida hasta el extremo, aterrada con actos que la civilización condena y vitupera. Y desde entonces se hallan todas sus casas cerradas, suspendidas casi totalmente las transacciones, con tal cual excepción que las más premiosas necesidades de la vida hacen indispensables, desiertas y*

*asoladas sus calles, principalmente en las horas de la noche; y a la vez que se presenta esta sombría fisonomía en una ciudad antes tan festiva, tan risueña y llena de expansión, se erigen tribunales especiales de carácter militar para juzgar lo mismo de las cuestiones civiles habidas entre partes, que de las causas criminales, muy pocas por fortuna en esta tierra de escasos delitos en los tiempos malhadados que vamos atravesando. En una catástrofe, harto profunda, tanto más aterradora cuanto fue inesperada en nuestros juicios y atendido la santidad de la causa que defendimos, nada subsiste en pie como era inevitable; la soberanía de la República quedó avasallada, perdidas sus instituciones, las propiedades y las personas a merced del vencedor, temiendo siempre nuevos ultrajes que, so color de hostilidades permitidas, no se economizaron desde el principio de la guerra, ni se economizan actualmente. En tan afflictiva situación, no era posible que la magistratura ejerciese sus augustas funciones, que no habrían sido por cierto respetadas ni rodeadas de las inmunidades que requiere la justicia para ser rectamente distribuida. El Poder Judicial es independiente, como la doctrina y el derecho constitucional positivo lo expresan en todas partes donde rige el régimen representativo de nuestra época; pero esa independencia no es llevada hasta el punto antojadizo de hacer lo que le plazca al magistrado con olvido de las leyes y en desacuerdo con los otros poderes del Estado.*

*La soberanía que, en el sentido humano reside en la Nación, aunque todos reconozcamos esa soberanía superior absoluta que es la fuente primitiva de donde emanan todas las cosas y los principios que rigen el universo; la soberanía, repetimos es el acto por el que dispone de su suerte cada país, cuando no daña los derechos ajenos y conculca los santos deberes de la ley divina; pero como no es posible que esto se haga por todos, sin incurrir en los desconciertos de las antiguas democracias, el ejercicio de una soberanía, si reside en la masa de los pueblos, atendido el sentido genuino del derecho, su ejercicio, para que sea más desembarazado, más acertado y más libre, no puede residir sino en los altos poderes a quienes ha sido delegada la facultad de obrar en beneficio general. La universalidad es de la Nación en lo que atañe al derecho de la soberanía popular; la especialidad es de los actos de sus representantes y apoderados elegidos conforme al espíritu de las sociedades modernas. De tal manera están ligados los poderes entre sí, que si falta el uno, los demás se resienten, indudablemente, de flaqueza e inestabilidad; y así como la soberanía es indivisible e inalienable en rigor de principios, de la misma manera sus ejecutores no pueden desempeñar una parte de esa soberanía, dejándose arrebatar todas las demás. Por esta razón no hay independencia en el Poder Judicial en los días que estamos contando, cuando ni las personalidades judiciales gozan de garantías en la plenitud de los derechos constitucionales ni las leyes pueden ser ejecutadas ni tener sanción práctica las sentencias que por los jueces se expidiesen. En Lima, bajo la presión de la fuerza militar extranjera, no se puede ni se debe administrar justicia, sin caer en mengua y abatimiento vergonzoso, y aunque vencidos, dignos somos de la consideración de la desgracia, del respeto que merecen los que aún conservan, a través de su desastre, noble altivez que les inspira una conciencia sin mancilla. Indudable es que aquí en la capital no es posible reunir los Tribunales; y se ha apelado en tal conflicto a la traslación al distrito de la Magdalena. Si laudable es el pensamiento en el deseo muy ferviente de aliviar la situación del país, preciso es confesar que germinan mil obstáculos para su realización cumplida e inmediata, unos de dignidad nacional ofendida, otros nacidos de la circunstancia y de las leyes que hemos jurado obedecer a todo trance, y muchos que de distinto y variado género, son, sin embargo, tan*

*insuperables, que a pesar de los esfuerzos simultáneos del Gobierno Provisorio y de los nuestros no serían nunca dominados, desautorizando ambos su poder y su responsabilidad. La Constitución no permite a la Corte Suprema otra residencia que en la misma capital; y aunque la Magdalena es un pueblo a dos millas de distancia, uno de sus distritos territoriales y políticos, no es la ciudad donde están todos los elementos necesarios para los juzgamientos ora civiles ora criminales. La jurisdicción de los jueces y magistrados allí establecidos no se extendería jamás a Lima, cabeza y asiento del gobierno y de la justicia, por haberse adueñado de ella un ejército invasor que tiene sus autoridades militares, que lo mismo administran nuestros bienes que a mansalva disponen de nuestras personas, a cada instante envueltas en no pocos azares y peligros. La Magdalena y toda la zona que le plugo al vencedor señalar para residencia del Gobierno, por el hecho mismo de la concesión, está segregada de Lima, antes un todo con los demás suburbios que forman la provincia. Y si esto es cierto, no se comprende cómo se quiere persuadir que en tan lastimoso estado de cosas, lo mismo significa Lima ocupado por el enemigo, que uno de sus distritos, que si no se halla en total desamparo, las autoridades que allí se constituyan no pueden salir de los límites fijados en la demarcación ya de antemano establecida. No recordamos un hecho semejante en nuestra historia ya un poco avanzada de nuestra independencia ni en la de los demás pueblos del antiguo y del nuevo mundo. En Francia, la Corte de Casación se instaló alguna vez en Burdeos porque París estuvo impedido, pero las circunstancias eran muy distintas. Burdeos no se encontraba sojuzgado por extrañas fuerzas, ni formaba parte de París, gozaba de independencia y satisfacían otras necesidades de política y de administración, que las peculiaridades de ese país hacían necesarias. Si estas son las razones que bajo la faz jurídica, de conveniencia social y de carácter histórico, hacen irrealizable la traslación de los Tribunales a la Magdalena, los inconvenientes materiales para la administración de justicia fuera de Lima, crecen a medida que se medita con detención en cuanto han menester los magistrados para desempeñar su ministerio con rectitud y con acierto. Todos los juicios civiles tienen los objetos controvertidos en esta ciudad, hoy desgraciadamente de extraña jurisdicción; las causas criminales no pueden seguirse con regularidad cuando los cuerpos de delito están fuera del alcance de los jueces, cuando los testigos no están en el mismo lugar ni hay fuerza para compelerlos a prestar sus testimonios. Los Tribunales ven las causas en audiencia pública, y para esto deben estar presente los abogados que patrocinan las causas a los actos judiciales, y cuando no es fácil ni sin riesgo la conducción de los procesos. Las Secretarías no tendrían a su disposición los archivos, ni mucho menos podría contarse con la asistencia asidua de los escribanos y procuradores. Se reunirían las Cortes, y las más veces carecerían de trabajo por la falta de manos auxiliares, y éstos serían, si no se padece equivocación, accidentes que harían frustránea la administración de justicia.*

*Comprende esta Corte el celo de S.E. el Presidente Provisorio para mejorar la situación de cuantos sustentan pleitos ante los Tribunales y juzgados; conoce y aprecia altamente su patriotismo; pero también sabe cuánta es su prudencia y su ilustración para valorar las razones que ligeramente quedan desenvueltas. Los males que se experimentan son consecuencia de la guerra, uno de aquellos infortunios que comprenden sin distinción a todas las clases sociales. Pero infinitamente peor sería la tacha que se opusiese a las sentencias mañana o en cualquier otro día, la demora trae perjuicios, pero no irreparables; mejorados los tiempos, cuando menos se modificarán. Protesta el Tribunal de sus puras intenciones, así como pronto está a todo género de sacrificios para el*



*bienestar de la Nación; no se halla en el caso de disponer de lo que no le es personal, sino de la Nación en lo que le es más importante y caro – la jurisdicción nacional. El Congreso está próximo a reunirse, y él resolverá sin duda, problemas que parecen ahora de difícil solución.*

*Transmito a US. señor Ministro, de una manera fiel, el acuerdo de la Corte Suprema, que debe tenerse como la contestación al oficio que US. con fecha 8 de los corrientes le ha pasado, transcribiéndole el decreto supremo relativo a la traslación de los Tribunales a la zona de la Magdalena.*

*Tengo el honor de ofrecerme nuevamente de US. su más atento servidor,*

*Juan A. Ribeyro*<sup>213</sup>.

Aunque extensa, la comunicación fue clara en la intención de la Corte Suprema de no instalarse en la Magdalena, rechazando el cumplimiento del decreto expedido por el Gobierno Provisorio y dando a entender que esperaba que el convocado Congreso sea quien decida esta situación.

Con miras a lo que constituye el problema central de la presente investigación, debemos rescatar otro punto y es que del texto de las dos últimas comunicaciones de Ribeyro se puede entender que, al 9 de abril de 1881, luego de dos meses de establecida la ley marcial, ésta ya se encontraba aplicando conforme a lo dispuesto en el bando respectivo tanto en lo que refiere a la resolución de los conflictos civiles menores que eran de su competencia como a la sanción de los crímenes. Y sobre este punto en particular es menester recoger un detalle adicional y es que, tal como lo señala Ribeyro, los delitos en Lima parecen ser pocos. Margarita Guerra mencionó esta situación cuando concluyó que la preocupación de los chilenos respecto de la administración de justicia no respondía tanto a temas criminales sino más bien a temas de índole civil ya que *“les preocupaba sobremanera que ‘los grandes intereses’ – desde luego extranjeros – no sufran, porque eso puede atraer la censura y la presión de las potencias en defensa de sus nacionales”*<sup>214</sup>.

Ello demostraría que, contrario a la primera idea que podría surgir de forma espontánea, el principal problema relativo a la administración de justicia en Lima durante esos días no se daba con relación a los juicios criminales.

Pero lo principal de esta comunicación lo constituyen los argumentos jurídicos que contiene. En efecto, la misiva no redundaba en detalles de política interna sino que

<sup>213</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, op. cit., páginas 542-549.

<sup>214</sup> GUERRA, op. cit., página 238.

presta una opinión sobre lo que es la Teoría del Estado y las nociones de soberanía y jurisdicción. Argumentación en base a la cual concluye de una forma correcta que es moralmente imposible que la Corte Suprema, en tanto representante de la soberanía nacional por ser el máximo órgano en quien reposa la importante función de la administración de justicia, pueda instalarse en Lima para coexistir con la ley marcial chilena. Demuestra que la instalación en la Magdalena no constituye una solución a este problema sino que sólo es un acto de conformidad con las reglas puestas por los invasores lo que implicaría, de parte del Poder Judicial, una auto represión de su propia majestad.

Aunque no lo dice directamente, se llega a la conclusión que el motivo principal por el que no se puede ejercer jurisdicción en estos momentos se debe a dos defectos que hieren en lo sustancial la idea misma de jurisdicción: (i) la falta de respeto a sus decisiones ya que se vive con la potencialidad real de que los invasores ejercieran presión sobre los tribunales para condicionar sus funciones y sus decisiones; y (ii) la falta de coacción para asegurar el cumplimiento de sus decisiones retratado en el hecho de que el Poder Judicial no podría asegurar el uso de la fuerza pública para garantizar el cumplimiento de las sentencias. El uso de toda fuerza pública dependía de contar con la autorización – o cuando menos la conformidad – de la autoridad invasora.

Ante la contundencia con que la Corte Suprema manifestó su posición, era poco lo que podía aportarse al debate. En efecto, la última remisión a la decisión final del Congreso era una clara muestra de que, por lo menos para lo que respecta a la Corte Suprema, este debate no iba a prosperar. Es por ello que no sorprende el tono de la respuesta del Gobierno quien, haciendo diálogo de sordos, no entró a aquilatar la pertinencia o corrección de los argumentos presentados por la Corte y se limitó a expedir un nuevo decreto volviendo a reiterar su exigencia de que los Tribunales se debían instalar en la Magdalena.

Este decreto fue expedido el día viernes 22 de abril cuando ya era evidente que la Corte Suprema no se instaló el día establecido por la ley de 1874. Al igual que la Corte Suprema, el Ejecutivo dejó en claro que este decreto constituía su última comunicación al establecer un apercibimiento para que, en caso de persistir la negativa, se pondría la situación en conocimiento de la Representación Nacional convocada.



Ministerio de Justicia

Magdalena, 22 de abril de 1881.

Señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia.

S.E. el Presidente Provisorio de la República se ha servido en acuerdo de hoy, expedir la resolución que sigue:

*“Visto el anterior oficio en que se da cuenta del acuerdo habido en la Corte Suprema de Justicia, a mérito de la suprema resolución de 8 del corriente, y teniendo en consideración:*

*Que subsisten las fundadas razones que motivaron la citada resolución y el supremo decreto de 29 de marzo próximo pasado, expedidos en el ejercicio de las facultades que al Gobierno Provisorio otorga el inciso 7° del artículo 94 de la Constitución Política del Estado;*

*Que no obstante el repetido requerimiento hecho a la Corte Suprema, se niega este Tribunal a abrir el Despacho Judicial en la fecha que señala la ley del 1° de diciembre de 1874,*

*Que esa negativa no sólo irroga trascendentales perjuicios a los vecinos de este Distrito Judicial con la paralización de todos los juicios, sino también deja sin administración de justicia a casi toda la República, que no está en su mayor parte ocupada por fuerzas chilenas, pues quedan sin resolución los recursos de nulidad interpuestos ante los Tribunales Superiores de los demás Distritos Judiciales, y que ellos no pueden negar conforme a las leyes vigentes;*

*Que además existen muchos detenidos y acusados criminales, entre ellos varios extranjeros, a algunos de los cuales no se les ha tomado aún la instructiva, sin embargo de los muchos días transcurridos desde que se ofició a la Corte Superior de la capital poniendo a los primeros a disposición del juez competente;*

*Que el Gobierno debe hacer cuanto le sea posible, dentro de los límites de sus atributos constitucionales para que se restablezca la pronta administración de justicia;*

*Requírase una vez más a la Corte Suprema de Justicia para que sin pérdida de tiempo, cumpla lo dispuesto en la ley de 1° de diciembre de 1874, procediendo a la solemne apertura del despacho judicial en este distrito que, a más de formar parte de la capital, sirve de actual residencia del Gobierno y ofrece toda la independencia posible a los Tribunales y Juzgados para el libre ejercicio de sus funciones, por estar declarado territorio neutral por las autoridades del ejército invasor, y en caso contrario, dese cuenta de este asunto al próximo Congreso Extraordinario, quedando comprendida a su resolución entre los objetos de la convocatoria hecha en el supremo decreto de 29 de marzo próximo pasado. – Regístrese, comuníquese y publíquese”.*

*Tengo el honor de transcribirla a US. para su conocimiento y demás fines.  
Dios guarde a US.*

*José Miguel Vélez”<sup>215</sup>.*

---

<sup>215</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, op. cit., página 549-551

No sólo estamos ante la reiteración de la orden de instalación sino que este decreto, sobre todo en su parte considerativa, constituye más bien una comunicación a la Corte Suprema de las irregularidades que, según el Ejecutivo, estaría causando con su decisión de no instalarse. El posible perjuicio que se irroga a los litigantes, la demora en la tramitación de los recursos de nulidad provenientes de otros distritos judiciales del país y la demora en el trato de los detenidos en la misma ciudad de Lima son utilizados como una suerte de indicador de cuál sería el tenor de la comunicación que el Gobierno Provisorio cursaría al Congreso informando el desempeño del Poder Judicial.

La dureza de este decreto tuvo efectos ya que, contrariamente a lo que dio a entender, la Corte Suprema cursó una nueva comunicación en la que se atemperan bastante los ánimos, se intenta aclarar que su decisión no constituye un acto puro de rebeldía y se toma la palabra al Poder Ejecutivo en el sentido de que sea el próximo Congreso quien defina la suerte de esta discusión. Se podría ver cierta relación entre el texto de esta respuesta, el miedo a un juicio de responsabilidad política que un Congreso reunido en Chorrillos podría imputar a los vocales y la constante pérdida de poder y protagonismo que venía sufriendo Nicolás de Piérola. En los Anales Judiciales se rescatan tanto la brevísima acta de la reunión como el texto del oficio dirigido al ministro Vélez.

*“Lima, abril 25 de 1881,*

*Contéstese en los términos acordados y archívese.*

*Una rúbrica.*

*Lama.*

*Secretario”<sup>216</sup>.*

*“Corte Suprema de Justicia*

*Lima, abril 26 de 1881.*

*Señor Ministro de Justicia, Culto, Instrucción y Beneficencia.*

*La Corte Suprema se ha instruido por el oficio de US. de 22 de los corrientes, del decreto del Gobierno que somete al Congreso, y hace uno de los objetos de su convocatoria, la cuestión sobre la apertura de los Tribunales de Justicia. Sensible es, que no la voluntad del Tribunal, sino el imperio de las*

---

<sup>216</sup> *Ibíd.*, página 551.

*circunstancias y lo aflictivo de la situación que se atraviesa, la obliguen, celosa, como es del cumplimiento de sus deberes, a mantenerse firme en su propósito. Las razones que antes ha desenvuelto el Tribunal para no administrar justicia durante la ocupación militar de esta capital por el Ejército de Chile, quedan subsistentes, a su juicio, a pesar de los fundamentos aducidos como base del decreto mencionado. Suspende, por tanto, toda discusión ulterior, reservándose la exposición de sus derechos para cuando la Representación Nacional se reúna y se contraiga a reparar los hondos infortunios de la patria. No recuerda la Corte en la historia de su vida constitucional, y en ninguno de los actos judiciales que ha desempeñado, haber dado mérito a requerimientos del Poder Ejecutivo; y ahora mismo, si la justicia ha quedado suspendida, culpa no es de una magistratura la primera siempre en la carrera de los sacrificios, sino de los acontecimientos que han sobrevenido por nuestra desventura nunca bastante deplorada. Inútil es repetir a US., porque hartó bien lo sabe, que los Tribunales del Perú, y la Suprema, principalmente, jamás han creado conflictos al Gobierno, contraídos como han estado constantemente al desempeño de sus funciones. Si S.E. el Presidente, como se complace en reconocerlo el Tribunal, abunda en patriotismo, el Poder judicial no se halla ciertamente menos animado de iguales y nobles sentimientos. Así contesto a US. a su último citado oficio, por acuerdo de la Corte Suprema, esperando que, a vuelta de pocos días, todo quedará definitivamente arreglado por el Congreso. Soy de US. una vez más su atento y seguro servidor,*

*Juan A. Ribeyro*<sup>217</sup>.

Este oficio fue la última comunicación que se cursó entre el Gobierno Provisorio y la Corte Suprema. Ciertamente es que a esas alturas de la ocupación, fines del mes de abril, la agenda del gobierno se centraba en temas de mayor gravedad que terminaron haciendo que esta discusión perdiera un poco de importancia. Sin embargo, Margarita Guerra recoge un detalle y es que, lejos de ser unánimes, estas decisiones marcaron divisiones en el seno de la Corte Suprema siendo que algunos vocales se retiraron “hasta después de la ocupación por encontrar imposible el libre ejercicio de sus funciones”<sup>218</sup>. Este detalle coincidiría con lo expresado por Ricardo Palma en una cita anterior en el sentido de que la decisión de la Corte Suprema de presentarse ante el Congreso Extraordinario se obtuvo en votación dividida y hubo algunos vocales que no se presentaron en dicha ocasión<sup>219</sup>.

---

<sup>217</sup> *Ibíd.*, páginas 552-553.

<sup>218</sup> GUERRA, op. cit., página 225.

<sup>219</sup> PALMA, op. cit., páginas 55-56.

### c. La presentación ante el Congreso reunido en Chorrillos

Desde este momento, el frente político interno se centró en la instalación del Congreso Extraordinario así como en los intereses políticos que buscaron, de un lado, su instalación y, de otro, su frustración por falta de quórum. Si bien la convocatoria fue hecha para el día 15 de mayo de 1881, lo cierto es que el Congreso no pudo sino instalarse hasta el mes de julio debido precisamente a que no alcanzaba el quórum necesario para ello. La intención del Gobierno Provisorio era lograr la efectiva instalación del Congreso ya que dependía de él en gran medida para solucionar diversos temas de política interna. Por el contrario, las fuerzas pierolistas en el interior del país tenían la intención de frustrar la misma, evitando la llegada de diputados a Chorrillos y favorecer, más bien, la asistencia de estos a la asamblea que días después convocaría Nicolás de Piérola para ser llevada a cabo en Ayacucho. A estos esfuerzos se debe sumar el hecho de que algunos otros diputados no reconocían aún la autoridad de García Calderón y se negaron por su propia decisión a acudir a la convocatoria. Los chilenos por su parte, si bien no veían con entera satisfacción que se estén dando acciones que podrían dar a entender que el Perú mantenía una existencia independiente y hasta cierto punto “normal” a pesar de la ocupación<sup>220</sup>, no pusieron trabas a la instalación del Congreso.

Tras un periodo en el que se realizaron todas las acciones posibles con la finalidad de evitar la frustración de la convocatoria, el 19 de julio de 1881 se instaló el Congreso Extraordinario por un periodo de 45 días hábiles<sup>221</sup> y con la asistencia de sólo 72 miembros que representaban el quórum mínimo requerido para ello. A dicha instalación, como ya mencionamos anteriormente, acudieron en representación del Poder Judicial algunos vocales supremos, superiores y jueces.

El Congreso inició sus sesiones reconociendo el Gobierno Provisorio de Francisco García Calderón y decidiendo que sus debates se realizarían en sesiones secretas. En una de ellas, el Presidente de la Corte Suprema Juan Antonio Ribeyro cumplió con presentarse ante la Representación Nacional y leyó un discurso que, rescatado por los Anales Judiciales de la Corte Suprema<sup>222</sup>, constituye un larguísimo e interesante desarrollo de las teorías que sustentaban la posición de la Corte Suprema de no

---

<sup>220</sup> GUERRA, op. cit., página 216.

<sup>221</sup> *Ibíd.*, página 223.

<sup>222</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, op. cit., página 554 y ss.



instalarse en la Magdalena y se presenta como un extenso desarrollo de las ideas que ya habían sido adelantadas desde la comunicación de fecha 15 de marzo dirigida al ministro Vélez.

Ribeyro empezó reconociendo que la actitud de la Corte Suprema fue de “no administrar justicia durante la ocupación militar de Lima por las fuerzas enemigas”<sup>223</sup> para señalar a continuación que ello no se debió a una decisión voluntaria sino al hecho de que la soberanía de la Nación no se encontraba en ejercicio desde el mismo momento en que un ejército invasor la tenía avasallada.

Tras comentar la primera respuesta dirigida a las autoridades invasoras y el recurso al hecho de que los tribunales se encontraban en periodo vacacional, identificó a la implantación de la ley marcial como la razón primordial de la negativa del Poder Judicial.

*“Mas con posterioridad, por la lógica precisa de los que se adueñan de un país por la fuerza de las armas, erigíase una corte marcial, compuesta de jefes del ejército ocupante; y bien se comprende cuanta depresión de nuestra dignidad nacional envolvía una medida semejante. Ante estos nuevos jueces, que por probos que fuesen y bien intencionados, no conocían ni nuestra legislación ni la índole del país, se llevaban las causas criminales, también las civiles, que se resolvían brevemente, tiñéndose como es natural del espíritu dominado de esa superioridad transitoria creada por los accidentes de la guerra. Y no como quiera se decidían los juicios criminales por autoridades enteramente extrañas, sino que se imponían penas que el Perú desconocía y había proscrito de sus códigos. Imposible era que esta Corte y la Superior y los jueces de primer grado, concluidas las vacaciones volvieresen a ejercer sus facultades para administrar justicia; imposible que, faltando la seguridad personal, la libertad para obrar sin los temores y zozobras que engendra la presencia de un enemigo, que todo quiere concederlo por merced y nunca con derecho; y la conciencia de que los actos judiciales no serían en todo evento respetados y cumplidos, imposible, se repite, que fuera hacedera la apertura de los Tribunales y Juzgados”<sup>224</sup>.*

La instauración de la ley marcial graficaba, entonces, el hecho de que los Tribunales no iban a tener ni la independencia ni la posibilidad de ejercer sus funciones de la forma debida sino que iban a estar sujetos, de todas formas, a la posibilidad de que los invasores hicieran nulos sus actos y desconocieran su autoridad. Ribeyro calificó de humillante el hecho de que se pusiera a los tribunales nacionales al mismo nivel que los tribunales militares del invasor afirmando que

---

<sup>223</sup> Ibíd., página 554.

<sup>224</sup> Ibíd., páginas 556-557.



*“...esto lo tomarían nuestros enemigos como un síntoma mortal de decadencia y de vergonzoso abatimiento. Mañana u otro día nuestro crédito rebajaría a los ojos y consideración de los pueblos mismos de la América porque si hemos sido vencidos en una de esas mudanzas del destino, la derrota no puede jamás conducirnos al punto de renunciar a nuestras libertades, que son imprescriptibles, como todo derecho inmanente de soberanía nacional. La vida de los pueblos no es de un día; y nosotros al disponer de los negocios de la República por exigencias del momento, comprometiendo el porvenir, abdicamos no sólo lo que pertenece a nosotros, sino a las generaciones que deben sucedernos”<sup>225</sup>.*

Hizo referencia a que otras naciones, al pasar por el mismo trance que en ese momento vivía el Perú, prefirieron soportar los rigores de la ocupación antes que prestarse a colaborar con el invasor y contribuir al menoscabo de la soberanía nacional. Esa colaboración la identifica como un atentado contra el honor del país y señala que ese honor es, para las naciones, *“elemento constitutivo y principal de su existencia, tanto moral como política”<sup>226</sup>*. Abunda señalando, además, que

*“... no conocemos un país que se haya visto, en materia de administración de justicia, en las condiciones que tenemos nosotros por consecuencia de la guerra. (...) No hay ningún caso que se presente de que los Tribunales de Justicia nacionales despachen juntamente con los formados por las autoridades invasoras, y más por gracia de éstas que por derecho y jurisdicción propios”<sup>227</sup>.*

Sopesa los daños que la clausura de los despachos judiciales puede causar a la población en la resolución de sus negocios y concluye que estos no son comparables con el daño que se causaría a la soberanía nacional si es que la administración de justicia se reiniciara.

*“Justicia tendrá nuestra patria, de la manera que se le debe y la reclama; recta, imparcial e independiente. Las controversias judiciales que se ventilan ante las Cortes Superiores de la República no quedan entrabadas desde que los distritos en que funcionan no están ocupados por las fuerzas enemigas. Verdad es que interrumpidas las labores de la Suprema, los recursos de nulidad no tienen inmediata solución; pero es preciso considerar que el retardo es pasajero”<sup>228</sup>.*

---

<sup>225</sup> Ibíd., página 565.

<sup>226</sup> Ibíd., página 558.

<sup>227</sup> Ibíd., páginas 566 – 567.

<sup>228</sup> Ibíd., página 568.

En efecto, señala que si los tribunales abrieran sus puertas, sólo podrían ofrecer al pueblo una justicia debilitada, restringida y llena de reservas, donde otros poderes fácticos le disputan su valía, corriendo el riesgo latente de que se declare la nulidad de sus actos y que pasaría más tiempo intentando hacer respetar sus fueros que resolviendo efectivamente los conflictos. Por el contrario, da a entender que este sacrificio de parte de la población es un sacrificio válido y patriótico en esos momentos.

Ribeyro reconoce que es labor de los magistrados el evitar que “la justicia” sea contrariada en sus fines y preservarla en situaciones de emergencia. En esa idea concatena el desarrollo del concepto de la “independencia” identificándolo no sólo con la idea de separación de poderes sino también con la posibilidad efectiva de que cada poder pueda decidir en lo que es su campo. Si los tribunales reiniciaran su labor, esta idea de independencia podría dejar de existir cuando así lo deseen las autoridades invasoras por lo que, concluye, la misma estaría siendo ya no un derecho que se tiene sino una gracia que se recibe. Cita a un anónimo pensador de sus días y sentencia: *“La libertad y la independencia son bienes que no se pueden recibir jamás de manos del extranjero; se les debe conquistar por los esfuerzos propios y por el sacrificio”*<sup>229</sup>.

Compromete al Presidente Provisorio al afirmar que él entendía estas ideas y principios y que por ello cesó en su pedido de que los Tribunales se instalen en Lima ofreciéndoles, a cambio, la posibilidad de instalarse en la Magdalena. Sin embargo, Ribeyro explicaría por qué esa opción tampoco constituía una solución aceptable. La razón se debía a que la neutralidad de dicha localidad era una ficción porque el gobierno ahí instalado carecía de los medios para sostenerse a sí mismo y dependía totalmente de que se mantenga vivo el deseo de los chilenos de permitir dicho gobierno. Es decir, no se ofrecían seguridades permanentes a las instituciones gubernamentales que se instalen en esa localidad. Pero, aún en el supuesto que dicha neutralidad se respete y los chilenos accedan a mantenerla, se estaría frente a una jurisdicción limitada territorialmente y la Corte Suprema, cuya competencia es de ámbito nacional, tendría problemas para hacer extender su autoridad a todo el territorio. Ello sin contar los problemas fácticos como la dificultad del traslado de los varios funcionarios judiciales que vivían en Lima y tendrían que ir hasta la Magdalena ocasionando que la Corte no pudiera funcionar debido a falta de manos, la falta de seguridad para los procesos, la imposibilidad de realizar audiencias públicas, y el

---

<sup>229</sup> *Ibíd.*, página 561.

hecho de que se juzgue en la Magdalena cuando todos los elementos de investigación están en Lima. No es lo mismo, concluye, el Poder Ejecutivo que el Poder Judicial y por ello el hecho de que aquel se haya podido instalar en la Magdalena para atender cuestiones internacionales pendientes y temas de orden administrativo no es razón que implique que el Poder Judicial esté en la posibilidad de actuar de la misma manera.

Aterrizando estos razonamientos, Ribeyro reconoce que no existía en nuestra legislación ninguna disposición que autorice a los tribunales a reunirse durante la ocupación militar de Lima y que, por el contrario, existía una disposición suprema (emitida por Nicolás de Piérola como vimos anteriormente en este capítulo) que prohibía la administración de justicia en los lugares ocupados por los chilenos. Reconoce que, debido a los raros supuestos de denegación de justicia por abandono de los jueces que se dieron en nuestra historia, el gobierno tiene un derecho a convocar a los tribunales pero señala que esa facultad corresponde a un supuesto distinto al que se vivía en aquel momento y que, por lo tanto, considerando lo crítico y extraordinario de las circunstancias, es un derecho del Poder Judicial el no atender a ese llamado y defender su independencia y la cuota de soberanía nacional que representa.

La presentación finaliza reconociendo la autoridad del Congreso, sometiéndose a lo que éste decida y haciendo una exhortación a no tomar una decisión apresurada.

*“Las personalidades perecen, pero no las instituciones, que sobreviven a todos los acontecimientos, si se las conserva y defiende de todos los avances y de todos los peligros (...) más temprano o más tarde provoca una reacción saludable para el derecho y para la verdad”<sup>230</sup>.*

Como puede apreciarse, la presentación de Ribeyro no incluye argumentos nuevos o que no hayan sido mencionados anteriormente. Por el contrario, aparece más bien como un desarrollo didáctico de los que se venían presentando en las últimas semanas y desde su primera comunicación.

---

<sup>230</sup> Ibíd., página 570.

Las limitaciones que enfrentó el gobierno provisorio de García Calderón tanto a nivel interno con los demás departamentos que no reconocían su autoridad como a nivel externo en sus relaciones con los jefes invasores y la dependencia directa del nivel de tolerancia que éstos mostraran, implicó la debilidad también del Congreso reunido en Chorrillos. La existencia de temas a tratar que revestían mayor urgencia y gravedad así como la constante presión del invasor y el corto plazo con que se contaba (45 días hábiles) debieron ser los motivos para que, luego de la presentación de Ribeyro, no se llegara a atender este problema<sup>231</sup>. En efecto, luego de este discurso, no se tiene mayor noticia sobre el papel realizado por la Corte Suprema sino hasta que reasumió sus funciones superada la ocupación chilena de la capital luego de suscrito el Tratado de Ancón en 1883.

No obstante, debe destacarse que el Poder Judicial mantuvo su existencia como un poder acéfalo ya que en el resto del país, y en especial en las localidades que no sufrieron ocupación, las funciones judiciales se llevaron con total normalidad<sup>232</sup>.

#### **Subcapítulo 4: Apreciación crítica de la posición de la Corte Suprema.**

Es difícil, por la naturaleza misma de los hechos narrados, poder separar y diferenciar limpiamente los ámbitos políticos y jurídicos que revisten cada uno de ellos y, en consecuencia, determinar con total objetividad en qué momento estamos frente a hechos que obedecieron a motivaciones políticas y en qué momento nos enfrentamos a hechos con un exclusivo trasfondo jurídico. Esa dificultad es mayor en el caso de pretender establecer una opinión crítica sobre la posición que la Corte Suprema tuvo en los primeros meses de ocupación. Nos encontramos con que sus actos parecieran responder a una mezcla de móviles políticos y jurídicos con la complicación adicional de que no tenemos cómo conocer qué tipo de móviles fueron los que pudieron inspirarlos tanto a nivel personal como a nivel de colegiado. En efecto, ante la falta de una declaración clara y expresa por parte de cada uno de los vocales supremos, los móviles políticos sólo los podemos conjeturar o inferir en base de lo que da a entender el contexto histórico político así como en las escasas apreciaciones de terceros que se pueden coleccionar.

---

<sup>231</sup> GARCÍA CALDERÓN, Manuel, op. cit., página 384.

<sup>232</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, op. cit., página 526 y 527.

Por el contrario, los móviles jurídicos no pueden evaluarse en función de conjeturas por cuando el fenómeno jurídico, a diferencia del político, no es un fenómeno subjetivo sino que se refleja en un sustrato concreto que bien puede estar constituido por una ley, una sentencia o una comunicación. Así, los móviles jurídicos que, sin ser expuestos, participan de la motivación de un acto o una decisión constituyen un elemento abstracto de difícil conocimiento y que, a efectos finales, termina teniendo poca relevancia en la evaluación jurídica que se quiere realizar.

Ante esta situación, debemos tener presente que la naturaleza de este trabajo nos exige privilegiar casi en función de exclusividad el ámbito jurídico. En ese sentido, si bien no podemos saber y separar con total limpieza cuáles son los móviles políticos y cuáles los jurídicos, lo cierto es que cada comunicación cursada por la Corte Suprema contiene un hecho jurídico que debemos analizarlo como tal sin tomar en consideración los móviles políticos que, ya sea exponiéndose, ocultándose o mostrándose de forma subrepticia, pudieron incidir en su argumentación.

Tomando como única base lo expuesto en las comunicaciones dirigidas por la Corte Suprema, nos vemos en la necesidad de analizar si la argumentación utilizada por este Supremo Tribunal fue jurídicamente correcta o si bien, aún sin llegar a ser incorrecta, constituye una argumentación basada en interpretaciones poco usuales. Tal como se desprende del repaso que hemos realizado, de la posición de la Corte Suprema se advierten dos momentos claramente diferenciados. El primer momento es también el menos elaborado y menos rico en calidad argumentativa ya que se refleja de la primera respuesta que la Corte brindó ante el pedido de su reinstalación. Por su parte, el segundo momento no sólo es el más extenso sino que también muestra ser el más elaborado y con un mayor número de referencias sobre las cuales opinar.

#### a. Primer momento: el argumento de las vacaciones.

El primer argumento prestado por la Corte Suprema fue el dirigido directamente a la autoridad invasora como respuesta de la invitación que ésta envió y hacía referencia al periodo vacacional. En efecto, tal como hemos señalado en varias oportunidades, el periodo de vacaciones judiciales terminaba recién el día 14 de marzo de 1881 y al momento de la comunicación de la autoridad invasora ese plazo aún no se había cumplido. Esto muestra que el argumento era jurídicamente correcto por cuanto se



limitaba a subsumir una consecuencia jurídica establecida dentro de un supuesto existente y previamente observado por la ley.

Sin embargo, esta respuesta, en tanto argumentación jurídica que sustenta la posición negativa de la Corte Suprema, se presentaba como débil. Debilidad debida, en primer lugar, a que era una respuesta temporal. En efecto, transcurrido el plazo de vacaciones, no existiría argumento que impidiera la reinstauración de las labores judiciales. En segundo lugar, era débil porque la argumentación se basaba sólo en la norma existente. Así, si se emitía una norma que modificara el plazo vacacional, el argumento prestado por la Corte Suprema habría tenido necesariamente que modificarse para mantenerse coherente con las normas vigentes.

Esta debilidad tuvo expresiones claras durante el devenir de los hechos y es que, al brindar una posición “legalista”, la Corte Suprema brindó un flanco débil en el sentido de que se le iba a exigir un accionar coherente y, en consecuencia, que cumpla también con otras exigencias legales. Así, se debe llamar la atención sobre las comunicaciones que manifestaron la extrañeza de que, aún en tiempo vacacional, no existiese un órgano judicial de turno que se ocupe de los casos urgentes. Las leyes vigentes al momento de la ocupación preveían esa situación y establecían la existencia de esos órganos de vacaciones. Sin embargo dichos órganos no funcionaron con lo que se evidenciaba una contradicción en la conducta del Poder Judicial: por un lado pregonaban el cumplimiento de las normas legales referidas al término del periodo vacacional y por el otro hacían la vista gorda de las normas legales referidas al establecimiento de órganos judiciales de turno durante las vacaciones.

A pesar de la observación realizada no se puede negar que subyace detrás de la respuesta de la Corte – aunque esto no es un hecho jurídico verificable – que la intención de ésta fue no ejercer su función durante el periodo de ocupación y que el argumento de los periodos vacacionales únicamente sirvió como un “argumento preliminar” que permitiera a la Corte negarse a los primeros requerimientos para que reinicie sus funciones.

b. Segundo momento: el argumento de la imposibilidad de ejercer la función jurisdiccional

Tanto el establecimiento de la ley marcial en Lima y El Callao así como el fin de las exigencias que las autoridades invasoras hicieron al Poder Judicial, marcaron una nueva etapa dentro del desarrollo de los argumentos que sustentaron la posición de la Corte Suprema. En efecto, desde las primeras comunicaciones entre este Supremo Tribunal y el Gobierno Provisorio se fue desarrollando, en evidente forma creciente, una argumentación que podríamos calificar como los verdaderos motivos que sustentaban la actitud de la Corte Suprema.

Si bien la carta del 9 de abril y el discurso ante el Congreso de Chorrillos constituyen las piezas principales donde se expusieron esas razones, lo cierto es que éstas no sólo fueron presentadas en aquellas oportunidades sino que, por el contrario, se las podía entender desde la comunicación del 15 de marzo que fue la primera que se cursó entre la Corte Suprema y el gobierno de Francisco García Calderón. Como señalamos anteriormente, los argumentos finalmente expuestos por la Corte Suprema – tal como fueron presentados a la Representación Nacional reunida en Chorrillos – no pasaron por la remisión a normas jurídicas y, por el contrario, desarrollaron diversos tópicos derivados de la Teoría del Estado y el Derecho Constitucional. Sin embargo, analizando dichas comunicaciones, podemos identificar que – aunque Ribeyro no lo menciona de esa manera – la principal razón de la negativa es que la Corte Suprema entendía que no podía ejercerse una real función jurisdiccional en las condiciones existentes en 1881. Ribeyro utiliza ejemplos y referencias que podrían sonar a eufemismos pero da a entender claramente que, de reinstalarse, la labor que realizara el Poder Judicial carecería de dos de los elementos esenciales clásicos de toda jurisdicción: *coertio* y *executio*.

Sin decirlo, Ribeyro reconoce que la labor de los tribunales en esas condiciones se habría dado en un contexto en el que éstos no tendrían la forma de ejecutar sus decisiones ni la posibilidad de recurrir al auxilio de la fuerza pública para asegurar el cumplimiento de sus disposiciones. Para poder contar con dichos elementos, el Poder Judicial hubiera tenido que recurrir – y someterse – al gobierno invasor y este escenario es el que repugnaba a la Corte Suprema: tener que aceptar que necesitaban contar con la aquiescencia del invasor para poder ejercer sus funciones.

La discusión sobre si, a raíz de la invasión de la ciudad capital, el Estado Peruano había dejado efectivamente de existir o sobre la situación jurídica en que se encontraba la ciudad de Lima respecto de la vigencia temporal y espacial de las leyes peruanas, excede el propósito de esta investigación pero debemos reconocer que era evidente que no existía ningún poder fáctico peruano que pudiera prestar apoyo al Poder Judicial para que éste pueda ejercer sus funciones. A eso se refería Ribeyro cuando señalaba que el Poder Judicial no contaba la posibilidad de hacer valer su autoridad en el ámbito nacional y es en esa idea en la que toman sentido las menciones que hace sobre el carácter de la soberanía nacional. Resulta realmente contradictorio e inaceptable que un poder del estado, encargado de una gran parte de las funciones que corresponden a ese todo, tenga que someterse y depender de un poder invasor. Ese acto en sí mismo constituiría el reconocimiento de la ausencia de soberanía, de la falta de independencia.

No podemos afirmar que a raíz de la ocupación el Estado Peruano dejó de existir, pero sí podemos afirmar que, si el Poder Judicial hubiera solicitado y recibido de las autoridades chilenas el apoyo necesario para poder ejercer sus funciones, habríamos estado ante un reconocimiento claro y expreso de parte de esa capital institución de que el Estado Peruano no existía. Y en tanto el Poder Judicial forma parte del Estado Peruano, ello habría implicado su propia contradicción y motivado su desaparición jurídica como un verdadero poder estatal. Desarrollando la idea, una Corte Superior hubiera tenido toda la libertad de desconocer a una Corte Suprema cuya autoridad ya no nacía de la Constitución Peruana sino del respaldo que recibía de las fuerzas invasoras. El Poder Judicial, entendido como una organización jerárquica de alcance nacional, habría colapsado y se hubiera tenido que reconstituir uno nuevo desde los despojos del anterior. Ante esta posibilidad correspondía a la Corte Suprema, en su calidad de Supremo Tribunal y cabeza del Poder Judicial, verificar que sus actos eviten generar esa situación.

En ese orden de ideas, considero que la argumentación de la Corte Suprema se puede resumir en lo ya expuesto: “El Poder Judicial en Lima no puede reinstaurarse porque, en primer lugar, es jurídicamente imposible ejercer función jurisdiccional alguna ante la falta de dos de sus componentes esenciales: la *coertio* y la *executio* y, en segundo lugar, que la acción contraria sería reconocer su propia extinción como poder constituido”.

Puestos a calificar este argumento, coincidimos con el mismo y consideramos que no constituye una argumentación errónea ni alambicada sino una interpretación principista de lo que es el Poder Judicial y su función. Coincidimos en esa idea con lo expuesto por el doctor César San Martín – actual Presidente de la Corte Suprema - quien, en un artículo escrito hace unos años, consideró el actuar de la Corte presidida por Ribeyro como una actitud encomiable de defensa de la soberanía nacional y una muestra de dignidad patriótica <sup>233</sup>.

Sin embargo, el hecho de que podamos considerar jurídicamente correcta la argumentación presentada por la Corte Suprema y adecuada su actitud frente a la difícil coyuntura que le tocó sortear, no quita que de la misma se generan varias preguntas que mencionamos más con un ánimo de promover el debate que de zanjarlo definitivamente, toda vez que su respuesta exige un análisis que supera el objetivo descriptivo de la presente investigación.

#### c. Debates jurídicos existentes a raíz de la actitud de la Corte Suprema.

Un primer cuestionamiento que nace es el referido a la validez de las normas legales peruanas y el efecto que trajo consigo la ocupación chilena tanto respecto al tiempo como al espacio.

En efecto, ya hemos mencionado que la Corte Suprema argumentó en un primer momento la existencia del periodo vacacional y que dicho argumento tenía como presupuesto el entender que, aún en momentos en que la capital ya había sido ocupada, esas normas mantenían su vigencia tanto temporal como espacial.

Tal como lo reconoce el mismo Lynch en la memoria que envió a su gobierno en 1882, constituía una potestad de la autoridad invasora el tolerar la permanencia de ciertas formas de organización política y jurídica en los territorios ocupados siempre que éstos no implicaran una disminución o un peligro de sus poderes y su autoridad. En ese sentido, es un hecho acreditado que ni Baquedano o Saavedra en un inicio ni Lynch posteriormente dispusieron el fin de la vigencia de todo el derecho peruano en el territorio ocupado. La voluntad de los chilenos fue permitir la vigencia temporal y

---

<sup>233</sup> SAN MARTÍN CASTRO, César. *La Corte Suprema: Historia y Perspectivas*. En: [http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc\\_int/doc06082009-192426.pdf](http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc06082009-192426.pdf)  
Consultado en febrero del 2012.

espacial del derecho peruano. El detalle en este momento es que, aunque diera la impresión de que no hubo pronunciamiento de parte de los chilenos, en realidad sí lo hubo ya que éste fue tácito y a favor de mantener la vigencia de nuestro derecho. Podría afirmarse que, a partir de la ocupación, el derecho peruano se mantuvo vigente sólo porque así lo decidieron los invasores. Ello ocasionaría que el derecho vigente dejaría de ser un real “derecho peruano” y pasaría a ser, más bien, un “derecho de la ocupación” por obra y gracia de la decisión del ocupante.

Pero este mantenimiento del derecho peruano, lejos de zanjar el tema, no hace sino abrir nuevamente el cuestionamiento sobre si el Estado y el sistema jurídico peruanos podían seguir existiendo en Lima luego de la ocupación, a pesar que los funcionarios que él mismo establecía para garantizar su cumplimiento habían perdido su autoridad y estaban sometidos a la voluntad del extranjero. Este razonamiento de filosofía del derecho nos llevaría tratar de entender si el derecho peruano mantenía su vigencia por su calidad de derecho válidamente establecido o por voluntad propia de una fuerza invasora y si, en este último caso, mantenía aún su condición de derecho peruano o, desde el momento en que fue aceptado por los invasores, asumió el carácter de ser un derecho impuesto por el invasor y, por consecuencia, extranjero.

El segundo cuestionamiento radica en el hecho de determinar si, como dio a entender Ribeyro en su mensaje ante el Congreso de Chorrillos, el Poder Judicial tenía el derecho de desconocer en defensa de valores superiores como son la independencia del Poder Judicial y la soberanía de la nación tanto el llamado de un gobierno en ese sentido como las normas legales que éste expidiera para ello.

En la actualidad casi no habría discusión respecto a la pertinencia de un razonamiento de esa índole, sin embargo, a fines del siglo XIX constituye cuando menos un razonamiento novedoso y vanguardista el que el Presidente de la Corte Suprema afirme que tiene no sólo el derecho sino la obligación de desconocer normas legales en defensa de principios jurídicos que tienen un carácter superior. La posición de la Corte Suprema se podría calificar como un “iusnaturalismo ideológico” que se niega a obedecer una norma que forma parte del sistema jurídico por considerar que la misma es absolutamente contraria a un derecho natural superior.

Como señalamos en un primer momento, las respuestas a estas cuestiones no resultan ser simples ni mucho menos, sobre todo porque no podemos ser injustos en



criticar y evaluar personajes y actos de fines del siglo XIX mediante categorías del siglo XX o XXI. Lamentablemente, la solución a estos debates excede los objetivos del presente trabajo pero su mención se tornaba en obligatoria por cuanto la finalidad de una investigación, por más que su carácter sea histórico y descriptivo, pasa también por abrir nuevos temas de debate que justifiquen posteriores investigaciones.

### **Subcapítulo 5: Hechos posteriores relacionados con el funcionamiento del Poder Judicial.**

El Congreso de Chorrillos en tanto era uno de carácter extraordinario no podía, según la Constitución de 1860, extenderse por más de 45 días hábiles. Eso implicó que el término de la legislatura y su clausura fueran el 1 de septiembre de 1881 y, como era previsible, se quedaron muchos temas sin resolver incluyendo precisamente el relativo a la administración de justicia.

Sin embargo, la administración de justicia sí vio nuevos hechos impulsados por los invasores quienes, tal como ya mencionamos, tenían un vivo interés en que se instale un órgano que pueda conocer los litigios civiles ante la ausencia del Poder Judicial. Luego de clausurado el Congreso de Chorrillos y tras hacerse evidente que el Poder Judicial no iba a reanudar sus actividades hasta la finalización de la ocupación, la autoridad chilena no dudo en prohibir a los funcionarios judiciales peruanos conocer asuntos contenciosos, de forma pública o privada<sup>234</sup>, a la par que empezó a manejar la idea de tomar cartas en el asunto otra vez.

Esa prohibición nos da pie a albergar la idea totalmente razonable de que los magistrados peruanos venían ejerciendo, de manera informal, acciones de heterocomposición. En efecto, hasta este momento Lima no contaba con un sistema de administración de justicia y si bien podía darse el caso de que la población entendiera que la suspensión de dichos juicios constituía un sacrificio que podían asumir patrióticamente, tampoco resulta descabellado pensar que pudieron existir casos en los que los ciudadanos, actuando con toda libertad, decidieran avenirse a lo que informalmente un magistrado peruano, actuando de buena fe, pudiera decir sobre un tema litigioso en particular.

---

<sup>234</sup> AHUMADA, op. cit., página 121.

Más allá de esta situación, la indeterminación sobre la administración de justicia se mantuvo hasta pocas semanas antes de que los mismos chilenos pongan fin al gobierno de Francisco García Calderón. El 17 de septiembre de 1881 Patricio Lynch, según él mismo narra en la memoria que presentó a su gobierno en 1882<sup>235</sup>, solicitó del Ministro de Justicia de Chile, José Antonio Vergara Galeas, su colaboración para remediar esta situación. Lynch presentó al ministro su visión respecto al panorama que presentaba la administración de justicia en Lima durante el primer año de la ocupación:

*“Durante los ocho primeros meses de ocupación, tranquila y hasta cierto punto regular, de Lima y Callao, se habían presentado conflictos de magnitud entre particulares, imposibles de solucionar por falta de jueces.*

*En mi comunicación al señor ministro le decía que semejante estado de cosas no debía subsistir, con grave perjuicio de los grandes intereses aquí radicados y en provecho de de las personas de mala fe que, al amparo de la impunidad, no querían atender al cumplimiento de sus obligaciones.*

*En algunos casos, y atendidas circunstancias muy especiales, la autoridad local militar había dictado resoluciones tendentes a evitar abuso de confianza, robos u otros delitos contra bienes de particulares, pero ellas no sirvieron sino para poner más de manifiesto los inconvenientes que tiene el ejercicio de esas facultades por personas que carecen de los conocimientos profesionales indispensables en la magistratura.*

*En consecuencia, di orden para que se abstuvieran de emitir fallo alguno en asuntos civiles contenciosos y previne al Intendente de Lima que sólo debía entender en aquellos de la más mínima cuantía.*

*Constantemente acudían al Cuartel General individuos de diversas nacionalidades en demanda de protección para sus intereses, y por lo común no obtenían de nuestra parte más que una terminante negativa para conocer en sus negocios.*

*En las cuestiones entre partes se adoptó como regla la providencia de que estas acudieran a ventilar sus derechos adonde creyeran convenirles, pero en determinados casos, en que por motivos especiales no era posible desentenderse completamente de justísimas exigencias, se invitaba a los contendores a constituir un juicio de compromiso que resolviera la dificultad entre ellos suscitada, y, de ordinario, esta gestión ajena las funciones del Cuartel General exigía no poca atención y resultaba infructuosa, después de haber malgastado un tiempo precioso en invitaciones, comparendos y otras diligencias propias de un juzgado.*

*Asimismo se veían comprometidos intereses de chilenos obligados a abandonar este territorio al comenzar la guerra, y era por demás sensible que no pudiesen hallar protección bajo nuestra autoridad.*

*No obstante, comprendiendo que la organización del Poder Judicial, bajo una forma regular y perfecta, no podía llevarse a cabo en aquellas circunstancias, propuse al señor Ministro de Justicia una medida fácil, adaptable a poco costo y suficiente para llenar las exigencias del momento, ya que la situación de acefalía era verdaderamente insostenible”<sup>236</sup>.*

---

<sup>235</sup> Ibíd., página 119.

<sup>236</sup> Ibíd., páginas 119-120.

La comunicación dirigida por Lynch a su ministro no sólo se limitó a graficar la situación y a solicitar la solución a este problema sino que, incluso, presentó una opción:

*“Indiqué el establecimiento de un juzgado en Lima y otro en el Callao y la constitución de compromisos obligatorios para los asuntos que por su naturaleza exigieran especial competencia, pidiendo al mismo tiempo al señor Ministro determinara la autoridad ante quien debiese pactarse el arbitraje, la forma del procedimiento y demás requisitos necesarios para dar a las partes seria garantía y confianza en los fallos.*

*Las resoluciones dictadas por los jueces compromisarios serían en seguida ejecutadas por la autoridad militar, siempre que ellas hubiesen llenado de antemano todos los requisitos legales.*

*En caso de no aprobarse ninguno de los temperamentos propuestos, dejaba a la ilustración y competencia reconocidas del señor Ministro la solución de tan grave dificultad para mi administración”<sup>237</sup>.*

Dicha opción fue trabajada enteramente por parte de juristas chilenos ya que, tal como el mismo Lynch lo narra, el 14 de octubre de 1881 recibió la respuesta del ministro chileno quien le brindó algunos alcances adicionales. Estas opiniones fueron luego consultadas por Lynch con otros altos funcionarios chilenos como el Ministro Plenipotenciario Jovino Novoa y el delegado chileno Eulogio Altamirano quienes debieron dar las últimas pinceladas a la organización de lo que llamaremos el “Poder Judicial de la Ocupación” y que se concretaron en el decreto expedido por la autoridad invasora el 6 de noviembre de 1881<sup>238</sup> y que, según señala la misma norma, entró en vigencia el 1° de diciembre de ese año. Este decreto constituiría el primer acto de un esquema que constó de hasta cuatro actos normativos.

#### a. Primer acto normativo: el decreto del 6 de noviembre de 1881

En los considerandos de este decreto, Lynch señala que la existencia de una ocupación implica la suspensión en el ejercicio de las funciones de las autoridades locales de dicho territorio salvo los casos que, a criterio del ocupante, puedan mantenerse sin afectar ni menoscabar su posición. Dentro de esas funciones ubica a la administración de justicia, especialmente en lo que se refiere a la composición de conflictos de naturaleza civil, por cuanto constituye un ejemplo de las funciones cuyo ejercicio no enerva ni compromete la autoridad ni seguridad del ejército invasor.

---

<sup>237</sup> *Ibíd.*, página 120.

<sup>238</sup> *Ibíd.*, páginas 352-356.

Manifiesta que esa fue la posición de los chilenos desde un primer momento pero que su invitación fue desdeñada por parte de las autoridades peruanas. Abunda señalando que hasta esa fecha la administración de justicia en lo civil quedó en total acefalía con perjuicio no sólo de los ciudadanos peruanos sino también de los extranjeros que residían en esa ciudad. Concluye afirmando que no es deber del ocupante impedir que los peruanos se hagan a sí mismos todo el mal que quieran hacerse pero que, dado que la ocupación se venía alargando más tiempo del que se pensó en un inicio, correspondía establecer medidas provisionales que atenúen el problema.

¿Cuáles fueron dichas medidas provisionales?

Principalmente la creación de dos juzgados letrados (o Juzgados de Letras), uno para la provincia de El Callao y el otro para la provincia de Lima. Estos jueces de letras tendrían competencia para conocer:

- (i) Las demandas civiles o comerciales sobre bienes muebles o crédito cuya cuantía exceda un monto fijado por los invasores en moneda de la época y que ascendía a 400 pesos fuertes o soles de plata.
- (ii) Las acciones meramente posesorias que versen sobre bienes raíces.
- (iii) Las cuestiones concernientes al estado civil de las personas, sólo en los casos en que su resolución sea indispensable para el posterior ejercicio de una acción.
- (iv) La insolvencia y la quiebra de personas y comerciantes.
- (v) Los actos de jurisdicción voluntaria.
- (vi) Los recursos de nulidad contra las sentencias de jueces árbitros.
- (vii) Las acusaciones contra los jueces árbitros por prevaricación o cohecho.
- (viii) Las faltas y delitos leves.

Cada una de estas competencias tuvo un desarrollo normativo dentro del decreto por lo que este estuvo dividido en ocho párrafos. En consecuencia, el primer párrafo contenía la regulación establecida para el primer supuesto de competencia referido a las demandas civiles o comerciales. De la regulación establecida para estas acciones se derivó una suerte de regulación “ordinaria” de la que se desprenderán ciertas peculiaridades aplicables a los demás supuestos de competencia de estos jueces.

Titulado “De las demandas civiles” y abarcando 18 artículos (del 3° al 20°), el primer párrafo establecía el procedimiento general que los invasores habían escogido para regir en el país y que era, a fin de cuentas, la remisión completa a la función de los jueces árbitros denominados “compromisarios”. Se establecía una etapa “pre-arbitral” consistente en la presentación de la demanda ante el juez, quien tramitaba toda una etapa postulatoria (incluyendo la posibilidad de reconvencción) antes de citar a una audiencia. Esta audiencia tenía dos objetivos. El primero era conciliatorio y, en su defecto, el segundo era el nombramiento de los árbitros.

Si las partes se rehusaban a nombrar árbitros, la causa quedaba aplazada hasta que se supere la ocupación y, se entiende, el Poder Judicial reasuma sus funciones. De avenirse en el nombramiento de árbitros, las partes suscribían ante el juez el respectivo compromiso de arbitraje en el que se podían incluir los pactos especiales que permite esta institución (numero de árbitros, renuncia a segunda instancia y al recurso de nulidad, posibilidad de pronunciarse sobre temas no expuestos en los escritos postulatorios, posibilidad de resolver de “conciencia”, etc.). La práctica determinada como ordinaria por este decreto era el nombramiento de un Tribunal de dos árbitros y un tercero que sólo participaría en la eventualidad de que exista discordia. Cualquier falta de acuerdo en este estadio era resuelto por el juez mediante el nombramiento de un único árbitro. La única prohibición absoluta en este sentido era relativa a los funcionarios de la administración chilena, ellos no podían ser árbitros en ningún supuesto.

Posterior a esta audiencia, existía una etapa de comunicación a los árbitros quienes conjuntamente con su aceptación presentarían su propuesta de honorarios. Si hubiera un problema en la aceptación de los árbitros o en el monto propuesto como honorarios, el juez los resolvería en una nueva audiencia con presencia de todos los intervinientes.

El juicio arbitral se debía regular aplicando la ley peruana. Si bien el decreto no establecía ninguna mención especial, entendemos que ello implica tanto al derecho sustantivo aplicable al fondo de la controversia como al derecho adjetivo que regulaba los juicios arbitrales y que se encontraba incluido en el Código de Enjuiciamiento Civil de 1852. La única normatividad de orden adjetivo que fue incluida en este decreto estuvo referida a la duración de los mismos. El decreto, reafirmando el carácter sumario de estos juicios, establecía que las cuestiones de puro derecho debían ser



resueltas en dos meses o, en los casos donde se tenía necesidad de apreciar hechos, ocho meses salvo cuando se tengan que actuar pruebas fuera de Lima. En este último supuesto, se añade a los ocho meses el término de la distancia respectivo.

Lo resuelto por los árbitros estaba sujeto a la interposición de un recurso de apelación y a otro de nulidad. La apelación era conocida por un nuevo tribunal arbitral, compuesto de similar manera que el inicial. El recurso de nulidad, por su parte, era conocido directamente por el juez letrado y sólo procedía contra las sentencias, ya sea de primera o segunda instancia, y siempre que se haga mención a alguno de los cinco vicios de procedimiento que regulaba el decreto (fallos en la notificación, errores en la actuación de pruebas, indebido rechazo de un medio de prueba, fallo sobre temas no sometidos a la competencia de los árbitros y el haber expedido el fallo luego del plazo). Adicionalmente la parte que interponía el recurso debía realizar el depósito de un monto en calidad de fianza cuyo valor rondaba los 700 pesos. El trámite del recurso de nulidad comprendía una audiencia con informes orales tras lo cual el Juez de Letras debía resolver.

De esta manera se reguló el “juicio ordinario” que debería servir para resolver conflictos intersubjetivos durante lo que restase de la ocupación.

Dentro de este mismo primer párrafo pero ya no referido al juicio mediante árbitros, se establece la competencia del juez de letras para conocer cualquier denuncia por prevaricación o cohecho respecto de la actuación de aquellos. De verificarse el delito, el juez impondría sanciones según lo señalado por la ley peruana.

El segundo párrafo se ocupó de la tramitación de las demandas relativas a bienes raíces (segundo supuesto de competencia de los juzgados de letras) señalando en cuatro artículos (del 20° al 24°) que las demandas que se refieren a la determinación de propietario se sujetarán al procedimiento ordinario ya expuesto y que sólo aquellas relativas a tenencia o posesión serán conocidas por el mismo juez de letras quien deberá aplicar las leyes sustantivas peruanas. El procedimiento para estos casos es sumamente simple ya que consta de una etapa postulatoria donde se verifica el contradictorio entre las partes y una audiencia verbal en la que se actúan las pruebas y se decide el litigio mediante una resolución que causará ejecutoria.

El tercer supuesto de competencia de los juzgados de letras estaba referido a las cuestiones concernientes al estado civil de las personas y fue desarrollado en tres artículos (del 25° al 27°). Estos temas estaban excluidos del juicio ordinario y debían ser conocidos por el juez letrado quien, tras un plazo de 20 días en los que el solicitante preparaba sus pruebas, decidiría sobre la solicitud.

El cuarto párrafo fue titulado “De la insolvencia civil y la quiebra comercial” y en siete artículos (del 28° al 35°) establecía el procedimiento de insolvencia y quiebra. El procedimiento para estos casos resulta mucho más complejo que los dos anteriores debido a las peculiaridades de este tipo de acciones. Presentada la solicitud, el juez letrado debía nombrar un depositario de los bienes del deudor para que realice un inventario mientras se cita a los acreedores para que nombren un síndico. Tanto este nombramiento así como las medidas de arraigo contra los insolventes debían sujetarse a las leyes peruanas. No obstante, si el deudor era acusado de delitos, el proceso sería conocido por un Tribunal Militar (chileno, se entiende) quien calificaría el delito e impondría las penas según lo que establecen las leyes peruanas.

El quinto párrafo estuvo referido a los actos de jurisdicción voluntaria y, a pesar de constar de un único artículo, se establece como una excepción respecto del resto de la regulación contenida en este decreto al referir que todos estos actos serán conocidos por el juez letrado conforme a las leyes chilenas.

El sexto párrafo, al ya haberse regulado todos los tipos de acción establecidos como supuestos de competencia de los juzgados de letras, se ocupó de las “disposiciones comunes a todos los actos del juez letrado” y, en once artículos (del 37° al 47°), establece diversas indicaciones como:

- a) La necesaria actuación de un secretario de juzgado que dará fe pública de los actos del juez,
- b) La posibilidad del juez de actuar como policía judicial pudiendo reprimir cualquier falta contra el orden imponiendo multas o incluso ordenando prisión de hasta 20 días. Si la falta cometida fuera más grave, el reo sería derivado al Tribunal Marcial.
- c) La posibilidad de inhibirse, ya sea de oficio o por solicitud de parte, sólo si tiene interés personal en el asunto litigioso o si ha adelantado opinión. En caso de solicitud de parte, el reclamo será conocido por el General en Jefe del Ejército

de Ocupación. No se regula, sin embargo, qué sucede con la causa una vez que se haya decretado la inhibitoria del juez.

- d) La sujeción del juez y su secretario, en su régimen personal, a la ley chilena; y
- e) La sujeción de los escribanos públicos peruanos de las provincias ocupadas a la autoridad y vigilancia del juez de letras.

El séptimo párrafo regula en nueve artículos (del 48° al 56°) los juicios de menor cuantía entendiéndose como tales aquellos en los que se discute un monto menor a los 400 pesos fuertes o soles de plata establecidos como monto mínimo para la actuación del juicio ordinario. Estos juicios, sumarios y verbales, serían conocidos directamente por jueces de paz nombrados especialmente por el General en Jefe del Ejército de Ocupación para dicha función y para su provincia respectiva. El cargo de juez de paz sería gratuito y estaba facultado para pedir asistencia al General en Jefe siempre que precise el auxilio de la fuerza pública.

El procedimiento forense establecido por este decreto es similar al contemplado en el Código de Enjuiciamientos Civiles de 1852 y al Reglamento de Jueces de Paz de 1855. Constaba de cuatro etapas: la citación al demandado, una audiencia verbal, el término de prueba que correrá sólo si la cuestión no fuera de puro derecho y, finalmente, una audiencia final en la que se realizarán los alegatos y se expedirá la sentencia.

Si la cuantía fuera diminuta (menor de 50 pesos) la sentencia es irrecurrible. Si fuera mayor a ese monto procederá el recurso de apelación, el mismo que sería conocido por otro juez de paz de igual nivel pero que, para ese procedimiento, sería denominado “juez de alzada”. El trámite en segunda instancia sólo comprende una nueva audiencia en la que se deberá emitir el fallo. Las sentencias están sujetas a un recurso de nulidad sólo cuando no se hubiera cumplido con citar a las partes. Este recurso sería conocido por un nuevo juez de paz del mismo nivel.

Finalmente, el octavo y último párrafo se ocupaba de las faltas y delitos y, en cuatro artículos (del 57° al 60°), señalaba que la infracción de los bandos y ordenanzas emitidos por el ejército de ocupación al igual que las riñas, las palabras obscenas, las injurias sin derramamiento de sangre, y la insubordinación de sirvientes domésticos, constituían faltas o delitos leves cuyo conocimiento era competencia del juez de letras. Éste las conocería en instancia única pudiendo delegar el juzgamiento en el secretario

de su despacho cuando su carga de juicios no le permitiese hacerlo personalmente. Las sanciones que los jueces de letras podían imponer por estas faltas eran la de multa desde uno a cien pesos o la de prisión de uno a veinte días. Las faltas más graves, así como las no incluidas en este capítulo y las cometidas por militares sometidos a su propio fuero, eran competencia de los Tribunales Militares del ejército de ocupación y se juzgaban de acuerdo a la ley marcial. Como puede apreciarse, a diferencia de los temas civiles, en materia penal no se respetaba el derecho peruano y tampoco se recurría al derecho chileno. Ello quiere decir que se seguían aplicando las disposiciones de la ley marcial que manejaba el ejército invasor.

Queda claro que todo este sistema paralelo de administración de justicia buscaba lograr un esquema en que sean los mismos peruanos quienes resolvieran sus conflictos, limitando el accionar de las autoridades chilenas a realizar una función de control y vigilancia. En ese sentido, Lynch buscó que tanto el concurso de funcionarios chilenos como la aplicación de legislación chilena sean, en este inicio, reducidos. Lo que se quería era evitar que aquellos intereses – extranjeros o chilenos que eran los que más preocupaban a los invasores – no se quedasen sin encontrar una tutela<sup>239</sup> pero, la condición principal para lograr ello, era no inmiscuir al ejército de ocupación en la resolución de esos negocios. Ya anteriormente habíamos citado los reparos que el mismo Lynch encontraba a la opción de que sea el ejército invasor quien asumiera activamente el papel de resolver los conflictos civiles actuando como juez de ocupación. Lynch no quiso pasar por alto esas observaciones y por eso pensó que la forma más salomónica de reactivar la administración de justicia pasaba por institucionalizar el arbitraje.

*“...la base principal de las disposiciones fue dejar los fallos o sentencias a jueces compromisarios, (...). Este sistema de arbitraje, que corresponde al de jurados en otro género de causas, me pareció el más aparente para inspirar confianza a los litigantes, sobre todo en un país sometido a la dominación militar de su vencedor...”<sup>240</sup>*

Tal como veremos más adelante en este mismo subcapítulo, la intención de Lynch no tuvo resultados positivos. No podemos perder de vista que la forma en que una

<sup>239</sup> Posteriormente el mismo Lynch reconocería que su principal interés radicaba al momento de establecer este sistema buscaba el “*beneficio de los intereses neutrales*” tal como puede apreciarse en: AHUMADA MORENO, Pascual. *Guerra del Pacífico. Tomo VIII*. Santiago de Chile: Andrés Bello, reimpresión 1982. Página 399.

<sup>240</sup> AHUMADA MORENO, Pascual. *Guerra del Pacífico. Tomo VII*. Santiago de Chile: Andrés Bello, reimpresión 1982. Página 120.

sociedad compone sus litigios responde a las peculiaridades que la individualizan. El pasar por alto dichas peculiaridades de la sociedad limeña, especialmente en lo que se refiere al comportamiento forense que existía en la ciudad, fue un acto intencional del chileno. Disgustado por el comportamiento de la Corte Suprema, Lynch decidió no permitir que ningún peruano participe en la creación y diagramación de este sistema paralelo. A estos momentos ya había proscrito a los magistrados de efectuar labor jurisdiccional alguna<sup>241</sup> y, tras prescindir de ellos, prescindió también de la participación de cualquier letrado peruano. Creyó que para solucionar un problema en tiempos de guerra, sin tomar en cuenta que éste es complejo incluso en tiempos de paz, bastaba con establecer una legislación meridianamente clara y traer magistrados extranjeros que, aunque pudieran entender el razonamiento jurídico en general, carecían de las nociones necesarias para conocer la realidad limeña, el carácter de sus ciudadanos y el actuar de sus letrados.

El 18 de noviembre de 1881 se expidieron los decretos nombrando a los jueces y secretarios que vendrían a Lima y formarían parte de este “Poder Judicial de la ocupación” a pesar de mantenerse siempre sujetos a la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales expedida en la República de Chile en 1875. Así el cargo de juez letrado de Lima recayó en un magistrado chileno que venía ejerciendo su función en la ciudad de Rancagua.

*“Lima, Noviembre 18 de 1881.*

*En conformidad a lo dispuesto en el decreto de este Cuartel General del 6 del presente mes,*

*He acordado y decreto:*

*Nómbrese al juez del departamento de Rancagua, don Enrique Tagle Jordán, juez letrado de Lima, para ejercer la jurisdicción que por el referido decreto se le delega.*

*Asígnesele al nombrado el sueldo mensual de 500 pesos.*

*Autorícese al juez letrado para organizar el servicio de notarios, receptores y demás funcionarios judiciales de su dependencia.*

*Anótese, comuníquese y dese cuenta al Supremo Gobierno.*

*Lynch*

*Adolfo Guerrero*

---

<sup>241</sup> En la memoria dirigida a su gobierno en 1882, Lynch señalaría: “... he prohibido que oigan en asuntos contenciosos, privada o públicamente, algunos que se decían miembros del Poder Judicial del Perú en Lima,...” tal como lo recoge: AHUMADA, op. cit., página 121.



*Secretario General*<sup>242</sup>.

El cargo de secretario del juzgado letrado de Lima recayó, a su vez, sobre otro ciudadano chileno.

*“Lima, Noviembre 18 de 1881.*

*En conformidad a lo dispuesto en el decreto de este Cuartel General del 6 del presente mes,*

*He acordado y decreto:*

*Nómbrese secretario del Juzgado de Letras establecido en Lima a don Emilio Lavín, con el sueldo mensual de 200 pesos.*

*El secretario tendrá a mas derecho a percibir los emolumentos que le señalan los aranceles peruanos vigentes de fecha 15 de julio de 1859, cobrando en moneda metálica las cantidades en que están fijados esos derechos.*

*Anótese, comuníquese y dese cuenta al Supremo Gobierno.*

*Lynch*

*Adolfo Guerrero*  
*Secretario General*<sup>243</sup>.

Lo mismo sucedió en El Callao en donde se nombraron otros dos ciudadanos chilenos para atender el juzgado letrado de esa localidad.

*“Lima, Noviembre 18 de 1881.*

*En conformidad a lo dispuesto en el decreto de este Cuartel General del 6 del presente mes,*

*He acordado y decreto:*

*Nómbrese al abogado de los tribunales de la República de Chile, don Nefthalí Cruz Cañas, juez letrado del Callao, para ejercer la jurisdicción que por el referido decreto se le delega.*

*Asígnesele al nombrado el sueldo mensual de 416 pesos 66 centavos.*

*Autorícese al juez letrado para organizar el servicio de notarios, receptores y demás funcionarios judiciales de su dependencia.*

*Anótese, comuníquese y dese cuenta al Supremo Gobierno.*

*Lynch*

*Adolfo Guerrero*  
*Secretario General*<sup>244</sup>.

<sup>242</sup> AHUMADA MORENO, Pascual. *Guerra del Pacífico. Tomo VI*. Santiago de Chile: Andrés Bello, reimpresión 1982. Página 357.

<sup>243</sup> *Ibíd.*, página 357.

<sup>244</sup> *Ibíd.*, página 358.

*“Lima, Noviembre 18 de 1881.*

*En conformidad a lo dispuesto en el decreto de este Cuartel General del 6 del presente mes,*

*He acordado y decreto:*

*Nómbrese secretario del juzgado de letras establecido en el Callao al abogado de los tribunales de la República de Chile don Luis Vial Ugarte, con el sueldo mensual de 200 pesos.*

*El secretario tendrá a más derecho a percibir los emolumentos que le señalan los aranceles peruanos vigentes de fecha 15 de julio de 1859, cobrando en moneda metálica las cantidades en que están fijados esos derechos.*

*Anótese, comuníquese y dese cuenta al Supremo Gobierno.*

*Lynch*

*Adolfo Guerrero*

*Secretario General*<sup>245</sup>.

b. Segundo acto normativo: el decreto del 29 de noviembre de 1881

En un inicio comentamos que el decreto del 6 de noviembre de 1881 constituía el primer acto de un esquema que constaba en realidad de cuatro actos normativos tendientes a solucionar el problema de la administración de justicia en Lima durante la ocupación. El segundo acto de este esquema fue el decreto del 29 de noviembre de 1881 que, complementando la regulación de los juicios de menor cuantía (séptimo párrafo de la primera norma), realizó precisiones respecto de los jueces de paz que debían encargarse de esos juicios.

*“Lima, Noviembre 29 de 1881*

*Visto lo dispuesto en los artículos 2°, 48 y siguientes del decreto de este Cuartel General del 6 del presente mes, sobre administración de justicia en los territorios de Lima y El Callao.*

*He acordado y decreto:*

*Art. 1° Para los efectos de la administración de justicia en los juicios de menor cuantía, o sea los que versen sobre muebles o valores pecuniarios de una cuantía inferior a 400 pesos fuertes o soles de plata, se considerará dividido el territorio de la ciudad de Lima en los mismos 10 distritos, en que por disposiciones de la legislación peruana, está dividido para el juzgamiento de las cuestiones de menor cuantía.*

*Art. 2° En cada uno de esos distritos habrá un funcionario que con el título de juez de paz, ejerza la jurisdicción que se le delga por los artículos 48 y siguientes del citado decreto del 6 del corriente.*

*Art. 3° El cargo de juez de paz es concejil, y en consecuencia deberá servirse gratuitamente; y nadie podrá excusarse de desempeñarlo, sino con causa*

---

<sup>245</sup> *Ibíd.*, página 358.

*calificada discrecionalmente de bastante por la autoridad que le ha conferido su nombramiento.*

*Art. 4° Son obligados los jueces de paz a llevar y conservar en su poder un libro en que asienten todas las sentencias que pronuncien en los negocios sujetos a su conocimiento.*

*Extendida la sentencia, la firmará el juez y hará que la firmen también las partes, si supieren.*

*Art. 5° Los jueces de distrito deben administrar justicia en la casa de su morada o en algún otro lugar fijo y conocido de los vecinos, en los días y a las horas que de antemano hayan fijado para oír y despachar las demandas sujetas a su conocimiento.*

*Art. 6° Para la evacuación de las diligencias que hubieren de practicarse fuera de la localidad designada para el despacho, nombrarán los jueces de paz funcionarios con el carácter y emolumentos fijados por la legislación peruana a los receptores o ministros de fe para practicar estas diligencias en los juicios de menor cuantía, dando cuenta de ello a la respectiva autoridad militar.*

*Art. 7° A los juzgados de paz que se establezcan se proveerán, a su instalación, del libro copiador de sentencias, de útiles de escritorio y de tres ejemplares del decreto sobre administración de justicia y del presente, que deberán tener en su oficina.*

*Anótese, comuníquese y dese cuenta al Supremo Gobierno.*

*Lynch.*

*Adolfo Guerrero  
Secretario General”<sup>246</sup>.*

Se puede afirmar que mediante este decreto se llegó a configurar la organización y estructura básica de este “Poder Judicial de la ocupación” estableciéndolo como un sistema de administración de justicia paralelo al Poder Judicial peruano y cuya autoridad nacía única y exclusivamente del respaldo que tenía de parte del mismo invasor.

De la normativa incluida en este decreto se pueden destacar la referencia que se hace respecto a la división de la ciudad de Lima en los mismos 10 distritos en que se dividía antes de la ocupación. En efecto, la organización política del Perú en departamentos, provincias y distritos data desde los inicios de la república y, a fines del siglo XIX, la provincia de Lima constaba únicamente de 10 distritos tal como veremos con mayor detenimiento en el siguiente capítulo. Existe, no obstante, un ligero error de percepción por parte de las autoridades invasoras pues entendían que, antes de la ocupación, la justicia de paz tenía una competencia distrital. Si bien actualmente esa situación es verdadera, lo cierto es que según las normas que regulaban la estructura del Poder

---

<sup>246</sup> *Ibíd.*, página 360.

Judicial y que analizamos en el capítulo anterior, no existía una clara equivalencia entre los distritos y la competencia de los jueces de paz.

Por el contrario, el Reglamento de Jueces de Paz de 1855 establecía el número de jueces de paz en cada pueblo según el número de sus pobladores. Ello quiere decir que, según el derecho peruano, era posible la existencia de un distrito que, por tener más de un pueblo con población suficiente, podía albergar varios jueces de paz. La equivalencia “distrito-juez de paz” es entonces una percepción errónea de los chilenos que creyeron encontrar un esquema establecido en ese sentido y quisieron aprovecharlo para poder enraizar su sistema de administración de justicia.

Este error de percepción terminó siendo el primer antecedente, espurio pero antecedente al fin y al cabo, de la competencia distrital de la justicia de paz en el Perú. Por lo pronto, gracias a este decreto, Lima pasó a tener 10 jueces de paz cada uno con competencia en un determinado distrito, ejerciendo una labor gratuita y con sujeción a las normas impuestas por los invasores.

#### c. Tercer acto normativo: el decreto del 24 de abril de 1882

El tercer acto normativo fue el decreto expedido el 24 de abril de 1882 y, en palabras del mismo Lynch, tenía por misión:

*“... llenar algunos vacíos del decreto de 6 de noviembre de 1881, señalados por la práctica y las exigencias crecientes del servicio judicial. Designar a la autoridad a quien competa la revisión de las sentencias de los consejos de guerra de oficiales generales; crear el ministerio público en la jurisdicción de los juzgados de letras de Lima y Callao; suprimir los tribunales militares y sustituirlos por magistrados del crimen; organizar un tribunal de alzada; señalar la ley que rija los procedimientos y fallos criminales, como también la que regle la responsabilidad de los funcionarios judiciales, eran medidas que reclamaba con urgencia el buen régimen de la administración provisional de justicia en estos territorios”<sup>247</sup>.*

Este decreto nos da a entender que los cinco meses transcurridos desde el establecimiento del “Poder Judicial de la ocupación” sirvieron como periodo de prueba para que Lynch haga una evaluación respecto a si el esquema que él mismo había ideado, regulado e implementado podía servir de manera eficaz para solucionar el

---

<sup>247</sup> AHUMADA MORENO, Pascual. *Guerra del Pacífico. Tomo VII*. Santiago de Chile: Andrés Bello, reimpresión 1982. Página 120.

problema de la administración de justicia en Lima. La evaluación realizada durante este periodo de prueba debió ser positiva y por ello se decidió completar este esquema incluyendo en este “Poder Judicial de la ocupación” a la jurisdicción criminal, hasta entonces excluida del mismo y sujeta a la ley marcial.

Este decreto mostraría, entonces, un acto de decisión política de otorgar un mayor peso al esquema que Lynch había creado para afrontar el problema de la administración de justicia. Pero, a su vez, marca también un punto de quiebre ya que luego de él se empiezan a dar actos que acusan flaquezas y debilidades que terminan transformando diametralmente la idea que Lynch tenía sobre su propia creación.

Para completar la idea, podemos afirmar que este decreto parecería marcar la finalización de la aplicación de la ley marcial para el juzgamiento de faltas y delitos en los territorios ocupados, disponiendo la supresión de los tribunales militares y creando “juzgados del crimen” que juzgarían esos hechos según el procedimiento incluido en este decreto y, aunque esto último sería dejado de lado progresivamente como veremos a continuación, sujetándose a la legislación peruana al momento de resolver el fondo del juicio.

En teoría, el régimen marcial sólo continuó aplicándose para aquellos militares chilenos sometidos a su fuero, dejando de lado a los ciudadanos peruanos quienes se verían liberados de tener que ser juzgados por estos tribunales. Sin embargo, tal como veremos en el siguiente capítulo, esta realidad no se cumplió inmediatamente siendo que existen documentos que muestran que el Tribunal Militar siguió enjuiciando ciudadanos peruanos en los meses siguientes.

Continuando con la referencia de la regulación introducida por este decreto, tenemos que el nombramiento de jueces del crimen venía aparejado con la creación de “promotores fiscales” quienes debían ocupar el lugar de un real ministerio público tanto en la persecución de los delitos como en la defensa de menores y ausentes.

Lynch incluye una generosa explicación respecto de los motivos que lo llevaron a impulsar esta modificación informando que:

*“Los juzgados del crimen van a satisfacer una necesidad urgente, pues los tribunales militares que lógicamente sólo debían entender en esa materia,*



*cuando nace de actos ejecutados por o contra miembros del ejército, carecían de medios para la investigación de los delitos comunes. Compuestos de varios miembros, no podían trasladarse en hora oportuna al lugar de los sucesos que requieren muchas veces la inmediata presencia del juez, y les era forzoso delegar sus facultades, para investigar y recibir declaraciones, en el Secretario, casi siempre recargado de trabajo y necesario en la oficina del despacho. Además, los tribunales militares, sobre todo el de Lima, a pesar de obrar con suma actividad, carecían de tiempo para atender con rapidez al conocimiento de faltas, delitos y crímenes ejecutados por toda clase de personas”<sup>248</sup>.*

Es palpable el entusiasmo que acompañó al oficial chileno hasta este momento, entusiasmo que también se hizo evidente en la memoria que ese mes de mayo de 1882 envió a su gobierno comentándoles los progresos logrados en este aspecto. Sin embargo, tal como señalamos, a partir de este decreto se empiezan a advertir situaciones que marcan la forma cómo este sistema de administración de justicia fue desdibujándose poco a poco.

*c.1. La restricción de la aplicación del derecho peruano.*

El decreto del 11 de Julio de 1882 reiteraba la desviación de la competencia para conocer el juzgamiento de faltas y delitos del Tribunal Militar hacia los tribunales ordinarios que conformaban el “Poder Judicial de la ocupación”

*“Cuartel General de Ejército de Operaciones*

*Patricio Lynch*

*Contra-Almirante de la Armada Nacional y General en Jefe del Ejército de Operaciones del Norte.*

*Lima, Julio 11 de 1882.*

*1° Los delitos de homicidio, heridas y demás vejaciones de hecho que se cometieren por paisanos contra el ejército o marina, contra personas dependientes del servicio militar o contra individuos de las fuerzas de policía en los territorios ocupados por las armas chilenas dependientes de este Cuartel General, serán juzgados por los tribunales ordinarios, creados por los decretos de 6 de noviembre de 1881 y de 24 de abril del presente año; pero su penalidad queda sometida a lo que prescribe la Ordenanza General del Ejército para el castigo de los mismos delitos.*

*2° En los delitos de robo o hurto, los jueces podrán también mandar aplicar la pena de azotes, en la proporción de 25 azotes por cada seis meses de presidio o prisión, no pudiendo en ningún caso imponerse más de 100 azotes, en virtud de una misma sentencia.*

*3° Las sentencias que impongan la pena capital o la de azotes no podrán ser ejecutadas sin que preceda la aprobación del General o Comandante en Jefe,*

---

<sup>248</sup> *Ibíd.*, página 121.

*a quien en cada caso de éstos se les pasarán los autos, ya sea para que apruebe el fallo pronunciado, ya para que conmute a la pena o indulte al reo, según lo estimare conveniente.*

*Anótese, publíquese por bando y en el Diario Oficial, y dese cuenta.*

*Lynch.*

*M. Guerrero Bascuñan  
Secretario General<sup>249</sup>.*

En efecto, este decreto no hace sino ratificar lo que Lynch afirmó como objetivo del decreto del 24 de abril. Sin perjuicio de ello, consideramos lo más resaltante de este documento son las referencias que nos dan a entender que la desviación del juzgamiento de faltas y delitos a los tribunales del “Poder Judicial de la ocupación” se dio en el ámbito administrativo más no en lo sustancial ya que, a través de esta norma, se inicia un proceso en el cual se fue reduciendo el ámbito de aplicación de la ley peruana.

Si bien en un inicio Lynch dispuso que el derecho a aplicarse para la sanción de los delitos sería el peruano e incluso informó en ese sentido a su gobierno al señalar que “*Se (...) crean juzgados del crimen, señalándoles el procedimiento que deben seguir en las causas de que conocieren y sometiéndolos, para la regulación de sus fallos, a la ley peruana vigente*”<sup>250</sup>; este decreto expedido tres meses después demostraría lo contrario al pasar por alto toda referencia al derecho peruano y señalar de forma clara que el derecho que se debía aplicar para la sanción de estas conductas seguía siendo la ley marcial dispuesta por el ejército invasor. Este fenómeno fue el primero en dar a entender que el funcionamiento del “Poder Judicial de la ocupación” no resultaba todo lo eficiente u óptimo que se había pensado.

Como confirmación de este proceso de restricción de la aplicación de la ley peruana, el 18 de Julio de 1882, siete días después del anterior que comentamos y dos meses después de la auspiciosa memoria presentada por Lynch a su gobierno, se emite un decreto que resulta muy ilustrativo:

*Cuartel General de Ejército de Operaciones  
Patricio Lynch  
Contra-Almirante de la Armada Nacional y General en Jefe del Ejército de Operaciones del Norte.*

<sup>249</sup> *Ibíd.*, página 291.

<sup>250</sup> *Ibíd.*, página 121

*Lima, Julio 18 de 1882.*

*He acordado y decreto:*

*Al juez del crimen de Lima y al juez letrado del Callao corresponde conocer del delito de ocultación de armas, municiones, etc., a que se refiere el decreto de este Cuartel General de 9 de agosto de 1881, aplicando las penas que en dicho decreto se determinan.*

*Anótese, comuníquese y publíquese en el Diario Oficial.*

*Lynch.*

*M. Guerrero Bascuñan,  
Secretario General<sup>251</sup>.*

Que la autoridad invasora determine mediante decretos cómo los tribunales deben sancionar las faltas no constituye un hecho novedoso ya que esa era, precisamente, la forma en que funcionaba la ley marcial dispuesta desde febrero de 1881. Lo peculiar es la contradicción que se va generando respecto a los primeros decretos expedidos y a lo originalmente informado por el jefe invasor. Los juzgados del crimen, constituidos para funcionar como “tribunales ordinarios”, se tenían que diferenciar de los tribunales marciales no sólo por su naturaleza civil sino también porque aplicarían un “derecho ordinario” y no el derecho marcial.

Esta práctica del invasor de ir restringiendo la aplicación del derecho peruano en la sanción de faltas llegó a una nueva cota dos días después, el 20 de julio de 1882, cuando Lynch emite un decreto que declaró la aplicabilidad en Lima de un artículo del código penal chileno.

*“Cuartel General de Ejército de Operaciones*

*Patricio Lynch*

*Contra-Almirante de la Armada Nacional y General en Jefe del Ejército de Operaciones del Norte.*

*Lima, Julio 20 de 1882.*

*No existiendo en el código penal peruano responsabilidad criminal establecida para los que adquieran, a sabiendas, algún objeto robado o hurtado, y conviniendo imponer pena a los que incurrieren en este delito,*

*He acordado y decreto:*

*Regirá en los territorios ocupados por el ejército de operaciones, dependiente de este Cuartel General, el artículo 454 del Código Penal chileno cuyo texto literal es como sigue:*

---

<sup>251</sup> *Ibíd.*, página 292.

*‘Se presumirá autor del robo o hurto de una cosa, a aquel en cuyo poder se encuentre, salvo que justifique su legítima adquisición, o que la prueba de su buena conducta anterior establezca una presunción en contrario.*

*Se castigará como encubridor del robo o hurto de una cosa al que la compre o reciba a cualquier título, sabiendo su origen o no pudiendo menos de conocerlo’.*

*Anótese, comuníquese, dese cuenta y publíquese en el Diario Oficial.*

*Lynch.*

*M. Guerrero Bascuñan,  
Secretario General<sup>252</sup>*

Si bien este decreto da a entender que la justificación para disponer la vigencia de una norma chilena en Lima es un vacío que existe en la legislación peruana, lo cierto es que estamos ante un accionar distinto y novedoso del jefe invasor. En la memoria enviada en mayo de 1882, Lynch había reconocido como un punto fuerte de su sistema el hecho de que éste aplicara la ley peruana y, hasta antes de este decreto, había demostrado una suerte de “respeto” por el derecho peruano no sólo permitiendo su aplicación sino también evitando que se aplique el derecho extranjero. Incluso prefirió crear una normatividad especial a disponer la aplicación de leyes chilenas y aunque si bien esa normatividad podría considerarse como chilena, el hecho de haber sido ideada en Lima y especialmente para ser aplicada en Lima le quitaba el impacto que sí tiene la aplicación directa de una norma dictada por el congreso chileno y cuya vigencia debía circunscribirse únicamente al territorio chileno.

Definitivamente Lynch no llegaba al extremo de considerar Lima como parte integrante del, o asimilable al, territorio chileno. La aplicación de esa norma no pasaba por ese sentido. La aplicación extra territorial de una particular norma jurídica chilena podría responder más bien a una decepción por parte de Lynch respecto de la práctica que hasta ese momento había llevado a cabo y a la pérdida, si no de respeto, cuanto menos del reconocimiento que tenía al derecho peruano en el sentido de que, permitiendo su aplicación, iba a favorecer el funcionamiento de su sistema paralelo de administración de justicia.

Este aspecto tuvo su punto culminante cuando, en la memoria correspondiente al año 1883, Lynch no tuvo ambages en desdecirse y negar la vigencia de leyes peruanas al

---

<sup>252</sup> Ibíd., página 292.

informar a su gobierno que Lima aún constituía una población que “*se encuentra bajo la ley marcial*”<sup>253</sup>.

Es decir, en los doce meses que separaron un informe de otro, la idea de Lynch en el sentido de que resultaba mejor optar por permitir que se continúe aplicando el derecho peruano cambió totalmente. Nosotros consideramos que esa idea se explica no tanto por el funcionamiento que existió en la jurisdicción criminal sino, principalmente, por el funcionamiento de la jurisdicción civil tal como veremos a continuación.

### *c.2 La instauración de un Tribunal de Alzada en Lima*

El extremo referido al tema penal no fue el único del que se ocupó el decreto del 24 de abril de 1882 ya que también incluyó modificaciones a la regulación civil previamente establecida en el decreto del 6 de noviembre de 1881. Nos referimos a la creación de un “Tribunal de Alzada” en Lima que se constituyó como el órgano que estaba faltando en este “Poder Judicial de la ocupación”: una corte de apelaciones. Esta figura implicó la modificación de la competencia de los jueces de letras para conocer los recursos de nulidad regulados en el primer decreto. Además de asumir el conocimiento de esos recursos, en un inicio se estableció que el Tribunal de Alzada revisase también las sentencias pronunciadas por los Consejos de Guerra de Oficiales Generales, órganos que establecían las penas para aquellos los militares chilenos que cometían faltas o delitos, aunque esta competencia fue suspendida cuatro meses después ante una sugerencia en ese sentido enviada desde el gobierno chileno.

Basadre Grohmann es el único historiador peruano que mencionó este sistema de administración de justicia establecido por Patricio Lynch. Mencionó tanto este Tribunal de Alzada como el sistema de resolución de conflictos civiles basado en la actuación de “jueces compromisarios”. Sin embargo, lo más resaltante de los datos que recoge el gran historiador nacional son los comentarios que el mismo Lynch introduce en la segunda memoria que envió a su gobierno correspondiente al año 1883. En esa oportunidad, el oficial chileno manifestó su descontento sobre la forma cómo terminó funcionando este sistema de administración de justicia que él mismo había establecido y al que no consideraba peruano sino más bien parte de la administración chilena. Se confirma la idea que ya se hacía evidente desde el momento que ningún peruano

---

<sup>253</sup> AHUMADA MORENO, Pascual. *Guerra del Pacífico. Tomo VIII*. Santiago de Chile: Andrés Bello, reimpresión 1982. Páginas 399



participó en la creación e instalación de este sistema y que permitía pensar que este “Poder Judicial de la ocupación” constituía más bien una extensión especial del Poder Judicial Chileno que tenía competencia fuera de sus límites territoriales.

*“Innumerables han sido las reclamaciones y quejas originadas por las sentencias de los jueces compromisarios (dijo en su segunda memoria, fechada en mayo de 1883), pero el cuartel general ha tenido que rechazarlas... Por lo expuesto verá US. que sería, sin duda, más conveniente suprimir la administración de justicia civil, que continuar autorizando actos que lastimen el buen nombre de nuestra magistratura”<sup>254</sup>.*

La irritación contenida en estas declaraciones son contrastantes con las expuestas un año antes donde los comentarios del chileno no sólo mostraban satisfacción por la idea desarrollada y su implementación sino también optimismo respecto a la capacidad que ese sistema totalmente chileno tendría para solucionar el problema de la administración de justicia en Lima. En dicho documento se puede advertir no sólo una decepción por la situación en que el sistema paralelo se encontraba sino también una suerte de resentimiento hacia lo peruano y un intento de explicación que buscaría defender la idea inicial.

Lynch inicia su recapitulación refiriéndose precisamente a este tema, aunque no con el mismo detalle y desarrollo de un año antes, y afirmando que el sistema de “*Justicia, creada en Lima y Callao únicamente en beneficio de los intereses neutrales*”<sup>255</sup>. Esta indicación en ese sentido no es una novedad por cuanto ya antes citamos la observación de la doctora Margarita Guerra en el sentido de que la principal preocupación de los invasores para buscar el funcionamiento del Poder Judicial eran los intereses comerciales chilenos y extranjeros y ello con la finalidad de evitar recibir presiones de otros países que acudan en auxilio de sus naturales. Sin embargo, esta mención con completa exclusión de los intereses de los locales contrasta con lo señalado un año antes por el mismo Lynch cuando podía apreciarse que su intención al establecer el sistema sí incluía la idea de generar un beneficio a la población local.

En efecto, en 1882 señaló:

*“..., aun cuando no es deber del beligerante que está en posesión de un territorio de su enemigo, impedir que se produzcan contra éste los males que él*

---

<sup>254</sup> BASADRE GROHMANN, op. cit., página 182.

<sup>255</sup> AHUMADA MORENO, op. cit., página 399.

*voluntariamente quiera causarse, por humanidad y conveniencia, se hacía preciso dictar algunas medidas provisionales, para atenuar las calamidades de la guerra, en un caso como el presente, en que la ocupación se ha prolongado mucho más tiempo del calculado al principio*<sup>256</sup>.

Más allá de su intención de considerar a los limeños como beneficiarios o no de su sistema de administración de justicia, su evaluación fue severa en lo que respecta al tema civil.

*“... se notan graves inconvenientes, que no es posible salvar en las actuales circunstancias, porque para ello sería necesario dar a este ramo forma diversa y un latitud que, originando mayores gastos, solo sería compatible con un gobierno organizado para mucho tiempo.*

*El sistema de arbitraje adoptado como el más aparente para inspirar confianza a los litigantes, en un país dominado por el vencedor y que se encuentra bajo la ley marcial, no ha dado los buenos resultados que se esperaban; sin embargo, es evidente que la mayor parte de sus abusos y peligros desaparecería con el establecimiento de un Tribunal, ante el cual pudiera apelarse de los fallos dados en primera instancia por los compromisarios.*

*La Corte de Alzada (...) sólo entiende en recursos de nulidad, que no pueden interponerse sin el depósito previo de una suma de dinero, más o menos considerable,...*<sup>257</sup>.

Lynch identificaba como los inconvenientes de su sistema la falta de un tribunal de apelaciones que conozca en segunda instancia lo resuelto por los árbitros, tribunal que terminó estableciendo a través del Decreto del 24 de abril de 1882.

No obstante este hecho, se pueden sacar algunas conclusiones tomando como base lo afirmado por Lynch en su informe:

- (i) Si la solución al problema pasaba por la inclusión de una corte de apelaciones, se entiende que los problemas no debían estar referidos a la forma sino más bien al fondo de las cuestiones. Es decir, al sentido cómo estos árbitros resolvían los litigios. Podríamos especular en el sentido de que estos árbitros, que debieron ser peruanos en su mayoría (recordemos la prohibición absoluta a los funcionarios chilenos para actuar como tales), tal vez aplicaban las leyes peruanas de una forma que no resultaron agradables a los invasores. ¿En qué sentido podrían no ser agradables? Pues, considerando que ellos buscaban

<sup>256</sup> AHUMADA MORENO, Pascual. *Guerra del Pacífico. Tomo VII*. Santiago de Chile: Andrés Bello, reimpresión 1982. Páginas 120.

<sup>257</sup> AHUMADA MORENO, Pascual. *Guerra del Pacífico. Tomo VIII*. Santiago de Chile: Andrés Bello, reimpresión 1982. Página 399

principalmente que se haga efectiva una tutela a los intereses chilenos y extranjeros, podría generar su molestia el hecho de que los árbitros no fallasen, no interpretasen o no aplicasen las normas sustantivas en ese sentido.

- (ii) El decreto inicial del 6 de noviembre de 1881 incluyó la posibilidad de existencia de tribunales arbitrales de segunda instancia. Sin embargo de la mención de Lynch podemos entender que ora dichos tribunales no llegaron a funcionar ora su actuación no corregía aquella interpretación o fallo que se considerara como incorrecto. No se explica de otra manera porqué se suprimió de tal manera su mención por parte de Lynch quien, siendo el creador e implementador de este sistema, no podría haberse olvidado de lo que él mismo ideó.

Por el contrario, esta idea nos permite reafirmarnos en la anterior y deducir que los tribunales arbitrales de segunda instancia, en tanto formados también por peruanos, terminaban incurriendo en los mismos “problemas” que molestaban a Lynch.

- (iii) Finalmente, Lynch hace mención a que los inconvenientes se arreglarían mediante el establecimiento de una corte de apelaciones. Esta corte de apelaciones a que hace referencia el chileno, por lógica, debe de ser distinta en su naturaleza, que no en su función, a los tribunales arbitrales de segunda instancia y la diferencia debía radicar en que se establecería ya no como un tribunal convencional o “compromisario” sino como una corte ordinaria que formaría parte del “Poder Judicial de la ocupación” y cuya autoridad nazca no del convenio de los privados sino del poder del invasor.

Esta idea también nos permite reafirmarnos en la primera ya que entendemos que Lynch se refería a un tribunal conformado, al igual que los juzgados de letras, por magistrados chilenos que, ellos sí, corregirían los errores de fondo en que incurrían los fallos arbitrales y podrían tutelar de una manera correcta, para el punto de vista del invasor, los intereses chilenos y extranjeros.

El establecimiento de esta corte de apelaciones implicaba sus propios problemas empezando por poder contar con el poder y control suficiente para sustentar ese órgano colegiado y terminando por los costos que dicho mantenimiento significaría para la caja del gobierno de ocupación.

No está acreditado que Lynch haya realizado actos que efectivamente impulsaron el establecimiento definitivo de este tribunal de alzada en Lima. Aparentemente esta idea

no recibió el apoyo del General en Jefe del ejército invasor en la misma forma que se le dio al establecimiento del “Poder Judicial de la ocupación en sus inicios”. Ello pudo deberse a que Lynch ya entendía que asumir todos los costos que se derivan de la instalación de ese tribunal de alzada sólo se justificaría si se pensara en mantener el gobierno de la ciudad por mucho tiempo más y que sería más eficaz concentrar esfuerzos en lograr la situación política que dé fin a la ocupación. Por lo pronto, a mayo de 1883, fecha en que Lynch envió su informe correspondiente a ese año, los hechos demostraban que el fin de la guerra se avizoraba cercano ya que sólo se estaba a la expectativa de ver cuál de los dos caudillos peruanos (Iglesias en el norte o Montero en el sur) prevalecería y se aviniera a acordar la paz con los chilenos.

Debe ser precisamente esta idea de cercanía del fin de la guerra lo que lleva a Lynch a sugerir a su gobierno la supresión de la administración de justicia civil según la versión que recoge Basadre. Esa sugerencia llevaba a media voz el reconocimiento del fracaso del sistema paralelo creado por él.

En contraste a esta situación, Lynch menciona en su informe que el sistema criminal, en el que no había participación alguna de peruanos ya que los jueces compromisarios sólo conocían temas civiles, no presentó dificultades

*“... gracias a la rectitud y severidad con que se aplican las penas señaladas por ley y a la vigilancia de los funcionarios respectivos, estas poblaciones se encuentran en estado de orden y moralidad verdaderamente satisfactorio. Por los datos de que tengo conocimiento puedo asegurar a US. que el número de delitos es en Lima muy inferior al que registran las estadísticas criminales de otras capitales de igual o mayor importancia”<sup>258</sup>.*

A la rama criminal, Lynch la presenta como un reloj y ello debido casi exclusivamente a sus funcionarios. No deja de ser saltante la diferencia entre este tema y el civil y la principal diferencia entre ambos estribaba en el hecho de que todos los funcionarios encargados de la supresión de delitos eran chilenos mientras que en el campo civil se permitió no sólo la presencia sino la activa participación de ciudadanos peruanos. Tal vez la apreciación del oficial chileno no resulte objetiva respecto a este punto y pueda responder al contraste que quiere hacer entre un sistema compuesto y llevado adelante íntegramente por funcionarios chilenos y un sistema (el civil) en el que el peso de la resolución de conflictos pesaba en peruanos.

---

<sup>258</sup> *Ibíd.*, páginas 399

La última parte de su mención, respecto al número de delitos en la ciudad de Lima, es una mención gratuita y sin sustento que puede obedecer más bien a la intención de arrancar aplausos de parte su gobierno y no tanto a una realidad verificable.

d. Cuarto acto normativo: el decreto del 13 de noviembre de 1882

Mucho de la decepción del oficial Lynch se refleja en el cuarto y último acto normativo del esquema. El decreto del 13 de noviembre de 1882 precisa, a casi un año de la entrada en funcionamiento del “Poder Judicial de la ocupación”, el procedimiento para la recusación de los árbitros, tema que no había sido regulado en el decreto del 6 de noviembre de 1881.

*“Patricio Lynch*

*Contra-Almirante de la Armada Nacional y General en Jefe del Ejército de Operaciones en el Perú.*

*Lima, Noviembre 13 de 1882.*

*He acordado y decreto:*

*Art. 1° Los árbitros, tanto de primera como de segunda instancia, son recusables por las causales que establecen el artículo 250 de la ley chilena de 15 de octubre de 1875, sobre Organización y Atribuciones de los Tribunales.*

*Art. 2° Conocerá de la recusación el juez letrado en lo civil de Lima, si se tratare de arbitraje constituido en el territorio en que dicho funcionario ejerce su jurisdicción, y el juez de letras del Callao, si la constitución del compromiso hubiese tenido lugar dentro del territorio jurisdiccional de éste.*

*De las resoluciones libradas en primera instancia, aceptando o negando lugar a la recusación, habrá apelación para ante la Corte de Alzada en Lima.*

*Art. 3° La recusación deberá interponerse dentro de las 24 horas siguientes de haberse hecho saber a las partes el nombramiento de árbitro o árbitros, que haya hecho el juez letrado en desacuerdo o rebeldía de aquéllas.*

*Si la causa de recusación fuere sobreviviente o la hubieses ignorado la parte cuando se verificó el nombramiento, deberá interponerla en el acto que llegue a su conocimiento, expresando esta circunstancia.*

*Llamados los autos para sentencia definitiva, no podrá deducirse recusación cuya causal no hubiere ocurrido después de este trámite.*

*Art. 4° La recusación se interpondrá ante el mismo árbitro, quien la remitirá al juez letrado que debe conocer de ella en conformidad al artículo 2° del presente decreto.*

*La solicitud deberá ir acompañada de una boleta de consignación en arcas fiscales por el valor de 100 pesos fuertes, sin cuyo requisito no será admitida.*

*Art. 5° El juez letrado, si la causal de recusación fuere de las designada por la ley, recibirá el reclamo a prueba por ocho días fatales, dentro de cuyo plazo podrán las partes rendir los justificativos conducentes al esclarecimiento del hecho. Expirado el plazo y agregadas las pruebas a los autos, el juez pronunciará la resolución que fuere de justicia, aceptando o no la recusación.*



*La Corte de Alzada, si se interpusiere recurso de apelación en tiempo y forma, llamará los autos en relación, así que se eleven a su conocimiento, y fallará sin más trámite que los alegatos verbales, el día de la vista de la causa.*

*Art. 6° Si la recusación fuere desechada, quedará por el mismo hecho aplicada al fisco la cantidad consignada por el reclamante, siéndole devuelta en caso contrario.*

*Art. 7° El presente decreto comenzará a regir desde el día de su publicación en el Diario Oficial.*

*Anótese, dese cuenta y publíquese.*

*Lynch.*

*M. Guerrero Bascuñan,  
Secretario General<sup>259</sup>*

Son varios los temas que llaman la atención en este final decreto que establece la organización y funcionamiento del sistema paralelo de administración de justicia impulsado por Lynch. Algunos hechos debieron suceder para que se tenga que regular con tanto detalle y severidad la recusación de los “jueces compromisarios” que, en teoría, eran elegidos por las mismas partes. Imaginamos que tal vez la cultura forense limeña encontró en este sistema judicial paralelo la forma para hacer que los juicios arbitrales no resulten efectivos. Ya en el capítulo anterior habíamos comentado que los letrados limeños llevaban más de 20 años manejándose con un Código de Enjuiciamientos que permitía el manejo de maniobras dilatorias. Es posible imaginarse un escenario en el que estos experimentados letrados hayan podido enredar la simplista regulación presentada por Lynch hasta el punto de generar en éste una reacción. Reacción que, a la luz del contexto integral, aparece más como una respuesta a la necesidad de reencauzar su sistema que como un paso final del esquema inicialmente planteado y diagramado con paciencia desde un buen tiempo antes de su promulgación.

Tanto estas deducciones como las evaluaciones poco auspiciosas que realizó el mismo creador de este sistema mostrarían que la opción tomada por los invasores no resolvió el problema. Patricio Lynch pudo haber sido un buen militar y eficiente administrador pero como legislador no tuvo su fuerte y este sistema de administración de justicia, del que no tuvo reparos en posicionarse como principal creador e impulsor, demostró que él no había aquilatado correctamente ni la situación fáctica ni la naturaleza jurídica del problema.

---

<sup>259</sup> AHUMADA MORENO, Pascual. *Guerra del Pacífico. Tomo VII*. Santiago de Chile: Andrés Bello, reimpresión 1982. Página 486.

El otro tema es que, nuevamente, se aprecia que Lynch cede ante el impulso de recurrir a la aplicación de la legislación chilena como la forma quizá menos problemática de zanjar un tema. Ya mencionamos que en un inicio el oficial chileno se presentó como respetuoso de la aplicabilidad del derecho peruano y limitando en un primer momento la aplicación de su derecho nacional a los casos de jurisdicción voluntaria, al transcurso de un año parece haber renunciado a establecer una regulación ad-hoc y se limita a recurrir a la aplicación del derecho que sus jueces conocían mejor. Recordemos que la decisión de la aplicación del derecho peruano significaba un verdadero reto para el sistema que impulsaba Lynch ya que éste estaba pensado desde un inicio para funcionar con magistrados chilenos. Esta opción de política legislativa debida, quizá, a una intención de no generar mayor sometimiento en los ciudadanos peruanos o al deseo que éstos sientan a su “Poder Judicial de la ocupación” como menos artificial, implicaba desde su inicio un costo administrativo traducido en la necesidad de que jueces y secretarios se empapasen de nuestras leyes y se enfrentasen a litigantes que llevaban más de 20 años manejando esas normas. Máxime aun cuando dentro del esquema original de los juzgados de letras no se tenía la participación de ningún letrado peruano en el despacho.

En los meses siguientes no hubo mayor modificación respecto del sistema impuesto por los chilenos. Tampoco hubo ninguna acción nueva por parte de los tribunales peruanos. El año 1883 sería el último año de la guerra y también de la ocupación de Lima. Los hechos de la guerra se habían extendido a otras localidades del país y Lima, en aquellas fechas, terminó encontrando una nueva rutina a pesar de encontrarse ocupada.

#### **Subcapítulo 6: Finalización de la Ocupación.**

El año 1883 fue en el que tuvieron lugar los hechos finales de la guerra y que se grafican en la Batalla de Huamachuco, en la sierra del departamento de La Libertad. Considerada como el último enfrentamiento armado de la Guerra con Chile, algunos historiadores consideran, incluso, que esta batalla sería más bien el primer enfrentamiento del largo periodo de luchas internas que se verían en la república hasta 1895 cuando Nicolás de Piérola regresó a tomar el poder y dio inicio un periodo de relativa paz y estabilidad conocido como la “República Aristocrática”. En función a esta diferencia de enfoque, Huamachuco podría entenderse como la última derrota peruana

a manos chilenas o la derrota definitiva de las huestes caceristas que eran el último escollo para que Miguel Iglesias pueda hacerse con el mando supremo del país y firmar un acuerdo de paz conforme a las pretensiones chilenas. Por lo pronto, a esas alturas, lo cierto era que Patricio Lynch ya había recibido instrucciones de su gobierno en el sentido de apoyar el avance de Iglesias<sup>260</sup> sobre la opción de Montero en Arequipa o la de Cáceres en la sierra central. Incluso en el mes de mayo de 1883 ya existía un acuerdo conversado entre Iglesias y Lynch con las bases de lo que sería luego el Tratado de Ancón. Sólo restaba que Iglesias asumiera como mandatario y para ello había que acabar con la resistencia cacerista que se oponía a la opción de Iglesias de firmar la paz aceptando cesión territorial.

El hecho histórico es que esa batalla tuvo lugar el 10 de julio de 1883 y las tropas comandadas por el chileno Alejandro Gorostiaga terminaron diezmado el último ejército de resistencia peruano. Si bien posteriormente se mantuvieron algunos enfrentamientos con guerrillas caceristas e incluso hubo una acción bélica chilena adicional dirigida a lograr la toma de la ciudad de Arequipa donde tenía su sede de mando el otro caudillo, Lizardo Montero, Huamachuco fue la acción armada que tuvo impacto en la vida de la ciudad capital.

En efecto, luego de esa batalla, Miguel Iglesias tuvo el camino libre para poder ascender a tomar el poder y poco a poco fue recibiendo muestras de lealtad de diversos departamentos. Ahumada recoge en sus recopilaciones una comunicación de fecha 31 de julio de 1883 (tres semanas después de la batalla de Huamachuco) dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores de Chile en el que el Ministro Plenipotenciario chileno Jovino Novoa señala:

*“El meeting del domingo tuvo lugar en el teatro Politeama con asistencia de 300 o más personas; fue una reunión popular en que reinó bastante orden. Habló un señor Peña, que fue el invitante, después un obrero y al último el Presbítero Fuentes Chaves que tiene reputación como orador.*

*Todos hablaron en el sentido de la paz, sobre la necesidad de llegar a ella cuanto antes, y que para ello era menester apoyar al General Iglesias. La concurrencia aceptó las conclusiones y se retiró en medio de los vivas al jefe del Norte”<sup>261</sup>.*

<sup>260</sup> ZORBAS, Jason. *Misstep and U-turn: The influence of domestic politics on America's Chilean policy during the War of the Pacific*. Página 96. En:

<http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp01/MQ61310.pdf>

Consultado en febrero del 2012.

<sup>261</sup> AHUMADA MORENO, Pascual. *Guerra del Pacífico. Tomo VIII*. Santiago de Chile: Andrés Bello, reimpresión 1982. Página 287.

También se rescatan dos actas en ese sentido, la primera del 22 de julio y la segunda del 31 de ese mes, suscritas por los miembros del Partido Nacional entre los que destacan los señores Antonio Arenas, Bernardo Roca y Boloña y Ricardo Palma. El texto de la primera acta se manifiesta:

*“Los que suscriben, miembros del partido nacional, considerando patrióticamente la situación del país y convencidos de que es necesario impedir que se prolonguen las calamidades que pesan sobre la República, Han acordado declarar:*

*Que reconocen la autoridad del señor General don Miguel Iglesias y que bajo sus auspicios contribuirán en cuanto les sea posible a la reunión de una Asamblea Constituyente que ponga término a la guerra y restablezca el orden en todo el territorio del Perú”*

*Lima, Julio 22 de 1883<sup>262</sup>.*

La segunda, correspondiente a una reunión con mayor concurrencia llevada a cabo nueve días después, es más extensa y recoge parte de los debates de las personas ahí presentes<sup>263</sup>. El resultado era el mismo y mostraba el reconocimiento que Miguel Iglesias iba logrando en su propósito de ser reconocido como el único líder del país.

El 18 de octubre de 1883 es el gobierno de Chile quien emite una comunicación suscrita por el Ministro Plenipotenciario en Lima, Jovino Novoa, y dirigida al doctor José Antonio de Lavalle, nombrado Ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Iglesias, comunicándole el reconocimiento que ese gobierno hacía a Miguel Iglesias como cabeza del “Gobierno nacional de la República del Perú”<sup>264</sup>. Dos días después, el 20 de octubre de 1883, se firma el Tratado de Ancón. Evidentemente, la agilidad de estas comunicaciones sólo se pueden explicar cuando se tiene presente que las negociaciones de paz entre Perú y Chile ya habían sido llevadas adelante con meses de antelación entre Miguel Iglesias y las autoridades chilenas, quedando los acuerdos logrados sujetos a la condición de que Iglesias pueda ser reconocido como gobierno.

Luego de dos años y nueve meses, los chilenos terminaron logrando lo que buscaban al momento de iniciar la ocupación: entenderse con un gobierno peruano que se aviniera a suscribir un tratado de paz aceptando la cesión territorial del departamento

---

<sup>262</sup> Ibíd., página 287

<sup>263</sup> Ibíd., páginas 287-288.

<sup>264</sup> Ibíd., página 424.

sureño a la par de las demás condiciones incluidas en ese tratado y que son harto conocidas.

Tres días después de la firma del Tratado de Ancón se produce el término de la ocupación. Ahumada recoge el cablegrama que Lynch envió al Presidente Chileno informando la salida de los invasores:

*“Lima, Octubre 23 de 1883.*

*Señor Presidente.*

*A las ocho de la mañana desocuparon nuestras fuerzas a Lima y Callao, en el más perfecto orden.*

*Los campamentos de Chorrillos, Barranco y Miraflores bien organizados.*

*Todo tranquilo.*

*Dos batallones peruanos entraron a Lima cuando salían los nuestros.*

*El Presidente, General Iglesias, hará su entrada a la capital hoy a las 3 pm.*

*Lynch*<sup>265</sup>.

En efecto, la entrada de Iglesias fue todo un acontecimiento.

*“A las tres se avistó el convoy que conducía a S.E.*

*Ambas orillas del río, tanto del lado del Tajamar, como de Monserrate, se hallaban ocupadas por inmensas masas de gente ansiosa de saludarle a su paso.*

*S.E. desembarcó en la estación de los Desamparados, y se dirigió a Palacio acompañado de los señores Ministros de Estado, del Prefecto, Alcalde municipal, Subprefecto, edecanes y una numerosa comitiva.*

*Su presentica en aquel lugar fue saludada con un repique de campanas de todas las iglesias de Lima.*

*En el corto trayecto que tuvo que recorrer de la estación a Palacio, una multitud ebria de gozo lo aclamó entusiasmada, y con la no interrumpida lluvia de flores que eran arrojadas de los balcones fue alfombrado su camino.*

*Con ansia era esperado por naturales y extranjeros el momento solemne en que debía flamear en su puesto de honor el pabellón nacional.*

*Esto se verificó en el momento en que S.E. entraba a Palacio, 3.20 P.M.*

*El hermoso y querido bicolor, obsequiado por el gremio de bordadores de Lima, flotó gallardamente en el tope de su asta, vitoreado por todo un pueblo, por tanto tiempo privado de su amada presencia*<sup>266</sup>.

Los primeros días de gobierno de Miguel Iglesias fueron prolíficos en circulares dirigidas a las diversas legaciones extranjeras así como a otras autoridades y funcionarios. Por su parte, la Corte Suprema recibió su comunicación respectiva el día

---

<sup>265</sup> Ibíd., página 428.

<sup>266</sup> Ibíd., página 429.



jueves 25 de octubre de 1883 y, cumpliendo su palabra expresada cuando se presentó ante el Congreso de Chorrillos en 1881, dispuso la apertura de los Tribunales y la tantas veces buscada reinstauración de los servicios de administración de justicia desde el siguiente lunes 29 de octubre de 1883.

*“Lima, Octubre 26 de 1883.*

*Señor Ministro:*

*Instalado el Gobierno de S.E. el General Iglesias y formado el Gabinete de US. preside como Ministro de Instrucción, Justicia, Culto y Beneficencia, según me lo anuncia por su apreciable oficio de ayer, me es grato contestarle de acuerdo con mis colegas del Tribunal Supremo.*

*Los deseos del Gobierno para que todos los ramos de administración se reorganicen, después de la larga perturbación por que han pasado, serán satisfechos en cuanto tienen relación con la justicia. La independencia de las funciones judiciales, los objetos de que se ocupa la magistratura, libre de pasiones e intereses políticos, y su conducta anterior, siempre recta e imparcial, son la garantía de lo que tendrá que hacer en adelante. Se abrirá el despacho el día 29 como US. me lo previene; y aunque es verdad en los días de nuestra común desgracia se han perdido muchos de los elementos necesarios para el servicio, los obstáculos se superarán con buena voluntad, contando, como es natural, con la decisión de US. para que exigüos recursos faciliten desde luego las labores de la Corte Suprema. Dios guarde a US.*

*Juan Antonio Ribeyro<sup>267</sup>.*

Así, desde el 24 de diciembre de 1880, fecha de la clausura solemne del despacho judicial previo al inicio de la ocupación, transcurrieron un total de 1038 días que hicieron un total de en dos años, diez meses y cinco días en los que el Poder Judicial peruano se mantuvo acéfalo y la administración de justicia en la ciudad de Lima por parte de jueces ordinarios peruanos se paralizó completamente.

Las actividades judiciales se fueron regularizando de manera progresiva con lo que llegaba a su término uno de los periodos más aciagos de la historia republicana y, especialmente, de la historia del Poder Judicial peruano.

---

<sup>267</sup> *Ibíd.*, página 439.

### **Subcapítulo 7: Conclusiones preliminares**

Tal como señalamos en un inicio, el objetivo de este capítulo era poder conocer la actuación del Poder Judicial, en cuanto institución, así como de la administración de justicia, entendida como los mecanismos utilizados para la composición de los conflictos de intereses de los ciudadanos y para la represión de las conductas antijurídicas, durante ese episodio histórico. En ese sentido, luego del repaso histórico realizado, podemos rescatar las siguientes conclusiones preliminares:

Primera.- Si tomamos en cuenta la historiografía peruana así como los estudios dedicados al conocimiento de la historia del derecho y las instituciones jurídicas del Perú, podemos apreciar que las referencias sobre lo que fue la actuación del Poder Judicial y los tribunales de justicia y la forma en que se administró justicia durante el periodo histórico de la ocupación chilena de la ciudad de Lima son muy pobres. Nos enfrentamos, entonces, a un aspecto histórico que no ha sido desarrollado y sobre el que se carecía de una idea clara sobre los hechos principales de la actuación de esa institución que nos pudiera permitir formarnos un juicio sobre su actuación y sobre las formas externas que, durante esos años, se utilizaron para componer los conflictos privados y sancionar las conductas antijurídicas.

Segunda.- La administración de justicia en la ciudad de Lima, dirigida por el Poder Judicial conforme a las leyes de la época, clausuró solemnemente sus actividades el 24 de diciembre de 1880 y, desde esa fecha, no abriría sus puertas ni retomaría sus funciones sino hasta el día 29 de octubre de 1883, después de terminada la ocupación chilena y sólo cuando la ciudad se encontraba nuevamente bajo el gobierno de una autoridad peruana. Estamos hablando, entonces, de un periodo de dos años, diez meses y cinco días durante los cuales el Poder Judicial, en todos sus estamentos, no ejerció sus funciones en la ciudad de Lima dejando acéfala la organización judicial nacional. En efecto, paralelamente a esta situación, los demás distritos judiciales del país mantuvieron su funcionamiento regular ya sea porque no sufrieron ocupación por las fuerzas chilenas o porque, a pesar de la presencia de éstos, sus actividades no se vieron afectadas.

Tercera.- Iniciada la ocupación, existió un vivo interés por parte de los invasores en que los servicios de administración de justicia se regularizaran. Ese interés respondía principalmente a la intención chilena de evitar que intereses comerciales de

extranjeros radicados en Lima se pudieran ver desamparados. El temor de los ocupantes era que los reclamos de estos extranjeros sean captados por sus legaciones y ello pudiera acarrear la intervención de otras naciones en la resolución de los asuntos políticos de fines de la guerra. Esa posibilidad era temida por los invasores toda vez que su interés inicial era poder someter rápidamente a la ciudad de Lima para lograr firmar, cuanto antes, un tratado de paz con cesión territorial y promesa de pago de los gastos de guerra.

Cuarta.- Fue la Corte Suprema quien, en su calidad de supremo tribunal, actuó como representante del Poder Judicial y sus acciones, decididas en reuniones que contaron con la participación de casi todos los vocales supremos, fueron tomadas como acciones del mismo Poder Judicial tanto por parte de los invasores como por parte de los demás órganos jurisdiccionales jerárquicamente inferiores. En ese sentido, tanto la Corte Superior de Lima como los juzgados de primera instancia secundaron a la Corte Suprema en sus decisiones y alinearon su actuación a lo expresado por el Supremo Tribunal.

Quinta.- La posición de la Corte Suprema, y por ende del Poder Judicial, resulta ser clara desde el inicio de la ocupación en el sentido de no ejercer sus funciones mientras durase la ocupación del ejército invasor. El motivo de esa decisión fue expuesto con claridad por parte del Presidente de la Corte Suprema ante el Congreso de Chorrillos sin embargo, en los primeros momentos, la negativa no fue clara y fue presentada mediante respuestas evasivas, aunque jurídicamente correctas, dirigidas tanto a las autoridades invasoras como a quienes, en su nombre, les invitaron a reiniciar el ejercicio de sus funciones.

Sexta.- A raíz de las primeras negativas de la Corte Suprema, desde el mes de febrero de 1881 las autoridades invasoras dispusieron la vigencia en Lima y el Callao de la ley marcial que dictarían ellos mismos. Este régimen se dedicaría a conocer no sólo la sanción de faltas y delitos sino también algunos conflictos civiles menudos. Ante la extensión del tiempo de ocupación y ante la rotunda y definitiva negativa del Poder Judicial de reiniciar el ejercicio de sus funciones, los chilenos reconocieron que la ley marcial no iba a permitir satisfacer la necesidad de una tutela jurídica de intereses privados y por ello optaron por el establecimiento de un sistema propio de administración de justicia.

Séptima.- La posición de la Corte Suprema, tal como se deriva de sus comunicaciones dirigidas al Gobierno Provisorio y su exposición realizada ante el Congreso de Chorrillos, radicaba en el entendimiento de que no era posible el ejercicio de función jurisdiccional alguna debido a que carecían dos elementos esenciales de la jurisdicción: la *coertio* y la *executio*. La única forma de subsanar dicha falta hubiera sido mediante el sometimiento y la dependencia a la autoridad invasora pero esa opción implicaba, desde el punto de vista de la Corte Suprema, una afrenta a la idea de soberanía nacional de la que el Poder Judicial era guardián. En ese sentido, prefirieron actuar en resguardo de ese supremo valor y decidieron no someterse a la autoridad invasora. La Corte Suprema reconoció la posibilidad del Gobierno Provisorio para invitarlos y exigir el reinicio de las actividades judiciales y, en consecuencia, no negó su legitimidad como gobierno ni la validez jurídica de los decretos que expidió. Sin embargo, tal como podemos ver, se negó a acatar ese derecho por considerarlo injusto y en desacuerdo con los supremos valores que inspiran la existencia del Estado.

Como consecuencia de ello, al no poder ejercerse una jurisdicción que no resultaría efectiva, decidieron no reiniciar sus funciones hasta que se supere la ocupación. En este razonamiento, los problemas generados por la administración de justicia constituían poco contrapeso, toda vez que la Corte estaba convencida que dichos sacrificios eran justos cuando se trataba de defender la dignidad nacional.

Octava.- Después de los primeros meses de ocupación, el problema de la administración de justicia dejó de tener la importancia que tuvo en un inicio debido, presumiblemente, a la aciaga agenda política, tanto interna como externa, que ocupaban tanto al Gobierno Provisorio como a la autoridad invasora. Sin embargo, en noviembre de 1881, siendo evidente que el Poder Judicial peruano no reiniciaría su labor, las autoridades chilenas prohibieron a los magistrados peruanos de conocer cualquier causa y establecieron un sistema paralelo que reemplazaría la ley marcial en la misión de garantizar una tutela a los intereses particulares en conflicto.

Novena.- El sistema paralelo establecido por los invasores no contó, ni en su creación ni en su establecimiento, con la participación de peruanos ya que inclusive los magistrados y sus secretarios fueron expresamente traídos desde Chile. Se creó un sistema basado en la resolución de los conflictos por medio de árbitros elegidos por las partes y sometidos a la vigilancia de un juez de letras que, además, conocería los

pocos temas no delegados expresamente al arbitraje. Posteriormente se añadió un sistema de justicia de paz y unos juzgados del crimen que, en teoría debían, reemplazar totalmente la aplicación de la ley marcial en Lima. El último acto de este sistema fue el establecimiento de un Tribunal de Alzada que conocería los procesos de nulidad que se darían contra lo resuelto por los árbitros. Este sistema fue pensado por los invasores no como un sistema especial que daban para la ciudad de Lima sino más bien como una extensión del Poder Judicial Chileno.

Décima.- En un inicio los chilenos señalaron que el derecho que su sistema paralelo utilizaría tanto para resolver los conflictos civiles como para sancionar las faltas y delitos sería el derecho peruano. Sin embargo, esta situación fue paulatinamente dejada sin efecto ya que la autoridad invasora empezó a limitar la aplicación del derecho peruano en el juzgamiento de faltas y delitos mediante la dación de normas especiales (ley marcial) así como la orden de aplicar ultraterritorialmente leyes chilenas.

Undécima.- El sistema paralelo establecido por los invasores fracasó en su intento de servir como un sistema alternativo eficiente para la solución de los conflictos civiles. El reconocimiento del fracaso vino por parte de los mismos invasores y, de su propia evaluación, se entiende que se debió a que los peruanos (tanto árbitros como litigantes y letrados) aprovecharon la laxitud de la regulación en su beneficio. La molestia de los invasores sólo se puede entender en el sentido de que este sistema de administración de justicia no terminó defendiendo los intereses particulares que revestían importancia para ellos (es decir, los de extranjeros y chilenos) y por ello señalaron que la única solución a estos problemas era el poner una corte de apelación que pudiera enmendar lo resuelto por los árbitros e, imaginamos, disponer la tutela de los intereses que ellos consideraban correctos. Sin embargo, estas modificaciones no tuvieron lugar debido a la cercanía del final de la guerra y la ocupación.

Duodécima.- Los invasores señalaron que, desde el inicio de la ocupación, existieron particulares que acudieron a ellos para lograr la tutela de algún derecho y que su respuesta fue negativa dejándolos en libertad de poder resolver su conflicto de la manera que les resultase más conveniente. Esta mención, sumándola con las que señalaban que la cantidad de crímenes y riñas en la ciudad no era elevada, nos hacen eliminar de plano la idea de que la población limeña recurrió a la autotutela sistematizada de sus intereses. Por el contrario, consideramos razonable la existencia



de un número oscuro de conflictos que debieron ser solucionados mediante el recurso de formas de heterocomposición menos elaboradas, principalmente antes del establecimiento del sistema paralelo impulsado por los chilenos. Nos referimos a que la población bien pudo recurrir a la opinión de sacerdotes y personas notables o, incluso, a los mismos magistrados peruanos quienes, de forma totalmente informal, opinaban sobre los litigios. Esta opción explica también la prohibición que los invasores dieron a los magistrados peruanos de conocer pleitos. Esta prohibición carecería de sentido si no fuera porque, de alguna forma, existía una participación de los mismos en esas actividades.



### **CAPITULO III LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LIMA DURANTE LA OCUPACIÓN CHILENA SEGÚN LOS EXPEDIENTES JUDICIALES TRAMITADOS EN ESA ÉPOCA**

Si bien el análisis de los hechos a nivel “macro”, que incluyen tanto las normas expedidas con la finalidad de regular la actuación del Poder Judicial así como las comunicaciones que enviaron las máximas autoridades de cada uno de estos estamentos, nos permiten tener una idea clara de lo que fue la forma cómo se iba enfrentando el problema de la administración de justicia en la ciudad de Lima durante la ocupación chilena; la intención de la presente investigación es no limitarse al análisis de esos hechos sino recurrir directamente al análisis de las fuentes primarias para que, desde su apreciación conjunta, podamos aplicar un razonamiento inductivo y poder no sólo confirmar, afinar, complementar o desmentir las conclusiones que hemos ido obteniendo hasta este momento sino poder generar, a su vez, una idea tan completa y clara del fenómeno que nos ocupa como el que conseguimos en el capítulo anterior.

Se busca obtener información ya no desde las comunicaciones y acciones que realizó el Poder Judicial en tanto institución sino más bien de la apreciación de los actos realizados por jueces, letrados y litigantes. Este recurso a las fuentes primarias implica salirse del análisis a nivel “macro” e intentar un análisis a mayor nivel de detalle aunque sin entrar a detenerse en las peculiaridades que puede tener cada expediente o juicio tramitado durante ese periodo. Evidentemente, no es intención de esta investigación describir los actos que se siguieron en cada uno de los expedientes, juicios o acciones particulares que se encuentren sino de generarse una apreciación conjunta de los mismos, sistematizándolos en la medida de lo posible y lo necesario para poder entenderlos como el reflejo de una coyuntura histórica determinada.

Sin embargo, esta labor requiere la determinación de distintos conceptos y categorías como paso previo para la recopilación y sistematización de la información. En primer lugar, nos referimos a la explicación de qué es lo que entendemos que se incluye dentro de la categoría de fuentes primarias. Luego, los criterios utilizados para determinar el intervalo histórico que buscaremos cubrir y cuyos puntos iniciales y finales no necesariamente tienen que coincidir con los hechos que, según la historiografía especializada, son los extremos del periodo de la ocupación (17 de enero de 1881 y 23 de octubre de 1883). En efecto, se debe tener presente que

debemos contar con un intervalo que nos permita, además, apreciar posibles causas y efectos inmediatos del fenómeno histórico que nos ocupa. Finalmente, aunque sin las mismas dificultades, también nos va a resultar necesario determinar el ámbito geográfico al que vamos a circunscribir este estudio.

Todas estas acciones previas se realizan con la finalidad de poder obtener una base de trabajo ordenada y sistémica que nos permita analizar de manera correcta la información obtenida.

### **Subcapítulo 1: Las fuentes primarias.**

Según los estudios de metodología de la investigación histórica, las fuentes históricas se suelen diferenciar entre primarias y secundarias. La idea que las separa es la calidad de “primera mano” que suelen tener las fuentes primarias con diferencia a las secundarias que están conformadas más bien por descripciones históricas obtenidas en base a una apreciación ya realizada sobre las fuentes primarias.

En esa idea, las comunicaciones utilizadas como acervo fundamental para el desarrollo del capítulo anterior también constituyen fuentes primarias. Sin embargo, tal como manifestamos en la introducción del presente capítulo, no son ellas de las que nos vamos a ocupar. La diferenciación entre aquellas fuentes primarias y las que queremos analizar en el presente capítulo respondería entonces no a que, historiográficamente sean dos tipos de fuentes distintas, sino que atienden distintos puntos de vista de una misma coyuntura. Así, las anteriores se ocupaban de la administración de justicia en Lima durante la ocupación a un nivel de sistema y las que queremos estudiar en este momento estarían referidas a la actuación de los órganos de línea encargados precisamente de brindar el servicio de administración de justicia. Cambiamos el enfoque desde el “sistema” al “órgano”.

Hecha esta salvedad podemos responder a la pregunta ¿A qué nos referimos con la categoría “fuente primaria”? Pues, en primer lugar, a los expedientes judiciales tramitados durante el periodo de la ocupación. Sabido es que la administración de justicia en nuestro sistema legal es predominantemente escrita y por ello todo juicio, ya sea tramitado por jueces de primera instancia, de paz, árbitros, tribunales marciales o de letras, tiene un soporte documental que son los expedientes. Las excepciones a esta regla son pocas y, tal como veremos más adelante, inclusive los juicios orales

tuvieron algún tipo de sustento documental. Precisamente esos sustentos documentales de los juicios orales formarían también parte de las fuentes primarias que interesarían a esta investigación.

#### a. Expedientes judiciales

Todos los expedientes tramitados por el Poder Judicial forman parte, en un primer momento, del archivo de cada una de las cortes superiores que existen en el país para luego pasar a formar parte del acervo documentario del Archivo General de la Nación. En el caso que nos ocupa, los expedientes judiciales correspondientes a la época de la ocupación de la ciudad capital forman parte de dicho acervo y pertenecen a la Dirección de Archivo Republicano. Dentro del Inventario de este archivo, los expedientes judiciales pertenecen al protocolo nombrado “RPJ” que incluye todos los expedientes desde 1821 hasta 1899.

Lejos de lo que pudiera pensarse, el acervo documentario que se encuentra en poder del Archivo General de la Nación no constituye en la actualidad un acervo sistematizado. En consecuencia, la revisión de los expedientes que obran en su poder constituye una labor sumamente dificultosa debido a la imposibilidad de conocer con certeza el número y el tenor de los documentos que existen en el archivo.

En efecto, a raíz de la investigación llevada a cabo en el Archivo General de la Nación nos encontramos con los siguientes problemas:

- a. El RPJ está organizado según una lógica que dispone que cada expediente, independientemente del año en que terminó el juicio, será archivado en función al año en que se inició. Así, el conjunto de archivos signados como correspondientes al año 1879 incluyen, en teoría, todos los expedientes que se iniciaron en aquel año. Si bien la duración de los juicios en aquellos años resaltan por su breve duración siendo que la mayoría de procesos culminan en el año en que se iniciaron, lo cierto es que este método no está exento de problemas. Estos problemas se deberían más a una cuestión del acto mismo de archivar que a un defecto en la concepción del procedimiento y nos referimos al hecho de que existen expedientes incluidos en el legajo correspondiente a un año en particular pero que en realidad corresponden a otro año por haberse iniciado en esa fecha.

- b. Del universo de expedientes judiciales correspondientes a los años 1879 a 1883, el Archivo Republicano del Archivo General de la Nación sólo tiene contabilizados un cierto número, siendo real la existencia de un número de expedientes archivados pero que no han sido contados. Tal es el retraso en esta tarea que en, con relación a la documentación correspondiente a los años 1879 y 1880, no se tiene ni siquiera una idea medianamente clara respecto a si los expedientes no contabilizados son un número mayor o menor que los que sí han sido listados. Este problema, según los mismos trabajadores del Archivo Republicano, afecta principalmente a los mencionados años. Los expedientes correspondientes a 1881, 1882 y 1883 son de por sí pocos y debido a ello lo más probable es que hayan sido indexados en su totalidad aunque no se puede descartar que exista algún expediente correspondiente a esos años que se encuentre extraviado. No obstante, tanto las observaciones de los trabajadores del archivo como el mismo contexto histórico correspondiente a esos años y que repasamos en el capítulo anterior, nos permiten deducir que esas afirmaciones no se encuentran lejanas a la realidad.
- c. Según las reglas del Archivo Republicano, sólo aquellos documentos que han sido listados pueden ser puestos a disposición de los investigadores. Esto hace que un investigador no pueda tener el acceso al universo de los expedientes judiciales – sean civiles o criminales – que obren en el archivo.
- De los expedientes que se encuentran listados, existe un considerable número de ellos que, debido a las pobres condiciones de almacenamiento se encuentran deteriorados y, evidentemente, no pueden ser puestos a disposición de los investigadores.
- d. Adicionalmente a la existencia de la “cifra oscura” de expedientes que mencionamos, encontramos un problema adicional y es el hecho de que tanto la falta de actualización del índice, que corresponde a la década de los años 1990, como el extravío de expedientes que fueron indexados en un primer momento hacen que el número de expedientes listados en los inventarios del Archivo no coincida con los que en realidad se encuentran a disposición de los investigadores.
- e. Finalmente se debe señalar que incluso aquellos expedientes que se encuentran a disposición de los investigadores acusan severos deterioros derivados de su antigüedad y de las pobres condiciones en que se encuentran almacenados y en las que han sido tratados durante ese periodo o las oportunidades que fueron usados por consultas. Es más bien raro el



expediente del que pueden obtenerse todos los datos y la mayoría muestran una situación que dificulta su consulta y la recopilación de información. Expedientes con folios rotos o con folios incompletos es la situación común de estas fuentes primarias.

- f. Ahora bien, afortunadamente para esta investigación, los mencionados problemas no sólo tienen un aspecto negativo y es que curiosamente también revisten un efecto inverso que podemos calificar como positivo. Nos referimos a que, si bien es cierto que los expedientes indexados constituyen un número menor a la real cantidad de expedientes existentes en el archivo, debido a errores en el proceso de indexado existen años en los que un investigador puede acceder a un mayor número de expedientes que lo señalado en el inventario. Esos expedientes forman también parte de la “cifra oscura” aunque, a diferencia del resto, sí pueden ser accedidos y ello hace que, aunque no aparezcan en el inventario del archivo, puedan ser tomados en cuenta en la investigación.

Estos problemas, como puede entenderse, genera la existencia de una cantidad de expedientes judiciales a los que no se ha podido tener acceso y cuya magnitud no se puede conocer con exactitud debido a la “cifra oscura” que mencionamos. Asimismo, demuestra que estamos ante una situación en la que el inventario realizado por el personal del mismo Archivo General de la Nación tiene una función meramente referencial ya que sus datos se ven incongruentes con la realidad principalmente por exceso. Ante esta situación, la posibilidad de elegir una muestra representativa de los expedientes a analizar y poder, mediante ese camino estadístico, obtener conclusiones válidas referidas al tema de la presente investigación se veía expuesta a muchos problemas consistentes principalmente en el altísimo riesgo de que la muestra elegida no pueda ser científicamente aceptable como para poder ser calificada de representativa. Por ello nuestra decisión fue acceder a todos los expedientes disponibles para que, en base a ellos, podamos realizar la apreciación conjunta que queríamos.

Sin embargo, la realidad nos demuestra que el total de expedientes accedidos es tan sólo una muestra minúscula de lo que en realidad debió ser no sólo el universo de expedientes archivados sino también de los expedientes realmente tramitados en esa época. La imposibilidad de establecer una muestra representativa así como la imposibilidad de acceder al universo de expedientes hacen que nuestra intención de

aplicar un razonamiento inductivo válido no pueda aplicarse en la realidad. En efecto, muy débiles serían las conclusiones que, producto de ese tipo de razonamiento, pudiéramos elaborar debido a que nos estaríamos basando en la observación de un número muy limitado e inferior de los expedientes. La imposibilidad de obtener dichas conclusiones en base a un razonamiento inductivo hicieron que el objetivo de la investigación se tuviera que ver limitado sólo a buscar conclusiones que desmientan, ratifiquen o modifiquen las ideas generales que ya nos hemos generado en el desarrollo de los capítulos anteriores

Entonces, siempre dentro de los límites temporales y geográficos que explicaremos más adelante, se ha tenido acceso a las siguientes cantidades de expedientes.

Año	Causas Civiles		Causas Criminales	
	Indexadas	Revisadas	Indexadas	Revisadas
1879	48	171	30	02
1880	31	126	(total de expedientes correspondientes a los cinco años)	48
1881	02	09		03
1882	26	35		32
1883	21	42		37

#### b. Documentos de sustento de los juicios orales.

Según la regulación vigente a la fecha de la ocupación de Lima, los juicios orales se daban en los juzgados de paz donde cada juez tenía la obligación de llevar un registro de las causas que conocía y resolvía<sup>268</sup>. Sin embargo, a partir de la ocupación, dicha situación se tornó un poco más generalizada toda vez que los Tribunales Marciales, según las normas que regularon su actuación en la ciudad de Lima<sup>269</sup>, y los juzgados

<sup>268</sup> Ley que aprueba el Reglamento de los jueces de paz del 20 de mayo de 1854 (<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/LeyesXIX/1854028.pdf>).

Artículo 18.- Los jueces de paz llevarán dos libros, uno de conciliaciones y otro de juicios verbales; y al terminar el cargo, entregarán al sucesor los del año corriente bajo de inventario, y con intervención del síndico del lugar.

El siete de enero de cada año, se entregarán también bajo de las mismas formalidades, los libros en que estén las actuaciones de todo el año próximo pasado, al juez de primera instancia respectivo para que mande archivarlos en la escribanía pública.

<sup>269</sup> Ley Marcial y Contribución de Guerra a Lima y El Callao del 9 de febrero de 1881

(...)

Art. 2º Los tribunales militares que se constituyan con arreglo a este decreto, sólo darán sentencias verbales.

de paz instalados durante la vigencia del “Poder Judicial de la ocupación” hicieron de los juicios orales la forma por excelencia en que desempeñaban su labor.

En todos esos casos las normas fueron claras al establecer la necesidad de contar con cuadernos de registro en los que los jueces dejen constancia de sus actuaciones. Ante ello debemos concluir que dichos libros efectivamente existieron aunque los mismos no han podido ser encontrados durante el transcurso de esta investigación. El único libro del que se obtuvo una mención con mayor certeza fue el “Libro Mayor del Tribunal Militar Chileno en Lima” en el cual, entendemos, se copiaron las sentencias dictadas por el Tribunal Militar durante la vigencia de la Ley Marcial. Sin embargo, esta fuente, si bien obra dentro del catálogo del Archivo General de la Nación, no se encuentra accesible a los investigadores.

En los catálogos correspondientes al año 1997, el referido Libro se encuentra consignado dentro de los “documentos y colecciones varias” del Archivo Histórico Colonial. Dicho archivo informa que ese libro formó parte de una colección denominada “Donación de Ricardo Bustamante y Cisneros” y que constaba además en su “Legajo 1” de un “Libro de decretos”, un “Copiador de Sentencias” y un “Copiador de actas originales”. Adicionalmente, la misma colección incluía en su “Legajo 3” diversos expedientes de la Corte Suprema distribuidas en tres carpetas con la indicación adicional de que “falta doc56”.

Esta información, que obra en los catálogos internos que manejan en el Archivo Colonial, se encuentra contenida en un documento que señala que la mencionada colección fue enviada al Archivo Histórico Republicano aunque no cuentan con la indicación precisa de fecha de envío. En el Archivo Histórico Republicano no niegan que la mencionada colección denominada “Donación de Ricardo Bustamante y Cisneros” les haya sido remitida pero señalan sí que la misma no ha sido indexada y que por eso mismo su ubicación es desconocida y su acceso a los investigadores es imposible.

El “Libro Mayor del Tribunal Militar Chileno en Lima” así como los otros cuadernos que se mencionan formarían parte de los documentos inmersos en la “cifra oscura” del Archivo Republicano formado por aquellos documentos que ora porque no han sido indexados, ora porque han sido extraviados, u ora porque se encuentran deteriorados, no han podido ser consultados en el marco de la presente investigación. Queda la

esperanza que los datos obtenidos hasta el momento permitan que, apenas el Archivo Republicano termine el larguísimo y tedioso proceso de inventario en el que se encuentra continuamente, se pueda tener acceso a dicha fuente y a la valiosa información que debe contener.

Sin embargo, a pesar de esta desafortunada situación, la misma descripción de lo que contiene la “Donación de Ricardo Bustamante y Cisneros” nos permiten aclarar otros puntos y el hecho de que, en efecto, el Tribunal Militar Chileno en Lima contó con los referidos cuadernos (libro de decretos, copiador de sentencias y copiador de actas originales) y esa idea, conjugada con datos que posteriormente mencionaremos referidos a la actuación de dicho Tribunal permiten hacernos una idea algo más completa de la forma cómo ejerció sus facultades.

#### c. Expedientes arbitrales.

Tal como señalamos anteriormente, la institución del arbitraje encontró una etapa de constante aplicación durante el periodo de la ocupación no sólo a raíz de la implementación del “Poder Judicial de la ocupación” que se basaba en la institución del arbitraje sino también porque se deduce de los hechos que analizamos que resultaba muy probable que la población limeña haya recurrido de manera extraoficial a los magistrados judiciales para que resuelvan, como una suerte de arbitraje, alguna controversia de índole civil o comercial.

Evidentemente, tal como se puede desprender de las normas que regulaban la institución del arbitraje incluso desde antes de la ocupación, dichas causas también tuvieron que sustanciarse por intermedio de expedientes. Esos expedientes, evidentemente, no formarían parte de la RPJ y, si alguno existiese, debería formar parte de alguna colección privada particular.

Lamentablemente, estas fuentes tampoco han podido ser encontradas en el marco de esta investigación.

#### d. Documentos sueltos.

Finalmente, una fuente primaria que también tenemos que considerar son los documentos sueltos que, sin llegar a ser expedientes ni formar parte de un libro o cuaderno, se han podido ir recopilando durante la investigación y que hacen referencia de primera mano a un juicio, predominantemente criminal, llevado a cabo durante el periodo materia de investigación. Estos documentos sueltos obran principalmente en la recopilación documentaria realizada por el chileno Pascual Ahumada.

### **Subcapítulo 2: Determinación del punto inicial del período histórico a estudiar.**

Tomando en consideración los hechos descritos en el capítulo anterior, podemos concluir válidamente que la fecha de entrada del ejército chileno a la ciudad de Lima, 17 de enero de 1881, no constituye un punto de partida desde el que se pueda apreciar el inicio de la suspensión de las labores del Poder Judicial. Por el contrario, queda claro que a esa fecha contaban 24 días transcurridos sin que se ejerza función jurisdiccional toda vez que, tal como informó la Corte Suprema en su primera respuesta al jefe invasor<sup>270</sup>, el despacho judicial se clausuró solemnemente en el día 24 de diciembre de 1880.

Ahora bien, esta situación nos obliga a intentar ubicar un punto de inicio en alguna fecha distinta a la entrada efectiva del ejército invasor a la ciudad.

#### a. Las actividades de hostilización durante 1880

Según los oficios consignados en los Anales Judiciales de la Corte Suprema<sup>271</sup>, se tiene constancia de que las actividades judiciales en la Provincia del Callao sufrían interrupciones incluso desde el mes de abril de 1880 debido a la presencia de buques militares chilenos bloqueando el puerto. En efecto, debemos recordar que luego de la victoria chilena en el Combate de Angamos del 8 de octubre de 1879, la supremacía chilena a nivel marítimo era incontestable y ello les permitió no sólo el libre tránsito de tropas y pertrechos a las zonas de guerra sino también la realización de campañas

<sup>270</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, op. cit., página 524.

<sup>271</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. *Anales Judiciales del Perú 1876-1877-1878-1879. Tomo 3*. Lima: Oficina Tipográfica de “La Opinión Nacional”, 1908.



marítimas en su ofensiva contra el Perú. Así, en 1880, la armada chilena se ocupó de realizar ataques y bloqueos a los principales puertos del litoral peruano.

Debemos reconocer que los incidentes que sucedían en El Callao no eran únicos ya que situaciones similares se daban durante todo ese año tanto en los departamentos del sur del país – donde en los primeros meses de 1880 aún se peleaba la campaña terrestre de la guerra – como en los departamentos costeros del centro y norte que en los meses siguientes sufrieron los estragos de la Expedición Lynch.

Sin embargo, en ese mismo orden de ideas, la principal razón para no considerar el mes de abril de 1880 como el punto de inicio de nuestra investigación es que, en esos mismos momentos y a pesar de las vicisitudes que ya se vivían en el puerto, los juzgados de la ciudad de Lima, su Corte Superior y la Corte Suprema seguían ejerciendo sus funciones. En efecto, el mismo hecho de que el Supremo Tribunal pudo responder las comunicaciones enviadas desde El Callao e incluir en ellas severas llamadas de atención relativas al cumplimiento de la función a pesar de las horas difíciles que vivía la patria es una muestra de ese funcionamiento regular. Si a estos hechos sumamos las diversas resoluciones que, según los Anales Judiciales de la Corte Suprema<sup>272</sup>, el Supremo Tribunal emitió en aquellas mismas fechas queda la total certeza de que en esos momentos la administración de justicia en Lima se mantenía en condiciones normales.

Resultaría inconsistente entonces postular que el punto de inicio metodológico desde el que vamos a encuadrar el presente trabajo sea una fecha determinada por esos actos de hostilidad que se dieron durante ese año ya que los mismos no representan una variación en la administración de justicia en la ciudad capital.

#### b. El cierre del despacho judicial.

Tenemos claro que el 17 de enero de 1881 ya no había en la ciudad de Lima actividades judiciales. Ello no sólo por el desarrollo de la guerra en los días anteriores sino precisamente porque estas actividades habían sido clausuradas el 24 de diciembre anterior. En ese sentido, el hecho mismo del ingreso de las tropas chilenas a la ciudad de Lima no motivó un cambio en la situación del Poder Judicial peruano.

---

<sup>272</sup> *Ibídem.*

No constituye pues, para nuestro objeto de investigación, un “punto de quiebre” a pesar de lo que la historiografía convencional puede señalar ya que ésta se basa en situaciones históricas de importancia política y no en momentos claves para el funcionamiento de la administración de justicia.

Más contundencia encontraríamos si admitimos como posible fecha el 24 de diciembre de 1880, cuando se realizó la clausura solemne de las funciones jurisdiccionales en todo el país. Esta clausura, considerando las especiales circunstancias que vivían el país en general y la ciudad en particular, revestía un carácter distinto a la de años anteriores. En efecto, tal como señalamos en el capítulo anterior, a esa fecha el ejército invasor ya se encontraba acantonado en localidades al sur de la capital y por ello inferimos que es muy probable que el día de la clausura se tuvo la certeza que, durante los días que durara la paralización de las labores, se realizaría el ataque a la ciudad. Ello quiere decir que se tenía consciencia de que la apertura de las actividades judiciales iba a depender si, llegado el 14 de marzo que era la fecha establecida para el fin de las vacaciones, se había resuelto el ataque a la ciudad y esta estaba en condiciones de realizar sus actividades con total normalidad. Creemos que no resulta descabellado pensar que a esa fecha también debió existir en la sociedad limeña alguna idea de que, si la defensa no resultaba exitosa, la paralización de las actividades judiciales iba a entrar en una suerte de indeterminación dependiendo del futuro que corriera la ciudad.

Si a esta sensación le sumamos el hecho de que esa clausura marcó efectivamente un momento en el que las actividades judiciales en la ciudad de Lima dejaron de atender, se erige como una opción mucho más consistente para establecer como punto de inicio del periodo de “anormalidad” en la administración de justicia.

Sin embargo, tal como puede advertirse de los párrafos anteriores, esta conclusión se basa en deducciones lógicas e indicios de lo que debieron ser las previsiones o el ánimo de los jueces, letrados y litigantes al momento de disponer la suspensión de sus actividades jurisdiccionales. Este hecho mismo se convierte en la principal flaqueza de esta opción debido a que un análisis histórico debe privilegiar principalmente los hechos sobre las deducciones y que, en todo caso, éstas deben siempre realizarse sobre hechos acreditados. De no ser así, corremos el riesgo de estar analizando más bien interpretaciones de la historia y no la historia misma.

### c. La programada reanudación de las actividades judiciales

Ante lo expuesto, aparece una tercera opción: el 14 de marzo de 1881. Efectivamente, tal como ya hemos expuesto, según el Decreto del 23 de marzo de 1880, norma vigente al momento de la clausura del despacho judicial, la reanudación de las actividades judiciales estaba programada para el día 14 de marzo. Constituye entonces un hecho histórico acreditado que a esa fecha se debieron reanudar las funciones jurisdiccionales y ello, en Lima, no sucedió. Por el contrario, a esa fecha, el Poder Judicial ya había rechazado varias invitaciones realizadas tanto por los invasores como por el Alcalde de Lima y el Presidente Provisorio.

Corresponde hacer un deslinde y es que la paralización de las actividades judiciales entre el 24 de diciembre y el 13 de marzo podría ser considerada como una paralización “legítima” en tanto estaba programada en las normas vigentes a ese momento y jurídicamente no respondía a la terrible situación que atravesaba el país sino más bien a dicha regulación. Es más, si el 14 de marzo la Corte Suprema decidía reiniciar sus labores hubiera encontrado no sólo apoyo sino el beneplácito tanto de las autoridades locales como de los invasores. No debemos olvidar que ambas partes ya habían solicitado el reinicio de estas actividades aunque esto no evite las terribles consecuencias político-jurídicas que dicho acto hubiera encarnado.

Sin embargo, ello no se dio de esa manera. El Poder Judicial en Lima no reinició sus actividades el día establecido en las normas y con ello se terminó de borrar cualquier resquicio de “legalidad” que hasta el más optimista de los analistas quisiera reconocer en esta situación. En lo que respecta al funcionamiento del Poder Judicial, creemos que no existe ningún hecho que muestre más el quebrantamiento de la situación jurídicamente establecida que el hecho de que, llegado el día señalado por ley para la reanudación de las actividades judiciales, éstas no se hubieran reanudado.

Esto demuestra que, a diferencia de la opción anterior, la elección de esta fecha como punto de inicio del periodo denominado “Ocupación Chilena de Lima” en lo que respecta a la actuación del Poder Judicial y la administración de justicia se basa más en la comprobación fáctica de un hecho histórico y por ello la consideramos más adecuada con la salvedad que la misma tiene fines puramente metodológicos y referidos exclusivamente a este extremo de la presente investigación.

d. ¿Desde cuándo iniciar la revisión de expedientes?

Si determinamos que la fecha crucial para determinar el inicio del periodo durante el cual la administración de justicia se vio afectada por la ocupación chilena de Lima, nos enfrentamos a un problema y es que iniciar toda la investigación tomando como única referencia inicial el día 14 de marzo de 1881 nos quitaría la posibilidad de conocer y apreciar hechos previos reflejados en la actuación de los jueces antes del inicio de la ocupación y que, a la luz de los datos integrales, podrían enriquecer nuestra visión.

La pregunta que se genera es precisamente aquella que sirve de título a este párrafo y, para poder responderla, podemos recurrir a una observación realizada por el jurista decimonónico Manuel Atanasio Fuentes. “*El Murciélago*”, en su “*Estadística General de Lima*”<sup>273</sup>, señaló entre otros varios datos interesantes que a 1858 los procesos judiciales tenían una duración media de un año y siete meses. Ya hemos desarrollado la idea de que a esos años tanto los jueces como los litigantes eran expedientes en el manejo de la legislación judicial vigente desde el año 1852. Es decir, no existen motivos para creer que en los veinte años que separan la observación de Fuentes hasta el inicio de la ocupación, esa situación haya cambiado sensiblemente. Por el contrario, todos los sujetos intervinientes en las actividades judiciales, debieron haber tomado mayor experiencia en el manejo del sistema por lo que esa observación de Fuentes en 1858 bien puede resultar aplicable a 1881.

Ahora bien, aplicando esa idea al tema que nos ocupa, tenemos que resulta un razonamiento correcto el pensar que los juicios que quedaron interrumpidos en 1881, cuando los tribunales no cumplieron con reinstalarse en la fecha prevista, pudieron haberse iniciado en el plazo que señala Fuentes. Es decir, un año y medio con anterioridad al 14 de marzo de 1881. En ese sentido, con la finalidad de abarcar en su integridad el fenómeno que nos interesa, resultaría adecuado empezar a revisar los expedientes judiciales que se iniciaron desde la segunda mitad del año 1879.

No obstante ello, el hecho de tener que enfrentarnos a la búsqueda en un archivo que a duras penas está clasificado por años nos obliga a tener que iniciar el análisis

---

<sup>273</sup> FUENTES, Manuel Atanasio. *Estadística general de Lima*. Lima: Tipografía Nacional de M.N. Corpancho, por J. h. DEL Campo, 1858, pp. 2147, 216, 230, 223. Citado por: RAMOS NUÑEZ, Carlos. *Historia del Derecho Civil Peruano. Siglos XIX y XX. III. Los jurisconsultos: El Murciélago y Francisco García Calderón*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica, 2002. pp. 42.

considerando el año 1879 como punto inicial de la recopilación de información en las fuentes primarias. Ello con la finalidad de poder abarcar de forma completa toda la información accesible referida al periodo histórico que nos ocupa.

### **Subcapítulo 3: Determinación del punto final del período histórico a estudiar.**

La determinación del punto final del periodo histórico a estudiar presenta menos dificultades que el punto de inicio gracias a la existencia de una fecha establecida en la que se regularizaron los servicios judiciales. Así, tal como señalamos en el capítulo anterior, es un hecho histórico acreditado que el 26 de octubre de 1883 la Corte Suprema informó al gobierno del General Miguel Iglesias que desde el día lunes 29 de octubre se reabrirían los despachos judiciales<sup>274</sup>. Esta fecha es recogida también por autores como Menacho<sup>275</sup> y García Calderón<sup>276</sup>.

Sin embargo, es claro que si bien el 29 de octubre de 1883 se pudo haber producido la reapertura de las cortes y juzgados de la ciudad de Lima, ello no implica que todos los servicios judiciales volviesen a prestarse de forma inmediata y como si los dos años y diez meses que duró la ocupación hubiesen pasado sin ocasionar mayores variaciones. Por el contrario, resulta razonable pensar que las actividades jurisdiccionales fueron reanudándose progresivamente hasta terminar regularizándose en los meses posteriores.

Sin embargo, exceden los objetivos del presente trabajo el analizar la administración de justicia en Lima una vez que esta se regularizó. En ese sentido, considerar en nuestro análisis los dos meses del año 1883 posteriores a la reinstauración de los tribunales nos podría resultar suficiente.

---

<sup>274</sup> AHUMADA MORENO, op. cit., página 439.

<sup>275</sup> MENACHO CHIOK, Luis Pedro. Historia del derecho peruano por épocas. En: <http://www.gestiopolis.com/canales8/eco/derecho-peruano-y-su-historia-por-epocas.htm>  
Consultado en febrero del 2012.

<sup>276</sup> GARCÍA CALDERÓN, Manuel, op. cit., página 285.



#### **Subcapítulo 4: Determinación del ámbito geográfico**

En los años en que se dio la Guerra con Chile, la organización política del Perú era, en términos generales, la misma que nos rige actualmente con la división en departamentos, provincias y distritos. Evidentemente el número de distritos que conformaban la provincia de Lima eran menores que el número actual y los límites de los mismos, salvo raras excepciones, tampoco coinciden.

En aquellos años eran doce los distritos en los que se subdividía la provincia de Lima: Ancón, Ate, Barranco, Carabayllo, Chorrillos, Lima, Lurigancho, Lurín, Magdalena, Miraflores, Pachacamac y Surco. El puerto del Callao ya gozaba del estatus de “provincia constitucional” por lo que conformaba otra unidad territorial de orden político a pesar que la historia y el desarrollo de ambas localidades siempre han estado íntimamente ligados.

En un documento denominado “Teatro de las Operaciones del Ejército Chileno”, preparado por dicho cuerpo y que contiene una descripción del itinerario que debían recorrer las huestes invasoras desde la bahía de Paracas – donde desembarcaron parte de las tropas – hasta la ciudad capital, se realiza una solvente narración de la situación geográfica y demográfica de Lima. Es un documento extenso rescatado por Pascual Ahumada que contiene principalmente descripciones de orden geográfico del cual podemos destacar los siguientes pasajes:

##### *“PROVINCIA DE LIMA.*

*LÍMITES, SITUACIÓN Y EXTENSIÓN.- La provincia de Lima limita por el Norte con la de Chancay; por el Sur con la de Cañete; por el Este con la de Huarochirí, y por el Oeste con el Océano Pacífico y la provincia constitucional del Callao.*

*La provincia de Lima está situada entre 11°, 40’ a 12°, 20’ de latitud Sur y ocupa una superficie de 5,859 kilómetros.*

*(...)*

*DIVISIÓN Y POBLACIÓN.- La provincia de Lima se divide en 12 distritos:*

<i>Ancón</i>	<i>632 habitantes</i>
<i>Carabayllo</i>	<i>2,816 ”</i>
<i>Lurigancho</i>	<i>1,248 ”</i>
<i>Lima</i>	<i>101,448 ”</i>
<i>Ate</i>	<i>2,477 ”</i>
<i>Magdalena</i>	<i>1,439 ”</i>

Surco	1,980	"
Miraflores	1,107	"
Barranco	894	"
Chorrillos	4,329	"
Pachacamac	1,268	"
Lurín	1,648	"
<i>Población de la provincia: 122,326 habitantes</i> <sup>277</sup> .		

Tomando en cuenta esta descripción de lo que era la provincia de Lima en aquellos años se puede entender que la ocupación chilena, si bien incluyó principalmente el casco urbano de la ciudad y su puerto, también afectó a los demás distritos cercanos a la capital con la excepción de los que fueron destinados a servir como sede del posterior gobierno provisorio.

La naturaleza de esta investigación nos exige limitarla geográficamente a la provincia de Lima cuyos límites, a grandes rasgos, coinciden en la actualidad con los que se estaban señalados en 1881. Así, quedan fuera de esta investigación las fuentes primarias que reproduzcan causas o juicios cuyo desarrollo judicial se llevó a cabo en juzgados ubicados fuera de la provincia de Lima.

Esto implica, por la división política que mencionamos anteriormente, que también lo acaecido en la Provincia Constitucional del Callao estará fuera del análisis que realizaremos.

#### **Subcapítulo 5: La administración de justicia según las fuentes primarias en la etapa anterior a la ocupación: años 1879 y 1880.**

Dentro del intervalo histórico que hemos delimitado, son los años 1879 y 1880 los que cuentan con una mayor cantidad de fuentes primarias disponibles. Esto grafica que, a pesar del desarrollo de la guerra en el extremo sur del país, la ciudad de Lima mantenía una vida normal que se reflejaba en la existencia de conflictos intersubjetivos entre sus ciudadanos lo que, a pesar de la paradoja, mostraba una situación saludable de la sociedad. En efecto, una sociedad saludable siempre va a generar conflictos y el hecho de que un gran número de estos se ventilen dentro de los cánones establecidos por la ley grafica dicha cualidad. Situación inversa se generaría si la sociedad no generase conflictos que se ventilen en los tribunales ya que ello podría deberse o bien

<sup>277</sup> AHUMADA MORENO, Pascual. *Guerra del Pacífico. Tomo IV*. Santiago de Chile: Andrés Bello, reimpresión 1982. Página 309 y siguientes.

porque la sociedad sucumbió a la autotutela o bien porque el órgano jurisdiccional no ofrece mayores garantías ni despierta la confianza de los pobladores.

De la búsqueda en el Archivo General de la Nación, correspondientes al año 1879 hemos encontrado 171 expedientes judiciales de orden civil. La distribución temporal de estos expedientes no resulta homogénea ya que casi la totalidad de los mismos pertenecen a los dos primeros meses del año. Así, tenemos un total de 66 expedientes iniciados durante el mes de enero de 1879 y 71 expedientes iniciados durante el mes de febrero. Los 34 expedientes restantes se reparten entre los meses de marzo (8), abril (9), mayo (7), junio (2), julio (1), agosto (1), septiembre (2), octubre (2), noviembre (1) y diciembre (1). Esta concentración temporal no puede servirnos como indicio para afirmar una progresiva disminución en el número de casos conocidos por el Poder Judicial. Por el contrario, más bien sería una muestra del fenómeno que comentamos al principio del capítulo y que consiste en la existencia de una gran cifra oscura de expedientes no indexados ni accedidos.

De estos 171 expedientes civiles consultados en la presente investigación un buen número corresponden a procesos de obligación de dar suma de dinero (65) y sobre la propiedad y posesión de fincas y cosas (38). El resto se divide entre diversos trámites como inspecciones oculares, custodia de menores, temas de quiebra, reconocimientos de documentos, reclamos de herencia, rendición de cuentas y otros temas civiles.

En este análisis, lo que más llamó la atención fue la duración de estos procesos. En la gran mayoría ésta sólo fue de pocos meses. En efecto, sólo 45 juicios tuvieron una duración mayor a los 12 meses entre los que destacan una abrumadora mayoría de juicios sobre obligación de dar suma de dinero (23). Ahora bien, de ese universo de 45 expedientes que tuvieron una duración mayor a un año, sólo 15 se vieron afectados por la guerra y el periodo de ocupación. De esos 15 expedientes cuya duración llegó hasta 1881 nuevamente la mayoría (10) son acciones sobre obligación de dar suma de dinero. Asimismo, de aquellos 15 expedientes afectados por la guerra, 13 son sufrieron, durante el periodo de ocupación, una total paralización en su tramitación siendo que sólo 2 llegaron a ser tramitados por el juzgado de letras instaurado a fines de 1881 por el gobierno invasor.

El primero de ellos es un juicio de desahucio iniciado en enero de 1879 entre las señoras Elena Varela viuda de Bernales y Elena Laos viuda de La Puente. El

expediente que se quedó sin actividad desde 1880 fue reactivado en 1882 ante el despacho del Juez de Letras y ese mismo año fue resuelto. El segundo expediente es juicio de cobro del valor de unas hipotecas impulsado por un señor Schroda en contra del señor Nicanor Álvarez Calderón. El expediente se inició en junio de 1879 y en 1880 dejó de tener movimiento. En 1882 es retomado ante el Juzgado de Letras quien derivó la resolución del juicio ante un juez compromisario conforme a las normas establecidas por las autoridades invasoras.

Sobre este mismo año 1879, se tuvo acceso a sólo 2 expedientes de índole criminal correspondientes a los meses de noviembre y diciembre respectivamente. Ambos expedientes culminaron en el mes de mayo de 1880 por lo que es poco lo que pueden aportar al análisis que nos ocupa.

Correspondientes al año 1880, por su parte, se encontraron 126 expedientes judiciales de orden civil. A diferencia de los expedientes del año 1879 la distribución de éstos resulta más homogénea a lo largo del año con una predominancia en el mes de enero y, en menor proporción, los meses de abril, mayo y junio aunque sin llegar a diferencias proporcionales similares al año anterior. Así tenemos 31 expedientes iniciados en el mes de enero, 8 iniciados en el mes de febrero, 5 en marzo, 18 en abril, 20 en mayo, 26 en junio, 9 en julio, 6 en agosto, 2 en septiembre y 1 en noviembre.

Asimismo, considerando la materia, se puede apreciar que los juicios por pago de dinero constituyen nuevamente la mayoría siendo 49 de los 126 los referidos a ese tenor. Le siguen los juicios relativos a bienes y propiedades (34) y muy lejano los juicios de temas testamentarios (10). El resto de los juicios se divide entre temas de concurso de acreedores, indemnización de daños, alimentos, temas contractuales y otras actuaciones judiciales.

Ahora bien, toda vez que en el capítulo anterior hemos visto que el 24 de diciembre de 1880 se produjo la clausura solemne del despacho judicial y que éste no se reabrió hasta octubre de 1883, podemos entender que todos aquellos procesos iniciados en 1880 y que no terminaron hasta antes del 24 de diciembre de 1880 se han visto afectados por el periodo de la ocupación. Esta situación se hace concreta cuando apreciamos que de los 126 expedientes revisados, sólo 41 expedientes terminaron antes del 24 de diciembre y 85 son los que se vieron afectados por la ocupación. El dato más importante es que entre estos 85 expedientes, cinco de ellos tuvieron algún

tipo de tramitación durante el periodo de la ocupación tal como veremos más adelante. conclusiones a las que arribamos en el capítulo anterior, donde nos limitamos a apreciar únicamente la actuación del Poder Judicial como institución, obtienen una confirmación

Tanto estos expedientes como los 15 anteriores que rescatamos de los iniciados en el año 1879 son los que nos van a servir para apreciar los efectos que la ocupación chilena tuvo en la tramitación de los expedientes.

También dentro del año 1880, en el orden criminal, se tuvo acceso a 48 expedientes. Estos expedientes muestran una distribución más homogénea a lo largo del año y sólo 28 son juicios que culminaron antes de la clausura del despacho judicial. Entre estos últimos se incluye el juicio sobre robo seguido contra el señor Melitón Salcedo cuya última actuación se dio precisamente el día de clausura, 24 de diciembre de 1880.

De los 20 juicios que se vieron afectados por la ocupación de la ciudad la mayoría (12) tuvieron su última actuación en el mes de diciembre siendo que el resto se distribuye entre los meses de septiembre (3), noviembre (2), agosto (2) y julio (1). Un detalle a tener presente es que de estos 20 expedientes, cinco recibieron sentencia antes del cierre del despacho el 24 de diciembre de 1880. Sin embargo, a pesar de haber sido sentenciados, fueron reactivados posteriormente para ser enviados al archivo.

En efecto, la mayoría de esos 20 expedientes se reactivó en los años de 1889 (6) y 1890 (5). Los demás se dividen entre los años 1883, 1884 y 1885 (2 cada uno) y 1886, 1892 y 1902 (1 cada uno) siendo que en casi todos los casos el expediente se reactivaba tan sólo para mandarlo al archivo incluyendo los cinco expedientes que mencionamos en el párrafo anterior que habían sido sentenciado antes del cierre del despacho. Este dato nos permite deducir que esas acciones penales en particular ya no se ejercieron luego de la ocupación. En efecto, de los 20 expedientes que nos ocupan, un total de 12 expedientes sólo tuvieron, al reiniciarse, la actuación necesaria para disponer su envío al archivo incluyendo los cinco ya sentenciados.

De los ocho expedientes restantes, en tres se intentó reactivar el proceso. Uno de ellos en el año 1883 y los dos restantes en el año 1885 pero ese acto no logró que los juicios se reactiven con lo que fueron enviados al archivo. Sólo en los cinco casos



restantes se logró reanudar el juicio. Dos de ellos se reanudaron en 1884, uno en 1886 y otros dos en 1890 y 1902 respectivamente.

De estos juicios que se llegaron a reanudar llaman la atención dos casos: el reanudado en 1886 relativo al juicio por robo que se siguió contra Pablo y Mariano Toledo Agustín que se mantuvo en trámite hasta 1896; y el reanudado en 1902 relativo al juicio por robo que se siguió contra los señores Domingo Bras, Alfredo Ponce, José Andrade y Natalia Pereira y que se mantuvo en trámite hasta noviembre de ese mismo año. En ambos casos hubo escritos presentados en 1881 que, como era previsible, no recibieron ningún proveído. En todo caso, el hecho de que esos escritos presentados en 1881 hayan sido adheridos posteriormente al expediente permite entender que estos escritos fueron recibidos por alguna persona que, sin poder realizar ninguna actividad con los mismos, por lo menos los custodió hasta que pudieran ser adheridos al expediente.

De la apreciación conjunta de todos estos expedientes, podemos observar que desde el 24 de diciembre de 1880 hasta el mes de diciembre de 1883, cuando las tropas chilenas ya habían abandonado la ciudad y los servicios judiciales se habían reanudado, no hubo ninguna actuación.

Debemos señalar, sin embargo, que debido a la “cifra oscura” de expedientes que mencionamos anteriormente en este subcapítulo, las cantidades citadas – así como las inferencias que se pueden realizar en función de ellas – deben ser tomadas únicamente como referenciales. La situación descrita hace que la muestra accedida, a pesar de haber agotado todas las fuentes disponibles, no pueda ser utilizada para hacernos una idea de la real magnitud y forma en que la justicia se administraba caso por caso. Sin embargo, eso no merma la valía que sí tienen para confirmar que efectivamente durante la ocupación chilena de la ciudad capital hubo una paralización total de todos los servicios judiciales de la ciudad. Lo importante no es el contenido sustantivo de cada caso sino más bien las fechas límites de las actuaciones procesales en donde se puede apreciar que, durante el periodo ya delimitado, no existieron actuaciones procesales.

En ese sentido, la existencia de expedientes que sí se han visto afectados por la ocupación es un dato útil así éstos no terminen representando una muestra estadísticamente correcta como para hacer una progresión con miras a abarcar el

íntegro de expedientes que se debieron tramitar en aquellos días. Su utilidad, entonces, estriba en la posibilidad de poder ver en ellos la confirmación de las conclusiones a las que arribamos en el capítulo anterior, donde nos limitamos a apreciar únicamente la actuación del Poder Judicial como institución.

Son esos 120 expedientes afectados, 15 de 1879 y 105 de 1880 entre civiles (85) y penales (20), los que constituyen el principal activo de esta investigación y son los que, conjuntamente con los que iremos mencionando en los subcapítulos siguientes nos van a servir para poder contrastar las conclusiones del capítulo anterior .

Ahora bien, la pregunta es ¿qué es lo que se aprecia de esos 120 expedientes?

#### a. La suspensión de actividades.

De los 120 expedientes analizados, todos fueron dejando de tener actividad con anterioridad al día 24 de diciembre de 1880. En tres casos se aprecian paralizaciones incluso desde el año 79 pero esas paralizaciones, de la revisión de los expedientes, parecen deberse más a razones de índole procedimental, dentro de los márgenes razonables en los que se tramita un proceso civil en el que el cumplimiento de los términos judiciales termina prolongándose como suele suceder inclusive en la actualidad. Nos referimos a los juicios civiles seguidos entre el señor Santiago Roggero contra los herederos del señor Juan Falco por cancelación de documento, entre el señor Santiago Roca y el señor Andrés Raffo por obligación de pago de soles y el juicio solicitando copia de los títulos de la “Hacienda Esmuche” situada en Cajamarca presentado por el señor Andrés Silva Santisteban contra el mismo juez de primera instancia.

Igual situación, aunque sin cotas de peculiaridad, se observa en los expedientes que fueron dejando de tener actividad en el año 1880. Siendo la regla que aquellos que dejaron de tener actividad en fechas más tempranas (enero o febrero de 1880) corresponden a situaciones en las que se ordena, al igual que los casos ya citados, el cumplimiento de procedimientos y que, aquellos que se suspendieron en fechas más tardías (meses de octubre o noviembre de ese año), incluyen también escritos sin proveer o resoluciones pendientes de notificarse.

La fecha más extrema de actuación previa a la clausura solemne del despacho judicial es el mismo día 24 de diciembre de 1880. Así, por ejemplo, tenemos el juicio por concurso voluntario presentado por los señores E.F. Wreghtk y de los señores Ibboltsini brothers y Company limited iniciado en mayo y cuya última actuación antes de la ocupación fue precisamente el 24 de diciembre de ese año; el juicio por pago de cantidad de soles entre el señor José María García y el señor Guillermo Raineri iniciado en abril de 1880; el juicio por traslado de depósito entre el señor Augusto Cavada y la señora Rosa Toledo viuda de Ventura iniciado en mayo de 1880; y el juicio por pago de cantidad de soles entre la señora Enriqueta Heudebert y el señor Guillermo Alzamora iniciado en junio de 1880.

Tenemos, entonces, que de los 120 expedientes iniciados tanto en el año 1879 como 1880 y que se vieron afectados por el periodo de ocupación, todos suspendieron su desarrollo con anterioridad al 24 de diciembre de 1880 o en esa misma fecha como límite. Esta suspensión se fue dando según las actuaciones de cada uno de los expedientes siendo que no se encuentra ningún caso en el que el juez haya emitido resolución suspendiendo el proceso por razones vinculadas a la guerra ni tampoco por otros motivos irregulares. No nos encontramos, entonces, ante un corte intempestivo de labores sino a la paralización pacífica de las mismas como bien podría observarse en cualquier otra situación en la que los tribunales salen de vacaciones.

En efecto, ante esa idea, la situación demuestra una correspondencia absoluta. Si la idea hubiera sido que los servicios judiciales iban a cerrar o clausurarse en una fecha definida podría haberse observado en el trámite de los procesos indicios que dieran a entender que por lo menos algunos litigantes pusieron mayor interés e impulso en acelerar sus procesos antes de dicha fecha. Por el contrario, la apreciación conjunta de todos estos expedientes nos da la idea de que no hubo tal frenesí por lo que, a la vista de los litigantes, lo que se avecinaba no era una suspensión por un periodo indeterminado sino el simple inicio de las acostumbradas vacaciones judiciales aunque, claro, por un tiempo mayor al de antes gracias a la regulación especial que en 1979 había expedido Nicolás de Piérola<sup>278</sup>.

Anteriormente en este capítulo habíamos comentado que no era una idea descabellada el pensar que la sociedad limeña pudiera entender que la clausura del

---

<sup>278</sup> Regulación a la que hacemos mención en extenso en el subcapítulo 9 del capítulo primero de esta investigación.

despacho judicial correspondiente al año 1880 revestía una especial significación por la cercanía del enemigo y la inminencia de las batallas de defensa de la ciudad. Sin embargo, aún en el caso que dicha sensación sea real ello no terminó reflejándose en la conducta procesal de los litigantes y letrados ni tampoco en la actividad realizada por los jueces.

#### b. El reinicio de actividades.

De la misma manera como la suspensión de actividades no fue simultánea, el reinicio de actividades también se fue dando paulatinamente y de acuerdo al estado en que cada expediente se encontraba. No fue raro, sin embargo, ver escritos solicitando la reactivación del expediente desde el mismo mes de octubre de 1883 hasta incluso años después. Tampoco fue extraño ver solicitudes en la que se pedía la continuación de los procesos pero entendiéndose a los sucesores de los litigantes originales y uno no puede menos que imaginar, ante la falta de indicación pertinente en los expedientes, si ello se debe al efecto del paso del tiempo o si no estaremos ante un juicio iniciado por algún ciudadano que fue, además, un héroe en la defensa de la ciudad.

Lo cierto es que, de los 120 expedientes analizados, el primero que se reactivó en el ámbito civil fue el juicio de pago de cantidad de dinero iniciado por el señor Francisco García contra el señor Hilario Zavaleta y que dejó de tener movimiento el 27 de noviembre de 1880. Este expediente fue el presentó el primer movimiento de reactivación correspondiente al día 30 de octubre de 1883, es decir, al día siguiente de la fecha en que la Corte Suprema dispuso la reapertura de los tribunales.

En el campo penal tenemos dos expedientes que fueron reactivados en 1883: el juicio por robo seguido contra el señor Manuel Morfino y el juicio por robo seguido contra los señores Angel Bornocini y Antonio Romaní. Ambos fueron reactivados en diciembre de 1883 pero sólo para ser enviados directamente al archivo.

El proceso de reactivación de los procesos se muestra entonces como un proceso de larga duración siendo que algunos de ellos no lo hicieron hasta los años 1900. Así, tenemos el juicio por pago de dinero por el señor Juan Francisco Araujo contra la Dirección de Beneficencia de Lima cuya última actuación fue el 8 de mayo de 1880 y mostró mayor movimiento sino hasta el 30 de abril de 1900. Exactamente la misma

situación se encuentra en el juicio por despojo seguido entre Juan Estupuma contra Liberato Cagua que desde el 7 de mayo de 1880 no volvió a tener movimiento sino hasta el mismo día 30 de abril de 1900.

En el campo penal también encontramos una fecha extrema en el expediente relativo al juicio por robo que se siguió contra los señores Domingo Bras, Alfredo Ponce, José Andrade y Natalia Pereira que ya mencionamos anteriormente y que recién tuvo movimiento en el año 1902.

Por lo demás, en el campo civil se puede apreciar que la mayoría de expedientes se reiniciaron a lo largo de los años 1884 y 1885. En el campo penal, sin embargo, el grueso de expedientes que se reactivan se da en los años 1889 y 1890 lo que muestra que, a pesar de formar parte de la misma institución – El Poder Judicial – las ramas civil y criminal siempre se manejaron de distinta manera debido a las diferencias esenciales que mantienen.

### c. La actuación intermedia.

Sin embargo, lo más interesante lo constituyen los cinco expedientes civiles, de los 120 analizados, que sí tuvieron movimiento durante la ocupación de Lima. Los cinco expedientes constituyen una situación extraordinaria dentro de este universo y los trámites que se condujeron fueron hechos ante el “juez de letras” o “juez letrado” del sistema paralelo de administración de justicia establecido por el militar chileno Patricio Lynch<sup>279</sup>.

El primer caso es el juicio por obligación dineraria impulsado entre el Banco Territorial Hipotecario y el señor Hipólito Mata Calinares. El Banco Territorial Hipotecario era un banco que, según lo que rescata Margarita Guerra, estaba en el Perú como sucursal de una entidad financiera del exterior<sup>280</sup> y debido a su participación como provisor de fondos de guerra al Estado Peruano en 1879, pasa momentos difíciles en 1881 y 1882 cuando tiene que optar una estrategia de lograr el cobro de sus acreencias<sup>281</sup>. Sin embargo, el expediente no tiene mayor detalle y consta sólo de seis folios siendo poco

<sup>279</sup> Este sistema de administración de justicia es explicado en el subcapítulo 5 del capítulo segundo del presente trabajo.

<sup>280</sup> GUERRA MARTINIERE, Margarita. *La Ocupación de Lima (1881-1883) Aspectos Económicos*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1996. Página 92.

<sup>281</sup> *Ibíd.*, página 94-95.



lo que llega a ofrecer salvo la participación del Emilio Lavín, funcionario chileno nombrado juez de letras de la ciudad de Lima por Patricio Lynch.

El segundo expediente corresponde a un juicio por desahucio iniciado por Manuel Isarnátegui contra Mariano Laos. El expediente fue iniciado el 20 de marzo de 1880 y su última acción antes de la ocupación fue el 13 de diciembre de 1880 cuando se corrió traslado de una petición. Se presentó un escrito el 20 de noviembre de 1882 ante el juzgado de letras por parte Mariano Laos. El expediente no recibió mayor movimiento hasta el 20 de noviembre de 1884 cuando, finalizada la ocupación, continuó su trámite.

El tercer expediente es un juicio de pago de dinero impulsado por el señor Juan Gildemeister y compañía contra el señor Guillermo Sheel. Iniciado el 13 de abril de 1880, la presentación de esa demanda fue el último acto antes de la ocupación. El trámite fue retomado en 1882 ante el despacho del juez de letras y durante el año 1883 frente a un juez árbitro que cumplió con tramitar la causa conforme al derecho nacional. El último movimiento del expediente corresponde al 23 de agosto de 1883.

El cuarto expediente es el que mayor movimiento muestra dentro del juzgado de letras. Es un juicio por pago de soles iniciado el 3 de junio de 1880 por el señor Juan Avilés contra Nicanor Tongsson. El proceso se lleva con total normalidad hasta el 4 de septiembre, fecha de su última actuación previa al inicio de la ocupación. El expediente empieza a tener movimiento desde el 31 de diciembre de 1881 impulsado por el Juez de Letras continuando su trámite durante todo el año 1882 de conformidad con las competencias que le había establecido la autoridad invasora según el decreto del 6 de noviembre de 1881<sup>282</sup> y que establecían que todas las acciones relativas a temas posesorios serían conocidas directamente por él. El trámite del expediente culminó el 20 de octubre de 1882.

El quinto proceso es también un juicio de obligación de pago de dinero iniciado el 14 de junio de 1880 por el señor Juan Manuel Zubaga contra el señor Miguel Potalde. Habiendo dejado de tramitarse el 29 de octubre de 1880, el 27 de junio también incluyó la presentación de un escrito ante el juez de letras. El expediente no experimentó movimiento sino hasta el año 1884.

---

<sup>282</sup> AHUMADA MORENO, Pascual. *Guerra del Pacífico. Tomo VI*. Santiago de Chile: Andrés Bello, reimpresión 1982. Páginas 352-356.

Tenemos entonces que de estos cinco expedientes, uno se tramitó directamente por el juzgado de letras, otro se tramitó ante un juez árbitro bajo el régimen establecido por la autoridad chilena y los tres restantes intentaron recibir la atención de parte de esa oficina sin éxito. Un detalle que podemos apreciar del examen conjunto de estos expedientes es que aquellos que sí tuvieron movimiento ante el juez de letras son los que tuvieron muy poca actividad antes de ser presentados ante ese despacho. Según la regulación del “Poder Judicial de la ocupación”, contenida en el decreto del 6 de noviembre del 1881 que analizamos en el capítulo anterior, este sistema estaba pensado para que se ventilen los juicios nuevos y no tantos aquellos que se encontraban en trámite. Esa es una razón que deductivamente podemos postular para explicar el hecho de que los juicios de los señores Gildemeister y Avilés, que llegaron al juzgado de letras prácticamente para iniciar la tramitación de la causa, fueron efectivamente atendidos mientras que los restantes, que ya habían recibido trámite por parte de los jueces ordinarios, no fueron atendidos por las autoridades chilenas que dirigían la organización paralela creada por Patricio Lynch.

**Subcapítulo 6: La administración de justicia según las fuentes primarias al inicio de la ocupación: año 1881.**

Tal como era previsible y, a diferencia del panorama observado en los años anteriores, el año 1881 tiene muy pocos expedientes. A pesar que el número de expedientes que encontramos supera a los que señalaba el rol del Archivo Republicano, la cantidad no deja de ser diminuta aunque su misma apreciación nos permite deducir algunas cosas interesantes. En el área civil, se pudieron acceder a nueve expedientes y en el área criminal sólo tres.

Ahora bien, según lo ya desarrollado en el capítulo anterior, sabemos que el año de 1881 fue el año más álgido en lo que se refiere a la paralización del Poder Judicial, siendo que, hasta el establecimiento del “Poder Judicial de la ocupación” en noviembre de ese año, no existió en Lima ningún organismo que se encargara con regularidad de la tramitación de expedientes judiciales.

De los expedientes civiles se pueden apreciar que durante los primeros meses de este año no hubo ninguna articulación. Por el contrario es recién a partir de agosto que se empiezan a advertir algunos movimientos. Vemos expedientes cuyo primer escrito fue

presentado en los meses de agosto (2), septiembre y octubre (1 cada uno) aunque no se puede obtener el dato de qué dependencia lo recibió.

Estos cuatro expedientes aparentemente iniciados antes de la instalación el “Poder Judicial de la ocupación” terminaron siendo, al igual que los cinco restantes que fueron iniciados en el mes de diciembre una vez que dicha organización ya se había instalado, tramitados por el juez de letras. Se constituyen, conjuntamente con los mencionados al final del subcapítulo anterior, en la concretización de la figura del juez de letras creado por la autoridad invasora y muestran una labor que se prolonga en el tiempo. En efecto, de estos nueve expedientes iniciados en 1881 y tramitados a finales de ese año por el juzgado de letras, seis culminaron en 1882 y uno en julio de 1883 por lo que se entiende que toda su tramitación se dio ante ese órgano. Los dos restantes culminaron en 1884 y 1888 demostrando que el trámite iniciado ante el juzgado de letras fue posteriormente recibido y continuado por parte de los jueces regulares una vez que se reanudaron las labores del Poder Judicial peruano.

Finalmente, sobre estos expedientes, se debe hacer la anotación que todos ellos corresponden a temas de índole comercial.

La situación en el área criminal también resulta ilustrativa a pesar que sólo se basa en tres expedientes. El primero de ellos correspondiente al juicio por abuso de autoridad seguido contra el señor Juan Tordillo aparece como iniciado en el mes de febrero de 1881. Esta temprana fecha resultaría contradictoria con los hechos narrados hasta el momento por lo que podríamos entender que formaría parte de aquel conjunto de pedidos de tutela judicial que las autoridades chilenas manifestaban haber recibido y no atendido. Ello se puede apreciar del hecho de que ese escrito no recibió ningún tipo de articulación ni dio lugar a actividad alguna durante largo tiempo. Recién obtuvo su tramitación dos años después, a partir del 24 de febrero de 1883 cuando Patricio Lynch ya había instalado los juzgados del crimen que formaban parte del “Poder Judicial de la ocupación”.

Similar situación se repite en el segundo expediente correspondiente al juicio seguido contra el señor Luis Rocca sobre estafa. El escrito inicial está fechado el 7 de septiembre de 1881 pero el grueso de su tramitación corresponde al año 1882 cuando ya estaba instalado el juzgado de letras que en un inicio también conocía de faltas y delitos conforme vimos en el capítulo anterior.

El tercer expediente sí fue tramitado completamente ante el juzgado de letras y corresponde al juicio sobre heridas que se siguió contra los señores Pablo Ramos y Vicente Montoya. Este proceso fue iniciado en diciembre de 1881, con el juzgado de letras ya instalado, y culminó en mayo de 1882.

Ahora bien, tomando en cuenta estos 12 expedientes iniciados en 1881, ¿qué podemos dejar en claro?

El principal dato que salta a la vista es la reducción casi absoluta de actividad en comparación con el panorama que se observa en los años anteriores. Es cierto que existe una situación real constituida por la existencia de la mencionada “cifra oscura” y que podría llevarnos a argumentar con cierta base que la reducción de actividad no es tal sino que estamos ante una situación en la que los expedientes correspondientes a este año simplemente no se encontraron y se mantuvieron dentro de la cifra oscura.

Nosotros creemos que eso no es así. Ello porque la cifra oscura se ha presentado como un fenómeno que afecta a todos los años en mayor o menor medida. En ese sentido así como podemos afirmar que todos los expedientes civiles tramitados en 1879 exceden los 171 a que pudimos acceder, es casi seguro que los expedientes civiles correspondientes al año 1881 también exceden los 9 que hemos tenido a la vista. Pero creemos que el efecto de la cifra oscura nos genera una situación en la que debemos entender las cosas con proporcionalidad. Y dentro de esa proporcionalidad es innegable que se aprecia una sensible reducción entre ambos años.

Además, esa situación de reducción de la actividad jurisdiccional se condice con la situación histórica que hemos analizado en el capítulo anterior. El año 1881 fue el año más accidentado de los casi tres que duró la ocupación y ello se debió precisamente a las situaciones de incertidumbre y acomodo que se dieron. Los años 1882 y 1883, en los que la autoridad chilena ya había establecido un “statu quo” propio, se desarrollaron con mayor estabilidad.

Consideramos que es el papel que jugó el juzgado de letras lo que explica que recién en el último mes de ese año se aprecie una suerte de “despertar” de los servicios judiciales. En este punto debemos refrescar un hecho evidente y es que los servicios jurisdiccionales no sólo tienen un aspecto público en el sentido que permite que el

estado afiance su poder mediante el ejercicio legítimo de uno de los poderes que le reconoce su condición de soberano sino que también tienen un importantísimo aspecto privado en el que termina constituyéndose como respuesta a una demanda real por parte de la población. Son los mismos ciudadanos que, ante la lógica existencia de conflictos de intereses entre ellos, requieren un servicio jurisdiccional que les permita obtener la tutela que esperan. Un largo periodo de ausencia de ese servicio jurisdiccional previsiblemente va a motivar una alta demanda en su reanudación.

No obstante, en ese año 1881, la demanda generada ante la instalación del “Poder Judicial de la ocupación” no alcanzó ni remotamente los márgenes apreciados en los años 1879 y 1880 aunque, como dato para mejor juzgar esa situación, debemos reconocer que ni siquiera en los años 1882 y 1883 se alcanzaron esos números.

**Subcapítulo 7: La administración de justicia según las fuentes primarias durante la ocupación: años 1882 y 1883.**

Correspondientes al año 1882 se pudieron acceder a 35 expedientes de índole civil y 32 expedientes de índole criminal. Tal como resulta evidente a estas alturas ninguno de esos expedientes se llegó a tramitar ante dependencias u órganos del Poder Judicial Peruano. En ese sentido, ya no resulta sorprendente el hecho de que todos aquellos hayan recibido su tramitación ante el juzgado de letras y, en el caso de los criminales, a partir de mayo de 1882, por parte del juzgado del crimen que también formó parte de la organización creada por Patricio Lynch.

El único detalle adicional que se debe apreciar en el caso de los civiles son tres expedientes cuyo trámite fue realizado no ante el juez de letras sino ante un juez de paz. Nos referimos al juicio por cobro de soles seguido entre la señora Modesta Basadre y el señor Juan Castro Ozzetti, el juicio también por cobro de soles seguido entre el señor Manuel Rotalde y la señora Genara viuda de Wedell, y el juicio sobre rescisión de contrato entre el señor José Navarro y el señor Luis Rousse. Sin embargo, esta situación no marca un hecho desconocido ya que, tal como hemos visto en el capítulo anterior, la organización establecida por la autoridad chilena también estaba conformada por juzgados de paz.



En estos casos nuevamente se aprecia el efecto de la “cifra oscura” ya que la distribución de los expedientes no resulta homogénea. Así, en el campo civil, tenemos 19 expedientes iniciados en el mes de enero de 1882, 13 en febrero, 4 en marzo, 1 en abril y otro en agosto. En el campo criminal la situación se muestra mucho más homogénea aunque concentrada principalmente en los meses de agosto (7 expedientes) y septiembre (6), dejando atrás a julio (5), junio (4), octubre (3), enero (2), y febrero, marzo, abril, mayo y noviembre con 1 solo expediente cada uno.

Correspondiente al año 1883 el panorama es similar. En el campo civil se tuvo acceso a 42 expedientes y en el campo criminal a 37. Todos estos expedientes fueron iniciados en su trámite ante el respectivo órgano judicial de la organización establecida por los invasores. En el caso de los civiles, sólo uno fue conocido por un juzgado de paz.

Ahora bien, tal como ya hemos comentado anteriormente, 1883 es el año en el que también se da la reinstauración de los servicios judiciales por parte del Poder Judicial peruano debido a la desocupación de la ciudad capital. Ello quiere decir que entre los expedientes iniciados de este año podíamos anticipar que nuevamente podíamos encontrarnos con alguno que haya sido iniciado ante los jueces ordinarios peruanos. En efecto, sólo un juicio iniciado ante al Poder Judicial peruano luego de su reinstauración en octubre de 1883. Nos referimos al juicio sobre unas alhajas seguido entre el señor Francisco Belevan contra la señora María Soto iniciado en diciembre de 1883. Esta situación no se aprecia en el campo criminal en el que los 37 expedientes a que tuvimos acceso corresponden a juicios iniciados con anterioridad a la reactivación del Poder Judicial peruano.

La distribución temporal de los expedientes civiles muestran que, respecto a los civiles, los meses con mayor concentración son marzo (17) y enero (13) siguiéndoles luego febrero (6), abril (2) y junio, julio y septiembre con 1 cada uno además del ya mencionado que se inició en diciembre. Por su parte, los expedientes criminales se concentran principalmente en enero (17) siguiéndole luego febrero (9), marzo (7), abril (3) y mayo con 1 solo expediente. Es decir, estamos ante dos años en los que la cifra oscura de expedientes se puede apreciar con claridad y por ello resulta difícil sacar conclusiones estadísticas definitivas.

Sin embargo, el tema que llama más la atención en base a la apreciación conjunta de estos expedientes no lo constituye su distribución temporal sino el hecho de que los expedientes que demoraron en su tramitación más tiempo del que duró la ocupación de la ciudad de Lima terminaron siendo tramitados y resueltos por el Poder Judicial.

Así, de los 35 expedientes civiles iniciados en 1882 tenemos 14 expedientes cuya duración trascendió al mes de octubre de 1883 cuando terminó formalmente la ocupación Lima y que fueron posteriormente recogidos por el juzgado de Lima quien continuó su tramitación. En el aspecto criminal sólo un expediente tuvo una duración que superó el fin de la ocupación. Esta diferencia de número entre los ámbitos civil y penal confirma otra impresión que nos deja la apreciación conjunta de estos expedientes y que es en la rapidez con que los juicios criminales eran resueltos. En efecto, son raros los casos de expedientes criminales iniciados ante el “Poder Judicial de la ocupación” que tengan una duración mayor de un año y, por el contrario, muchos expedientes constan de pocos folios lo que se debe no tanto a la mala conservación de los expedientes sino también al carácter sumarísimo de los juicios.

En los expedientes correspondientes al año 1883 esta situación se confirma. En el campo civil tenemos 19 expedientes, de 42 accedidos, cuya tramitación trascendió al término de la ocupación. Todos esos expedientes continuaron, a partir de 1884, su tramitación ante el Poder Judicial. En el campo penal, de los 37 expedientes iniciados en 1883, sólo dos trascendieron el fin de la ocupación y su trámite, de la misma manera, continuó a través del respectivo juzgado ordinario.

Estamos, entonces, ante una situación en la que el Poder Judicial peruano, una vez reinstaurado y habiendo reasumido sus funciones no invalidó los actos que había realizado el “Poder Judicial de la ocupación”. No tenemos conocimiento de ninguna manifestación política, legal o administrativa que haya legitimado los actos realizados por el sistema paralelo establecido por la autoridad invasora pero lo cierto y tangible es que la actuación del Poder Judicial terminó legitimándolos de forma tácita ya sea mediante la continuación de los procesos que quedaron en trámite o incluso mediante la simple incorporación de los expedientes ya culminados al archivo del Poder Judicial.

En consecuencia, a octubre de 1883, la tarea del Poder Judicial no sólo se limitaba a retomar aquellos juicios que dejó en trámite a diciembre de 1881 sino también aquellos iniciados durante la ocupación y que se encontraban en trámite. De esa manera no

existió, en octubre de 1883 un corte traumático de los servicios jurisdiccionales sino, más bien, un periodo progresivo de reactivación de los juicios que habían quedado con trámites pendientes.

### **Subcapítulo 8: El funcionamiento del Tribunal Militar Chileno en Lima.**

Tal como señalamos anteriormente, durante esta investigación no se pudo tener acceso al “Libro Mayor del Tribunal Militar Chileno en Lima” en el cual, entendemos, se copiaron las sentencias dictadas por el Tribunal Militar durante la vigencia de la Ley Marcial. Sin embargo, sí pudimos obtener alguna fuente que nos muestre el funcionamiento de este organismo aunque, al ser sólo unos pocos casos particulares, no permite realizar una apreciación conjunta como la que realizamos respecto de los expedientes judiciales.

La obra recopilatoria sobre la Guerra del Pacífico realizada por el autor chileno Patricio Ahumada, que ha servido de fuente en varios pasajes de la presente investigación, incluye dentro de su gran acervo documental cuatro episodios en los que rescata las actas redactadas por el Tribunal Militar de Lima.

#### **a. Juicio por el asesinato de dos soldados chilenos.**

El primer episodio encontrado en la recopilación de Ahumada hace referencia al juicio llevado ante el Tribunal Militar de Lima contra los peruanos Francisco Baizan, Estanislao Otárola, Pedro Salazar, Lorenzo Palacios y Juan Grande por la comisión del asesinato de los soldados chilenos Pedro María Muñoz y José Pérez<sup>283</sup>. Los documentos constan de un sumario en el que se narran con bastante detalle los antecedentes de este hecho ocurrido el día 20 de julio de 1881 en la “plazuela de la Salud” (actual “Plazuela Federico Elguera” ubicada en el Centro de Lima en el cruce de los jirones Quilca y Rufino Torrico con la Avenida Garcilaso de la Vega) de la ciudad de Lima. En este documento se afirma que, ante la orden del General en Jefe (Patricio Lynch), el Tribunal Militar se constituyó al cuartel de policía para realizar las indagaciones pertinentes consistentes en el interrogatorio de los testigos que la policía había detenido al enterarse del hecho.

---

<sup>283</sup> AHUMADA MORENO, Pascual. *Guerra del Pacífico. Tomo V*. Santiago de Chile: Andrés Bello, reimpresión 1982. Páginas 512-515.

Esa es la única diligencia de que se da cuenta y, en base a la misma, se realizó la identificación de las personas acusadas sin que se pudiera ubicar a Baizán y Otárola quienes serían los autores principales del hecho.

Ante este tema, el Tribunal Militar concluye que:

*“... el lugar en que ha sido llevada a cabo la agresión, la hora del suceso, su publicidad, falta de provocación de los agredidos, no haber sido ellos auxiliados o defendidos, el pertenecer los asaltados al ejército chileno y demás circunstancias del caso, constituyen un delito que en el estado actual no sólo hace responsables de él a los que fuesen convictos o confesos como autores sino a todos aquellos contra los cuales haya algún indicio o mera sospecha de culpabilidad, que exija una pronta y eficaz represión y que a la vez sea una garantía de orden y tranquilidad para lo futuro.”<sup>284</sup>*

El principal móvil que sustenta la decisión del Tribunal viene a ser la necesidad de establecer un correctivo a esta situación que los prevenga de que no se vuelva a repetir tomando en cuenta la hostilidad que encuentran en todos los habitantes de la ciudad hacia los miembros del ejército invasor. La decisión es severa: pena de muerte para las dos personas sindicadas como autores principales del asesinato y, respecto de las tres personas sindicadas como participantes del delito, establecer que uno de ellos, designado por sorteo, será también ejecutado. La condena prosigue señalando que, si luego de 48 horas de realizada la primera ejecución, no se presentasen los reos ocultos, se ejecutará a los dos restantes

La decisión del Tribunal Militar suscrita por los oficiales chilenos Fuenzalida, León García, Donoso y autorizada por el secretario Francisco A. Pinto culmina disponiendo la elevación en consulta al General en Jefe.

Luego de este sumario se encuentra una “Adición a la orden de fecha 24 de julio de 1881” que establece que, como la ejecución de estas personas debía hacerse el día 25, establece las instrucciones para dicho acto señalando que a las 7:30 am se reunirán uno de los cuerpos que guarnecen la plaza con su banda de música además de la artillería y la caballería. Estas huestes serán puestas bajo el mando del oficial Samuel Valdivieso, Intendente de Lima, que será quien designe el lugar para la ejecución. Esta adición fue firmada por el oficial Adolfo Silva.

---

<sup>284</sup> Ibíd., página 513.

El tercer documento es la crónica del fusilamiento y narra la marcha de los soldados chilenos desde la calle de San Pedro (actual cuarta cuadra del jirón Ucayali)<sup>285</sup> hasta la “Plazuela de la Salud”, lugar elegido para la ejecución. El reo ejecutado (el documento no señala su nombre) fue sentado en un banco con los ojos vendados mientras que los otros dos que no fueron sorteados estaban también presentes. La ejecución se dio a las 9:15 am por medio de cuatro tiradores. Se afirma que esta ejecución fue presenciada por muchas personas “*de toda nacionalidad*”.

El cuarto documento es una “Adición a la orden del día 25 de julio de 1881” en la que se incluyen órdenes a los soldados para que, en vista de los hechos ocurridos, eviten cualquier conflicto con los habitantes de las localidades ocupadas, que guarden la compostura fuera de sus cuarteles y que no se separen de los alrededores de los mismos. Reconoce que es muy probable que muchos de los soldados chilenos que se sindicaban como desertores hayan sido, en realidad, asesinados por los pobladores por lo que recomiendan mayor prudencia y tolerancia.

El quinto documento es una nota periodística obtenida del periódico “La Situación” que circuló en Lima el día 28 de julio de 1881. En ella se editorializa sobre la decisión de Patricio Lynch, General en Jefe del ejército invasor, de suspender la ejecución de la pena de los reos Pedro Salazar y Lorenzo Palacios (con lo que se entiende que el ejecutado fue Juan Granda) que debieron ser ejecutados el día 27. Esta decisión se obtuvo gracias a un oficio enviado por varios pobladores que solicitaban la indulgencia para estas personas. Adicionalmente a este documento se da cuenta que varios ciudadanos respetables se presentaron al despacho del General para implorar por la vida de los condenados. Idéntica solicitud se recibió de parte de las colonias francesa, italiana y suiza a la par que muchas otras solicitudes de particulares. Incluso los embajadores de Francia, Inglaterra y España se presentaron en Palacio para interceder por los reos. Culmina señalando que Patricio Lynch aceptó sólo porque los reos eran partícipes y no autores y que con éstos últimos no habría clemencia posible.

Esta nota transcribe los oficios que fueron cursados al General chileno por parte de dos sociedades humanitarias – la Masonería y los Odd Fellows -, los ciudadanos limeños, los ciudadanos suizos, los miembros de la colonia italiana y los ciudadanos franceses.

---

<sup>285</sup> Según la crónica rescatada por Ahumada, la formación del batallón chileno abarcaba desde esa calle San Pedro hasta Capón en la actual séptima cuadra del jirón Ucayali.



El último documento es el oficio enviado por Patricio Lynch al Presidente del Tribunal Militar informándole de las solicitudes que recibió y de su decisión de acceder a ella. Solicitó Lynch que el Presidente del Tribunal adecue este hecho al procedimiento para que no se crea que es otra la razón por la que no se ejecutaron a las mencionadas personas.

#### b. Juicio por el asesinato de cinco soldados chilenos

A diferencia del caso anterior en el que el acto sancionado se cometió en plena ciudad de Lima, en este caso se hace referencia a un acto ocurrido en zona rural, más exactamente en el denominado “Fundo Chavarría” (ubicado en lo que es actualmente el distrito de Los Olivos). Este caso consta en un solo documento denominado “sumario indagatorio” en el que el Tribunal Militar da cuenta de los hechos ocurridos el 31 de agosto de 1881 en el que siete soldados chilenos uniformados y desarmados fueron atacados por parte de trabajadores del mencionado fundo. El sumario identifica a cinco de los siete soldados que fueron quienes fallecieron en el ataque: Apolinario Alegría, José Ignacio Morales, Miguel Huertas, Remigio Jesús Navea, José Manuel Valenzuela. Los dos restantes no son identificados en el sumario.

Los soldados chilenos recibieron un ataque con armas de fuego por parte de Domingo Dávalos, los hermanos Marcelo y Antonio Domingo Acencio, Mauricio Valderrama y Juan Rojas o Acevedo quienes eran trabajadores del fundo. El ataque mató al soldado Alegría e hirió Morales quien fue posteriormente asesinado. Los demás soldados identificados fueron alcanzados por los peruanos y también fueron asesinados salvándose únicamente los dos soldados cuyos nombres no constan en el sumario. Durante estos hechos se habría recibido la ayuda de una trabajadora más de nombre Fila Dávila.

El fundo estaba arrendado por el señor Ramón Azcona, quien a su vez era administrador del Fundo Naranjal (también ubicado en el actual distrito de Los Olivos) y que tenía empleado como administrador del Fundo Chavarría al señor José María Chávez. En el momento del ataque, ambos administradores se encontraban en Naranjal y posteriormente trasladaron el ganado de ese fundo al otro con la finalidad de proteger la fuga de los atacantes y ocultar los cadáveres de los soldados asesinados que fueron decapitados y cremados.

Ante la narración de los hechos, el Tribunal explica sus considerandos entre los que señala que las decisiones del administrador del fundo José María Chávez de no avisar a la autoridad, favorecer la fuga y proceder a ocultar los cadáveres lo hacen “*tanto o más culpable que los mismos autores*”<sup>286</sup>. En la misma lógica, también se concluye la responsabilidad del señor Ramón Azcona toda vez que los hechos se dieron en su hacienda y él es responsable de ellos y además porque dio órdenes y prestó auxilios para la fuga de los responsables. Respecto de Fila Dávila se afirmó que “*cooperó a la perpetración del crimen*”<sup>287</sup> y finalmente reconoce que las personas aludidas no han sido capturadas por lo que las penas que emita el Tribunal serían ilusorias si sólo se refieren a las personas.

Ante estos razonamientos, el Tribunal dispone condenar a muerte a todos los involucrados por el ataque, asesinato y ocultamiento de cinco soldados chilenos con excepción de Fila Dávila. La condena se da “*con condición de oírlos cuando fueren habidos*”<sup>288</sup>. Fila Dávila, por su parte, fue condenada a cinco años de presidio en la Penitenciaría de Lima. Adicionalmente, se ordenó la confiscación de todos los bienes con cargo a dar cuenta al General en Jefe de lo que se obtenga.

La orden firmada por los oficiales E. Del Canto, J. León García y Diego A. Donoso, y autorizada por el secretario Julio Zenteno B. culminó con la orden de elevar a consulta esta sentencia al General en Jefe.

La recopilación de Ahumada no recoge mayores detalles sobre este caso.

### c. Juicio por la publicación de un manifiesto.

El tercer caso recopilado por Ahumada es un caso muy interesante y que tiene aristas que reflejan la actualidad política en la ciudad ocupada. Sin embargo, desde el punto de vista que nos ocupa, el jurisdiccional, también ofrece algunos datos interesantes que merecen ser destacados.

---

<sup>286</sup> AHUMADA MORENO, Pascual. *Guerra del Pacífico. Tomo VI*. Santiago de Chile: Andrés Bello, reimpresión 1982. Página 240.

<sup>287</sup> *Ibíd.*

<sup>288</sup> *Ibíd.*

Los antecedentes de este juicio se inician con el bando de fecha 3 de junio de 1881<sup>289</sup> expedido por el mismo Patricio Lynch. Ese bando prohibía la publicación de libros, periódicos, folletos, hojas sueltas y cualquier otra clase de impresos sin contar con permiso del Cuartel General del ejército invasor.

El hecho es que el 24 de febrero de 1882 se publicó una “Proclama a los Pueblos de la República”<sup>290</sup> mediante la cual se manifestó el apoyo al gobierno del General Lizardo Montero quien fuera vice-presidente del ya entonces desterrado García Calderón. La proclama fue firmada por 21 ciudadanos notables entre los que se encontraban Manuel Atanasio Fuentes, Alejandro Arenas, Felipe Paz Soldán y Manuel de La Coterá.

A los pocos días de firmada esta proclama, el 7 de marzo de 1882, la Jefatura Política de Lima emitió un decreto<sup>291</sup> en el que no sólo se confirmó que el manifiesto “A los pueblos de la República” fue emitido en contravención de lo dispuesto en el bando del 3 de junio de 1881 sino que también se ordenó al comandante de policía a poner a disposición del Tribunal Militar a los 21 ciudadanos firmantes de dicha proclama.

Una semana después, el 14 de marzo de 1882, el Tribunal Militar emitió su resolución final. Destaca el detalle que esta resolución, a diferencia de las otras que repasamos en este subcapítulo, sí cuenta con numeración como expediente. En efecto, la sumilla recogida por Ahumada consigna el texto: “*Expediente número 152 contra don Alejandro Arenas, don M. Felipe Paz Soldán, don M. González de La Coterá y otros por hacer publicaciones sin permiso del Cuartel General*”<sup>292</sup>.

El documento consigna, en sus considerandos, que la versión de los ciudadanos fue imprimir el documento y recolectar firmas de adherentes a lo ahí señalado para, recién solicitar el permiso respectivo ante el General en Jefe. Contra esta indicación, el Tribunal señala que “*no guarda consonancia con la aceptación de la publicidad del impreso, manifestada por su circulación*”.

---

<sup>289</sup> Ibíd., página 236.

<sup>290</sup> Ibíd., páginas 481 - 483.

<sup>291</sup> Ibíd., página 483.

<sup>292</sup> Ibídem.

Ante esta aseveración, el Tribunal condena a los 21 firmantes con una multa de “100 pesos billete fiscal de Chile”. La resolución está firmada por los oficiales D. Fuenzalida, Vicente Ruíz, J. León García y autorizada por el secretario Julio Zenteno B. Otro detalle a tomar en consideración es que, a diferencia de los dos casos anteriores, en éste la sentencia no incluyó la disposición de ser elevada en consulta al General en Jefe.

La recopilación de Ahumada no incluye más documentos referidos a este tema.

#### d. Juicio por perjurio

El último caso referido a la actuación del Tribunal Militar de Lima se refiere a una sentencia expedida el 30 de mayo de 1882 en contra del ciudadano peruano Dionisio Derteano por el delito de perjurio<sup>293</sup>. La recopilación de Ahumada sólo reproduce la resolución final pero, no obstante ello, ésta incluye detalles que ayudan a confirmar también el proceder de los jueces de letras conforme a los decretos que regulaban sus funciones y, sobre todo, confirma un hecho ya comentado en el capítulo anterior. En efecto, según lo señalado anteriormente, el 24 de abril de 1882 se emitió un decreto mediante el cual se creaban los juzgados criminales que iban a formar parte del “Poder Judicial de la ocupación” establecido por Patricio Lynch. En teoría la expedición de ese decreto implicaba que el Tribunal Militar no ejerciera más sus funciones para juzgar a ciudadanos peruanos por faltas o delitos. Esa idea, asimismo, fue ratificada al ser mencionada en varios momentos posteriores. Sin embargo, a pesar de ello, encontramos que más de un mes después de emitido el referido decreto, el Tribunal Militar está enjuiciando a un ciudadano peruano.

Es cierto que pueden haber muchas explicaciones para que esta situación no termine configurando la contradicción que, a primera vista, crea. Argumentos como señalar la existencia de una *vacatio* legis sobre la que no tenemos noticia o argumentar que en este juicio se está accionando por un acto anterior a la entrada en vigencia del mencionado decreto, etc. Lo cierto es que no tenemos elementos para entretener ninguna de esas explicaciones ni para aventurar otras que pudieran resultar, tal vez, más correctas. En ese sentido, tenemos que limitarnos a hacer la advertencia temporal y a señalar que, más de un mes luego de emitido el decreto que creaba los juzgados

---

<sup>293</sup> AHUMADA MORENO, Pascual. *Guerra del Pacífico. Tomo VII*. Santiago de Chile: Andrés Bello, reimpresión 1982. Página 224.

criminales, el Tribunal Militar chileno en Lima seguía enjuiciando ciudadanos peruanos.

Retomando la narración de este caso comentaremos que la resolución del Tribunal Militar señala que, en una fecha indeterminada, Derteano compareció ante el Juez de Letras por un sumario indagatorio orientado a investigar una emisión clandestina de billetes fiscales. En dicha declaración, se consigna escuetamente que Derteano negó bajo juramento un hecho que luego afirmó con lo que se cometió el delito de perjuicio. Con esta simple constatación se resolvió condenar a Dionisio Derteano a dos años de destierro además del pago de una multa de 1000 soles plata que el General en Jefe distribuirá entre los establecimientos de beneficencia de la ciudad.

Esta orden firmada por los oficiales A. Holley, Juan León García, Luis Solo Zaldívar y autorizada por el secretario Julio Zenteno B. tampoco incluye la disposición de ser elevada a consulta al General en Jefe.

#### e. Conclusiones

Resulta muy difícil que, de la apreciación conjunta de estos cuatro casos, se pueda aventurar una conclusión contundente e integral respecto de lo que fue el funcionamiento del Tribunal Militar. No obstante ello, sí podemos hacer uso de un ejercicio inductivo, y poder destacar algunas similitudes con la finalidad de poder establecer algunas características probables que debió tener la labor de ese organismo.

##### *e.1. El razonamiento jurídico*

Lejos de lo que pudiera darnos a entender el subtítulo, la característica que se destaca es más bien la ausencia de un razonamiento jurídico que sustente las decisiones del Tribunal Militar. En efecto, las decisiones del Tribunal Militar responden a una lógica de responsabilidad objetiva y a una severidad que más buscaba escarmentar al mayor número posible de personas que sancionar al responsable de un acto en particular. Aparentemente resulta imposible encontrar algún mínimo de sustento jurídico en aquellos procedimientos que, además de sumarios, demuestran ser bastante arbitrarios.



Ahora bien, en ese sentido es menester tomar en cuenta que, tal como vimos en el primer capítulo, el derecho penal ya tenía varios avances a las fechas de la ocupación y eso se podía corroborar con la misma existencia en esos años de tanto un Código Penal como un Código de Enjuiciamiento en materia Criminal. No podemos, entonces, afirmar que la actuación del Tribunal Militar se dio de esa manera porque aquella fuera la naturaleza del derecho penal en aquellos años. Por el contrario, la naturaleza de sus actuaciones se debió a una decisión política que buscó aplicar la mayor severidad posible en la sanción de conductas que fueran consideradas antijurídicas por parte del ejército invasor sin detenerse a pensar en el basamento jurídico que podría encontrarse para esa decisión.

Esta situación nos podría dar asidero para pensar que la actividad que realizaba el Tribunal Militar en Lima tenía muy poco de jurisdiccional siendo, más bien, sólo uno más de los actos de opresión que la autoridad invasora ejerció sobre la población de la ciudad capital. En ese sentido, tal vez resulte demasiado exigente el pretender la utilización de un razonamiento jurídico por parte de ese órgano y menos aún en las condiciones de abierta guerra que existía en aquellos momentos.

#### *e.2. La ausencia de formalidades.*

Resalta el hecho de que la actuación del Tribunal Militar se reducía a la elaboración de un sumario final en el que narraban los hechos y se señalaba la sanción que el Tribunal decidía aplicar. Ello demostraría una total ausencia de formalidades o de actos prediseñados que permitiesen una uniformidad. Así, mientras en algún caso se menciona que el Tribunal Militar práctico personalmente las indagaciones, en los demás se limitan a hacer recuento de los hechos sin mencionar si el Tribunal participó o no en la investigación.

En todo diera la impresión de que las actuaciones del Tribunal eran decididas en función de cada caso y de la importancia que el mismo pudiera tener para la autoridad invasora. A fin de cuentas, terminamos enfrentándonos a una situación en la que la actuación del Tribunal militar carecía de formalidades predeterminadas.

### *e.3. La participación esencial del General en Jefe.*

La labor del Tribunal, tanto respecto de sus actuaciones en cada caso como en su decisión, se encontraba supeditada a la voluntad final del General en Jefe del ejército invasor. Eso se hace evidente en las resoluciones que se someten directamente a consulta y también en la forma cómo este oficial es quien termina decidiendo si suspende o modifica lo resuelto por el Tribunal. Si bien es cierto que hasta en los sistemas ordinarios de justicia criminal los jefes máximos tenían la prerrogativa de conmutar o dejar sin efecto las penas de muerte, la impresión que deja la observación de estos casos es que no estamos ante un ejercicio regular del derecho de gracia que se le reconoce a los gobernantes sino, más bien, de un sometimiento integral y absoluto a la voluntad del General en Jefe para definir el contenido y el cumplimiento de las resoluciones.

### **Subcapítulo 9: Conclusiones preliminares.**

Primera.- La finalidad original de este capítulo era obtener, mediante la utilización de un razonamiento inductivo y teniendo como base la apreciación de, cuando menos, una muestra representativa de los casos judiciales que se tramitaron en aquella época, una conclusión completa y clara del respecto a cómo fue el papel del Poder Judicial y de la Administración de Justicia durante el periodo de ocupación.

Sin embargo, las dificultades que se encontraron durante el desarrollo de la investigación hicieron que resulte materialmente imposible cumplir dicho objetivo siendo que, si se hubiera porfiado en el mismo, habríamos corrido el riesgo de llegar a conclusiones que adolecían de una gran posibilidad de no ser ciertas.

En ese sentido, se tuvo que abandonar ese objetivo principal y nos tuvimos que limitar a buscar, de la observación de los casos a los que pudimos acceder, una confirmación de las conclusiones a que habíamos arribado en el capítulo anterior.

Segunda.- De la apreciación conjunta de los expedientes judiciales, se confirma que existió un corte efectivo de los servicios de administración de justicia por parte de los tribunales peruanos el día de la clausura solemne del Despacho Judicial realizado el 24 de diciembre de 1880. Sin embargo, a pesar del clima bélico que ya se respiraba en la ciudad en aquel día, las actividades judiciales no mostraron un aumento inusual

en las semanas anteriores. No se apreciaba una actividad de los litigantes en el sentido de buscar apurar la finalización de sus juicios como sería razonable si estuviéramos en una situación en la que se sabría que la administración de justicia no estaría disponible durante casi tres años. Esto da pie a pensar que dicho acto de clausura fue realizado y percibido como un acto normal y de rutina más allá de la presencia del ejército invasor en los territorios al sur de la ciudad capital.

Tercera.- Desde la fecha de su clausura solemne, el Poder Judicial peruano efectivamente no volvió a realizar ningún acto jurisdiccional sino hasta luego de superada la ocupación en el mes de octubre de 1883. Suman entonces dos años, diez meses y cinco días en los que el Poder Judicial en Lima no sólo no tramitó los juicios a su cargo sino que tampoco admitió demandas o denuncias nuevas.

Esta situación confirma la conclusión obtenida en el capítulo anterior en donde pudimos observar que los jueces de la ciudad de Lima se plegaron a la decisión de las autoridades supremas del Poder Judicial de no realizar ninguna actividad jurisdiccional hasta el fin de la ocupación.

Cuarta.- Desde la clausura solemne del Despacho Judicial hasta la instauración del “Poder Judicial de la ocupación” (periodo desde enero hasta noviembre de 1881) no se dieron actuaciones jurisdiccionales y prácticamente no hubo administración de justicia ordinaria en la ciudad de Lima.

La única excepción a esa situación la constituye el Tribunal Militar que, según los bandos que lo instituyeron, conoció tanto de faltas y delitos como de algunos temas civiles menores. No obstante ello, la observación de algunos casos particulares nos da pie a entretener la idea de que la actividad realizada por este Tribunal no tenía tintes de una real actividad jurisdiccional. Por el contrario, la aparente falta de un procedimiento estandarizado, la ausencia de una argumentación basada en derecho que sustente sus decisiones y la fuerte sujeción a la voluntad del General en Jefe del ejército invasor, muestran que su actividad encajaría más en una nueva expresión del sometimiento a que se encontraba sujeta la ciudad de Lima y su población que a un real ejercicio de una administración de justicia.

Quinta.- Si bien según los bandos y decretos emitidos por la autoridad invasora se señaló que el Tribunal Militar dejó de juzgar peruanos a partir del mes de abril de 1882

por cuanto dicha función pasó a ser competencia de los Juzgados del Crimen creados especialmente, lo cierto es que tenemos constancia que hasta julio de ese mismo año, el Tribunal seguía enjuiciando y condenando peruanos. Esto demostraría, cuando menos, que la desactivación de la competencia del Tribunal Militar no ha sido tan clara ni marcada como darían a entender los decretos comentados en el capítulo anterior.

Sexta.- Queda acreditada la existencia y funcionamiento de los juzgados de letras en Lima durante la ocupación. Estos juzgados fueron parte del sistema de administración de justicia establecido por la autoridad invasora y encontraron una respuesta por parte de la población. Ello se explicaría debido a que algún sector de la sociedad limeña esperaba con cierta expectativa la existencia de un mecanismo de resolución de conflictos ante la ausencia de los mismos en la ciudad. Sin embargo, se podría afirmar con cierto sustento que en la comparativa, la cantidad de procesos que conocieron esos juzgados de letras fueron mucho menores a la que conocían los tribunales ordinarios peruanos antes de la guerra.

En ese sentido, podemos afirmar que si bien el sistema paralelo de administración de justicia establecido por los invasores terminó sirviendo realmente, en la práctica no llegó a sustituir íntegramente al Poder Judicial ni llegó a cubrir la verdadera demanda de servicios de administración de justicia existente en la ciudad.

Séptima.- Tras el reinicio de sus funciones, el Poder Judicial legitimó tácitamente los actos realizados por los juzgados que conformaron el sistema paralelo de administración de justicia establecido por los invasores. Esta legitimación tácita se entiende debido a dos actos. El primero es el hecho de que el Poder Judicial retomara y continuara el trámite de los juicios que, iniciados ante los juzgados de letras o criminales instalados por los chilenos, se mantenían aún en curso a la fecha del fin de la ocupación cuando las autoridades peruanas reasumieron el ejercicio de sus funciones. El segundo acto es la inclusión en su archivo de los juicios tramitados y culminados ante dichos juzgados.

Estos actos demuestran la voluntad del Poder Judicial, y del Estado Peruano en consecuencia, de renunciar a su prerrogativa de decretar la nulidad de todos esos juicios y actos realizados por los mencionados juzgados, negándoles toda validez por haber sido realizados por funcionarios extranjeros e, incluso, en aplicación de un derecho extranjero. De esa forma, a pesar de estos vicios que podrían tranquilamente

implicar la nulidad de cualquier otro acto político, legislativo o administrativo, la decisión fue de mantener la validez de dichos juicios para buscar, quizás, proteger la seguridad jurídica lograda.

Octava.- Se termina acreditando que, aunque espurios en su origen, la labor realizada por los juzgados de letras y los juzgados criminales establecidos por las autoridades chilenas resultó siendo provechosa para la ciudad de Lima.

Afirmamos ello porque, a raíz de la legitimación tácita de que hablamos anteriormente, se terminó reconociendo que los actos realizados por esos juzgados en ejercicio de sus funciones sirvieron para mantener en la ciudad de Lima un sistema de administración de justicia basado en derecho que pudiera conservar a la sociedad dentro de los cánones del ejercicio jurídico de sus derechos. En efecto, si la opinión habría sido contraria, se hubiera tenido que concluir que la actuación de esos órganos resultaba perniciosa y no se hubiera podido encontrar razón que justifique el no declarar su nulidad.

Novena.- La reinstauración del poder judicial peruano así como la forma en que éste reasumió sus funciones fue un proceso paulatino y que no se realizó de manera intempestiva. Por el contrario, lo que deja la apreciación de los expedientes judiciales es que, en el ámbito civil, la reactivación de cada juicio dependió en gran medida del interés de las partes en conflicto. En el ámbito penal, sin embargo, se advierte una renuncia por parte del Estado a seguir ejerciendo las acciones penales que quedaron pendientes, disponiendo el archivo de los expedientes que quedaron en trámite antes de la ocupación.

Décima.- Si bien existió una norma dictada durante el gobierno de Nicolás de Piérola que estableció la existencia de juzgados y salas de vacaciones que atendieran mientras dure el periodo vacacional del resto de juzgados ordinarios, no existe ningún documento que permita pensar que dichos órganos de vacaciones realmente existieron.

Eso demuestra que, aunque en algún momento la Corte Superior de Lima rehusó la invitación cursada por la autoridad invasora amparándose en la existencia de estos órganos tal como mencionamos en el capítulo anterior, lo cierto es que no podemos afirmar que los mismos hayan existido siendo lo más probable que no haya sido así y



que dicha comunicación de la Corte Superior de Lima haya sido una respuesta evasiva adicional a las tantas que los miembros del Poder dieron tuvieron cuando se les requirió la reanudación de sus labores.



#### **CAPITULO IV: CONCLUSIONES FINALES.**

Tomando en consideración todos los temas desarrollados en la presente investigación, consideramos que nos encontramos en la capacidad de poder emitir una posición final respecto de lo que constituyó nuestra hipótesis general. Para ello debemos recordar que el objetivo general de la presente investigación era “determinar la forma en que la sociedad limeña resolvió los conflictos interpersonales y sancionó las conductas antijurídicas en un escenario excepcional conformado por la presencia de un ejército invasor en la ciudad, el mismo que ejercía una autoridad marcial y que había favorecido el establecimiento de un gobierno peruano provisorio”.

Ante esta situación, la hipótesis que postulamos en un primer momento fue que *“Durante la ocupación chilena de la ciudad de Lima, el Poder Judicial colapsó y tanto los litigios privados como la sanción de las conductas antijurídicas tuvieron que realizarse mediante otros mecanismos”*.

Los resultados de nuestra investigación nos llevarían, en un primer momento, a confirmar parcialmente la hipótesis que habíamos postulado. Sin embargo, no podemos dejar de apreciar el hecho de que la misma resulta demasiado general y que no refleja con exactitud la situación que hemos descubierto. En efecto, durante la investigación hemos encontrado diversos carices que hacen que resulte insuficiente señalar simplemente que “el Poder Judicial colapsó y se tuvo que utilizar otros mecanismos para obtener la tutela judicial”.

Esta situación, entonces, nos obliga a tener que replantear la hipótesis brindada.

Para ello consideramos necesario hacer una diferenciación entre dos términos que hemos estado utilizando simultáneamente en la presente investigación aunque nunca de forma tal que se terminen refiriendo al mismo fenómeno. Nos referimos a los conceptos de “Poder Judicial” y de “Administración de Justicia”. Así, convendremos que con “Poder Judicial” nos hemos estado refiriendo a la organización estatal encargada del ejercicio de la función jurisdiccional y organizada conforme a los términos establecidos en la Constitución Política del Estado. Por otra parte, y en el mismo orden de ideas, con “Administración de Justicia” nos hemos estado refiriendo a la actividad misma de ejercicio de la función jurisdiccional que incluye tanto la

resolución de los conflictos de intereses privados y públicos como la sanción de las conductas antijurídicas.

Si bien es cierto que estas definiciones pueden ser discutidas, tenemos presente que dicha discusión escapa de lo que es el real objetivo de la tesis, siendo que en esta investigación la dilucidación de la misma nos terminaría desviando de nuestro propósito inicial.

Establecida esta diferenciación podremos afirmar, tomando en consideración lo investigado y lo expuesto, que nuestra hipótesis inicial debemos dividirla en dos premisas con el afán de hacer que la misma pueda reflejar los resultados definitivos obtenidos en la presente investigación.

Así, de conformidad con las conclusiones preliminares obtenidas en el segundo y tercer capítulo, podemos afirmar como una primera conclusión final que durante la ocupación chilena de la ciudad de Lima el Poder Judicial se auto restringió y, a pesar de los diversos requerimientos tanto de parte de la autoridad invasora como del gobierno provisorio, tomó consciente y voluntariamente la decisión de no ejercer su función por cuanto consideraba que, de hacerlo, habría incurrido en una actitud que iba en contra de la misma idea de soberanía nacional que le daba sustento.

Es decir, no podemos afirmar que existió un “colapso” del Poder Judicial porque ello implicaría que el mismo no pudo realizar su función debido a factores exógenos que le generaron una imposibilidad real de hacerlo. Nos referimos, en calidad de ejemplo, a situaciones en las que el Poder Judicial, a pesar de tener la voluntad de ejercer su función, hubiera visto a sus funcionarios coaccionados para que no realicen los actos respectivos o se hubiera visto imposibilitado de acceder a los medios materiales necesarios para ejercerla. Ni un caso ni el otro sucedieron en Lima durante los años estudiados.

Por el contrario, lo que se dio fue un fenómeno inverso en el que existía un clima favorable para que el Poder Judicial reasuma su función. Esa expectativa favorable no provenía sólo de parte de la autoridad invasora y del gobierno provisorio sino también de parte de la misma sociedad limeña que, tal como se pudo deducir de la apreciación conjunta de los expedientes judiciales, tenía necesidad de un servicio de administración de justicia. Ante toda esta expectativa, lo que se dio en esta etapa

histórica fue una auto restricción de parte del Poder Judicial decretada por sus principales autoridades y acatada uniformemente por todos los demás jueces y funcionarios que formaban parte de su organización. Auto restricción que se dio en respeto a consideraciones jurídico-políticas que entendían que su sometimiento a categorías esenciales les autorizaba a desconocer no sólo las expectativas favorables que mencionamos sino, principalmente, los mandatos legales que le obligaban a reanudar sus funciones.

Ese rasgo volitivo en la actuación del Poder Judicial, en cuanto organización, es lo que marca la diferencia entre la real situación encontrada como producto de esta investigación y la hipótesis postulada al inicio de la misma.

La segunda conclusión final se refiere ya no a la actuación del Poder Judicial sino más bien al ejercicio de la función jurisdiccional que englobamos bajo el concepto de “Administración de justicia”. En ese sentido, debemos reconocer que, salvo el lapso entre el 24 de diciembre de 1880 y diciembre de 1881, en la ciudad de Lima sí existió un sistema ordinario de administración de justicia, es decir, un sistema ordinario – y respaldado por una de las autoridades que regían en la ciudad – a través del cual se establecieron mecanismos para la heterocomposición de conflictos de intereses privados así como para la sanción de las conductas antijurídicas.

La decisión voluntaria del Poder Judicial, entonces, no trajo una situación permanente en la que la sociedad no tuvo cómo encontrar alguna forma de tutela jurisdiccional. Por el contrario, y sin tomar en cuenta los mecanismos extraordinarios y privados que la misma sociedad limeña encontró y que mencionan algunas fuentes historiográficas, lo cierto es que sí existió un sistema de “administración de justicia” que, con vocación de ser ordinaria, ejerció jurisdicción y competencia sobre la ciudad de Lima.

Evidentemente este sistema paralelo de “administración de justicia” se diferenció del sistema ordinario que hubiera ejercido el Poder Judicial en dos puntos principales:

- a) La autoridad de la cual derivaba su jurisdicción que en este caso era la autoridad de los invasores impuesta a la sociedad limeña como consecuencia de los resultados de la guerra, y

- b) El derecho que se aplicó que, si bien en un primer momento buscó que sea sólo el peruano, a medida de su desarrollo terminó acogiendo la aplicación del derecho del invasor en lo que a la sanción de faltas y delitos se refiere.

La existencia de este sistema de administración de justicia marca también una diferencia entre la real situación encontrada gracias a la investigación y la hipótesis formulada al inicio. Y es que si bien no podemos aceptar la idea de “colapso” ya que el mismo implicaría la imposibilidad de que exista un sistema ordinario encargado de la función jurisdiccional, tampoco podemos quedarnos en la laxitud de la afirmación incluida en la hipótesis que señala que tanto los litigios privados como la sanción de las conductas antijurídicas tuvieron que realizarse mediante otros mecanismos sin señalar cuáles. Y es que, sin negar la existencia de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, lo cierto es que en Lima durante la ocupación sí existió una organización judicial que buscó ejercer el monopolio de la función jurisdiccional.

Consolidando las dos premisas complementarias que desarrollamos, una referida al “Poder Judicial” y la otra referida a la “Administración de justicia”, nuestra conclusión final puede resumirse en la siguiente afirmación:

*“Durante la ocupación chilena de la ciudad de Lima, el Poder Judicial, sin tomar en cuenta las invitaciones que recibió ni las normas expedidas que buscaban obligarlo a cumplir su función, decidió voluntariamente auto restringirse y no ejercer función jurisdiccional alguna en salvaguarda de valores que consideraron más importantes y esenciales. No obstante ello, la sociedad limeña optó por mecanismos alternativos de resolución de conflictos y la autoridad invasora estableció una organización judicial, extensión de su propia organización nacional, que buscó ejercer el monopolio de la función jurisdiccional mediante la aplicación, por parte de jueces chilenos, del derecho peruano aunque, posteriormente, se permitió la aplicación de derecho chileno para la sanción de conductas antijurídicas. Esta situación se prolongó hasta el fin de la ocupación cuando, luego de que Lima volvió a estar sometida a autoridades peruanas, el Poder Judicial levantó su decisión y retomó sus funciones para conocer no sólo los nuevos conflictos y actos antijurídicos que se generen, sino también aquellos que quedaron suspendidos al inicio de la ocupación y los que fueron conocidos por el sistema establecido por la autoridad invasora”.*



### BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA

- **AHUMADA MORENO, Pascual.** *Guerra del Pacífico. Tomo IV.* Santiago de Chile: Andrés Bello, reimpresión 1982.
- **AHUMADA MORENO, Pascual.** *Guerra del Pacífico. Tomo V.* Santiago de Chile: Andrés Bello, reimpresión 1982.
- **AHUMADA MORENO, Pascual.** *Guerra del Pacífico. Tomo VI.* Santiago de Chile: Andrés Bello, reimpresión 1982.
- **AHUMADA MORENO, Pascual.** *Guerra del Pacífico. Tomo VII.* Santiago de Chile: Andrés Bello, reimpresión 1982.
- **AHUMADA MORENO, Pascual.** *Guerra del Pacífico. Tomo VIII.* Santiago de Chile: Andrés Bello, reimpresión 1982.
- **ARCHIVO DE LA CORTE SUPERIOR DE LIMA (R.P.J.)** años 1879 – 1884. Archivo General de la Nación.
- **ALTMANN SMYTHE, Julio.** *Reseña Histórica de la Evolución del Derecho Penal.* Lima: Sanmartí, 1944.
- **ALZAMORA, Román.** *Curso de historia del derecho peruano: lecciones dadas en la facultad de derecho.* Lima: Imprenta del Estado, 1876.
- **ALZAMORA SILVA, Lizardo.** *La evolución política y constitucional del Perú Independiente.* Lima: Librería e Imprenta Gil, 1942.
- **BASADRE AYULO, Jorge.** *La historia de las codificaciones en el Perú.* Lima: Cultural Cuzco, septiembre del 2003.
- **BASADRE GROHMANN, Jorge.** *Historia del Derecho Peruano.* Segunda Edición. Lima: 1984.
- **BASADRE GROHMANN, Jorge.** *Historia de la República del Perú (1822 – 1933). Tomo 2.* Lima: El Comercio, 2005.
- **BASADRE GROHMANN, Jorge.** *Historia de la República del Perú (1822 – 1933). Tomo 3.* Lima: El Comercio, 2005.
- **BASADRE GROHMANN, Jorge.** *Historia de la República del Perú (1822 – 1933). Tomo 9.* Lima: El Comercio, 2005
- **BULNES, Gonzalo.** *Guerra del Pacífico.* Valparaíso: Sociedad Impr. y Lit. Universo, 1911 – 1919.
- **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.** *Anales Judiciales del Perú 1876-1877-1878-1879. Tomo 3.* Lima: Oficina Tipográfica de “La Opinión Nacional”, 1908.

- **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.** *Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia. 1880-1887. Tomo 4.* Lima: Imprenta La Industria, 1911.
- **DE LA LAMA, Miguel Antonio.** *Reglamento de Tribunales, anotado y concordado. Índice alfabético de sus artículos y apéndice.* Lima: Gil, 1905.
- **FELIX TASAYCO, Gilberto.** *Panorama de la estructura del proceso penal.* Presentación del Ministerio Público Fiscalía de la Nación. Septiembre del 2007.
- **FUENTES, Manuel Atanasio.** *Formulario para los jueces de paz del Perú.* Lima, 1877.
- **FUENTES, Manuel Atanasio y Luis E ALBERTINI** *La Constitución y Leyes Orgánicas del Perú dadas por el Congreso de 1869 comparadas con las que sancionó la Convención Nacional de 1855.* Lima: Imprenta de la Gaceta Judicial, 1861.
- **FUENTES, Manuel Atanasio.** (bajo pseudónimo Fray Benito Encalada Montestruque y Maldonado). *Ramillote o repertorio de lo más piramidales documentos oficiales del gobierno dictatorio, con una parodia al lado en vil verso redactada.* Lima: Imprenta del Universo, de Carlos Prince, 1881.
- **GALVEZ, José Francisco.** *La historia del derecho en el Perú.* Lima: Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilazo de la Vega, agosto del 2008.
- **GARCÍA BELAUNDE, Domingo.** *Las constituciones del Perú.* Lima: Ministerio de Justicia, 1993.
- **GARCÍA CALDERÓN, Francisco.** *Diccionario de la Legislación Peruana. Tomo 1.* Lima: Imprenta del Estado, 1860.
- **GARCÍA CALDERÓN, Francisco.** *Diccionario de la Legislación Peruana. Tomo 2.* Lima: F. García Calderón, Paris: Lib. de Laroque, 1879.
- **GARCÍA CALDERÓN, Manuel.** *Algunos hechos y reflexiones sobre la historia de la Corte Suprema de Justicia de la República.* En: Revista de Derecho y Ciencias Políticas, Vol. 37, N° 3 (Set – Dic 1973). Pp. 340-420.
- **GUERRA MARTINIERE, Margarita.** *La Ocupación de Lima (1881 – 1883).* Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1991.
- **GUERRA MARTINIERE, Margarita.** *La Ocupación de Lima (1881-1883) Aspectos Económicos.* Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1996.
- **LIENDO, Hilario.** *Notas al Código de Enjuiciamiento Civil, con un Índice Analítico por Orden Alfabético.* Lima: Imprenta y Librería de Benito Gil, 1886.

- **LOPEZ MARTÍNEZ, Héctor.** *Piérola y la defensa de Lima*. Lima: Ausonia Talleres Gráficos, 1981.
- **MARKHAM, Clemens Robert.** *La Guerra entre el Perú y Chile*. Lima: Ediciones Ermar, 1980.
- **MENACHO CHIOK, Luis Pedro.** *Historia del derecho peruano por épocas*. En: <http://www.gestiopolis.com/canales8/eco/derecho-peruano-y-su-historia-por-epocas.htm>, Febrero del 2012.
- **NUÑEZ, Estuardo.** *La influencia alemana en el derecho peruano*. Lima: Librería e Imprenta Gil. 1937
- **OVIEDO, Juan.** *Práctica forense peruana arreglada a nuestra legislación*. Lima: Benito Gil, 1871.
- **PALMA, Ricardo.** *Cartas a Piérola: sobre la ocupación chilena de Lima*. Lima: Milla Bartres, 1979. Segunda Edición.
- **PAREDES, Simón Gregorio.** *Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de Tribunales del Perú*. Lima: Imprenta del Universo, 1888.
- **PAREJA PAZ SOLDAN, José.** *Las constituciones del Perú*. Madrid: Cultura Hispánica, 1954.
- **PAREJA PAZ SOLDAN, José.** *Historia de las constituciones nacionales (1812 – 1979)*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2005.
- **PAZ SOLDAN, Mariano Felipe.** *Índice analítico de los códigos civil y de enjuiciamientos, del reglamento de tribunales y de las leyes secundarias que tienen relación con ellos*. Callao: Imp. y publicado por Estevan Dañino, 1853.
- **RAMOS NUÑEZ, Carlos.** *El divorcio decimonónico y sus instituciones: un aporte a la historia del derecho peruano*. Huancayo: Instituto de Investigación Jurídica y de Ciencias Sociales “Civitas”, 2005.
- **RAMOS NÚÑEZ, Carlos.** *Historia del derecho civil peruano. Siglos XIX y XX. Tomo II. La codificación del siglo XIX: Los códigos e la confederación y el Código Civil de 1852*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2001.
- **RAMOS NÚÑEZ, Carlos.** *Historia del derecho civil peruano. Siglos XIX y XX. Tomo III. Los jurisprudencias: El Murciélagos y Francisco García Calderón*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2002.

- **RAMOS NÚÑEZ, Carlos.** *Historia del derecho civil peruano. Siglos XIX y XX. Tomo IV: Legislación, abogados y exegetas.* Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003.
- **RAMOS NUÑEZ, Carlos Augusto.** *Historia de la Corte Suprema de Justicia del Perú.* Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial, 2008.
- **RIVERA SERNA, Raúl.** *La ocupación chilena de Lima. Aspectos político-administrativos.* En: RIVERA SERNA y otros. *La Guerra del Pacífico. Volumen II.* Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 1984. pp. 1-43.
- **SAN MARTÍN CASTRO, César.** *La Corte Suprema: Historia y Perspectivas.* En: [http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc\\_int/doc06082009-192426.pdf](http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc06082009-192426.pdf), Febrero del 2012.
- **SANCHEZ, Hipólito.** *Práctica y formulario de procedimientos en materia civil y criminal para los Jueces de Paz, con arreglo a los códigos civiles y penales, reglamento de tribunales y demás leyes del caso.* Arequipa: Pascual Miranda, 1863.
- **SILVA SANTISTEBAN, José.** *Derecho peruano: parte civil, compendio del curso dictado en el colegio de ciencias de esta ciudad.* Piura: Impreso por Manuel Rubio, 1853.
- **UGARTE DEL PINO, Juan Vicente.** *Historia de las constituciones del Perú.* Lima: Andina, 1978.
- **WU BRADING, Celia.** *Testimonios Británicos de la Ocupación Chilena de Lima (enero de 1881).* Lima: Milla Batres, 1986.
- **ZORBAS, Jason.** *Missstep and U-turn: The influence of domestic politics on America's Chilean policy during the War of the Pacific.* Página 96. En: <http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp01/MQ61310.pdf>, Febrero del 2012.

## APÉNDICE

### Anexo I: Normas modificatorias expedidas entre 1852 y 1879

1. Primer periodo histórico: Del Código de Enjuiciamientos Civiles al Reglamento de Juzgados y Tribunales.

1	DECRETO	02/09/1852	Disponiendo que los jueces de primera instancia residan en la capital de su provincia
2	DECRETO	24/11/1852	Declarando que los Sub-Prefectos trasladados no están sujetos al juicio de residencia al pasar de una provincia a otra
3	DECRETO	18/06/1853	Aprobando el gasto realizado en libros para los jueces de paz
4	DECRETO	28/06/1853	Disponiendo que en los casos de delitos graves cometidos por funcionarios, los jueces investiguen y den cuenta al prefecto del departamento
5	LEY	01/09/1853	Disponiendo que los Jueces de Primera Instancia conozcan las causas de Capellanías Eclesiásticas
6	LEY	23/11/1853	Sobre promulgación del reglamento de tribunales
7	DECRETO	30/01/1854	Disponiendo continuar funciones de los jueces de paz y síndicos hasta el establecimiento de las municipalidades
8	DECRETO	14/10/1854	Disponiendo que se cumpla lo resuelto por la Corte Superior en un recurso de fuerza
9	DECRETO	03/02/1855	Disponiendo que mientras la Convención Nacional disponga la elección de Jueces de Paz sus funciones serán desempeñadas por personas nombradas por los prefectos
10	DECRETO	14/02/1855	Señalando día para que empiecen a regir los reglamentos de Juzgados y Tribunales
11	DECRETO	22/02/1855	Declarando que la impresión del reglamento de tribunales y juzgados no están sujetas a monopolio
12	DECRETO	25/03/1855	Aboliendo los jurados para los juicios de imprenta
13	DECRETO	31/03/1855	Suprimiendo el recurso de súplica o tercera instancia en los juicios
14	DECRETO	31/03/1855	Nombrando el personal de todos los tribunales y juzgados de la República
15	DECRETO	31/03/1855	Organizando los tribunales y juzgados de la República
16	DECRETO	03/04/1855	Disponiendo que los jueces de paz sean reemplazados por personas que obtuvieran el lugar inmediato en las ternas
17	DECRETO	10/04/1855	Disponiendo designar a los jueces del crimen



2. Segundo periodo histórico. Del Reglamento de Juzgados y Tribunales al Código de Enjuiciamiento en materia Criminal.

1	DECRETO	26/05/1855	Disponiendo que las causas no falladas por los jueces destituidos deben verse por vocales expeditos
2	DECRETO	31/05/1855	Nombrando vocales que auxilien a la corte superior de Lima en sus recargadas labores
3	DECRETO	04/06/1855	Disponiendo que la jurisdicción privativa de aguas se ejerza por los jueces del fuero común
4	DECRETO	15/06/1855	Disponiendo que se admitan en los tribunales recursos sin firma de abogados
5	DECRETO	20/06/1855	Estableciendo el tribunal denominado Acordada para causas de hurto, robo, homicidio y fuerza
6	LEY	24/11/1855	Sometiendo a juicio al ex Presidente de la República José Rufino Echenique y a las personas que colaboraron durante su gobierno
7	LEY	19/04/1856	Disponiendo que se aplique a los juicios de traición y conspiración la Ley del 26 de mayo de 1831
8	DECRETO	05/05/1856	Declarando que los jueces titulares no pueden ser árbitros
9	DECRETO	24/05/1856	Disponiendo se aperture juicio para descubrir la falsificación de vales de consolidación
10	LEY	26/11/1856	Disponiendo que todas las causas que conocía el tribunal de los siete jueces terminen con la resolución de la Corte Suprema
11	LEY	04/12/1856	Disponiendo se nombren jueces de primera instancia en todas las provincias de la República
12	LEY	04/12/1856	Estableciendo un tribunal que conocerá las causas de responsabilidad que se promuevan contra los miembros de la Corte Suprema
13	LEY	02/01/1857	Disposiciones para ocupar las vacantes del Poder Judicial y Ejecutivo
14	DECRETO	06/03/1857	Disponiendo se pase a la Corte Suprema el expediente sobre alumbrado de gas en el Callao
15	LEY	16/03/1857	Ordenando que se someta a juicio a los que infrinjan la prohibición de reclutamiento
16	LEY	30/03/1857	Creando dos vocalías en el Corte Suprema
17	DECRETO	26/05/1857	Designando al agente fiscal para representar en juicios de expropiación de terrenos a favor del ferrocarril de Chorrillos
18	LEY	30/05/1857	Señalando el modo como deben ser juzgados los prisioneros del 22 de abril
19	LEY	27/09/1857	Creando una fiscalía para la Corte Superior de Lima
20	DECRETO	04/12/1857	Disponiendo que los agentes fiscales propietarios deben presidir a los jueces de primera instancia
21	DECRETO	17/12/1857	Estableciendo el local donde los jueces de primera instancia deben recibir las declaraciones de los cónsules generales
22	DECRETO	10/05/1858	Disponiendo que los jueces de primera instancia

			cuando se trasladen de un lugar a otro, deben ser acudidas con lenguaje de silla y carga de acuerdo al reglamento de tribunales
23	DECRETO	23/06/1858	Disponiendo se cumpla el artículo del reglamento que dispone que los jueces de primera instancia, cuenten con un alguacil
24	DECRETO	01/12/1858	Disponiendo que a falta de vocales se llamará a los conjuces que anualmente se eligen
25	DECRETO	19/10/1859	Sobre renuncia de los conjuces de cualquier cargo concejil
26	DECRETO	15/01/1861	Disponiendo el cese de los confinamientos , expatriaciones y corte de juicios
27	RESOLUCION LEGISLATIVA	22/02/1861	Disponiendo cortar el progreso de los juicios de imprenta e indultos, por artículos subversivos sediciosos o incitadores a la desobediencia
28	LEY	11/04/1861	Disponiendo la reposición de los funcionarios del Poder Judicial y empleados civiles y de hacienda, a sus destinos para efectos legales
29	LEY	17/04/1861	Dictando medidas para el nombramiento de Jueces de Paz
30	LEY	07/06/1861	Disponiendo relegar al olvido los extravíos políticos pasados y se corte del progreso de los juicios
31	LEY	08/06/1861	Disponiendo que la Corte Superior de Justicia adscribirá anualmente a cada uno de los juzgados del crimen dos escribanos
32	LEY	03/11/1862	Designando fiscales de la Corte Suprema para el despacho judicial y administrativo
33	LEY	07/01/1863	Estableciendo en la Corte Superior de la capital una Sala del Crimen, compuesta por cinco vocales y el fiscal menos antiguo
34	LEY	04/02/1863	Disposiciones para la aplicación del artículo 222 del Reglamento de Tribunales

3. Tercer periodo histórico. Del Código de Enjuiciamiento en materia Criminal al inicio del gobierno de Nicolás de Piérola.

1	LEY	17/08/1864	Nombrando vocal propietario de la Corte Suprema de Justicia al Dr. Bernardo Muñoz
2	LEY	13/09/1864	Nombrando vocal interino de la Corte Suprema de Justicia al Dr. Blas José Alzamora
3	DECRETO	21/09/1864	Estableciendo turnos para los Jueces de Primera Instancia
4	LEY	03/10/1864	Nombrando fiscal interino de la Corte Suprema de Justicia al Dr. Manuel Morales
5	LEY	09/01/1865	Estableciendo un Tribunal Supremo de Responsabilidad Judicial
6	DECRETO	27/09/1865	Declarando vacantes los destinos de todos los empleados del poder judicial
7	DECRETO	13/11/1865	Disponiendo someter á juicio al ex-primer Vice-Presidente de la República Juan Antonio Pezet y á sus

			Ministros de Estado
8	DECRETO	29/11/1865	Prorrogando las funciones de los Tribunales y Juzgados de la Nación
9	DECRETO	18/12/1865	Declarando vigente la ley de 4 de diciembre de 1856 que establece el tribunal de responsabilidad judicial
10	DECRETO	20/02/1866	Estableciendo la organización del Poder Judicial de la República.
11	DECRETO	20/02/1866	Estableciendo la organización del Ministerio Fiscal de la República
12	DECRETO	19/05/1866	Disponiendo se corten los juicios por delitos políticos en los tribunales y juzgados de la República excepto los que se siguen contra los autores del Tratado de 27 de Enero de 1865.
13	DECRETO	02/07/1866	Disposiciones aplicables al juicio de desahucio.
14	DECRETO	20/10/1866	Incorporando modificaciones en el procedimiento del juicio ejecutivo.
15	DECRETO	15/12/1866	Estableciendo fechas para las vacaciones de los Tribunales y Juzgados de la República.
16	LEY	09/09/1867	Disponiendo que la Corte Suprema de Justicia aumente su número de vocales.
17	RESOLUCION LEGISLATIVA	16/09/1867	Restituyendo a sus destinos á dos vocales de la Corte Suprema y á uno de la Corte Superior.
18	LEY	16/09/1867	Creando una vocalía más en la Corte Superior de Lima.
19	LEY	01/10/1867	Otorgando á la Corte Suprema de Justicia la facultad de conceder licencias temporales.
20	DECRETO	04/06/1868	Disponiendo que los Juzgados y Tribunales de la capital se trasladen al local de la Escuela Normal Central al que se llamará "Palacio de Justicia".
21	DECRETO	11/11/1868	Estableciendo horario para el despacho de la Corte Suprema, Superiores y Jueces de 1º Instancia de la República.
22	DECRETO	20/04/1870	Disponiendo que los juicios en el ejército, armada nacional y fuerzas de policía, por los delitos de peculado y defraudación, serán de conocimiento de los tribunales del fuero común
23	LEY	05/08/1870	Concediendo amnistía á todas las personas que estén sometidas á juicio por causas políticas y por delitos de igual naturaleza
24	LEY	26/09/1870	Disponiendo que los empleados públicos absueltos de juicio se les reintegre los medios sueldos dejados de percibir
25	LEY	29/10/1870	Disponiendo que el Juzgado Privativo de Aguas conocerá de las apelaciones interpuestas en los juicios civiles y criminales
26	LEY	23/11/1870	Disponiendo que el juez privativo de aguas de la capital, conocerá de los juicios de responsabilidad y pesquisa de oficio o de parte, contra los jueces de paz de la provincia
27	LEY	10/12/1879	Estableciendo disposiciones para la declaración de nulidad de una sentencia.
28	RESOLUCION	18/01/1871	Eligiendo vocales propietarios de la Corte Suprema de

	LEGISLATIVA		Justicia al Dr. Antonio Arenas y al Dr. Melchor Vidaurre
29	RESOLUCION LEGISLATIVA	18/01/1871	Eligiendo vocales propietarios de la Corte Suprema de Justicia al Dr. Juan Oviedo y don Manuel Benjamín Cisneros
30	DECRETO	17/03/1871	Nombrando una comisión para reformar el Código Penal y el de Enjuiciamiento Penal
31	DECRETO	01/05/1872	Relegando al olvido los delitos políticos y cortando los juicios pendientes
32	LEY	19/09/1872	Disponiendo que no pueden ser electores los Vocales, Fiscales, Jueces de 1a. instancia y agentes fiscales en los lugares donde ejerzan jurisdicción.
33	LEY	28/11/1872	Señalando que la ley de 7 de diciembre de 1870 no se refiere á juicios criminales.
34	LEY	28/11/1872	Señalando que los votos de los jueces discordantes sean fundados
35	LEY	13/02/1873	Estableciendo el término para interponer la demanda ordinaria á que se refiere el artículo 1007 del Código de Enjuiciamientos en materia civil
36	LEY	18/03/1873	Establece nuevas disposiciones aplicables para la acción de desahucio.
37	LEY	05/04/1873	Adicionando el artículo 465 del Código de Enjuiciamientos en Materia Civil
38	LEY	22/04/1873	Disponiendo que los agentes fiscales percibirán igual dotación que los jueces de 1ª instancia de sus respectivas provincias
39	DECRETO	20/12/1873	Disposiciones para la instrucción de los juicios, sumarios de comiso de mayor cuantía, se realizará por los jueces de instrucción designados por el administrador de aduana
40	RESOLUCION LEGISLATIVA	07/10/1874	Eligiendo vocal de la Corte Suprema de Justicia al Doctor don Blas José Alzamora
41	LEY	01/12/1874	Estableciendo medidas aplicables al período de vacaciones de los Tribunales de Justicia y Términos judiciales
42	RESOLUCION LEGISLATIVA	01/12/1874	Concediendo al Dr. D. Francisco Esteban de Ingunza el derecho de jubilación inmediata como vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima
43	RESOLUCION LEGISLATIVA	05/02/1875	Autorizando al Poder Ejecutivo, para hacer reformas en el Tribunal Mayor de Cuentas y dar los reglamentos que correspondan
44	RESOLUCION LEGISLATIVA	24/05/1875	Eligiendo al Dr. D. José Eusebio Sánchez para desempeñar interinamente la vocalía de la Corte Suprema de Justicia
45	LEY	16/06/1875	Disposiciones aplicables al juicio de esperas
46	LEY	16/06/1875	Estableciendo que lo dispuesto en la Ley que reforma el procedimiento del juicio de Esperas es aplicable al juicio de Quitas
47	RESOLUCION LEGISLATIVA	01/08/1876	Eligiendo como fiscales de la Corte Suprema de Justicia á los doctores don Teodoro La Rosa y don José Aranibar
48	RESOLUCION LEGISLATIVA	11/08/1876	Eligiendo como vocal interino de la Corte Suprema de Justicia al Dr. Don José Eusebio Sánchez

49	RESOLUCION LEGISLATIVA	11/08/1876	Eligiendo como fiscal interino de la Corte Suprema de Justicia al Dr. Don Manuel de la Encarnación Chacaltana
50	RESOLUCION LEGISLATIVA	25/10/1876	Eligiendo vocal interino de la Corte Suprema de Justicia al Doctor Don Bernardino León
51	RESOLUCION LEGISLATIVA	30/10/1876	Nombrando vocal de la Corte Suprema de Justicia al Dr. D. José Eusebio Sánchez
52	LEY	03/02/1877	Disposiciones aplicables a la Corte Suprema de Justicia
53	RESOLUCION LEGISLATIVA	06/02/1877	Abonando, el tiempo que ejerció el empleo de vocal de la Excma. Corte Suprema de Justicia, en la foja de servicios del Dr. D. Teodoro La Rosa
54	LEY	12/09/1879	Estableciendo que la ley del 1º de diciembre de 1874, no comprende á los jueces de paz los cuales están obligados á funcionar durante el tiempo de las vacaciones judiciales
55	RESOLUCION LEGISLATIVA	17/09/1878	Nombrando Vocal Interino de la Corte Suprema de Justicia al Dr. D. Manuel Morales
56	RESOLUCION LEGISLATIVA	17/09/1878	Nombrando Fiscal Interino de la Corte Suprema de Justicia al doctor don José Martin Cárdenas
57	LEY	16/10/1878	Reformando el artículo 110 del Reglamento de Tribunales, en la parte relativa á Escribanos públicos
58	LEY	21/12/1878	Reformando algunas disposiciones del código de enjuiciamiento en materia penal
59	LEY	23/01/1879	Derogando segunda parte del artículo 197 del Código de enjuiciamiento en materia civil
60	DECRETO	20/02/1879	Adiciones al reglamento de Tribunales
61	DECRETO	20/02/1879	Disposiciones destinadas a mejorar la administración de justicia.
62	RESOLUCION LEGISLATIVA	20/05/1879	Disponiendo que los enjuiciados por el asesinato del señor Manuel Pardo, continúen detenidos hasta la terminación del juicio
63	LEY	22/09/1879	Organización de la Corte Suprema de Justicia
64	LEY	27/10/1879	Disponiendo que los Tribunales admitirán los recursos que presenten los litigantes por si mismo ó por medio de apoderados



**Anexo II: Expedientes judiciales consultados en el Archivo General de la Nación.****1. Año 1879: Expedientes Civiles.**

Materia:	Juicio por cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	15		
Demandante:	Don Pedro Flores		
Demandado:	Don Juan Montes		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 3 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 1 de Mayo de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre liquidación y partición de bienes		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	12		
Demandante:	Don Domingo Oresgui		
Demandado:	Miguel Rezzio (cónyuge de una de las herederas de Luis Ojeda)		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 4 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 13 de Febrero de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio por cancelación de deuda		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	5		
Demandante:	Don Julio Segovia		
Demandado:	Don Emilio Ribbeck y Guillermo Cristian		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 6 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 19 de Febrero de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre inspección ocular de una finca		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	5		
Demandante:	Don Enrique Dinegro		
Demandado:	Don Rafael Montani		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 9 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 12 de Febrero de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio por cantidad de soles provenientes de derechos de Muellaje de la aduana principal del Callao		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario	Otro
Total de fojas:	25		
Demandante:	Don Juan Pasapera		
Demandado:	Don Cayetano Gastaldi		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 9 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Callao, 29 de Enero de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre nombramiento de Sindico del concurso del Coronel		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	66		
Demandante:	Don Jacinto Navarte		
Demandado:	Don esteban Jiménez		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 10 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 9 de Enero de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Incidente de depósito en el juicio segunda		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	19		
Demandante:	Chesse y Pumarua		
Demandado:	Rufino Echenique		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 12 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 16 de Setiembre de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio por cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	17		
Demandante:	Kemish y Melson		
Demandado:	La señora viuda de Roma		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 13 de enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 12 de Junio de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio de división de bienes.		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario	Otro (actuario)
Total de fojas:	29		
Demandante:	Doña Eliodora Mendiburo		
Demandado:	Los herederos de Doña Josefa Peset de Navarrete		
Fecha de Inicio (1°	Lima, 13 de Enero de 1879		

Escrito)	
Fecha de término (último escrito)	Lima, 23 de Agosto de 1879
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Obligación de 290 soles.		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario	Otro (Ejecución)
Total de fojas:	35		
Demandante:	Manuel Murgía		
Demandado:	Francisco Salazar		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	14/01/1879		
Fecha de término	13/12/1884		
Observaciones	Su última actuación antes de la guerra fue el 14/05/1879. El expediente estuvo sin movimiento durante cinco años hasta que el 13/12/1884 la viuda de Murgía solicita la continuación del expediente. El expediente no se reactivó.		

Materia:	Otorgamiento de fianza.		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	9		
Demandante:	Doña Margarita Ramos de Irarrazabal		
Demandado:	Los herederos de la testamentaria de Don Antonio Ramos y Esposa.		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 14 de Enero de 1879.		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 24 de Mayo de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	6		
Demandante:	Doña Bernardina Sante		
Demandado:	Vicente Higinio		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 14 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 27 de Enero de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre tasación de costas		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	14		
Demandante:	Rosas Morales		
Demandado:	Don Pedro José Sayán		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 14 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 5 de Agosto de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre nombramiento de guardador dativo de la menor Carmen Orgas y Encina, con el debido respeto y cumplimiento del poder que otorgó su madre.		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	13		
Demandante:	Don José Espejo (poder de guardador por la madre de Carmen Orgas y Encina antes de morir)		
Demandado:	María Santa Eugenia Directora Madre superior del colegio del Buen Pastor		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 14 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 5 de Febrero de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio por cantidad en soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	18		
Demandante:	Don Juan Muelle		
Demandado:	Don Francisco E. Valverde		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 14 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 20 de Enero de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio por cantidad de dinero (en soles)		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario	Otro (Panebas)
Total de fojas:	6		
Demandante:	Don José Ausejo		
Demandado:	Gerónimo de Lama		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 15 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 22 de Abril de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre desahucio de su finca		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	13		
Demandante:	Ricardo Ortiz de Zevallos		
Demandado:	Domingo de la C. Márquez		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 15 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 26 de Junio de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio por el concurso formado a los bienes de Don Rodolfo Ran para que se le pague sus honorarios como perito liquidador		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	6		

Demandante:	Pablo Fuchs
Demandado:	Don Rodolfo Ran
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 15 de Enero de 1879
Fecha de término (último escrito)	Lima, 19 de Mayo de 1879
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio sobre pago de derechos		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	4		
Demandante:	Don Genaro Saavedra		
Demandado:	Don Agustín del Mazo y Calvo		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 16 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 8 de Febrero de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio de retracto que se tiene con la venta de las fincas "Lomalargo" y "Garabato"		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	20		
Demandante:	Don Mariano de Osma		
Demandado:	Los señores Althaus y Fenaud		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 16 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 17 de Febrero de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre desahucio		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	21		
Demandante:	Don José Durand		
Demandado:	Don Pedro Delibes		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 16 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 1 de Agosto de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre un baño		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	4		
Demandante:	Don Juan Hurtado		
Demandado:	Doña Manuela Poco de Parodi		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 16 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 23 de Enero de 1879		



Observaciones	Sin observaciones
---------------	-------------------

Materia:	Juicio por cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	17		
Demandante:	José Flores Guerra		
Demandado:	Micaela Gonzales viuda de Romero		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 17 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Callao, 29 de Enero de 1880		
Observaciones	El expediente fue enviado al juzgado del Callao.		

Materia:	Tachas a unos testigos		
Procedimiento:	Ordinario(x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	15		
Demandante:	La heredera de Don José Román		
Demandado:	José Flores Guerra		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 17 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Chorrillos 9 de Julio de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicios sobre el precio de los muebles rematados de la pertenencia del gran Mariscal de la Fuente en el juicio ejecutivo que le sigue por la cantidad en soles (3,000 soles)		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	31		
Demandante:	Don José Ríos		
Demandado:	Mariscal Don Antonio Gutiérrez de La Fuente y sus herederos		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 20 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 1 de Setiembre de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre consignación (sobre cumplimiento de un contrato)		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario	Otro
Total de fojas:	7		
Demandante:	Doña María Sotomayor de Menéndez		
Demandado:	Don Francisco Govera		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 20 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 10 de Febrero de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre la liquidación y repartición por parte de la señora Godoy de Ojeda a sus herederos		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro

Total de fojas:	41
Demandante:	Juana Ojeda
Demandado:	Don Luis Ojeda
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 20 de Enero de 1879
Fecha de término (último escrito)	Lima, 3 de Mayo de 1879
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio sobre absolución de posiciones		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	13		
Demandante:	Manuel Paredes		
Demandado:	Don Guillermo Scheel		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 20 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 26 de Julio de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre el testamento Don Pablo Loredo (sobre chacrita en Yauyos) a los tres hijos Francisco, Ignacia, Melchora y Manuela.		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	12		
Demandante:	Manuela Loredo		
Demandado:	Narciso Olivera		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 21 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 31 de Enero de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre desahucio		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	76		
Demandante:	Doña María Enríquez de Torres		
Demandado:	Don Mariano Loli		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 21 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 2 de Octubre de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre desahucio y pago de arrendamiento		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	3		
Demandante:	El Monasterio de la Concepción		
Demandado:	Don José María Martínez		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 21 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 10 de Julio de 1879		

Observaciones	Sin observaciones
---------------	-------------------

Materia:	Juicio por cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	22		
Demandante:	Doña Jesús Walden de Labaurne , Doña Juana R. Walden viuda de Lorca y Doña Carmen Varas		
Demandado:	Don José Manuel Tirado		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 22 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 29 de Abril de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre revocación de poder		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	8		
Demandante:	Doña María Sotomayor viuda de Menéndez		
Demandado:	Francisco Goveia		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 23 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 19 de Febrero de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre retención		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	34		
Demandante:	El banco de Crédito Hipotecario		
Demandado:	Doña Gregoria Olazabal de Cuenca		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 23 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 16 de Octubre de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre que se ministre posesión de unas fincas que ha comprado al concurso de el señor Pedro Marcona		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	4		
Demandante:	Pedro Porras		
Demandado:	Pedro José Zavala		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 23 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 15 de Febrero de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre cantidad en soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	47		

Demandante:	Mariana Castro
Demandado:	Don José Antonio Domínguez
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 23 de Enero 1879
Fecha de término (último escrito)	Lima, 4 de Noviembre de 1879
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio por cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	39		
Demandante:	Don Mariano López		
Demandado:	Don Juan Juliá e hijo		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 24 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 28 de Agosto de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Inspección Ocular		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	3		
Demandante:	Señores Flores y Carranza		
Demandado:	Banco Hipotecario		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 24 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 30 de Enero de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre alimentos		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	43		
Demandante:	Doña Rosaura Segovia de Silva (separada de su esposo por violencia familiar)		
Demandado:	Don Francisco Silva		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 24 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 18 de Mayo de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre rendición de cuentas		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	10		
Demandante:	Don Toribio Zamudio		
Demandado:	Enrique Gamboa		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 25 de Enero de 1879		
Fecha de término	Lima, 4 de Junio de 1879		

(último escrito)	
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio sobre cantidad en soles por el valor de una fábrica		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	55		
Demandante:	José Paz		
Demandado:	Doña Vicenta y Doña Manuela Saldaña		
Fecha de Inicio	Lima, 25 de Enero de 1879		
Fecha de término	Lima, 13 de diciembre de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio por deuda de 110 soles		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	4		
Demandante:	Doña María Jesús Oronzon		
Demandado:	Doña Rufina Sandoval		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 25 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 17 de Febrero de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre división y partición de bienes		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	3		
Demandante:	Miguel Rezzio		
Demandado:	Don Luis Ojeda		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 25 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 7 de Febrero de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre que no se le admita escritos sin firma de otro letrado en virtud de la suspensión del ejercicio de abogado		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	7		
Demandante:	Don Pedro Felipe del Busto		
Demandado:	Doctor Don Manuel Calienes del Busto		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 25 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 13 de Febrero de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio por guardador dativo de la menor María Jara Rueda		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	11		
Demandante:	Grimanesa Rueda		
Demandado:	Florentino Lusaminor		



Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 25 de Enero de 1879
Fecha de término (último escrito)	Lima, 28 de Junio de 1879
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio por intervención		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	40		
Demandante:	Miguel Rezzio		
Demandado:	Luis Ojeda		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 25 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 15 de Marzo de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre desahucio y pago de cantidad de soles procedentes de arrendamientos		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	26		
Demandante:	Don Pablo Monteghirfo		
Demandado:	Don Manuel Pacussi		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 27 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 19 de Febrero de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre pago de cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	170		
Demandante:	Los señores Párrocos de Santa Ana		
Demandado:	Don Domingo Porta		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 27 Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 24 de Mayo de 1887		
Observaciones	Durante el año 1880, el expediente fue sentenciado, apelado y corregido. Luego estuvo sin movimiento durante seis años hasta 1886 cuando se reactivó		

Materia:	Juicio sobre desahucio		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario	Otro
Total de fojas:	80		
Demandante:	Elena Varela viuda de Bernalles		
Demandado:	Doña Elena Laos viuda de la Puente		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 27 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 7 de Diciembre de 1882		
Observaciones	Sin actividad desde 1880, en 1882 el expediente se reactivó		

	ante el Juez de Letras, tramitándose ante ese mismo despacho y resolviéndose ese año.
--	---

Materia:	Juicio sobre cantidad en soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	24		
Demandante:	Don Luciano Benjamín Cisneros		
Demandado:	Don Manuel Baltierra Bustos y Compañía		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 28 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 21 de Junio de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio por cantidad en soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	31		
Demandante:	Félix Grandona		
Demandado:	José María Balbi		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 28 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 24 de Noviembre de 1886		
Observaciones	El expediente fue sentenciado el 11 de noviembre de 1880. Luego de no tener movimiento por más de tres años, el 3 de enero de 1884 fue presentada la apelación por el demandado siendo que la misma sólo empezó a ser tramitada en 1886.		

Materia:	Juicio solicitando se le autorice para la venta de tres caballos		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	2		
Demandante:	Don Francisco Bryce		
Demandado:	Don Emiliano Llona		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 28 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 6 de Junio de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio por cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	31		
Demandante:	Cassacia y compañía		
Demandado:	Andrés Rossi		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 28 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 1 de Julio de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro

Total de fojas:	91
Demandante:	Ramón Estruch
Demandado:	Zacarías Elefalde
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 29 de Enero de 1879
Fecha de término (último escrito)	Lima, 3 de Junio de 1884
Observaciones	Sentenciado el expediente, el 13 de octubre el demandante interpuso recurso de nulidad. Luego el expediente estuvo casi cuatro años sin movimiento hasta el 31 de mayo de 1884 cuando se continuó el trámite.

Materia:	Juicio sobre perdida de patria potestad de Gertrudis Sagredo Montano		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	10		
Demandante:	Esteban Montano		
Demandado:	Juez de la primera instancia		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 29 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 20 de Febrero de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre medidas precautorias		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	8		
Demandante:	Don Pablo Fourcade y Combe		
Demandado:	Nicanor Tejerina		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 29 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 5 de Mayo de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio por cantidad de dinero (830 soles)		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	17		
Demandante:	Don Juan Quincot		
Demandado:	Don Ashael Piper		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 30 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 25 de Junio de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio por cantidad de soles por haber trabajado en la fabrica		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	19		
Demandante:	Don Mariano López		
Demandado:	Don Juan Julfa e hijo		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 30 de Enero de 1879		

Escrito)	
Fecha de término (último escrito)	Lima, 17 de Julio de 1879
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio de restitución de varios objetos, por la deuda de cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	21		
Demandante:	Tourcadey Combe y Don Felipe Salaverry		
Demandado:	Nicanor Tejerina		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 30 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 4 de Setiembre de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre posesión de una finca		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	50		
Demandante:	Don Pedro Martí		
Demandado:	Don José Toribio García		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 30 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 12 de Junio de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre la nulidad de los actuados, en todo lo relativo a la remoción y nombramiento del guardador		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	5		
Demandante:	Doña María y Doña Mercedes Herrera		
Demandado:	Don Manuel Herrera		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 31 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 1 de Octubre de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	11		
Demandante:	Don Pedro Calvo		
Demandado:	Don Rodolfo Holtig		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 31 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 1 de Diciembre de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio por cantidad de soles		
----------	------------------------------	--	--

Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	120		
Demandante:	Don Remigio Torne		
Demandado:	Don Santiago Bernandini		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 31 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 13 de Noviembre de 1883		
Observaciones	El expediente suspendió su trámite desde el 6 de noviembre de 1880 y no se reanudó sino hasta el 13 de noviembre de 1883 en donde se realizó un acto de impulso sin posteriores consecuencias.		

Materia:	Juicio del recurso de nulidad sobre pago de cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	5		
Demandante:	Don Manuel Rodríguez		
Demandado:	Don Apolinario Vera		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 31 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 15 de Julio de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre partición y división de bienes		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	32		
Demandante:	Don José del Carmen y Don Candelario Godoy		
Demandado:	Luis Ojeda		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 31 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 15 de Abril de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre discernimiento de cargo de guardador		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	84		
Demandante:	Gertrudis Cepero		
Demandado:	Doña Antonia Heredia de Calzado		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 31 de Enero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 18 de Agosto de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	6		
Demandante:	Manuel Pacusí		
Demandado:	Don Pablo Monteghirfo		



Juzgado de inicio:	Lima
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 1 de Febrero de 1879
Fecha de término (último escrito)	Lima, 18 de Febrero de 1879
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio sobre reconocimientos de unos documentos y cantidad de francos		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	34		
Demandante:	Señores Althaus y Ferraud		
Demandado:	Don Fernando Casós		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 1 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 22 de Junio de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre desocupación		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	4		
Demandante:	Don Juan Albino		
Demandado:	Don Matías Salazar		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 1 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 13 de Febrero de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre falsificación		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	3		
Demandante:	Edilberto López Aliaga		
Demandado:	Doña María Tomasa Zamudio		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 1 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 17 de Febrero de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio para acreditar la necesidad y utilidad que resulta a la comunidad de San Agustín en vender el dominio directo que tiene al terreno en que se encuentra la huerta denominada "Salvi" o "San Nicolás"		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	25		
Demandante:	Don Felipe Nazela y Valle		
Demandado:	Minor Meiggs		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 1 de Febrero de 1879		
Fecha de término	Lima, 24 de Abril de 1880		

(último escrito)	
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	52		
Demandante:	Banco Nacional del Perú		
Demandado:	Don Juan Francisco Ramos		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 3 de febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 24 de Junio de 1887		
Observaciones	El expediente quedó pendiente de sentencia desde diciembre de 1880 y luego estuvo sin movimiento durante por más de 6 años. Recién el 14 de abril de 1887 se reactivó el proceso.		

Materia:	Juicio sobre remate de una finca		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	140		
Demandante:	Doña Josefa Farfán viuda de García		
Demandado:	Los herederos de Don Enrique Meiggs		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 3 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 1 de Mayo de 1889		
Observaciones	El expediente estuvo sin actividad hasta enero de 1884 en el que se presentó un solo escrito. Luego no tuvo más movimiento hasta 1889 en el que se presentó un escrito más (recusando al juez) pero sin posteriores consecuencias.		

Materia:	Juicio sobre se le reciba una información de utilidad y necesidad		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	8		
Demandante:	Doña Juana Manuela Lazo		
Demandado:	Don Nolberto Eléspuru		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 3 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 11 de Febrero de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre patria potestad de una menor de edad (hija de Doña Gertrudis Sagredo)		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	8		
Demandante:	Doña Gertrudis Sagredo		
Demandado:	Esteban Montano		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 4 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 1 de Marzo de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	12		
Demandante:	Juan Duthil		
Demandado:	Monasterio de la Encarnación		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 4 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 12 de Febrero de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre exhibición de títulos		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	4		
Demandante:	Don Diego Espichan Huapaya		
Demandado:	Doña Antonia Largarcho de Reyes		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 4 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 18 de Febrero de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio por entrega de un menor		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	14		
Demandante:	Doña Antonia Herreras		
Demandado:	Doña María del Rosario Moreno		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 5 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 17 de Febrero de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre indemnización de daños y perjuicios		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	12		
Demandante:	Don Ricardo Castellanos		
Demandado:	Don Carlos Castellanos		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 5 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 10 de Noviembre de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	8		
Demandante:	Don Victoriano O. Zavaleta		
Demandado:	Don Matías Bellido		
Fecha de Inicio (1°	Lima, 5 de Febrero de 1879		

Escrito)	
Fecha de término (último escrito)	Lima, 10 de Mayo de 1879
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio sobre entrega de un fundo		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	10		
Demandante:	Doña Vicenta Saldaña y hermanos		
Demandado:	Don Tiburcio Paz		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 5 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 9 de Setiembre de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre rescisión de un contrato		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	132		
Demandante:	Doña Manuela y Balbina Granada		
Demandado:	Doña Antonia Granados		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 5 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 5 de Abril de 1884		
Observaciones	El expediente estuvo suspendido por cuatro años hasta abril de 1884 cuando se solicitó la continuación del expediente sin posteriores consecuencias.		

Materia:	Juicio sobre inspección ocular		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	15		
Demandante:	Doña Carmen Pomiano viuda de Sotomayor		
Demandado:	Don Estanislao Ortega		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 5 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 1 de Marzo de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre pago de cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	48		
Demandante:	El Gerente del Banco de Crédito Hipotecario		
Demandado:	Don Tomas Ayllón		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 7 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 25 de Octubre de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre pago de actuaciones		
----------	----------------------------------	--	--

Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	11		
Demandante:	Don Vicente L. Nué		
Demandado:	Don Santiago Rocca		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 7 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 18 de Abril de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre pago de unos patentes que adeuda Don Enrique Meiggs		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	12		
Demandante:	El consejo departamental		
Demandado:	El Banco "La Providencia"		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 7 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 25 de Abril de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	30		
Demandante:	Don José María Varela		
Demandado:	Doña Petronila D. V. de Camogli		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 7 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 21 de Octubre de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre el incidente del inventario generales para la liquidación de la sociedad legal de los esposos Ojeda, que pende en el juicio de partición seguido por Luis Ojeda		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	15		
Demandante:	Miguel Rezzio (en representación de su esposa Juana Ojeda)		
Demandado:	Luis Ojeda		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 7 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 24 de Abril de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre concurso de Don Benito Calmet		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	49		
Demandante:	Don José Manuel Pancorbo		
Demandado:	Don José Benito Calmet		
Fecha de Inicio (1°	Lima, 8 de Febrero de 1879		



Escrito)	
Fecha de término (último escrito)	Lima, 8 de Febrero de 1880
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio por deuda de dinero a sus acreedores		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	8		
Demandante:	José Fermín Pérez		
Demandado:	Sus acreedores		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 8 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 18 de Febrero de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre rescisión de una venta		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	32		
Demandante:	Don Manuel Aguilar		
Demandado:	Don José Fernández		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 10 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 26 de Setiembre de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre entrega de tenencia de menores de edad		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	4		
Demandante:	Don José Eusebio Merino		
Demandado:	Doña Apolinaria del Carmen Abad		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 10 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 9 de Mayo de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre nulidad de contratos		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	155		
Demandante:	Don Fabricio Cáceres		
Demandado:	Don Juan Peral		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 11 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 19 de Noviembre de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre reconocimiento de documentos		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro

Total de fojas:	51
Demandante:	Bernardo Cárdenas
Demandado:	Doña Lorenza Ruesta
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 11 de Febrero de 1879
Fecha de término (último escrito)	Lima, 9 de Julio de 1880
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	55		
Demandante:	Don José Gutiérrez		
Demandado:	Don José Domingo Vera		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 11 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 30 de Marzo de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre deuda por cantidad en soles		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario	Otro
Total de fojas:	11		
Demandante:	Don José Benito Grela		
Demandado:	Juan Pasalagua		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 12 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 16 de Mayo de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre recusación		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	13		
Demandante:	Manuela Ricapa		
Demandado:	Julián Porfirio Contreras		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 12 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 24 de Mayo de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre pago de arrendamientos		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	8		
Demandante:	Don Juan Falco		
Demandado:	Don Manuel Molfino		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 12 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 16 de Mayo de 1879		

Observaciones	Sin observaciones
---------------	-------------------

Materia:	Sobre entrega de una menor Julia Lavado (custodia de la menor de edad)		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	10		
Demandante:	Doña Martina López		
Demandado:	Balbina Granados		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 12 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 14 de Noviembre de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio por tenencia de un menor de edad		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	14		
Demandante:	Antonia Heredia de Calzado		
Demandado:	Carlos Cepero		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 12 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 4 de Julio de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre reconocimiento de documentos		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	4		
Demandante:	Don Gregorio Seminario		
Demandado:	Don Grimaldo Villar		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 12 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 23 de Setiembre de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre desahucio		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	6		
Demandante:	Don Ashael Piper		
Demandado:	Carland		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 12 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 18 de Abril de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre devolución de documentos		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	12		
Demandante:	Doña Manuela Santo Domingo viuda de Herencia Cevallos		

Demandado:	Don Antonio Segovia
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 13 de Febrero de 1879
Fecha de término (último escrito)	Lima, 27 de Noviembre de 1879
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio por cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	26		
Demandante:	Don Manuel Quesada Luco		
Demandado:	Don Vicente Delgado		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 13 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 20 de Setiembre de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio por cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	19		
Demandante:	Don Andrés Rossi		
Demandado:	Don Antonio Viñal		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 13 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 27 de Octubre de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre cancelación de un documento		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	19		
Demandante:	Don Santiago Roggero		
Demandado:	Los herederos de Don Juan Falco		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 14 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 24 de Julio de 1885		
Observaciones	El expediente estuvo sin movimiento desde el 20 de febrero de 1879 hasta el 19 de mayo de 1885. Recién se sentenció en 1885.		

Número de Expediente:	Juicio sobre preferencia en el arrendamiento de una finca		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	19		
Demandante:	Don Mariano Loli		
Demandado:	Doña María Enríquez de Torres		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 14 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 6 de Mayo de 1879		

Observaciones	Sin observaciones
---------------	-------------------

Materia:	Para que se declare el fallecimiento intestado de su esposo José Chepote		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	4		
Demandante:	Doña Julia Heredia		
Demandado:			
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 14 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 15 de Febrero de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre deuda de 10 mil soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	129		
Demandante:	Representante de la dirección de la Beneficencia		
Demandado:	Mariano Salazar		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 14 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 20 de Agosto de 1888		
Observaciones	El expediente fue sentenciado en diciembre de 1880 y no tuvo movimiento hasta julio de 1884 cuando se presentó un escrito de impulso. El expediente se reactiva en 1888.		

Materia:	Juicio sobre despojo		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	69		
Demandante:	Don Marcos Sánchez		
Demandado:	Doña María Gutiérrez		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 14 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 5 de Octubre de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre entrega de una menor de edad		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	53		
Demandante:	Don Simón Carrillo		
Demandado:	Doña Adelaida Calmet		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 15 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 23 de Noviembre de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Incidentes de inventarios		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	5		



Demandante:	Julia Heredia
Demandado:	Don José Chepote
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 15 de Febrero de 1879
Fecha de término (último escrito)	Lima, 12 de Abril de 1879
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio sobre inspección ocular de cuarteles de caña quemada a Lomo Largo, cerca de dos fanegadas		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	38		
Demandante:	Don Juan Bryce y Francisco Espinoza		
Demandado:	Althaus y Ferraud		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 17 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 29 de Mayo de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre desocupación y entrega de unos pastos		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	45		
Demandante:	Don Genaro Maghela		
Demandado:	Don Victoriano Estrella		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 17 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 13 de Noviembre de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre dación de alimentos		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario	Otro
Total de fojas:	5		
Demandante:	Doña Amalia Ismodes		
Demandado:	Don Abel de la Torre Bueno		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 17 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 18 de Febrero de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio por cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario	Otro (Tercería excluyente)
Total de fojas:	6		
Demandante:	Don Manuel Ferreyros		
Demandado:	Doña Dominga Casquero		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 17 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 4 de Julio de 1879		

Observaciones	Sin observaciones
---------------	-------------------

Materia:	Juicio sobre reconocimiento de un documento		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	20		
Demandante:	Coronel Bibiano Gómez Silva		
Demandado:	Don Mariano Carmelino		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 18 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 26 de Agosto de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre recusación		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	15		
Demandante:	Don Juan Pino y campusano al Señor Juez Don José Miguel Vélez		
Demandado:	Don Manuel Llanos Chenet		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 18 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 18 de Setiembre 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	7		
Demandante:	Dominga Casquero		
Demandado:	Don Francisco Rivas		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 18 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 21 de Febrero de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre nombramiento de apoderado		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	3		
Demandante:	Geraldito Garlanos		
Demandado:	Grimaneza Althaus		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 18 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 19 de Abril de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio por cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	6		
Demandante:	José Castillo		

Demandado:	Convento de la Encarnación
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 18 de Febrero de 1879
Fecha de término (último escrito)	Lima, 19 de Febrero de 1879
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio sobre pago de preferencia		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	6		
Demandante:	Don Francisco Mariano Fernández		
Demandado:	Don Ignacio Aladia y el concurso de Don Manuel José Ramos		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 18 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 21 de Julio de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre desocupación de una finca		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	16		
Demandante:	Aurelio Rodrigo		
Demandado:	Vicente Delgado		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 18 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 30 de Mayo de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	160		
Demandante:	Don Santiago Roca		
Demandado:	Don Andrés Raffo		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 18 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 29 de Mayo de 1897		
Observaciones	La sentencia fue apelada en diciembre de 1879 y el expediente no tuvo movimiento hasta julio de 1893 cuando se reactivó.		

Materia:	Juicio sobre copia de los títulos de la "Hacienda Esmuche", situada en Cajamarca		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	20		
Demandante:	Andres Silva Santisteban		
Demandado:	Juez de 1° instancia		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 19 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 20 de Febrero de 1886		
Observaciones	El expediente estuvo sin movimiento desde su presentación		

	hasta noviembre de 1885.
--	--------------------------

Materia:	Juicio por cuentas		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	93		
Demandante:	Daniel de los Heros, José de la Riva Agüero, Manuel Fernando Gómez y Ángel Arana		
Demandado:	Convento de la Buena muerte		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 19 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 24 de Mayo de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre pago de cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	34		
Demandante:	Don Manuel Chepote		
Demandado:	Doña Francisca Ramos		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 19 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 19 de Junio de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio por cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario	Otro
Total de fojas:	37		
Demandante:	Doña Antonia Granadas		
Demandado:	Doña Manuela y Doña Balbina Granados		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 20 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 5 de Setiembre de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre desahucio		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	14		
Demandante:	Juan Falco		
Demandado:	Manuel Molfina		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 20 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 5 de Junio de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre devolución de un dote		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	9		
Demandante:	Vicenta Sabido		

Demandado:	Leoncio Zavaleta
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 20 de Febrero de 1879
Fecha de término (último escrito)	Lima, 13 de Agosto de 1879
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio sobre entrega de especies o ropa de uso		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	4		
Demandante:	Gertrudis Sagredo viuda de Cuadra		
Demandado:	Doña Julia Sagredo		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 20 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 15 de Abril de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio por cantidad en soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	23		
Demandante:	Don Agustín Suerias		
Demandado:	Juan Manuel Osores		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 21 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 26 de Febrero de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	13		
Demandante:	Fourcade y Combi		
Demandado:	Nicanor Tejerina		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 21 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 26 de Mayo de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre propiedad de la mina de San Luis-Jauja		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	22		
Demandante:	Don Luis Salaverry		
Demandado:	Don José Chater		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 21 de febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 12 de Setiembre de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		



Materia:	Juicio por rendición de cuentas		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	110		
Demandante:	Don José Muro		
Demandado:	Don Valentín Gil		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 21 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 29 de Noviembre de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre reconocimientos de unos documentos		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	22		
Demandante:	Don Wenceslao Taña		
Demandado:	Juan Arévalo Villacís		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 27 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 13 de Noviembre de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre pago de contribución de predios		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	6		
Demandante:	El consejo provincial		
Demandado:	Convento de la Merced		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 29 de Febrero de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 22 de Enero de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre inspección ocular		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	8		
Demandante:	Don Domingo Roggero		
Demandado:	Don Manuel Molfino		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 12 de Marzo de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 23 de Abril de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio de concurso de bienes		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	12		
Demandante:	Doña Juana Delmira Ojeda		
Demandado:	Gregorio Benavides		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 13 de Marzo de 1879		

Fecha de término (último escrito)	Lima, 3 de Junio de 1879
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio sobre pago de cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	20		
Demandante:	Don José Derescori		
Demandado:	José Osorio		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 14 de Marzo de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 8 de Setiembre de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre autorización para reparar y arrendar una fabrica		
Procedimiento:	Ordinario (X)	Sumario	Otro
Total de fojas:	7		
Demandante:	Domingo Roggero		
Demandado:	Manuel Molfinos		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 20 de Marzo de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 13 de Mayo de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre protocolización de la escritura privada		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	2		
Demandante:	Avelino Cisneros y Guillermo Rodríguez		
Demandado:	Venencia Pérez		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 21 de Marzo de de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 21 de Marzo de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio por cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	15		
Demandante:	Esteban Meredo		
Demandado:	Benjamín Piase		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 28 de Marzo de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 13 de Octubre de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre cinco cargas de plata sellada pertenecientes al estado		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro

Total de fojas:	21
Demandante:	Don Francisco Flores Chinarro
Demandado:	Lucas Bedoya
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 29 de Marzo de 1879
Fecha de término (último escrito)	Lima, 7 de Noviembre de 1879
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	56		
Demandante:	Ezequiel Vega		
Demandado:	Don Cipriano Torres		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 31 de Marzo de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 27 de Mayo de 1887		
Observaciones	El expediente estuvo sin actividad desde 1880 hasta 1885.		

Materia:	Juicio sobre inspección ocular		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	10		
Demandante:	Paula Mere		
Demandado:	Don Enrique Thol		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 5 de Abril de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 26 de Abril de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre albacea de la testamentaria de Don Ramón Sarrio		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario	Otro
Total de fojas:	30		
Demandante:	Doctor Germán Tejada		
Demandado:	Don Ramón Sarrio y Comparet		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 15 de Abril de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 7 de Julio de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre otorgamiento de una escritura de venta		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	79		
Demandante:	Don Luciano Domas		
Demandado:	Doña Dolores Montoya		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 15 de Abril de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 21 de Diciembre de 1880		

Observaciones	Sin observaciones
---------------	-------------------

Materia:	Juicio sobre que se abone la diferencia que le resulta en el pago de su crédito que se le ha hecho en billetes de banco.		
Procedimiento:	Ordinario (X)	Sumario	Otro
Total de fojas:	41		
Demandante:	Don Juan Laboup		
Demandado:	Don Pedro Arrese		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 15 de Abril de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 21 de Mayo de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre desahucio		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	6		
Demandante:	José Ríos		
Demandado:	Gregorio Peña		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 15 de Abril de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 28 de Mayo de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	21		
Demandante:	Rosa Larraín		
Demandado:	Julio Arnaldo Phlucker		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 15 de Abril de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 31 de Julio De 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre reconocimiento de dos pagares		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	7		
Demandante:	Carmen Garay y Antonio Chepote		
Demandado:	Doña Julia Heredia		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 15 de Abril de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 5 de Mayo de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	3		
Demandante:	Isabel Beleván		

Demandado:	Cipriano Correa
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 22 de Abril de 1879
Fecha de término (último escrito)	Lima, 5 de Mayo de 1879
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio por pago de arrendamiento		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	11		
Demandante:	Aurelio Rodrigo		
Demandado:	Vicente Delgado		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 23 de Abril de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 18 de Junio de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio por pago indebido		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	24		
Demandante:	Señores Dreyffus Hermanos		
Demandado:	Consejo departamental de Lima		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 14 de Mayo de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 12 de Setiembre de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre amparo en posición del callejón de la calle de Capón		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	23		
Demandante:	Rosalía Velasco (propietaria del callejón de la calle de Capón) y los asiáticos		
Demandado:	Señor alcalde municipal de lima		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 15 de Mayo de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 17 de Junio de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre interdicción de una alhaja		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	34		
Demandante:	Doña Bernarda Córdova		
Demandado:	Doña Carmen Varas		
Juzgado de inicio:	Lima		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 19 de Mayo de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 4 de Mayo de 1880		



Observaciones	Sin observaciones
---------------	-------------------

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	18		
Demandante:	Doña Josefa Hernán		
Demandado:	Doña Gregoria Haya		
fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 8 de Mayo de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 23 de Junio de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre desahucio		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	72		
Demandante:	Don Juan Raggio		
Demandado:	Antonio Benavides		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 8 de Mayo de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 27 de Octubre de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre rendición de cuentas		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	15		
Demandante:	Don Nicanor José Lagastegni		
Demandado:	Don Manuel Pasós		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 15 de Mayo de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 28 de Mayo de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre nombramiento de liquidador		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	31		
Demandante:	Don Juan Pazos		
Demandado:	Don José Muro		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 23 de Mayo de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 12 de Noviembre de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre pago de arrendamientos		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	7		
Demandante:	Doña Josefa Panizo (apoderado Jaime Pacheco)		
Demandado:	Don Jaime Pacheco		

Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 2 de Junio de 1879
Fecha de término (último escrito)	Lima, 1 de Julio de 1879
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio sobre remate de una finca de los menores herederos		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	12		
Demandante:	Mercedes Abasolo (madre de los menores herederos)		
Demandado:	Máximo Félix Torres		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 12 de Junio de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 24 de Julio de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre el cobro de unas hipotecas		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	70		
Demandante:	Schroda		
Demandado:	Nicanor Álvarez Calderón		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 7 de Julio de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 9 de Noviembre de 1882		
Observaciones	Suspendido desde 1880, el expediente se reanuda en 1882 ante el juez de letras de Lima y se deriva a la decisión de un juez compromisario.		

Materia:	Juicio sobre formación de titulo supletorios		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	19		
Demandante:	Doña Rosa Garay		
Demandado:	Doña Juana Garay		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 29 de Agosto de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 20 de Mayo de 1900		
Observaciones	El expediente dejó de tener actividad en 1880 hasta 1890 cuando recibió un escrito de impulso. Su actuación a lo largo del expediente es esporádica.		

Materia:	Juicio sobre reconocimiento de documento		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	8		
Demandante:	Don Joaquín Ferreiras		
Demandado:	Don José Narváez		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 4 de Setiembre de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 15 de Setiembre de 1879		

Observaciones	Sin observaciones
---------------	-------------------

Materia:	Juicio sobre reconocimiento de documento		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	3		
Demandante:	Don Franco Viale y compañía		
Demandado:	Don Antonio Balletto		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 4 de Setiembre de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 11 de Setiembre de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre cuentas		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	53		
Demandante:	Don Nicanor Barrios		
Demandado:	Don Ricardo Barrios		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 29 de Octubre de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 14 de Noviembre de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	52		
Demandante:	Don José Beniso y Benito Tasano		
Demandado:	Don Agustín Zolezzi y hermanos		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 30 de Octubre de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 4 de Mayo de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre otorgamiento de una escritura		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	5		
Demandante:	Doña Francisca Rivera de Balbi		
Demandado:	Doña Isabel Barreda viuda de Mendoza		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 13 de Noviembre de 1879		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 31 de Noviembre de 1879		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre repartición y división y orden de remate la finca de su pueblo entre la plaza Chávez y la plaza de Armas con 692 metros cuadrados de área.		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	3		

Demandante:	Don Luis García
Demandado:	Doña Isabel Luza
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 29 de Diciembre de 1879.
Fecha de término (último escrito)	Lima, 14 de Enero de 1880.
Observaciones	Sin observaciones

## 2. Año 1879: Expedientes Criminales.

Materia:	Juicio sobre injurias y maltratos
Total de fojas:	22
Agraviado:	Doña María Juárez y Fernández
Acusado:	Doña María Horna
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 17 de Noviembre de 1879
Fecha de término (último escrito)	Lima, 25 de Mayo de 1880
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio sobre lesiones
Total de fojas:	35
Agraviado:	Doña Josefa Olivares
Acusado:	Don Vicente Villafuerte
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 26 de Diciembre de 1879
Fecha de término (último escrito)	Lima, 17 de Mayo de 1880
Observaciones	Sin observaciones

## 3. Año 1880: Expedientes Civiles.

Materia:	Juicio sobre amparo en posesión de un huerta apelada por el 1		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario	Otro
Total de fojas:	50		
Demandante:	Ramón de la Rosa Rodríguez		
Demandado:	Rosa Conde		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 2 de Enero de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 10 de Agosto de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio por cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	46		
Demandante:	Don José Castillo		
Demandado:	Doña Juliana Heredia		

Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 2 de Enero de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 30 de Julio de 1880
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio sobre tacha de algunos testigos		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	26		
Demandante:	Carlos Pflucker y hermanos		
Demandado:	Madalengoitia		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 2 de Enero de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 20 de Enero de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre alimentos		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	11		
Demandante:	Bárbara Castro de Prieto		
Demandado:	Don José Fermín Prieto		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 2 de Enero de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 12 de Junio de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre testamentaria		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	19		
Demandante:	Doña Francisca Ramos de Casanueva		
Demandado:	Don Antonio Joaquín Ramos y esposa		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 3 de Enero de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 30 de Abril de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre que se le conceda autorización judicial para administrar y disponer libremente de sus bienes		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	40		
Demandante:	Doña Josefina de los Ríos de Carrera		
Demandado:	Don Juan Antonio Carrera		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 3 de Enero de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 4 de Febrero de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre retención		
----------	------------------------	--	--



Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	7		
Demandante:	Don Enrique Carrera		
Demandado:	Claudio Estevenson		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 3 de Enero de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 6 de Febrero de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	8		
Demandante:	Don José Campos		
Demandado:	Don José Dolores Castro		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 3 de Enero de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 5 de Febrero de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre revisión de un contrato		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	7		
Demandante:	Don Simón Soto		
Demandado:	Don Nicolás Bacigalupo		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 7 de Enero de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 20 de Enero de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	3		
Demandante:	Don Pablo Zirhucos		
Demandado:	Don Federico Carrillo y otros		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 8 de Enero de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 7 de Febrero de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre una propiedad		
Procedimiento:	Ordinario (X)	Sumario	Otro
Total de fojas:	19		
Demandante:	Doña Josefa Farfán viuda de García		
Demandado:	Los Herederos de Enrique Meiggs		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 9 de Enero de 1880		
Fecha de término	Lima, 23 de Enero de 1880		

(último escrito)	
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	41		
Demandante:	Don Augusto Althaus		
Demandado:	Sebastián Bernante		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 9 de Enero de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 5 de Enero de 1884		
Observaciones	El expediente fue materia de transacción en 1880 y quedó suspendido hasta el 22 de noviembre de 1883 cuando se presenta un escrito de impulso.		

Materia:	Juicio sobre reconocimiento absolución de posiciones		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario	Otro
Total de fojas:	21		
Demandante:	Don Ángel Arana		
Demandado:	Don Josefa del Busto y Don Manuel Félix Fuertes		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 10 de Enero de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 18 de Diciembre de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre indemnización de daños y perjuicios		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	15		
Demandante:	Don Ángel Nicoletti		
Demandado:	José María Sancho		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 10 de Enero de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 14 de Abril de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre mejoras		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	15		
Demandante:	Don Pedro Miller		
Demandado:	Doña Sabina Rosas		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 10 de Enero de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 5 de Abril de 1888		
Observaciones	El expediente estuvo sin actividad desde 1880 hasta 1888. Su último acto fue una apelación contra la sentencia la misma que recién fue resuelta en 1888.		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles de una suerte		
----------	--	--	--

Procedimiento:	Ordinario (X)	Sumario	Otro
Total de fojas:	39		
Demandante:	Don Juan francisco Araujo		
Demandado:	Dirección de Beneficencia de esta capital		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 12 de Enero de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 30 de Abril de 1900		
Observaciones	El expediente estuvo sin actividad desde mayo de 1880 durante 20 años. En 1900 se presentó un escrito de impulso sin efectos posteriores.		

Materia:	Juicio sobre depósito de bienes del concurso		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	250		
Demandante:	Don Felipe Masías		
Demandado:	Don Ignacio Abadía		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 13 de Enero de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 9 de Abril de 1889		
Observaciones	El expediente estuvo sin actividad desde diciembre de 1880 hasta 1886 cuando se reactiva.		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	6		
Demandante:	Banco Territorial Hipotecario		
Demandado:	Hipólito Mata Calinares		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 13 de Enero de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 4 de Octubre de 1882		
Observaciones	Las actuaciones en Lima son de 1880 cuando dispuso oficial al juzgado de Pisco. Este juzgado mandó su respuesta en enero de 1882. El juzgado de letras realizó un par de anotaciones pero el expediente no se reactivó.		

Materia:	Juicio por cantidad de pesos		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	33		
Demandante:	Don Francisco García		
Demandado:	Don Hilario Zavaleta		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 13 de Enero de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 30 de Octubre de 1883		
Observaciones	El expediente se quedó sin actividad desde noviembre de 1889 hasta el 30 de octubre de 1883 cuando se reactiva.		

Materia:	Juicio sobre cantidad de dinero		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro

Total de fojas:	22
Demandante:	Vicente Pazos
Demandado:	Teodoro Thorne
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 14 de Enero de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 17 de Mayo de 1887
Observaciones	El expediente se quedó sin actividad desde septiembre de 1880 hasta septiembre de 1886 cuando se reactiva.

Materia:	Juicio por alimentos		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (X)	Otro
Total de fojas:	59		
Demandante:	Doña Amalia Ismodes		
Demandado:	Don Abel Torres Bueno		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 15 de Enero de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 26 de Setiembre de 1884		
Observaciones	El expediente se quedó sin actividad desde diciembre de 1880 hasta mayo de 1884 cuando se reactiva.		

Materia:	Juicio por tercería por derecho a cantidad en soles		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	7		
Demandante:	Pedro José Zavala		
Demandado:	Santiago Orezzaoli		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 20 de Enero de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 23 de Julio de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	40		
Demandante:	Don Antonio Beramendi		
Demandado:	Don Enrique del Campo		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 21 de Enero de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 17 de Agosto de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre remate de un anillo de brillantes		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	72		
Demandante:	Doña Ventura Maldonado		
Demandado:	Don Manuel del Busto		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 22 de Enero de 1880		

Fecha de término (último escrito)	Lima, 14 de Diciembre de 1883
Observaciones	E expediente se quedó sin actividad desde diciembre de 1880 hasta el 14 de noviembre de 1883 cuando se emite una última resolución.

Materia:	Juicio sobre deslinde		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	50		
Demandante:	Doña Antonia Navarrete de Chávez		
Demandado:	Doña Mercedes Saldamando		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 23 de Enero de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 24 de Abril de 1894		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde noviembre de 1880 hasta julio de 1884 cuando se reactiva.		

Materia:	Juicio sobre entrega de unos asiáticos		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	32		
Demandante:	Don Miguel Ingunza		
Demandado:	Don Joaquín Miro Quesada		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 24 de Enero de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 2 de Agosto de 1884		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde octubre de 1880 hasta el 6 de noviembre de 1883 cuando se reactiva.		

Materia:	Juicio sobre entrega de la mitad de los beneficios de la acción de 10 mil soles del Banco Hipotecario		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	29		
Demandante:	Doña Rosalía Quimper de Murga		
Demandado:	Los herederos del señor José Ureta		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 26 de Enero de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 29 de Setiembre de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	12		
Demandante:	Banco de Londres Méjico y Sudamérica		
Demandado:	Don Bernardo Marrón		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 27 de Enero de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 15 de Abril de 1880		



Observaciones	Sin observaciones
---------------	-------------------

Materia:	Juicio sobre absolución de posiciones		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	4		
Demandante:	Don José Durand		
Demandado:	Don León Boufet		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 28 de Enero de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 5 de Febrero de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre despojo		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	20		
Demandante:	Don Juan Estupuma		
Demandado:	Don Liberato Cagua		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 30 de Enero de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 30 de Abril de 1900		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde mayo de 1880 hasta el 30 de abril de 1900 cuando se presentó un escrito de impulso sin posteriores consecuencias.		

Materia:	Juicio sobre dación de un testamento		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	4		
Demandante:	Don Francisco Calderón		
Demandado:	José Luis Paz Soldán		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 30 de Enero de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 5 de Mayo de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre tercera		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario	Otro
Total de fojas:	32		
Demandante:	Don Antonio Salazar		
Demandado:	Don Guillermo Shell		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 4 de Febrero de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 20 de Octubre de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio por concurso		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	44		

Demandante:	El Banco Territorial Hipotecario
Demandado:	Hipólito Mata Linares
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 4 de Febrero de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 12 de Diciembre de 1893
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde agosto de 1880 hasta octubre de 1890 cuando se reactiva.

Materia:	Juicio sobre propiedad de unos terrenos		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	48		
Demandante:	Don Juan Thorndike		
Demandado:	Don Miguel Frefogli		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 4 de Febrero de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 2 de Enero de 1897		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde julio de 1880 hasta junio de 1895 cuando se reactiva.		

Materia:	Juicio sobre la entrega de capitales para que este no innove		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	42		
Demandante:	Don José Durand		
Demandado:	Don León Boufet		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 5 de Febrero de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 19 de Abril de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	37		
Demandante:	Don Federico Averdieck		
Demandado:	Don Luis Kuffré		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 6 de Febrero de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 20 de Mayo de 1886		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde diciembre de 1880 hasta abril de 1886 cuando se reactiva.		

Materia:	Juicio sobre absolución de posiciones		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	15		
Demandante:	Doña Manuela Calero		
Demandado:	Doña Dominga Bahamonde y Don Manuel Bahamonde		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 8 de Febrero de 1880		
Fecha de término	Lima, 6 de Agosto de 1880		

(último escrito)	
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio de indemnización por los delitos de robo y homicidio frustrado		
Procedimiento:	Ordinario(X)	Sumario	Otro
Total de fojas:	102		
Demandante:	Don Luis Machiavello		
Demandado:	Asiático Asen y cómplices		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 13 de Febrero de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 28 de Mayo de 1890		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde noviembre de 1880 hasta noviembre de 1989 cuando se reactiva.		

Materia:	Juicio sobre remate de prenda		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	75		
Demandante:	Don Thomas Dovvson		
Demandado:	Don Pedro Telmo Larrañaga		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 16 de Febrero de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 25 de Junio de 1890		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde julio de 1880 hasta noviembre de 1889 cuando se reactiva.		

Materia:	Juicio sobre emancipación		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	8		
Demandante:	María Navarro viuda de Mazo, Leonardo del Mazo y Luis Mateo del Mazo		
Demandado:	Don Manuel del Mazo		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 11 de Marzo de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 26 de Enero de 1883		
Observaciones	El expediente quedó suspendido desde su interposición y en 1882 fue proveído por el Juez de Letras que resolvió en audiencia en 1883.		

Materia:	Juicio sobre desahucio		
Procedimiento:	Ordinario (X)	Sumario	Otro
Total de fojas:	75		
Demandante:	Don Manuel Isarnátegui		
Demandado:	Don Mariano Laos		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 20 de Marzo de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 29 de Mayo de 1888		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde diciembre de 1880. En		

	noviembre de 1882 se presentó un escrito ante el Juzgado de Letras sin efectos posteriores. El expediente se reactivó en noviembre de 1884.
--	---

Materia:	Juicio por pago de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	22		
Demandante:	Don Lucas León		
Demandado:	Don Pedro Villavicencio		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 30 de Marzo de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 2 de Junio de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre los bienes del concurso de acreedores del finado		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	11		
Demandante:	Don Hipólito de Mata Linares		
Demandado:	Banco Territorial Hipotecario		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 30 de Marzo de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 20 de Abril de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Expediente de reconocimiento		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	50		
Demandante:	Manuel Moreno Maíz		
Demandado:	María Moreno		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 31 de Marzo de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 20 de Agosto de 1896		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde octubre de 1880 hasta noviembre de 1884 cuando se reactivó.		

Materia:	Juicio sobre renuncia del cargo de Albacea		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	10		
Demandante:	Don Alejandro Menacho		
Demandado:	Don Juan Menacho		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 1 de Abril de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 17 de Febrero de 1886		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde abril de 1880 hasta diciembre de 1884 cuando se reactivó.		

Materia:	Juicio sobre nulidad de rescisión		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro

Total de fojas:	106
Demandante:	Doña Rosa León
Demandado:	Don Carlos Blanchard
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 1 de Abril de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 19 de Diciembre de 1888
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde octubre de 1880 hasta diciembre de 1883 cuando se reactivó.

Materia:	Juicio sobre interdicción		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	5		
Demandante:	Roberto Aliaga		
Demandado:	Juan Puente		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 5 de Abril de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 12 de Diciembre de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre remoción de depositario		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	12		
Demandante:	José García y García		
Demandado:	Francisco Ballén		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 5 de Abril de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 2 de Setiembre de 1881		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde mayo de 1880. Existe un escrito de septiembre de 1881 sin efectos posteriores.		

Materia:	Juicio sobre propiedad del fundo de “Armellones”		
Procedimiento:	Ordinario (X)	Sumario	Otro
Total de fojas:	94		
Demandante:	Manuela Burlínee		
Demandado:	Manuel Ismael Peláez		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 5 de Abril de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 29 de Abril de 1889		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde abril de 1880 hasta el 13 de noviembre de 1881 cuando se reactivó.		

Materia:	Juicio sobre rectificaciones de la división y partición de bienes		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	64		
Demandante:	Doña Juana Osambela de Vera		
Demandado:	Los herederos de Don Martín Osambela		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 8 de Abril de 1880		



Fecha de término (último escrito)	Lima, 18 de Agosto de 1885
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde diciembre de 1880 hasta diciembre de 1884 cuando se reactivó.

Materia:	Juicio sobre cobro de pesos		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario	Otro
Total de fojas:	61		
Demandante:	Juan Gildemeister y Compañía		
Demandado:	Guillermo Sheel		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 13 de Abril de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 23 de Agosto de 1883		
Observaciones	El expediente no tuvo movimiento desde su presentación. En 1882 este expediente fue recogido por el Juzgado de Letras quien le dio el trámite correspondiente y lo derivó al juez árbitro correspondiente. Este proceso quedó terminado en agosto de 1883.		

Materia:	Juicio sobre inspección ocular		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	15		
Demandante:	Don Fidel Garma		
Demandado:	Don Joaquín Miro Quezada		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 14 de Abril de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 3 de Setiembre de 1884		
Observaciones	El expediente quedó sin movimiento desde abril de 1880 hasta agosto de 1884 cuando se reactivó.		

Materia:	Juicio sobre aumento de pago de un canon y demás deducido		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	158		
Demandante:	Manuel Sevilla		
Demandado:	Personero del convento de la Merced		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 16 de Abril de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 1 de Diciembre de 1884		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde octubre de 1880 hasta diciembre de 1883 cuando se reactivó.		

Materia:	Juicio sobre desahucio		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	60		
Demandante:	Convento de San Agustín		
Demandado:	Don Nicanor Tejerina		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 17 de Abril de 1880		
Fecha de término	Lima, 2 de Noviembre de 1900		

(último escrito)	
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde junio de 1880 hasta mayo de 1885 cuando se reactivó.

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	92		
Demandante:	Don Juan White		
Demandado:	Don Carlos Wilson		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 17 de Abril de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 2 de Agosto de 1900		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde julio de 1880 hasta enero de 1884 cuando se reactivó.		

Materia:	Juicio sobre herencia de testamento		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	25		
Demandante:	Aurelio Bravo		
Demandado:	Don Manuel Bravo		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 19 de Abril de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 17 de Noviembre de 1883		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad en diciembre de 1880 hasta noviembre de 1883 cuando se presentaron dos escritos de impulso sin efectos posteriores.		

Materia:	Juicio sobre despojo de una casa		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	32		
Demandante:	Doña Buriana Elisa Rubio		
Demandado:	Don Domingo Dellepiane		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 21 de Abril de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Cerro de Pasco, 15 de Octubre de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	27		
Demandante:	Don Manuel Rezzo		
Demandado:	Don Antonio Faydel		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 21 de Abril de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 7 de Febrero de 1884		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad en diciembre de 1880 hasta enero de 1884 cuando se presentó un escrito de impulso y se emitió una resolución final.		

Materia:	Juicio sobre la nulidad de una renta vitalicia		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	72		
Demandante:	Don José López Hornillo		
Demandado:	Doña Petronila Ocharán		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 21 de Abril de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 19 de Enero de 1888		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde diciembre de 1880 hasta diciembre de 1887 cuando se reactivó.		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	45		
Demandante:	José María García		
Demandado:	Don Guillermo Raineri		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 27 de Abril de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 18 de Mayo de 1888		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde el 24 de diciembre de 1880 hasta noviembre de 1883 cuando se reactivó.		

Materia:	Juicio sobre deuda de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	18		
Demandante:	Don José Reyna		
Demandado:	Señor General Torcelledo		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 29 de Abril de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 17 de Noviembre de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre reconocimiento de un documento		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	50		
Demandante:	Don Enrique Trevanion		
Demandado:	Don Guillermo Speedie		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 30 de Abril de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 16 de Enero de 1884		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde noviembre de 1880 hasta noviembre de 1883 cuando se reactivó.		

Materia:	Juicio sobre concurso voluntario		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	123		
Demandante:	E.F. Wreghtk y de los señores Ibboltsini brothers y Company		

	Limited
Demandado:	Manuel Cisneros
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 1 de Mayo de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 1 de Julio de 1886
Observaciones	El expediente quedó sin actividad el 24 de diciembre de 1880 hasta diciembre de 1883 cuando se reactivó.

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	52		
Demandante:	Don Pedro Crespo		
Demandado:	Don Andrés Menéndez		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 2 de Mayo de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 6 de Diciembre de 1880		
¿Qué dice en ese escrito?:	A los autos en citación a los interesados.		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre pago de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	131		
Demandante:	Don Juan Copello y otros		
Demandado:	Don Hermógenes Maurtua		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 3 de Mayo de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 22 de Diciembre de 1886		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde diciembre de 1880 hasta diciembre de 1886 cuando se reactivó.		

Materia:	Juicio de traslado de deposito		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	26		
Demandante:	Don Augusto Cavada		
Demandado:	Doña Rosa Toledo viuda de Ventura		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 7 de Mayo de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 17 de Junio de 1884		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde el 24 de diciembre de 1880 hasta el 17 de junio de 1884 cuando se presentó un escrito de impulso sin efectos posteriores		

Materia:	Juicio sobre un intestado		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	18		
Demandante:	Don Leónidas del Campo		
Demandado:	Doña Rosa Ascasivar		

Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 8 de Mayo de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 27 de Noviembre de 1883
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde julio de 1880 hasta noviembre de 1883 cuando se reactivó

Materia:	Juicio sobre entrega de muebles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	42		
Demandante:	Doña Dolores Ulloa		
Demandado:	Don Mariano Jurado		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 12 de Mayo de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 15 de Noviembre de 1883		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde noviembre de 1880 hasta noviembre de 1883 cuando se presentó un escrito de impulso sin efectos posteriores.		

Materia:	Juicio por cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	16		
Demandante:	Doña Manuela Pumaruc		
Demandado:	Don Luis Kuffre		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 13 de Mayo de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 2 de Julio de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio por bienes de propiedad		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	12		
Demandante:	Doña Concepción Laynes		
Demandado:	Don Francisco Aguilar		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 13 de Mayo de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 26 de Mayo de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre rendición de cuentas		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	5		
Demandante:	Don Eugenio Morán		
Demandado:	Don Andrés Navarro		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 18 de Mayo de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 16 de Noviembre de 1894		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde mayo de 1880 hasta		



	noviembre de 1894 cuando se presentó un escrito de impulso sin efectos posteriores.
--	---

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	80		
Demandante:	Doña Josefa Mejía viuda de Injoque		
Demandado:	Don Mariano Cevallos		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 20 de Mayo de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 19 de Agosto de 1892		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde diciembre de 1880 hasta abril de 1887 cuando se reactivó		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	20		
Demandante:	Doña Magdalena Loayza de Moncloa Cesionaria del señor Don Lorenzo Chiulizza		
Demandado:	Don Manuel Olivares		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 20 de Mayo de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 25 de Abril de 1884		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde noviembre de 1880 hasta abril de 1884 cuando se reactivó		

Materia:	Juicio sobre derecho a una finca		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	148		
Demandante:	Don Fermín Ríos		
Demandado:	Doña Rosa Carvallo		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 21 de Mayo de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 21 de Marzo de 1893		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde octubre de 1880 hasta mayo de 1884 cuando se reactivó		

Materia:	Juicio sobre retención		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	70		
Demandante:	Don Francisco García Calderón		
Demandado:	Don Luis Roca y Bologna		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 21 de Mayo de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 26 de Noviembre de 1888		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde julio de 1880 hasta diciembre de 1884 cuando se reactivó		

Materia:	Juicio sobre depósito de cantidad de francos		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	28		
Demandante:	Don Juan Fuentes		
Demandado:	Don Antonio Opisso		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 26 de Mayo de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 7 de Diciembre de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre desistimiento de un remate		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	7		
Demandante:	Don Nicolás Miranda		
Demandado:	Don Augusto Cabada		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 26 de Mayo de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 24 de Julio de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre aumento de arrendamientos		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	14		
Demandante:	Doña Vicenta Cerreño de Estenos		
Demandado:	La Beneficencia de esta capital		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 26 de Mayo de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 10 de Agosto de 1887		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde agosto de 1880 hasta septiembre de 1884 cuando se reactivó		

Materia:	Inspección ocular		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	39		
Demandante:	Don Anselmo Gonzales		
Demandado:	Doña Estefanía Ferry		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 28 de Mayo de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 17 de Noviembre de 1885		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde octubre de 1880 hasta noviembre de 1885 cuando se intentó reactivar sin efectos posteriores		

Materia:	Juicio sobre bienes de un intestado		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	23		
Demandante:	Don Enrique Salas		
Demandado:	Don Justo Salas		

Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 28 de Mayo de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 5 de Diciembre de 1883
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde octubre de 1880 hasta diciembre de 1883 cuando se presentó un escrito de impulso sin efectos posteriores.

Materia:	Juicio sobre nulidad de un contrato		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	70		
Demandante:	Don José Toribio García		
Demandado:	Don Pedro Martín		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 31 de Mayo de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 14 de Octubre de 1890		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde diciembre de 1880 hasta diciembre de 1883 cuando se reactivó		

Materia:	Juicio sobre desahucio		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	53		
Demandante:	José del Campo		
Demandado:	Antonio Cossío		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 31 de Mayo de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 14 de Noviembre de 1885		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde octubre de 1880 hasta noviembre de 1885 cuando se presentó un escrito de impulso sin efectos posteriores.		

Materia:	Juicio sobre alimentos		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	60		
Demandante:	Doña Virginia Menéndez		
Demandado:	Antonio Menéndez		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 1 de Junio de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 7 de Abril de 1888		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde diciembre de 1880 hasta febrero de 1884 cuando se reactivó.		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	28		
Demandante:	Don Francisco Falcón		
Demandado:	Don José María Balbi		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 2 de Junio de 1880		

Fecha de término (último escrito)	Lima, 28 de Octubre de 1880
Observaciones	Sin observaciones.

Materia:	Juicio sobre deuda de cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	130		
Demandante:	Don Juan Avilés		
Demandado:	Don Nicanor Tongsson		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 3 de Junio de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 20 de Octubre de 1882		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde septiembre de 1880 hasta noviembre de 1881 cuando el Juzgado de Letras retomó la tramitación del juicio derivándolo al conocimiento de un juez compromisario. El expediente terminó el 19 de octubre de 1882.		

Materia:	Juicio sobre cantidad de pesos		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	6		
Demandante:	Don Juan Dibarrú		
Demandado:	Doña Juana de Piérola		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 4 de Junio de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 4 de Setiembre de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre desocupación de un fundo y pago de arrendamientos		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	48		
Demandante:	Don Francisco Prada		
Demandado:	Don José Rafael Lepiani		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 5 de Junio de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 15 de Noviembre de 1883		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde diciembre de 1880 hasta noviembre de 1883 cuando recibió un escrito de impulso sin posteriores consecuencias.		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	90		
Demandante:	Don Gregorio Pinto		
Demandado:	Don Pedro José Sevilla		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 7 de Junio de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 5 de Mayo de 1884		

Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde diciembre de 1880 hasta diciembre de 1883 cuando se reactivó
---------------	--

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (X)	Sumario	Otro
Total de fojas:	80		
Demandante:	Enriqueta Heudebert		
Demandado:	Don Guillermo Alzamora		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 8 de Junio de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 4 de Febrero de 1888		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde el 24 de diciembre de 1880 hasta abril de 1885 cuando se reactivó		

Materia:	Juicio sobre nulidad de un contrato		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	50		
Demandante:	Don José López Hornillos		
Demandado:	Doña Petronila Ocharán		
fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 9 de Junio de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 3 de Junio de 1887		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde septiembre de 1880 hasta noviembre de 1883 cuando se reactivó		

Materia:	Juicio sobre devolución de unas alhajas		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	4		
Demandante:	Doña Gertrudis Ángeles		
Demandado:	Don Marcos Suaso		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 10 de Junio de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 17 de Junio de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre entrega de certificados		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	106		
Demandante:	Don Francisco Tazos		
Demandado:	Don José Miró		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 10 de Junio de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 8 de Agosto de 1891		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde diciembre de 1880 hasta noviembre de 1883 cuando se reactivó.		

Materia:	Misión en posesión de unas fincas		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro



Total de fojas:	30
Demandante:	Doña Elena laos de la Puente
Demandado:	Don Mariano Laos
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 12 de Junio de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 19 de Octubre de 1880
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio por cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (X)	Sumario	Otro
Total de fojas:	73		
Demandante:	Doña Francisca García Calderón		
Demandado:	Don Agustín Escudero		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 12 de Junio de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 18 de Octubre de 1888		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde noviembre de 1880 hasta diciembre de 1883 cuando se reactivó		

Materia:	Juicio por cobro de arrendamientos		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	20		
Demandante:	Don Fernando Palacios		
Demandado:	Don Feliciano García		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 13 de Junio de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 9 de Noviembre de 1883		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde diciembre de 1880 hasta noviembre de 1883 cuando se reactivó		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	17		
Demandante:	Benjamín Liza y Villareal		
Demandado:	Don José Munar		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 14 de Junio de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 1 de Julio de 1889		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde octubre de 1880 hasta noviembre de 1883 cuando se reactivó		

Materia:	Juicio sobre arrendamiento		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	80		
Demandante:	El Convento de Santo Domingo		
Demandado:	Doña Juliana Segura de Pacheco		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 14 de Junio de 1880		

Fecha de término (último escrito)	Lima, 30 de Enero de 1884
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde diciembre de 1880 hasta noviembre de 1883 cuando se reactivó

Materia:	Juicio sobre hipoteca de una finca		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	22		
Demandante:	Don José y Doña Simona Montenegro		
Demandado:	Doña Julia Rosa Traverso		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 14 de Junio de 1878		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 27 de Abril de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio por pago de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	40		
Demandante:	Juan Manuel Zubaga		
Demandado:	Don Miguel Potalde		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 14 de Junio de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 7 de Enero de 1884		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde octubre de 1880 hasta junio de 1882 cuando fue reactivado por el juzgado de letras. El proceso no continuó ante este juez y fue reactivado posteriormente en noviembre de 1883.		

Materia:	Juicio por pago de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	251		
Demandante:	Esteban Marrón		
Demandado:	Don Agustín Escudero		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 17 de Junio de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 23 de Marzo de 1900		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde octubre de 1880 hasta marzo de 1884 cuando se reactivó.		

Materia:	Juicio sobre el pago de honorarios		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	15		
Demandante:	Don Adriano Benítez		
Demandado:	Doña Mercedes Viuda de Velásquez		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 17 de Junio de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 5 de Octubre de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre autos criminales		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	187		
Demandante:	Juan Zuloaga y Manuel Amunategui		
Demandado:	Don Miguel Rotalde		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 18 de Junio de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 22 de Julio de 1885		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde noviembre de 1880 hasta diciembre de 1883 cuando se reactivó.		

Materia:	Juicio sobre proyecto de Escritura de Arrendamiento de la Huerta de la Menacho		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	18		
Demandante:	Doña Dolores Osambela		
Demandado:	Con los herederos de Don Martín Osambela		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 18 de Junio de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 15 de Noviembre de 1883		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad en diciembre de 1880 hasta noviembre de 1883 cuando se reactivó		

Materia:	Juicio rendición de cuentas		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	25		
Demandante:	Don Antonio Bravo		
Demandado:	Manuel de Pomar		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 18 de Junio de 1880		
Última actuación anterior al 24/12/80. Escrito y proveído	Lima, 23 de Noviembre de 1880- (...)		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad en noviembre de 1880 hasta noviembre de 1883 cuando se reactivó brevemente		

Materia:	Juicio sobre posesión de una finca		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	63		
Demandante:	Doña María Antonia Guianiloni		
Demandado:	Doña Federica Lang		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 22 de Junio de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 10 de Setiembre de 1884		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad en diciembre de 1880 hasta noviembre de 1883 cuando se reactivó		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
----------	--------------------------------	--	--

Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	35		
Demandante:	Don José Muro		
Demandado:	Señores Delgado hermanos e hijos		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 23 de Junio de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 11 de Enero de 1887		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad en agosto de 1880 hasta enero de 1887 cuando se reactivó brevemente		

Materia:	Juicio sobre devolución de un fundo o pago de su valor		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	94		
Demandante:	Don Domingo Carrillo		
Demandado:	Don Juan Ramírez		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 25 de Junio de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 18 de Setiembre de 1884		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad en diciembre de 1880 hasta abril de 1884 cuando se reactivó		

Materia:	Juicio sobre retracto		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	72		
Demandante:	Don Juan Urmeneta		
Demandado:	Lacharriere y compañía		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 2 de Julio de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 29 de octubre de 1884		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad en noviembre de 1880 hasta noviembre de 1883 cuando se reactivó		

Materia:	Juicio sobre pago de mesadas en plata sellada o su equivalente en billetes		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	22		
Demandante:	Doña Margarita Ramos de Grrrazaval		
Demandado:	Doña Francisca Ramos de Casanueva y otros herederos de las testamentaria de Don Antonio Joaquín Ramos		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 12 de Julio de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 11 de Diciembre de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio sobre rendición de cuentas		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	123		
Demandante:	Don Pedro Crespo		

Demandado:	Don Benigno Menéndez
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 13 de Julio de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 5 de Mayo de 1890
Observaciones	El expediente quedó sin actividad en diciembre de 1880 hasta junio de 1884 cuando se reactivó

Materia:	Juicio sobre intestado de Doña Mercedes Quispe		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	71		
Demandante:	Don José García		
Demandado:	Don José Salvatierra		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 13 de Julio de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 18 de Diciembre de 1883		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad en diciembre de 1880 hasta diciembre de 1883 cuando se reactivó		

Materia:	Juicio sobre depósito de bienes		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	15		
Demandante:	Don Romualdo Ormeño		
Demandado:	Doña Juana Díaz de Courtheon		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 16 de Julio de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 2 de Enero de 1884		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad en diciembre de 1880 hasta diciembre de 1883 cuando se reactivó		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	21		
Demandante:	Don Cesar Cordero		
Demandado:	Don Manuel Serra		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 19 de Julio de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 22 de Marzo de 1898		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad en agosto de 1880 hasta septiembre de 1886 cuando se reactivó		

Materia:	Juicio sobre indemnización de daños y perjuicios		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	321		
Demandante:	Don Nicolás López		
Demandado:	El Beaterio de Copacabana		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 19 de Julio de 1880		
Fecha de término	Lima, 24 de Octubre de 1896		



(último escrito)	
Observaciones	El expediente quedó sin actividad en diciembre de 1880 hasta mayo de 1884 cuando se reactivó

Materia:	Juicio sobre entregas de alhajas		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	147		
Demandante:	Doña Mariana del Valle		
Demandado:	Los señores Pellegrini y Marini		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 21 de Julio de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 31 de marzo de 1884		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad en octubre de 1880 hasta marzo de 1884 cuando se reactivó		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	42		
Demandante:	Don Martín Ramos		
Demandado:	Doña Carolina Lortaurden		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 31 de Julio de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima 19 de Noviembre de 1889		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad en noviembre de 1880 hasta noviembre de 1889 cuando se presentó un escrito de impulso sin efectos posteriores.		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	33		
Demandante:	Don Roberto López Aliaga		
Demandado:	Don Manuel Helmes		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 4 de Agosto de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 29 de Diciembre de 1887		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad en diciembre de 1880 hasta diciembre de 1887 cuando se reactivó brevemente.		

Materia:	Juicio sobre devolución de cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	90		
Demandante:	Serdio Hermanos		
Demandado:	Don Santiago Orezzoli		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 4 de Agosto de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 4 de Julio de 1885		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad en noviembre de 1880 hasta diciembre de 1883 cuando se reactivó		

Materia:	Juicio por cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	7		
Demandante:	Don Enrique Zegarra		
Demandado:	Compañía de obras públicas		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 9 de Agosto de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 11 de Febrero de 1884		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad en octubre de 1880 hasta febrero de 1884 cuando se reactivó brevemente		

Materia:	Juicio sobre intestado		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	21		
Demandante:	Don José Salvador Romero		
Demandado:	Don José Santos Romero		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 10 de Agosto de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 23 de Diciembre de 1886		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad en noviembre de 1880 hasta diciembre de 1886 cuando se reactivó		

Materia:	Juicio sobre Posesión proindiviso de los bienes de Don Manuel Menocal		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	12		
Demandante:	Doña Aglae Lestonat		
Demandado:	Don Genaro Quintana		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 10 de Agosto de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 24 de Mayo de 1884		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad en octubre de 1880 hasta mayo de 1884 cuando se reactivó		

Materia:	Juicio de prueba de la Herencia		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario	Otro (tercería)
Total de fojas:	177		
Demandante:	Don José A. Castillo		
Demandado:	Doña Juliana Heredia		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 11 de Agosto de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 8 de Noviembre de 1890		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad en noviembre de 1880 hasta julio de 1884 cuando se reactivó		

Materia:	Juicio sobre declarar el fallecimiento intestado		
----------	--	--	--

Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	6		
Demandante:	Don Manuel Telésforo Ibáñez		
Demandado:	Don Manuel Ambrosio Ibáñez		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 1 de Setiembre de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 20 de Octubre de 1880		
Observaciones	Sin observaciones		

Materia:	Juicio por cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	28		
Demandante:	Doña Luisa Ugarte de Quiroz		
Demandado:	El señor Coronel Ignacio Alarco		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 14 de Setiembre de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 23 de Marzo de 1893		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad en diciembre de 1880 hasta julio de 1890 cuando se reactivó		

Materia:	Juicio sobre concurso ejecutivo por arrendamientos		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	80		
Demandante:	José Casas		
Demandado:	Nicolás Pando		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 14 de Setiembre de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 15 de Julio de 1882		
Observaciones	El expediente quedó sin actividad en diciembre de 1880 hasta 1882 cuando fue retomado por el juzgado de letras.		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	7		
Demandante:	Don Federico Noigt		
Demandado:	Don Eugenio Ruzange		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 13 de Noviembre de 1880		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 18 de Diciembre de 1880		
Observaciones	Sin observaciones.		

4. Año 1880: Expedientes Criminales.

Materia:	Juicio sobre robo
Total de fojas:	38
Agraviado:	Crisantos Torres
Acusado:	Federico Asín
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 8 de Enero de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 6 de Diciembre de 1889
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde diciembre de 1880 hasta 1889 cuando fue enviado al archivo.

Materia:	Juicio sobre lesiones
Total de fojas:	257
Agraviado:	Juan Agustín Boas
Acusado:	Manuel Bello Gonzales
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 8 de Enero de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 31 de Enero de 1890
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde diciembre de 1880 hasta enero de 1884.

Materia:	Juicio por hurto
Total de fojas:	80
Agraviado:	Don Luis Loliadoski
Acusado:	Don Bernardo Dehelessinger, Don Oscar Alejandro
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 13 de Enero de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 2 de Diciembre de 1880
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio sobre delito de injurias graves
Total de fojas:	90
Agraviado:	Doña María de la Cruz García
Acusado:	Nicolasa Gamarra y su hija Juana
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 23 de Enero de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 16 de Diciembre de 1880
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio por heridas
Total de fojas:	37
Agraviado:	Juana Marticorena y Juliana Marticorena
Acusado:	José María Sotomado
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 24 de Enero de 1880
Fecha de término	Callao, 20 de Setiembre de 1880

(último escrito)	
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio sobre robo
Total de fojas:	10
Agraviado:	Estéfano Chienda
Acusado:	Antonio Espete
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 25 de Enero de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 28 de Enero de 1880
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio por heridas
Total de fojas:	11
Agraviado:	José Checa
Acusado:	José Mercedes García
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 27 de Enero de 1880
Fecha de término (último escrito)	Callao, 28 de Febrero de 1880
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio sobre lesiones
Total de fojas:	25
Agraviado:	Don Domingo Bolognin
Acusado:	Don Clemente Vassena
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 29 de Enero de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 27 de Diciembre de 1889
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde noviembre de 1880 hasta 1889 cuando fue mandado al archivo.

Materia:	Juicio sobre querrela civil y criminal
Total de fojas:	20
Agraviado:	Don José Roca
Acusado:	Don Manuel Castro Ozeta, Don Manuel Paniso y Don Agustín Monsalino
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 12 de Febrero de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 22 de Octubre de 1880
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio sobre Calumnia
Total de fojas:	15
Agraviado:	Don Pedro Lorenzo Cura de Chilca
Acusado:	Francisco Castillo
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 13 de Febrero de 1880
Fecha de término	Lima, 2 de Diciembre de 1889



(último escrito)	
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde julio de 1880 aunque ya sentenciado hasta diciembre de 1889 cuando se mandó al archivo.

Materia:	Juicio sobre lesiones al inspector
Total de fojas:	50
Agraviado:	Santiago rojas
Acusado:	Emilio Gamonet
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 13 de Febrero de 1880
Fecha de término (último escrito)	Callao 25 de Noviembre de 1880
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio por robo
Total de fojas:	77
Agraviado:	Don Pedro Vivanco
Acusado:	Don Manuel Lobera
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 19 de Febrero de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 17 de Junio de 1892
Observaciones	El expediente se quedó sin actividad en diciembre de 1880, aunque ya sentenciado, hasta junio de 1892 cuando se mandó a archivar.

Materia:	Juicio sobre homicidio
Total de fojas:	60
Agraviado:	Nicolás García
Acusado:	José Martel
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 23 de Febrero de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 16 de Mayo de 1890
Observaciones	El expediente quedó sin actividad en diciembre de 1880, aunque ya sentenciado, hasta mayo de 1890 cuando se mandó al archivo.

Materia:	Juicio sobre Hurto
Total de fojas:	80
Agraviado:	Doña Ana de Crempis
Acusado:	Toribia Becerra
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 27 de Febrero de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 26 de Diciembre de 1889
Observaciones	El expediente quedó sin actividad en diciembre de 1880, aunque ya sentenciado, hasta diciembre de 1889 cuando se mandó al archivo.

Materia:	Juicio sobre robo
----------	-------------------

Total de fojas:	14
Agraviado:	Don José Vargas
Acusado:	Doña Julia y María de la Cruz
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 16 de Marzo de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 30 de Abril de 1880
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio sobre robo
Total de fojas:	8
Agraviado:	Joaquín Sevilla
Acusado:	Federico Viviani
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 18 de Marzo de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 30 de Abril de 1880
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio sobre robo
Total de fojas:	8
Agraviado:	Doña Ana Tolledo
Acusado:	Margarita Rivas
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 18 de Marzo de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 6 de Abril de 1880
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio sobre robo
Total de fojas:	22
Agraviado:	Don Virgilio Espinel
Acusado:	Don Julio Ruiz y Don Manuel Ortiz
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 22 de Marzo de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 29 de Julio de 1880
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio sobre estafa
Total de fojas:	60
Agraviado:	Don marcos A. Sánchez
Acusado:	Don Mariano Abril
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 29 de Marzo de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 25 de Julio de 1890
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde noviembre de 1880 hasta junio de 1890 cuando se reactivó.

Materia:	Juicio sobre injurias graves
Total de fojas:	70

Agraviado:	Don José Costa
Acusado:	Don Raymundo Bletz
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 1 de Abril de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 22 de Marzo de 1890
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde septiembre de 1880 hasta marzo de 1890 cuando se mandó al archivo.

Materia:	Juicio sobre injurias
Total de fojas:	18
Agraviado:	Rosa Morales
Acusado:	José Vicente Ayaque
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 2 de Abril de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 20 de Marzo de 1890
Observaciones	El expediente quedó sin actividad en septiembre de 1880, aunque ya sentenciado, hasta marzo de 1890 cuando se mandó al archivo.

Materia:	Juicio por haber mordido el labio inferior
Total de fojas:	35
Agraviado:	Santiago Roca
Acusado:	Manuel Vilela
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 5 de Abril de 1880
Fecha de término (último escrito)	Callao, 1 de Diciembre de 1880
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio sobre injurias
Total de fojas:	27
Agraviado:	Don Calixto Cáceres
Acusado:	Don Domingo Torrejón
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 8 de Abril de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 30 de Junio de 1880
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio por hurto
Total de fojas:	180
Agraviado:	Dowley y Claeysen
Acusado:	Patricio Álvarez, José Urbina y Elvira Jara
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 9 de Abril de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 19 de Mayo de 1890
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde diciembre de 1880 hasta mayo de 1890 cuando se mandó al archivo.

Materia:	Juicio sobre desocupación de una casa
Total de fojas:	9
Agraviado:	Coronel Don Abel Méndez
Acusado:	Doña Josefa de Mendoza
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 24 de Abril de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 26 de Mayo de 1880
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio sobre hurto
Total de fojas:	40
Agraviado:	Don Enrique Pinto
Acusado:	Leonardo Mascaro
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 28 de Abril de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 22 de Diciembre de 1880
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio por delito de robo
Total de fojas:	72
Agraviado:	Don Manuel Molfino
Acusado:	Miguel Urbina
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 10 de Mayo de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 1 de Diciembre de 1883
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde diciembre de 1880 hasta diciembre de 1883 cuando se mandó al archivo.

Materia:	Juicio sobre estafa
Total de fojas:	10
Agraviado:	Rosa Campomanes
Acusado:	Manuel Bedoya
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 19 de Mayo de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 9 de Diciembre de 1890
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde agosto de 1880 hasta marzo de 1884 cuando se reactivó.

Materia:	Juicio sobre injurias
Total de fojas:	15
Agraviado:	Don Lucas Brava
Acusado:	Doña Juana Naupari
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 24 de Mayo de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 13 de Octubre de 1880
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio sobre autores del incendio del establecimiento de los señores
Total de fojas:	16
Agraviado:	Señores Dartnell y Besausire
Acusado:	El asiático Juan N.
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 24 de Mayo de 1880
Fecha de término (último escrito)	Callao, 9 de Junio de 1880
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio sobre hurto
Total de fojas:	42
Agraviado:	Doña Delfina Martínez
Acusado:	Manuel Zapata y Emilia Quiroz
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 19 de Junio de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 6 de Octubre de 1880
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio sobre lesiones
Total de fojas:	25
Agraviado:	Don Cesar Roca
Acusado:	Simón Roisnard
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 30 de Junio de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 25 de Noviembre de 1889
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde agosto de 1880 hasta noviembre de 1889 cuando se mandó al archivo.

Materia:	Juicio sobre homicidio
Total de fojas:	20
Agraviado:	Los familiares del asiático Loifan
Acusado:	Miguel Portocarrero
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 22 de Julio de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 20 de Noviembre de 1889
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde diciembre de 1880 hasta noviembre de 1889 cuando se mandó al archivo.

Materia:	Juicio sobre entrega de deposito
Total de fojas:	23
Agraviado:	El Asiático José Meléndez
Acusado:	Los herederos de Enrique Orezoli
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 30 de Julio de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 9 de Octubre de 1880
Observaciones	Sin observaciones



Materia:	Juicio por calumnia
Total de fojas:	25
Agraviado:	Don José María Suárez
Acusado:	Don Antonio Cosío
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 11 de Agosto de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 18 de Diciembre de 1880
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio sobre injurias
Total de fojas:	13
Agraviado:	Doña Eduriges Bermúdez
Acusado:	Doña Manuela Cárdenas y otra
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 12 de Agosto de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 20 de Setiembre de 1880
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio sobre cancelación de contrato y se pague los trabajos que ha hecho después de vencida la contrata
Total de fojas:	10
Agraviado:	El Asiático Chambó
Acusado:	Manuel Urriaga
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 20 de Agosto de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 3 de Noviembre de 1880
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio por robo
Total de fojas:	80
Agraviado:	Guillermo Stahl
Acusado:	Ángel Bornocini y Antonio Romaní
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 20 de Agosto de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 19 de Diciembre de 1883
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde diciembre de 1880 hasta diciembre de 1883 cuando se intentó reactivar.

Materia:	Juicio por heridas
Total de fojas:	60
Agraviado:	Manuel María de la Cruz
Acusado:	Ani Camote
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 23 de Agosto de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 10 de Agosto de 1885
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde diciembre de 1880

	hasta julio de 1885 cuando se intentó reactivarlo.
--	--

Materia:	Juicio sobre robo
Total de fojas:	28
Agraviado:	Don Martín Durto
Acusado:	Guillermo Bergara, Antonio Alia y Juan Pesay
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 23 de Agosto de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 10 de Agosto de 1885
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde diciembre de 1880 hasta agosto de 1885 cuando se intentó reactivar.

Materia:	Juicio sobre hurtos de aparatos telegráficos
Total de fojas:	26
Agraviado:	Pedro Arostegui
Acusado:	José Rodríguez de Vera
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 27 de Agosto de 1880
Fecha de término (último escrito)	Callao, 17 de Diciembre de 1880
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio sobre adulterio
Total de fojas:	40
Agraviado:	Doña Rosalía Remus
Acusado:	Don Juan de Dios Marqués
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Jauja ,2 de Setiembre de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 18 de Diciembre e 1880
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio sobre robo
Total de fojas:	44
Agraviado:	Don Francisca Salcedo
Acusado:	Don Melitón Salcedo
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 2 de Setiembre de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 24 de Diciembre de 1880
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio sobre robo
Total de fojas:	18
Agraviado:	Don Domingo Acevedo
Acusado:	José Risco
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 5 de Noviembre de 1880
Fecha de término (último escrito)	Callao, 30 de Noviembre de 1880
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio por conato de homicidio y tentativa de hurto
Total de fojas:	14
Agraviado:	Manuel Rivarola
Acusado:	Candelaria León
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 5 de Noviembre de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 10 de Diciembre de 1880
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio por robo
Total de fojas:	28
Agraviado:	Policarpo Guerrero
Acusado:	Domingo Bras, Alejandro Ponce, José Andrade y Natalia Pereira
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 14 de Noviembre de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 7 de Noviembre de 1902
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde septiembre de 1880. En noviembre de 1881 se presentó un escrito sin proveerse con lo que no hubo más actuación hasta enero de 1902 cuando se reactivó.

Materia:	Juicio sobre sustracción de pólvora
Total de fojas:	30
Agraviado:	Josia Harris
Acusado:	Capitán de navío
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 27 de Noviembre de 1880
Fecha de término (último escrito)	Callao, 8 Enero de 1881
Observaciones	Sin observaciones

Materia:	Juicio por robo
Total de fojas:	17
Agraviado:	Don Manuel Cuadros
Acusado:	Pablo y Mariano Toledo Agustín
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 11 de Diciembre de 1880
Fecha de término (último escrito)	Lima, 15 de Mayo 1896
Observaciones	El expediente quedó sin actividad desde diciembre de 1880. Durante febrero de 1881 se presentaron diversos escritos que no reactivaron el proceso. El proceso quedó sin actividad hasta mayo de 1886 cuando se reactivó.

5. Año 1881: Expedientes Civiles.

Materia:	Apoyo de arrendamientos		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	70		
Demandante:	Andrés Zavala		
Demandado:	Samuel Cavero		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 18 de Agosto de 1881		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 24 de Diciembre de 1882		
Observaciones	No se tiene dato de a qué dependencia ingresó el expediente pero fue tramitado por el Juzgado de letras		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	90		
Demandante:	Doña María Astieda viuda de Cabello		
Demandado:	Doña Delia Renant		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 31 de Agosto de 1881		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 4 de Julio de 1883		
Observaciones	No se tiene dato de a qué dependencia ingresó el expediente pero fue tramitado por el Juzgado de letras		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	15		
Demandante:	Isabel Isasigar		
Demandado:	Mac Bropper		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 5 de Setiembre de 1881		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 14 de Marzo de 1882		
Observaciones	No se tiene dato de a qué dependencia ingresó el expediente pero fue tramitado por el Juzgado de letras		

Materia:	Juicio sobre remates de unas haciendas		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	130		
Demandante:	Delgado hermanos e hijos		
Demandado:	Don Ernesto Kamffman		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 5 de Octubre de 1881		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 6 de Febrero de 1888		
Observaciones	No se tiene dato de a qué dependencia ingresó el expediente pero fue tramitado por el Juzgado de letras		

Materia:	Juicio sobre pago de cantidad de soles		
----------	--	--	--

Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	8		
Demandante:	Doña Manuela Carrera de Moreno		
Demandado:	Doña Matilde Velásquez de Voyset		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 3 de Diciembre de 1881		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 21 de Abril de 1882		
Observaciones	El expediente fue tramitado por el Juzgado de letras		

Materia:	Juicio sobre dos anillos de brillantes		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	5		
Demandante:	Antonio Reyna		
Demandado:	Don Francisco de Amat		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 21 de Diciembre de 1881		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 1 de Febrero de 1882		
Observaciones	El expediente fue tramitado por el Juzgado de letras		

Materia:	Juicio sobre cobro de pesos		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	20		
Demandante:	José Román		
Demandado:	Felipe Chorta		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 21 de Diciembre de 1881		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 4 de Setiembre de 1882		
Observaciones	El expediente fue tramitado por el Juzgado de letras		

Materia:	Juicio sobre compra y venta de ron y alcohol		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	30		
Demandante:	José Macchiavello		
Demandado:	Don Cristóbal Accini		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 22 de Diciembre de 1881		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 29 de Marzo de 1882		
Observaciones.	El expediente fue tramitado por el Juzgado de letras		

Materia:	Juicio sobre cobro de pesos		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	85		
Demandante:	Carlos Southrell		
Demandado:	Manuel Rubio		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 28 de Diciembre de 1881		
Fecha de término	Lima, 28 de Enero de 1884		



(último escrito)	
Observaciones	El expediente fue tramitado por el Juzgado de letras

#### 6. Año 1881: Expedientes Criminales.

Materia:	Juicio sobre abuso de autoridad
Total de fojas:	30
Demandante:	Andrés Migoni
Demandado:	Julián Tordillo
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 26 de Febrero de 1881
Fecha de término (último escrito)	Lima, 25 de Abril de 1883
Observaciones	El juicio intentó iniciarse pero no obtuvo tramitación. Estuvo sin actividad hasta el 24 de febrero de 1883 cuando se reactivó en el juzgado del crimen de Lima.

Materia:	Juicio sobre estafa
Total de fojas:	29
Demandante:	Juan Unánue y Peña
Demandado:	Luis Rocca
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 7 de Setiembre de 1881
Fecha de término (último escrito)	Lima, 10 de Octubre de 1882
Observaciones	El juicio intentó iniciarse pero no llegó a término alguno.

Materia:	Juicio sobre heridas
Total de fojas:	8
Demandante:	Elena Hombarte
Demandado:	Pablo Ramos y Vicente Montoya
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 27 de Diciembre de 1881
Fecha de término (último escrito)	Lima, 12 de Mayo de 1882
Observaciones	El expediente fue tramitado ante el juez de letras de Lima.

#### 7. Año 1882: Expedientes Civiles.

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	10		
Demandante:	Bernardo Modenese		
Demandado:	Banger Krunger		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 3 de Enero de 1882		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 17 de Febrero de 1882		
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.		

Materia:	Juicio sobre demanda de despojo		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	50		
Demandante:	Doña Mercedes Sancho Dávila		
Demandado:	Don Juan Adolfo Urbeta		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 4 de Enero de 1882		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 7 de Marzo de 1884		
Observaciones	El expediente fue tramitado inicialmente por el juzgado de letras. En 1884 pasó a ser tramitado por el juzgado de Lima.		

Materia:	Juicio por cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario	Otro
Total de fojas:	135		
Demandante:	Doña Modesta Basadre		
Demandado:	Don Juan Castro Ozetti		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 6 Enero de 1882		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 15 de Diciembre de 1886		
Observaciones	El expediente fue tramitado en un inicio por un juzgado de paz. Desde 1884 fue recogido por el juzgado de Lima.		

Materia:	Juicio por deuda de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	85		
Demandante:	Señores Wrighton		
Demandado:	Manuel Cisneros		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 7 de Enero de 1882		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 6 de Mayo de 1884		
Observaciones	El expediente fue tramitado en un inicio por el juzgado de letras. Desde 1884 fue recogido por el juzgado de Lima.		

Materia:	Juicio sobre		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	301		
Demandante:	Manuel Tomás		
Demandado:	Pedro Bermúdez		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 7 de Enero de 1882		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 4 de Agosto de 1891		
Observaciones	El expediente fue tramitado en un inicio por el juzgado de letras. Desde 1884 fue recogido por el juzgado de Lima.		

Materia:	Juicio sobre cancelación de cuenta		
Procedimiento:	Ordinario (x)7	Sumario	Otro
Total de fojas:	50		

Demandante:	Don Pedro Petitgean
Demandado:	Don Juan Soritan
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 7 de Enero de 1882
Fecha de término (último escrito)	Lima, 1 de Junio de 1883
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.

Materia:	Juicio cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	25		
Demandante:	Tomasar Llosa		
Demandado:	Esteban Montano		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 7 de Enero de 1882		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 21 de Junio de 1882		
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.		

Materia:	Juicio sobre cobro de préstamo		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	140		
Demandante:	Guillermo Reyneri		
Demandado:	José Castro Osete		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 11 de Enero de 1882		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 11 de Febrero de 1886		
Observaciones	El expediente fue tramitado en un inicio por el juzgado de letras. Desde 1884 fue recogido por el juzgado de Lima.		

Materia:	Juicio sobre demanda		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	110		
Demandante:	Don Federico Averdick		
Demandado:	Don Guillermo Sheel		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 11 de Enero de 1882		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 25 de Abril de 1885		
Observaciones	El expediente fue tramitado en un inicio por el juzgado de letras. Desde 1884 fue recogido por el juzgado de Lima.		

Materia:	Juicio sobre devolución de planillas de trabajo hechos		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario	Otro (juicio arbitral)
Total de fojas:	229		
Demandante:	Don Edmundo Mercier		
Demandado:	Señores Schmidt Herm		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 14 de Enero de 1882		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 18 de Abril 1887		

Observaciones	El expediente fue tramitado en un inicio por el juzgado de letras. Desde 1884 fue recogido por el juzgado de Lima.
---------------	--

Materia:	Juicio sobre cobro de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	15		
Demandante:	José Fidel Herrera		
Demandado:	Bartola Mejía de Terrazas		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 16 de Enero de 1882		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 9 de Febrero de 1882		
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.		

Materia:	Juicio sobre devolución de unas cédulas		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	90		
Demandante:	Don Antonio Yaguet		
Demandado:	Los responsables de la caja de ahorros		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 23 de Enero de 1882		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 29 de Agosto de 1887		
Observaciones	El expediente fue tramitado en un inicio por el juzgado de letras. Desde 1884 fue recogido por el juzgado de Lima.		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	50		
Demandante:	Carlos Saymer		
Demandado:	Eduardo Soriano		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 24 de Enero de 1882		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 23 de Junio de 1883		
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.		

Materia:	Juicio sobre cobro de pesos		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	55		
Demandante:	Manuel Arteaga		
Demandado:	Luis Seille		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 26 de Enero de 1882		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 24 de Octubre de 1882		
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.		

Materia:	Juicio sobre arrendamientos		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	14		

Demandante:	Carlos Minayas
Demandado:	Pedro Tomas Lino
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 27 de Enero de 1882
Fecha de término (último escrito)	Lima, 13 de Febrero de 1882
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.

Materia:	Juicio sobre cantidad de pesos		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	123		
Demandante:	Manuel Rotalde		
Demandado:	Doña Genara viuda de Wedell		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 30 de Enero de 1882		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 4 de Junio 1883		
Observaciones	El expediente fue tramitado por un juzgado de paz.		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	18		
Demandante:	Tadea Zegarra		
Demandado:	Isabel Salgado		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 1 de Febrero de 1882		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 22 de Junio de 1882		
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.		

Materia:	Juicio sobre rescisión de contrato		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	280		
Demandante:	José Navarro		
Demandado:	Luis Rousse		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 4 de Febrero de 1882		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 25 de Octubre de 1888		
Observaciones	El expediente fue tramitado en un inicio por un juzgado de paz. Desde 1884 fue recogido por el juzgado de Lima.		

Materia:	Juicio sobre entrega de un deposito dos mil soles		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario	Otro
Total de fojas:	40		
Demandante:	Don Luciano Domas		
Demandado:	Don Manuel Flores		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 8 de Febrero de 1882		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 1 de Octubre de 1884		
Observaciones	El expediente fue tramitado en un inicio por el juzgado de letras.		



	Desde 1884 fue recogido por el juzgado de Lima.
--	---

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario	Otro (tercería)
Total de fojas:	100		
Demandante:	Simón Mosis		
Demandado:	Faustino Piaggio		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 9 de Febrero de 1882		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 30 de Agosto de 1882		
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.		

Materia:	Juicio sobre entrega de cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	74		
Demandante:	Pedro Marzo		
Demandado:	María Navajas Rivero		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 10 de Febrero de 1882		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 29 de Febrero de 1884		
Observaciones	El expediente fue tramitado en un inicio por el juzgado de letras. Desde 1884 fue recogido por el juzgado de Lima.		

Materia:	Juicio sobre arrendamiento		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	44		
Demandante:	Federico Crempier		
Demandado:	Pascual Bella-Casa		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 10 de Febrero de 1882		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 20 de Julio de 1885		
Observaciones	El expediente fue tramitado en un inicio por el juzgado de letras. Desde 1884 fue recogido por el juzgado de Lima.		

Materia:	Juicio sobre concurso de acreedores		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	200		
Demandante:	José María Gran		
Demandado:	Paul Acher		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 13 de Febrero de 1882		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 16 de Febrero de 1883		
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.		

Materia:	Juicio sobre pago de arrendamientos		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	17		

Demandante:	Eugenia Varea
Demandado:	Estéfano Varesse
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 14 de Febrero de 1882
Fecha de término (último escrito)	Lima, 3 de Abril de 1882
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.

Materia:	Juicio sobre rescisión de un contrato		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	250		
Demandante:	Toribio Chuecas		
Demandado:	Ignacio Romero		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 14 de Febrero de 1882		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 2 de Julio de 1883		
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.		

Materia:	Juicio por cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	40		
Demandante:	Serdio Hermanos		
Demandado:	Santiago Orezoli		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 17 de Febrero de 1882		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 19 de Agosto de 1882		
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	23		
Demandante:	Francisco Albertis		
Demandado:	Valle Riestra y Compañía		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 18 de Febrero de 1882		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 3 de Mayo de 1882		
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.		

Materia:	Juicio sobre demanda		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	70		
Demandante:	Ángela viuda de Breytes		
Demandado:	Beatriz Arroyo		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 28 de Febrero de 1882		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 16 de Julio de 1884		
Observaciones	El expediente fue tramitado en un inicio por el juzgado de letras. Desde 1884 fue recogido por el juzgado de Lima.		

Materia:	Juicio sobre depósito de arrendamientos		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	36		
Demandante:	Félix Luque		
Demandado:	Isabel Barredo		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 28 de Febrero de 1882		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 11 de Julio de 1882		
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.		

Materia:	Juicio sobre demandad		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	180		
Demandante:	Don Federico Panizo y testigos		
Demandado:	Juan Dockendork		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 6 de Marzo de 1882		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 9 de Agosto de 1883		
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.		

Materia:	Juicio sobre rescisión de contrato		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	144		
Demandante:	Sebastián Acuña		
Demandado:	Lucas Munaico		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 6 de Marzo de 1882		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 9 de Diciembre de 1882		
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.		

Materia:	Juicio sobre libras esterlinas		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	18		
Demandante:	Don Jacobo Landerer		
Demandado:	Don Francisco Martín Ramos		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 10 de Marzo de 1882		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 13 de Abril de 1882		
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	142		
Demandante:	María Vela de Muñoz		
Demandado:	Cristóbal Accmi		
Fecha de Inicio (1°	Lima, 11 de Marzo de 1882		

Escrito)	
Fecha de término (último escrito)	Lima, 2 de Agosto de 1883
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.

Materia:	Juicio sobre entrega de una finca		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	32		
Demandante:	Dámaso Pérez		
Demandado:	Balzar		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 3 de Abril de 1882		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 29 de Marzo de 1884		
Observaciones	El expediente fue tramitado en un inicio por el juzgado de letras. Desde 1884 fue recogido por el juzgado de Lima.		

Materia:	Juicio sobre cobro de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	100		
Demandante:	Mariano Castro Zaldívar		
Demandado:	Jesús Irigoyen viuda de García		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 23 de Agosto de 1882		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 21 de abril de 1884		
Observaciones	El expediente fue tramitado en un inicio por el juzgado de letras. Desde 1884 fue recogido por el juzgado de Lima.		

#### 8. Año 1882: Expedientes Criminales.

Materia:	Juicio sobre entrega de relojes		
Total de fojas:	27		
Agraviado:	Miguel Rotalde		
Denunciado:	Félix Raffo		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 30 de Enero de 1882		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 27 de Junio de 1882		
Observaciones	Tramitado ante el juzgado de letras		

Materia:	Juicio sobre cumplimiento de contrato		
Total de fojas:	40		
Agraviado:	Domingo Converso		
Denunciado:	Yrinco Saroldi		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 31 de Enero de 1882		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 21 de Abril de 1882		
Observaciones	Tramitado ante el juzgado de letras		

Materia:	Juicio sobre estafa
Total de fojas:	41
Agraviado:	Arturo Portal
Denunciado:	José María Grau
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 11 de Febrero de 1882
Fecha de término (último escrito)	Lima, 25 de Abril de 1883
Observaciones	Tramitado ante el juzgado de letras

Materia:	Juicio por homicidio
Total de fojas:	20
Agraviado:	De oficio
Denunciado:	Juan Cutiñoli
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 20 de Marzo de 1882
Fecha de término (último escrito)	Lima, 14 de Julio de 1883
Observaciones	Tramitado ante el juzgado de letras

Materia:	Juicio por conato de homicidio
Total de fojas:	147
Agraviado:	Nicanor Tejerino
Denunciado:	Joaquín Torrino
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 25 de Abril de 1882
Fecha de término (último escrito)	Lima, 5 de Setiembre de 1885
Observaciones	Tramitado ante el juzgado de letras

Materia:	Juicio sobre salteo
Total de fojas:	40
Agraviado:	Leopoldo Fabre
Denunciado:	Benjamín Ponce
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 30 de Mayo de 1882
Fecha de término (último escrito)	Lima, 14 de Diciembre de 1882
Observaciones	Tramitado ante el juzgado de letras

Materia:	Juicio sobre robo
Total de fojas:	13
Agraviado:	De oficio
Denunciado:	Félix Avalos Y Arístides Salazar
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Limas, 5 de Junio de 1882
Fecha de término (último escrito)	Lima, 1 de Diciembre de 1882
Observaciones	Tramitado ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre homicidio al cabo Beltran
----------	--



Total de fojas:	40
Agraviado:	De oficio
Denunciado:	José Villegas
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 19 de Junio de 1882
Fecha de término (último escrito)	Lima, 9 de Mayo de 1885
Observaciones	Tramitado ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre estafa
Total de fojas:	30
Agraviado:	Bucceli y compañía
Denunciado:	Aurelio Imaña
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 21 de Junio de 1882
Fecha de término (último escrito)	Lima, 19 de Abril de 1883
Observaciones	Tramitado ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre estafa
Total de fojas:	27
Agraviado:	Francisco Belevan
Denunciado:	María Reina
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 22 de Junio de 1882
Fecha de término (último escrito)	Lima, 4 de Agosto de 1882
Observaciones	Tramitado ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre robo
Total de fojas:	88
Agraviado:	Domingo Gricolo
Denunciado:	Aniceto Rodríguez, Alis Chupitaz y Fernando Castro
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 6 de Julio de 1882
Fecha de término (último escrito)	Lima, 20 de Marzo de 1885
Observaciones	Tramitado ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio por estafa
Total de fojas:	22
Agraviado:	Manuela Roy
Denunciado:	Joaquín Miró Quezada
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 6 de Julio de 1882
Fecha de término (último escrito)	Lima, 27 de Junio de 1883
Observaciones	Tramitado ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre abuso de autoridad
Total de fojas:	97

Agraviado:	Pablo Pomi
Denunciado:	Ángel Arana
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 14 de Julio de 1882
Fecha de término (último escrito)	Lima, 23 de Abril de 1883
Observaciones	Tramitado ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre robo
Total de fojas:	15
Agraviado:	De oficio
Denunciado:	Wenceslao y Carlos Puertas
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 27 de Julio de 1882
Fecha de término (último escrito)	Lima, 12 de Agosto de 1882
Observaciones	Tramitado ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre salteo
Total de fojas:	17
Agraviado:	De oficio
Denunciado:	Clodomiro Irribarra y Víctor Bravo
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 31 de Julio de 1882
Fecha de término (último escrito)	Lima, 19 de Octubre de 1882
Observaciones	Tramitado ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre violación
Total de fojas:	17
Agraviado:	De oficio
Denunciado:	Dionisio Razuri
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 6 de Agosto de 1882
Fecha de término (último escrito)	Lima, 31 de Octubre de 1882
Observaciones	Tramitado ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre estafa
Total de fojas:	18
Agraviado:	David Larreategui
Denunciado:	Manuel Ranchero
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 12 de Agosto de 1882
Fecha de término (último escrito)	Lima, 25 de Octubre de 1882
Observaciones	Tramitado ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre injurias graves
Total de fojas:	52
Agraviado:	José Ambrosio Luiros

Denunciado:	José Cosme
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 14 de Agosto de 1882
Fecha de término (último escrito)	Lima, 15 de Febrero de 1883
Observaciones	Tramitado ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre conato de homicidio
Total de fojas:	21
Agraviado:	José María Balbi
Denunciado:	Rodolfo Rodríguez
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 14 de Agosto de 1882
Fecha de término (último escrito)	Lima, 30 de Diciembre de 1882
Observaciones	Tramitado ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre robo
Total de fojas:	30
Agraviado:	De oficio
Denunciado:	Benjamín Cerveto y Timoteo Reina
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 20 de Agosto de 1882
Fecha de término (último escrito)	Lima, 7 de Marzo de 1883
Observaciones	Tramitado ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio por robo
Total de fojas:	19
Agraviado:	De oficio
Denunciado:	Esteban Tello
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 24 de Agosto de 1882
Fecha de término (último escrito)	Lima, 12 de Abril de 1883
Observaciones	Tramitado ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio por heridas
Total de fojas:	13
Agraviado:	De oficio
Denunciado:	Felipe León Zevallos
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 31 de Agosto de 1882
Fecha de término (último escrito)	Lima, 12 de Diciembre de 1882
Observaciones	Tramitado ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre homicidio
Total de fojas:	50
Agraviado:	De oficio
Denunciado:	Manuel García Boada

Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 1 de Setiembre de 1882
Fecha de término (último escrito)	Lima, 29 de Setiembre de 1882
Observaciones	Tramitado ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio por incumplimiento de pago
Total de fojas:	7
Agraviado:	Guillermo Reiner
Denunciado:	Juan Castro Osete
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 1 de Setiembre de 1882
Fecha de término (último escrito)	Lima, 26 de Setiembre de 1882
Observaciones	Tramitado ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre homicidio
Total de fojas:	15
Agraviado:	De oficio
Denunciado:	Valentín Soto
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 15 de Setiembre de 1882
Fecha de término (último escrito)	Lima, 25 de Enero de 1883
Observaciones	Tramitado ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre abuso de confianza
Total de fojas:	29
Agraviado:	Jacinto Nalbarte
Denunciado:	Néstor Nalbarte
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 20 de Setiembre de 1882
Fecha de término (último escrito)	Lima, 30 de Noviembre de 1882
Observaciones	Tramitado ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre injurias graves
Total de fojas:	11
Agraviado:	Enrique Heyneman
Denunciado:	J. Iparraguirre
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 20 de Setiembre de 1882
Fecha de término (último escrito)	Lima, 11 de Octubre de 1882
Observaciones	Tramitado ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre Sodomía
Total de fojas:	15
Agraviado:	De oficio
Denunciado:	Fermín Zavala
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 26 de Setiembre de 1882

Fecha de término (último escrito)	Lima, 19 de Febrero de 1883
Observaciones	Tramitado ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre sustracción de especies
Total de fojas:	8
Agraviado:	Rosa Santana
Denunciado:	José Llanos
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 18 de Octubre de 1882
Fecha de término (último escrito)	Lima, 21 de Diciembre de 1882
Observaciones	Tramitado ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre abuso de confianza
Total de fojas:	10
Agraviado:	Artidoro Alvarillo
Denunciado:	José Cesáreo Conde y Araujo
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 28 de Octubre de 1882
Fecha de término (último escrito)	Lima, 9 de Noviembre de 1882
Observaciones	Tramitado ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre injurias y violación de domicilio
Total de fojas:	22
Agraviado:	Gustavo Duvinage
Denunciado:	Edvirge y Alfredo Bretonche
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 31 de Octubre de 1882
Fecha de término (último escrito)	Lima, 30 de Diciembre de 1882
Observaciones	Tramitado ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre robo
Total de fojas:	22
Agraviado:	De oficio
Denunciado:	Juana Ramírez
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 4 de Noviembre de 1882
Fecha de término (último escrito)	Lima, 26 de Noviembre de 1883
Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen aunque sus últimas actuaciones fueron realizadas por el juzgado de Lima.



9. Año 1883: Expedientes Civiles.

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	20		
Demandante:	Banco de Crédito Hipotecario		
Demandado:	Juan Mateo Ramírez		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 2 de Enero de 1883		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 17 de Abril de 1883		
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.		

Materia:	Juicio sobre cobro de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	42		
Demandante:	Hilario Liendo		
Demandado:	Pedro José Osorio		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 3 de Enero de 1883		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 27 de Julio de 1886		
Observaciones	El expediente fue tramitado en un inicio por el juzgado de letras. Desde 1884 continuó ante el juzgado de Lima.		

Materia:	Juicio sobre entrega del expediente		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	15		
Demandante:	Antonio Larranaga		
Demandado:	Brijida Elguera		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 8 de Enero de 1883		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 28 de Mayo de 1883		
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.		

Materia:	Juicio sobre pago y desocupación		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	70		
Demandante:	Manuel Capuro		
Demandado:	Josefina Cabezas		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 9 de Enero de 1883		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 4 de Junio de 1884		
Observaciones	El expediente fue tramitado en un inicio por el juzgado de letras. Desde 1884 continuó ante el juzgado de Lima.		

Materia:	Juicio sobre responsabilidad civil		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	11		

Demandante:	Manuel Orellana
Demandado:	Eliseo Larrañaga
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 9 de Enero de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 6 de Marzo de 1883
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.

Materia:	Juicio sobre apertura de testamento		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	30		
Demandante:	Lorenza Ingunza		
Demandado:	Miguel Matías Ingunza		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 10 de Enero de 1883		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 5 de Mayo de 1884		
Observaciones	El expediente fue tramitado en un inicio por el juzgado de letras. Desde 1884 continuó ante el juzgado de Lima.		

Materia:	Juicio sobre la calidad de moneda en que deben pagarse los arrendamientos de una finca		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	80		
Demandante:	Don Nicolás Marzano		
Demandado:	Doña Manuela Campo Blanco		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 11 de Enero de 1883		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 20 de Enero de 1886		
Observaciones	El expediente fue tramitado en un inicio por el juzgado de letras. Desde 1884 continuó ante el juzgado de Lima.		

Materia:	Juicio sobre cobro de pesos		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	8		
Demandante:	Carmen Causedo		
Demandado:	Gregorio La Rosa		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 12 de Enero de 1883		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 28 de Marzo de 1883		
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.		

Materia:	Juicio sobre retención		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	30		
Demandante:	Joaquín Ferreira		
Demandado:	Emilio Rolsi Corsi		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 13 de Enero de 1883		
Fecha de término	Lima, 21 de Marzo de 1883		

(último escrito)	
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.

Materia:	Juicio sobre cobro de arrendamientos		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	17		
Demandante:	Mariano Ramos y Larrea		
Demandado:	Manuela de Soto		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 16 de Enero de 1883		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 13 de Abril de 1883		
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.		

Materia:	Juicio sobre nulidad de actuaciones practicadas por los jueces de paz		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	40		
Demandante:	Abel Farfán Cabrera		
Demandado:	Sebastián Ugalde		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 19 de Enero de 1883		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 6 de Abril de 1883		
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.		

Materia:	Juicio sobre pago de cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	9		
Demandante:	Gerónimo Baturich		
Demandado:	Juan Urmeneta		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 24 de Enero de 1883		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 24 de Junio de 1884		
Observaciones	El expediente fue tramitado en un inicio por el juzgado de letras. Desde 1884 continuó ante el juzgado de Lima.		

Materia:	Juicio sobre retención		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	10		
Demandante:	Gerónimo Baturico		
Demandado:	Juan Urmeneta		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 25 de Enero de 1883		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 28 de Noviembre de 1884		
Observaciones	El expediente fue tramitado en un inicio por el juzgado de letras. Desde 1884 continuó ante el juzgado de Lima.		

Materia:	Juicio sobre nombramientos de árbitros		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro

Total de fojas:	49
Demandante:	Vicente Delgado y otros
Demandado:	José Muro
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 4 de Febrero de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 5 de Diciembre de 1887
Observaciones	El expediente fue tramitado en un inicio por el juzgado de letras. Desde 1884 continuó ante el juzgado de Lima.

Materia:	Juicio sobre redición de cuentas		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	17		
Demandante:	Pablo Vivero		
Demandado:	Emilio Holguín		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 8 de Febrero de 1883		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 16 de Mayo de 1883		
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.		

Materia:	Juicio sobre desocupación		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	20		
Demandante:	Señora Eusebia viuda de Komen		
Demandado:	Julio León		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 12 de Febrero de 1883		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 5 de Marzo de 1883		
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.		

Materia:	Juicio sobre entrega de muebles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	30		
Demandante:	Doña Lorenza Piñeyro		
Demandado:	Don Hugo Campbell		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 12 de Febrero de 1883		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 30 de Octubre de 1885		
Observaciones	El expediente fue tramitado en un inicio por el juzgado de letras. Desde 1884 continuó ante el juzgado de Lima.		

Materia:	Juicio sobre cobro de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	20		
Demandante:	Sociedad Mercantil Limitada		
Demandado:	Torenato Derteano		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 20 de Febrero de 1883		
Fecha de término	Lima. 17 de Marzo de 1883		

(último escrito)	
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.

Materia:	Juicio sobre cobro de soles		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario (x)	Otro
Total de fojas:	9		
Demandante:	Juan Giesman		
Demandado:	Ángel Sandolfo		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 26 de Febrero de 1883		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 7 de Junio de 1883		
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.		

Materia:	Juicio sobre posesión de una chacra		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	15		
Demandante:	Miguel Criado		
Demandado:	Josefina Ramos		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 1 de Marzo de 1883		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 15 de Marzo de 1884		
Observaciones	El expediente fue tramitado en un inicio por el juzgado de letras. Desde 1884 continuó ante el juzgado de Lima.		

Materia:	Juicio sobre protesta de una letra		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	22		
Demandante:	José María Soruco		
Demandado:	Lázaro Castagnini		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 3 de Marzo de 1883		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 8 de Agosto de 1883		
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.		

Materia:	Juicio sobre otorgamiento de fianza		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	100		
Demandante:	Esteban Ríos		
Demandado:	Grace Brothers y Compañía		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 5 de Marzo de 1883		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 10 de Diciembre de 1884		
Observaciones	El expediente fue tramitado en un inicio por el juzgado de letras. Desde 1884 continuó ante el juzgado de Lima.		

Materia:	Juicio sobre cobro de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro



Total de fojas:	42
Demandante:	Banco Territorial Hipotecario
Demandado:	José de la Quintana y otros
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 6 de Marzo de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 23 de Junio de 1883
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.

Materia:	Juicio sobre cobro de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	50		
Demandante:	Gustavo Rodríguez		
Demandado:	Miguel Bacht		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 6 de Marzo de 1883		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 16 de Setiembre de 1884		
Observaciones	El expediente fue tramitado en un inicio por el juzgado de letras. Desde 1884 continuó ante el juzgado de Lima.		

Materia:	Juicio sobre cobro de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	30		
Demandante:	Maines		
Demandado:	Santiago Loverday		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 6 de Marzo de 1883		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 19 de Febrero de 1884		
Observaciones	El expediente fue tramitado en un inicio por el juzgado de letras. Desde 1884 continuó ante el juzgado de Lima.		

Materia:	Juicio sobre cobro de soles		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario	Otro (Tercería)
Total de fojas:	15		
Demandante:	Esteban Cimeo		
Demandado:	Francisco Camino		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 7 de Marzo de 1883		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 13 de Abril de 1883		
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.		

Materia:	Juicio sobre cobro de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	16		
Demandante:	Julia Dawling		
Demandado:	Federico Lima		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 7 de Marzo de 1883		
Fecha de término	Lima, 17 de Marzo de 1883		

(último escrito)	
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.

Materia:	Locación		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	2		
Demandante:	Luis Maximiliano Grela		
Demandado:	Manuela Domínguez		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 9 de Marzo de 1883		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 12 de Marzo de 1883		
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	205		
Demandante:	Juan Quintanilla		
Demandado:	Pablo Aguilar		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 9 de Marzo de 1883		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 18 de Noviembre de 1891		
Observaciones	El expediente fue tramitado en un inicio por el juzgado de letras. Desde 1884 continuó ante el juzgado de Lima.		

Materia:	Juicio sobre entrega de bienes		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	36		
Demandante:	Joaquina Guerra		
Demandado:	Genara Suarez de Nadal		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 9 de Marzo de 1883		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 15 de Junio de 1883		
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.		

Materia:	Intestado		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	30		
Demandante:	Pedro Alfaro		
Demandado:	Andrés Alfaro		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 9 de Marzo de 1883		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 27 de Enero de 1886		
Observaciones	El expediente fue tramitado en un inicio por el juzgado de letras. Desde 1884 continuó ante el juzgado de Lima.		

Materia:	Inventario		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro

Total de fojas:	35
Demandante:	Pedro Alfaro
Demandado:	Intestado de Andrés Alfaro
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 12 de Marzo de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 27 de Marzo de 1883
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.

Materia:	Juicio sobre nulidad		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	40		
Demandante:	Victorina Baldeyron		
Demandado:	Don Pedro Paz Soldán y Unánue		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 12 de Marzo de 1883		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 31 de Diciembre de 1884		
Observaciones	El expediente fue tramitado en un inicio por el juzgado de letras. Desde 1884 continuó ante el juzgado de Lima.		

Materia:	Obligación		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario	Otro
Total de fojas:	19		
Demandante:	Don Guillermo Cothorn y su esposa		
Demandado:	Banco de Londres, Méjico y Sud. América		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 13 de Marzo de 1883		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 17 de Abril de 1888		
Observaciones	El expediente fue tramitado en un inicio por el juzgado de letras. Desde 1884 continuó ante el juzgado de Lima.		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	20		
Demandante:	Ercelio Colichoy		
Demandado:	Otera		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 28 de Marzo de 1883		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 9 de Junio de 1883		
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	25		
Demandante:	Don Manuel Domínguez		
Demandado:	Don Reynaldo Yarea		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 30 de Marzo de 1883		
Fecha de término	Lima, 8 de Abril de 1884		

(último escrito)	
Observaciones	El expediente fue tramitado en un inicio por el juzgado de letras. Desde 1884 continuó ante el juzgado de Lima.

Materia:	Juicio sobre cobro de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	30		
Demandante:	Antonio Prareli		
Demandado:	Baltasar Castro		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 3 de Abril de 1883		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 9 de Julio de 1883		
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.		

Materia:	Juicio sobre mejor derecho a uno bienes		
Procedimiento:	Ordinario	Sumario	Otro (tercería)
Total de fojas:	20		
Demandante:	Beneficencia de Lima		
Demandado:	Doña Petronila Muñoz		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 20 de Abril de 1883		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 3 de Julio de 1883		
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.		

Materia:	Juicio sobre cantidad de soles		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	17		
Demandante:	Sebastián Acuña		
Demandado:	Carlos Southwel		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 14 de Junio de 1883		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 27 de Julio de 1883		
Observaciones	El expediente fue tramitado por un juzgado de paz.		

Materia:	Juicio sobre consignación de dividendos		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	50		
Demandante:	Fabricio Cáceres		
Demandado:	Elena Laos de la Puente		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 25 de Julio de 1883		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 20 de Diciembre de 1886		
Observaciones	El expediente fue tramitado en un inicio por el juzgado de letras. Desde 1884 continuó ante el juzgado de Lima.		

Materia:	Juicio sobre alimentos		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro

Total de fojas:	30
Demandante:	Inés Sarria
Demandado:	Guillermo Santana
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 25 de Setiembre de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 22 de Noviembre de 1884
Observaciones	El expediente fue tramitado en un inicio por el juzgado de letras. Desde 1884 continuó ante el juzgado de Lima.

Materia:	Juicio sobre unas alhajas		
Procedimiento:	Ordinario (x)	Sumario	Otro
Total de fojas:	60		
Demandante:	Francisco Belevan		
Demandado:	Doña María Soto		
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 5 de Diciembre de 1883		
Fecha de término (último escrito)	Lima, 24 de Agosto de 1883		
Observaciones	El expediente fue tramitado por el juzgado de letras.		

#### 10. Año 1883: Expedientes Criminales.

Materia:	Juicio sobre adulterio
Total de fojas:	7
Agraviado:	Andrés Alcántara
Denunciado:	Comasa Zerpa
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 2 de Enero de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 2 de Abril de 1883
Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre injurias
Total de fojas:	10
Agraviado:	Marcelina Robles
Denunciado:	Lorenzo Ahumada
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 12 de Enero de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 26 de Enero de 1883
Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre injurias
Total de fojas:	10
Agraviado:	Zoila Vargas
Denunciado:	Marcelina Robles
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 3 de Enero de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 26 de Enero de 1883



Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen
---------------	---------------------------------------

Materia:	Juicio de robo
Total de fojas:	15
Agraviado:	De oficio
Denunciado:	Pedro Díaz
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 3 de Enero de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 24 de Abril de 1883
Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre retención de valores
Total de fojas:	5
Agraviado:	Manuel Matheos
Denunciado:	Mariano Ossio
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 3 de Enero de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 16 de Febrero de 1883
Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre entrega de varias especies
Total de fojas:	8
Agraviado:	José María Zapata
Denunciado:	José Calmet
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 4 de Enero de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 13 de Marzo de 1883
Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre heridas
Total de fojas:	16
Agraviado:	De oficio
Denunciado:	Sebastián Muzzo
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 7 de Enero de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 26 de Abril de 1883
Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre heridas
Total de fojas:	10
Agraviado:	De oficio
Denunciado:	Carlos Valdivieso
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 8 de Enero de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 15 de Enero de 1883
Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre heridas
Total de fojas:	5
Agraviado:	De oficio
Denunciado:	Francisco Gutiérrez
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 8 de Enero de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 9 de Mayo de 1883
Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre injurias de hecho
Total de fojas:	14
Agraviado:	Miguel Salvi
Denunciado:	Federico Escribens
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 10 de Enero de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 22 de Enero de 1883
Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre defraudación
Total de fojas:	5
Agraviado:	Carlos Becherel
Denunciado:	Emilio Henriod
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 13 de Enero de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 23 de Enero de 1883

Materia:	Juicio sobre heridas
Total de fojas:	13
Agraviado:	De oficio
Denunciado:	Escolástico Gutiérrez
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 13 de Enero de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 20 de Junio de 1883
Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio por calumnia
Total de fojas:	32
Agraviado:	Luis Beard
Denunciado:	Augusto Fondbouillant
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 16 de Enero de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 9 de Mayo de 1883
Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre estafa
Total de fojas:	192

Agraviado:	José Castañeda
Denunciado:	Don Domingo Candina
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 18 de Enero de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 22 de Agosto de 1884
Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen. Su trámite continuó ante el juzgado de Lima.

Materia:	Juicio por calumnia
Total de fojas:	8
Agraviado:	Juan Cavassa
Denunciado:	Antonio Eliseo Larrañaga
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 20 de Enero de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 26 de Mayo de 1883
Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre parricidio frustrado
Total de fojas:	16
Agraviado:	De oficio
Denunciado:	Rafaela Martínez Baca
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 21 de Enero de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 23 de Junio de 1883
Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre homicidio
Total de Fojas:	17
Agraviado:	De oficio
Denunciado:	José María Achem
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 30 de Enero de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 16 de Julio de 1883
Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre abuso de autoridad
Total de fojas:	13
Agraviado:	Manuel Capurro
Denunciado:	Guillermo Talavera
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 7 de Febrero de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 4 de Mayo de 1883
Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre estafa
Total de fojas:	9
Agraviado:	Arturo Otero

Denunciado:	Julio López
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 9 de Febrero de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 15 de Julio de 1885
Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen. Su trámite continuó ante el juzgado de Lima.

Materia:	Juicio sobre injurias
Total de fojas:	30
Agraviado:	Santos Masías de Ríos
Denunciado:	Catalina Saldarriaga
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 10 de Febrero de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 18 de Julio de 1883
Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre injurias de hecho
Total de fojas:	7
Agraviado:	Manuel Dulanto
Denunciado:	José Talledo
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 10 de Febrero de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 16 de Abril de 1883
Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre injurias
Total de fojas:	10
Agraviado:	Francisco Gómez
Denunciado:	Emilia Bazo
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 14 de Febrero de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 20 de Febrero de 1883
Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre heridas
Total de fojas:	34
Agraviado:	De oficio
Denunciado:	Francisco Sanguinelli
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 14 de Febrero de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 8 de Agosto de 1883
Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre abuso de autoridad
Total de fojas:	22
Agraviado:	Don Antonio Razuri
Denunciado:	Cloromido Garcés

Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 14 de Febrero de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 18 de Abril de 1883
Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre robo
Total de fojas:	9
Agraviado:	De oficio
Denunciado:	José Francisco (asiático)
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 20 de Febrero de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 4 de Junio de 1883
Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre homicidio
Total de fojas:	15
Agraviado:	De oficio
Denunciado:	Francisco Robles
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 26 de Febrero de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 9 de Julio de 1883
Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre Calumnia
Total de fojas:	34
Agraviado:	José Adriano Gaulard
Denunciado:	Francisco Laroche
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 1 de Marzo de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 8 de Octubre de 1883
Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre violación e injurias
Total de fojas:	39
Agraviado:	De oficio
Denunciado:	José Félix Maldonado y Flores
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 7 de Marzo de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 11 de Junio de 1883
Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre estafa
Total de fojas:	17
Agraviado:	Encarnación López de Punco
Denunciado:	Federico Phincker
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 10 de Marzo de 1883



Fecha de término (último escrito)	Lima, 14 de Abril de 1883
Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre usurpación de autoridad
Total de fojas:	7
Agraviado:	Dolores Tagle
Denunciado:	Miguel de la Lama
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 21 de Marzo de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 4 de Abril de 1883
Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio por homicidio
Total de fojas:	18
Agraviado:	De oficio
Denunciado:	Luis Valdivieso
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 22 de Marzo de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 30 de Junio de 1883
Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre robo
Total de fojas:	10
Agraviado:	De oficio
Denunciado:	Antonio Jiménez
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 28 de Marzo de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 8 de Mayo de 1883
Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre robo
Total de fojas:	35
Agraviado:	Manuel Guerra
Denunciado:	Mariana Gaete y María Larriller
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 30 de Marzo de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 25 de Junio de 1883
Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre sospecha de robo
Total de fojas:	13
Agraviado:	De oficio
Denunciado:	Luis Vallebieni
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 6 de Abril de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 7 de Mayo de 1883

Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen
---------------	---------------------------------------

Materia:	Juicio sobre homicidio
Total de fojas:	15
Agraviado:	De oficio
Denunciado:	Raymundo Velazco
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 9 de Abril de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 30 de Junio de 1883
Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre calumnia
Total de fojas:	9
Agraviado:	Eduardo Arreta
Denunciado:	Manuel Flores
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 9 de Abril de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 14 de Abril de 1883
Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen

Materia:	Juicio sobre calumnia
Total de fojas:	8
Agraviado:	Brijido Bocanegra
Denunciado:	José María Córdova
Fecha de Inicio (1° Escrito)	Lima, 18 de Mayo de 1883
Fecha de término (último escrito)	Lima, 25 de Setiembre de 1883
Observaciones	Se tramitó ante el juzgado del crimen